



GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE CAUCA

GRUPO DE RESPONSABILIDAD FISCAL

FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL

PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL	PRF-2019-00858
CUN SIREF	AC-80193-2019-26656
ENTIDAD AFECTADA	SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICOS DE PASAJEROS DE POPAYAN "MOVILIDAD FUTURA"
CUANTIA FINAL DEL DAÑO	Valor indexado: OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS (\$896.224.783)
PRESUNTOS RESPONSABLES FISCALES	<p>VÍCTOR ALFONSO ROSERO BUSTAMANTE C.C. No. 10.525.694 - Gerente de Movilidad Futura S.A.S.</p> <p>OSCAR ALBERTO CAICEDO FERNÁNDEZ C.C. 76.322.044 Contratista de Movilidad Futura.</p> <p>GARCIA RIOS CONSTRUCTORES S.A. NIT. 800093266-2 Contratista consorciado en un 50%</p> <p>FABIAN GARCIA RIOS C.C. 16.694.142 de Cali Contratista consorciado en un 25%</p> <p>EDUARDO GIRONZA LOZANO C.C. 16.243.259 de Cali Contratista consorciado en un 25%</p> <p>PEDRO FELIPE POTES C.C. 10.546.275 Coordinador Del Área Técnica De Infraestructura Mov. Futura.</p>
TERCERO CIVILMENTE RESPONSABLE	LA PREVISORA S.A. NIT. 860 002.400-2 Pólizas multiresgo 10000095 y 1000116.

La Gerencia Departamental Colegiada Cauca de la Contraloría General de la República, con ponencia de la Dra. Ana Milena Valencia Guerra en ejercicio de la competencia establecida en el numeral 5 del artículo 268 de la Constitución Política de 1991, artículos 22 y 24 de la ley 610 de 2000, Ley 1474 de 2011, Resolución Orgánica 6541 del 18 de abril de 2012, modificada por la Resolución Orgánica 748 del 2020, procede proferir decisión de fondo en el proceso de responsabilidad fiscal referenciado, teniendo en cuenta los siguientes acápites:



1. FUNDAMENTOS DE HECHO

1.1. Antecedente

El presente asunto inicia con el oficio Sigedoc 2017ER0047540 del 12 de mayo de 2017, por el cual la Dra. María Alejandra Rosas Machado, Jefe de la Oficina Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva de la Contraloría Municipal de Popayán, traslada a esta gerencia el expediente de responsabilidad fiscal RF002-2016, por falta de competencia para conocer del asunto, el cual tuvo su origen en la auditoria regular que realizaron al sistema estratégico de transporte de pasajeros de Popayán sociedad SEPT-MOVILIDAD FUTURA SAS, vigencia 2015, en donde configuraron el hallazgo #26. Por este hecho se adelantó la Indagación preliminar ANT-IP-2019-00504.

1.2. Hechos

Presuntas irregularidades presentadas en el pago de un mayor valor respecto de insumos de espacio público entregados por el Contratista en el mes de diciembre de 2014, en virtud del Contrato 001-2014 celebrado entre Movilidad Futura y el Consorcio Vías Popayán.

1.3. Cuantía inicial del detrimento patrimonial

Cuantía inicial: QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS DIEZ Y SEIS PESOS MCTE (\$579.770.716) – Valor

indexado final: **OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS (\$896.224.783)**

1.4. Entidad Afectada

SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICOS DE PASAJEROS DE POPAYAN “MOVILIDAD FUTURA”, ente descentralizado del municipio de Popayán - Empresas Industrial y Comercial del Estado – Sociedad Anónima Simplificada.

1.5. Presuntos responsables

VÍCTOR ALFONSO ROSERO BUSTAMANTE identificado con C.C. No. 10.525.694, en calidad de Gerente de Movilidad Futura S.A.S.

OSCAR ALBERTO CAICEDO FERNÁNDEZ identificado con C.C. 76.322.044, en calidad



de Contratista de Movilidad Futura.

GARCIA RIOS CONSTRUCTORES S.A., identificado con NIT. 800093266-2, en calidad de Contratista consorciado en un 50%.

FABIAN GARCIA RIOS identificado con C.C. 16.694.142 de Cali, en calidad de Contratista consorciado en un 25%.

EDUARDO GIRONZA LOZANO identificado con C.C. 16.243.259 de Cali, en calidad de Contratista consorciado en un 25%.

PEDRO FELIPE POTES identificado con C.C. 10.546.275, en calidad de Coordinador Del Área Técnica De Infraestructura Mov. Futura

1.6. Garante

LA PREVISORA S.A. NIT. 860 002.400-2, en virtud de las Pólizas multirriesgo 1000095 y 1000116, tomadas por MOVILIDAD FUTURA.

1.7. Actuaciones procesales

Mediante Auto No. 451 del 6 de septiembre de 2019 la Gerencia Departamental Colegiada del Cauca de la Contraloría General de la República ordenó la apertura del Proceso de Responsabilidad Fiscal No. PRF-2019-00858, posteriormente se ordenó con providencia No.780 de fecha 14 de octubre del 2021, la vinculación de unos presuntos responsables, a la fecha todos los vinculados se encuentran debidamente notificados, con versión libre o en su defecto con apoderado de oficio, como se pasa a detallar para cada uno:

- **JORGE CLODOMIRO PALECHOR**, notificado el 17-09-2019 de forma personal¹, confiere poder a apoderada de confianza², la apoderada renuncia al poder y el presunto otorga mandato a otra abogada³. El presunto responsable rindió versión libre el 29-11-2019⁴ y ampliación de versión libre el 19-01-2020⁵.

Auto No. 324⁶ del 01 de octubre de 2020, mediante el cual la Gerencia Departamental

¹ 20190817_NOTIFICACIONPESONALPALECHOR_00858

² 20191217_CONFIEREPODER_00858

³ 202 09 18 poder nueva apoderada sr clodomiros dra yeni

⁴ 20191129_VERSIONCLODOMIRO_00858

⁵ 2021 01 19 ampliacion version prf 2019 00858 clodomiros y 2021 01 19 correo ampliacionversionclodomiros 00858

⁶ 2020 10 01 auto 324 prf 2019 00858 auto reconoce personeria



Colegiada de Cauca reconoce personería jurídica a YENI ALEJANDRA CAMPOS BERMUDEZ, como apoderada principal, y a JULIO HERNAN TOBAR OCAMPO, como apoderado suplente de JORGE CLODOMIRO PALECHOR.

- **VÍCTOR ALFONSO ROSERO BUSTAMANTE**, notificado por aviso No. 121 del 29 de octubre del 2021 radicado 2021EE0186103⁷, con constancia de entrega del 30 del mismo mes y año⁸.

El 01 de febrero del 2022, se radica en el correo institucional⁹ poder otorgado por este presunto responsable al abogado FERNANDO PARRA TOBAR¹⁰, identificado con cédula de ciudadanía No. 10543550 expedida en Popayán, portador de la Tarjeta Profesional No. 63228 del Consejo Superior de la Judicatura, quien en representación del investigado solicitar el aplazamiento de la diligencia de versión libre y espontánea por un tiempo prudencial pero razonable y además requiere copia del expediente, a lo cual se accedió por parte del despacho quien le remitió copia del expediente vía OneDrive el 18 de febrero de 2022¹¹.

Finalmente rindió versión libre el 16 de marzo del 2022¹²

- **OSCAR ALBERTO CAICEDO FERNÁNDEZ**, autoriza notificación vía correo electrónico¹³, se notifica el 28 de octubre del 2021¹⁴ y luego de ser citado a versión libre, allega documento con radicado 2022ER0013145 del 02 de febrero del 2022¹⁵.

No solicita el investigado la práctica de pruebas, pero allegó documentos que fueron incorporados al expediente.

- **EDUARDO GIRONZA LOZANO**, notificado vía correo electrónico el 29 de octubre del 2021¹⁶ y rindió versión libre el 03 de febrero del 2022¹⁷.

⁷ 20212029 NOTIFICACIONXAVISOVICTORROSARO 00858

⁸ 20211030 CONSTANCIA ENTREGA AVISO ROSERO PRF 858

⁹ 20220201 PODER Y SOLICITUD APOD VICTOR ROSERO PRF 858

¹⁰ PODER_PRF-2019-00858_VICTOR_ALFONSO_ROSERO_BUSTAMANTE_P2_010222 y PODER_PRF_2019-00858_VICTOR_ALFONSO_ROSERO_BUSTAMANTE_P1_010222

¹¹ 20220218 CONSTANCIA ENTREGA DE COPIAS APOD VICTRO ROSERO PRF 858

¹² SUSTENTACION VERSION LIBRE Y ESPONTANEA VICTOR ALFONSO ROSERO BUSTAMANTE PRF-2019-00858 MOVILIDAD FUTURA-080322.docx, 20220316 VERSION LIBRE ROSERO 2022ER0039456 PRF 858 y 20220316 VERSION LIBRE ROSERO 2022ER0039456 PRF 858

¹³ 20211022 AUTORIZA NOTIFICACION OSCAR CAICEDO PRF 858

¹⁴ 20211028 NOTIFICACIONELECTRONICAOSCARCAICEDO 00858

¹⁵ 20220202 ACLARACIONINFORMEVICTORROSERO 00858

¹⁶ 20211029 ntificacion gironza prf 858 y 20211029 CERTIFIADO472NOTIFICACIONEDUARDOGIRONZA 00858

¹⁷ VERSION LIBRE PROCESO MOVILIDAD FUTURA y 20220203 VERSION LIBRE EDUARDO PRF 858



No solicita el investigado la práctica de pruebas, pero allegó documentos que fueron incorporados al expediente.

- **GARCIA RIOS CONSTRUCTORES S.A.**, entidad notificada por aviso No. 007 publicado en la página web institucional el 24 de enero del 2022¹⁸, conforme a lo ordenado mediante auto 008 del 19 de enero del 2022.

Se posesionó como apoderado de oficio el estudiante de consultorio jurídico VALENTINA ILLERA RUIZ identificada con la CC. 1214742649¹⁹, el día 06 de abril del 2022²⁰.

- **FABIAN GARCIA RIOS**, notificado por aviso No. 007 publicado en la página web institucional el 24 de enero del 2022²¹, conforme a lo ordenado mediante auto 008 del 19 de enero del 2022.

Se posesionó como apoderado de oficio el día 26 de mayo del 2022²² el estudiante de consultorio jurídico José Fernando Zúñiga identificado con cedula de ciudadanía número 1.061.779.562 de Popayán, ID 525790 estudiante adscrito al Consultorio Jurídico de la facultad de derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia²³.

Es de advertir que de las direcciones por las cuales se notificó el aviso a estos presuntos responsables GARCIA RIOS y GARCIA RIOS CONSTRUCTORES, se hizo devolución de la correspondencia, advirtiéndose por parte del remitente que actualmente el inmueble fue adquirido por la firma Rocales Concretos que no está relacionada con los investigados²⁴, por ello se hizo necesario notificarlos mediante publicación del aviso en la página web institucional.

- **PEDRO FELIPE POTES** con auto 183 del 17 de abril del 2023 se ordenó su vinculación, quien se notificó de manera personal de las citadas providencias el 24 de abril del 2023.

De igual manera, una vez notificado el citado presunto responsable, se le corrió traslado No. 017, de los informes técnicos rendidos dentro del proceso, el cual fue fijado en la página web de la Contraloría General de la República y en lugar visible de la Gerencia durante los días 26 de abril y 3 de mayo del 2023; adicionalmente esta actuación procesal se le comunicó a este presunto responsable el 25 de abril del 2023,

¹⁸ 20220124 NOTIFICACIONXAVISOAUTOS451-780 CONSTRUCTORA 00858

¹⁹ 20220405 CONTANCIADDESIGNA DEFEN GARCIA RIOS CONSTRUC 00858

²⁰ 20220406 POSESION DEF OFICIO GARCIA RIOS CONSTRUC PRF 00858

²¹ 20220124 NOTIFICACIONXAVISOAUTOS451-780 FABIAN PRF 00858

²² 20220526 POSESION APODERADO DE OFICIO FABIAN GARCIA 00858

²³ 20220525 DESIGNACION apoderado oficio FABIAN GARCIA PRF 2019-00858

²⁴ 20211213 DEVOLUCIÓNDOCUMENTOSMOVILIDADFUTURA 00858



mediante radicado 2023EE0062944 enviado a su correo electrónico, sin que se presentara objeción alguna.

Que el citado presunto responsable otorgó poder²⁵ al abogado Julio Hernán Tobar Ocampo identificado con C.C. 76.319.142 de Popayán y T.P. 100.870 del C. S. de la J., como principal y a la abogada Yeni Alejandra Campos Bermúdez identificada con C.C. 32.323.716 y T.P. 151740 del C.S.J., por tanto se le reconocerá personería en los términos del poder otorgado.

Que vía correo electrónico del apoderado, el 19 de mayo del 2023, se suministró copia de algunas piezas procesales²⁶ y el 09 de junio de la citada anualidad mediante radicados 2023ER0102729 y 2023ER0103485²⁷, rinde versión libre y el 31 de octubre del 2023 la amplia mediante radicado 2023ER0205851²⁸.

- **LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS** fue comunicada mediante radicado SIGEDOC 2019EE0112354 del 09-09-2019, recibido 11-09-2019²⁹, esta entidad representada legalmente por el señor JOAN SEBASTIAN HERNANDEZ ORDOÑEZ, identificado con la cédula de ciudadanía # 1.014.214.701, confirió poder al abogado GUSTAVO ALBERTO HERRERA AVILA, identificado con la cédula de ciudadanía # 19.395.114 y tarjeta profesional No.39.116 del Consejo Superior de la Judicatura, para que lo represente y asista en el presente proceso; el poder conferido cumplía con las formalidades y requisitos previstos en los artículos 74 y 77 del CGP, por tanto, mediante auto 007 del 08 de enero del 2020 se reconocerle personería al Abogado en mención.
- La entidad afectada fue comunicada mediante radicado 2029EE0112414 del 09-09-2019³⁰.

En el auto de apertura se ordena dar traslado del informe técnico a los vinculados, el cual se surtió entre el 23 y 25 de septiembre del 2019³¹.

Por autos No. 508³² del 04 y No. 554³³ del 30 de octubre del 2019 se fija fecha para versión libre.

²⁵ 20230516 poder potes 2023ER0084847 prf 858 anexos

²⁶ 20230519 COINSTANCIA COPIAS POTES PRF 858pdf

²⁷ version libre pedro felipe potes gonzalez.pdf, 20230609 correo version librepedropotes 2023er0102729 y 2023er0103485 prf 00858.msg

²⁸ 20231031 Ampliación Versión Libre POTES 2023ER0205851 PRF-2019-00858

²⁹ 20190909_VINCULACIONLAPREVISORA_00858

³⁰ 20190909_COMUNICACIONMOVILIDADFUTURA_00858

³¹ TRASLADO SECRETARIAL N.022 PRF 00858

³² auto n.508 prf 00858

³³ auto n.554 prf 00858



Auto No. 590³⁴ del 06 de diciembre de 2019, resuelve solicitud de nulidad, presentada por MARTHA ALMEIDA CARVAJAL apoderada de JORGE CLODOMIRO PALECHOR.

Mediante auto se decretó la práctica de pruebas No.142 del 15-04-2020³⁵.

Con auto No. 22³⁶ del 09 de julio del 2020 se fija fecha para práctica de pruebas.

Mediante auto se decretó la práctica de pruebas No. 285 del 08-09-2020³⁷.

Con auto No. 324³⁸ del 01 de octubre del 2020, se reconoce personería a los apoderados del señor CLODOMIRO.

Mediante auto No. 397 del 05 de noviembre de 2020 se fija fecha para una diligencia probatoria.

Con auto No.517 del 22 de diciembre del 2020 se ordena recepción de versiones.

Mediante auto se decretó la práctica de pruebas No. 245 del 23 de abril del 2021³⁹.

Mediante auto se decretó la práctica de pruebas No.780⁴⁰ de fecha 14 de octubre de 2021.

Con auto No. 008⁴¹ del 19 de enero del 2022 se ordena recepción de versiones.

Mediante auto No.115⁴² del 28 de febrero del 2022, se incorporan pruebas, se designa apoderado de oficio y se prorroga términos de versiones.

Mediante auto No.0299 de fecha 17 de mayo de 2022, se ordena el traslado de un informe técnico a unos presuntos responsables efectuado mediante radicado 2022EE087228 del 20 de mayo del 2022, respecto del cual no se presentaron solicitudes de aclaración o complementación.

Mediante auto 384 del 17 de junio del 2022, este despacho profirió auto mixto de imputación y archivo en favor del presunto responsable del señor JORGE CLODOMIRO

³⁴ auto 590 resuelve nulidad prf 2019 00858

³⁵ 20200415 auto 142 prf 2019-00858 pruebas - movilidad futura

³⁶ 20200709 auto 223 fija nueva fecha de practica de prueba prf 2019 00858 movilidad futura

³⁷ 20200908auto 285 pruebas prf-2019-00858

³⁸ 2020 10 01 auto 324 prf 2019 00858 auto reconoce personeria

³⁹ auto 245 del 23 04 2021 decide solicitud de prueba prf 2019 00858

⁴⁰ 20211014 auto 780 vinculatorio y pruebas prf 2019-858

⁴¹ 20220119 auto 008 ordena recepcion de versiones y otras prf 2019-858

⁴² 20220228 AUTO INCORPORA PRUEBAS Y OTROS PRF 2019-858



PALECHOR PALECHOR, siendo esta última confirmada en grado de consulta mediante auto URF7-0909 de julio 27 del 2022.

En firme la imputación, se notificó a los sujetos procesales, quienes presentaron descargos, pese a ello esta decisión fue anulada posteriormente, como más adelante se indicará.

Mediante auto 534 del 26 de agosto del 2022, se deniega la práctica de pruebas y se resuelve una petición.

Con auto 556 de fecha 07 de septiembre del 2022, se resolvió recurso de reposición en contra de auto que deniega pruebas.

Por auto URF 1270 del 07 de octubre del 2022, se confirma en apelación la decisión que deniega pruebas.

Que el 18 de noviembre del 2022, se profirió la decisión de fondo dentro del proceso, contenida en el fallo 015, con auto 805 del 05 de diciembre del 2022 se ordena una comunicación referente a una nulidad y mediante auto 004 del 12 de enero del 2023, se confirma el fallo; pese a esto, la Contralora Intersectorial N° 8 de Unidad de Responsabilidad Fiscal, mediante auto URF2-0177 del 07 de febrero del 2023, decretó la nulidad hasta el auto de imputación.

El 08 de febrero del 2023, se profiere auto de 063 obediencia, se ordena la práctica de versiones libres y el traslado de un informe técnico a unos presuntos responsables lo cual se lleva a cabo el 17 de febrero del 2023⁴³ y es comunicado mediante radicados 2023EE0018306⁴⁴ y 2023EE0018313⁴⁵.

Con auto 106 del 15 de marzo del 2023 se decide sobre pruebas.

El 17 de abril del 2023 se con providencia No. 183 se decretan pruebas, se ordena el archivo en favor de CLODOMIRO, se ordena la vinculación PEDRO FELIPE POTES y se ordena correr traslado a este último de un informe técnico, lo que se lleva a cabo el 24 de abril del 2023⁴⁶, comunicado mediante radicado 2023EE0062944 del 25 de abril del 2023⁴⁷.

Mediante auto URF2-0589 del 18 de mayo de 2023, se confirma en grado de consulta la desvinculación de un presunto responsable.

⁴³ 20230217 traslado 007 fabian garcia y garcia rios prf 00858.pdf

⁴⁴ 20230210 certificado472 comunca traslado inf apoderado fabian garo 00858.pdf

⁴⁵ 20230210 certificado472 comunca traslado inf fabian garo 00858.pdf y 20230210 traslado inf tecnico certificado472 francisco g 00858.pdf

⁴⁶ 20230503 traslado 017 ing potes prf 00858.pdf

⁴⁷ 20230425 comunicaciontrasladopotes 2023ee0062944 prf00858.pdf



Con autos 262 del 19 de mayo y 296 del 05 de junio del 2023; se fija fecha y hora para versión libre.

Mediante auto 322 del 16 de junio del 2023 se rechaza una petición de vinculación y decide pruebas PRF 2019-0858.

Con auto 651 del 30 de junio del 2023, se imputó responsabilidad fiscal el cual fue notificado los vinculados, en los siguientes términos:

- **VÍCTOR ALFONSO ROSERO BUSTAMANTE**, citado por medio de su apoderado el 04 de julio del 2023 mediante radicado 2023EE0107231⁴⁸, con certificado de recibido del día siguiente⁴⁹, posteriormente se notificó por aviso No. 049 del 13 de julio del 2023 radicado 2023EE0114264⁵⁰, con certificado de recibido del 17 siguiente⁵¹ y presentó descargos el 20 de julio de 2023, con recibido No. 2023ER0133122⁵²; no solicita la práctica de pruebas.
- **OSCAR ALBERTO CAICEDO FERNÁNDEZ**, citado por medio de su apoderado de confianza el 04 de julio del 2023 mediante radicado 2023EE0107253 ⁵³, con certificado de recibido del día siguiente⁵⁴, posteriormente se notificó por medios electrónicos por expresa autorización con radicado 2023ER0122107 ⁵⁵, el día 10 de julio del 2023 mediante radicado 2023EE0111890⁵⁶ y NO presentó descargos.
- **GARCIA RIOS CONSTRUCTORES S.A.**, por expresa autorización se notificó personalmente a su apoderado por medios electrónicos el día 05 de julio del 2023 mediante radicado 2023EE0107656⁵⁷ y presentó descargos el 18 del mismo mes y año con recibido No. 2023ER0127073 ⁵⁸ en el que invoca nulidad y solicita la práctica de pruebas.

⁴⁸ 20230704 CITACION APODERADO VICTOR_2 2023EE0107231 PRF 00858

⁴⁹ 20230705 GUIAS JULIO Y APODERADO VIVTOR PRF 00858

⁵⁰ 20230713 NOTIFICACION AVISO APODERADO VICTOR 2023EE0114264 PRF 00858

⁵¹ 20230717 GUIA472 NOTIFICA AVISO APODERADO VICTOR PRF 00858

⁵² 20230728 descargos apoderado victor 2023ER0135343_ 2023ER0133122 PRF 858 y DESCARGOS CONTRA AUTO IMPUTACION RESPONSABILIDAD FISCAL VICTOR ALFONSO ROSERO BUSTAMANTE PRF-2019-00858 MOVILIDAD FUTURA - 270723 -

⁵³ 20230704 CITACION APODERADO OSCAR 2023EE0107253 PRF 00858

⁵⁴ 20230705 GUIA472 APODERADO OSCAR 00858

⁵⁵ 20230710 AUTORIZA NOTIFICACION APODERADO OSCAR 2023ER0122107 PRF 00858 y 5 OSCAR ALBERTO CAICEDO-CONTRALORIA-RESPONSAB FISCAL-IMPUTACION

⁵⁶ 20230710 NOTIFICACIONELECTRONICA APODERADO OSCAR 2023EE0111890 PRF 00858

⁵⁷ 20230705 NOTIFICACIONELECTRONICA APODERADO GARCIA RIOS 2023EE0107656 PRF 00858

⁵⁸ 20230718 DECARGOS FABIAN GARCIA Y GARICA RIOS 2023ER0127073 PRF 858, RESPUESTA AUTO DE IMPUTACION y 20230718 comunicacion a fabian garcia y garcia rios PRF 348



- **FABIAN GARCIA RIOS**, por expresa autorización se notificó personalmente a su apoderado por medios electrónicos el día 05 de julio del 2023 mediante radicado 2023EE0107679⁵⁹ y presentó descargos el 18 del mismo mes y año con recibido No. 2023ER0127073⁶⁰ en el que invoca nulidad y solicita la práctica de pruebas.
- **EDUARDO GIRONZA LOZANO**, por expresa autorización se notificó por medios electrónicos el día 04 de julio del 2023 mediante radicado 2023EE0107708⁶¹ y presentó descargos el 18 de julio de 2023, con recibido No. 2023ER0127036⁶², no solicita la práctica de pruebas.
- **PEDRO FELIPE POTES**, citado el 04 de julio del 2023 mediante radicados 2023EE0107231 y 2023EE0107276⁶³, autoriza notificación por medios electrónicos el 11 del mismo mes y año⁶⁴, posteriormente se notificó por medios electrónicos el día 11 de julio del 2023 mediante radicado 2023EE0112744⁶⁵ por expresa autorización de la misma fecha recibida con radicado 2023ER0122626⁶⁶ y presentó descargos el 26 de julio de 2023, con recibido No. 2023ER0132896⁶⁷ y solicita la práctica de prueba testimonial.
- **LA PREVISORA S.A.**, por expresa autorización se notificó a su apoderado por medios electrónicos el día 04 de julio del 2023 mediante radicado 2023EE0107737⁶⁸ y presentó descargos el 17 de ese mismo mes y año, con recibido No. 2023ER0126038⁶⁹ pese a que solicita la práctica de pruebas allega los documentos que refiere⁷⁰ por ello serán incorporados al expediente y se les dará el valor probatorio que corresponde.

⁵⁹ 20230705 NOTIFICACIONELECTRONICA APODERADO FABIAN 2023EE0107679 PRF 00858

⁶⁰ 20230718 DESCARGOS FABIAN GARCIA Y GARICA RIOS 2023ER0127073 PRF 858, RESPUESTA AUTO DE IMPUTACION y 20230718 comunicacion a fabian garcia y garcia rios PRF 348

⁶¹ 20230704 NOTIFICACIONELECTRINICAGIRONZA 2023EE0107708 PRF 00858

⁶² 20230718 DESCARGOS GIRONZA 2023ER0127036 PRF 858 y ARGUMENTOS DEFENSA AUTO 035-14-07-2023

⁶³ 20230704 CITACION APODERADO POTES_2 2023EE0107276 PRF 00858 y 20230704 CITACION APODERADO POTES 2023EE0107231 PRF 00858

⁶⁴ 20230711 AUTORIZACION PARA NOTIFICACION ELECTRONICA APODERADO POTES 2023ER0122626 PRF 858

⁶⁵ 20230711 NOTIFICACIONELECTRINICA APODERADO POTES 2023EE0112744 PRF 00858

⁶⁶ 20230711 AUTORIZACION PARA NOTIFICACION ELECTRONICA APODERADO POTES 2023ER0122626 PRF 858

⁶⁷ 20230726 DESCARGOS POTES 2023ER0132896 PRF 858 y DESCARGOS PEDRO FELIPE POTES GONZALEZ

⁶⁸ 20230704 NOTIFICACIONELECTRONICA PREVISORA 2023EE0107737 PRF 00858

⁶⁹ 20230717 DESCARGOS ASEGURADORA 2023ER0126038 PRF 858 y DESCARGOS FRENTE AL AUTO DE IMPUTACION -

⁷⁰ Ver PDF: "ANEXOS" adjunto a lo descargos



Por auto 427 del 16 de agosto del 2023, se decidió sobre pruebas y nulidades, contenidas en los descargos frente a la imputación, el cual se notificó por estado 122 publicado el 23 del mismo mes y año, respecto del cual, el apoderado de los presuntos responsables GARCIA RIOS CONSTRUCTORES S.A. y FABIAN GARCIA RIOS⁷¹, impetraron los recursos de ley.

Mediante auto 461 del 06 de septiembre esta instancia confirmó en todas sus partes el auto 427 del 16 de agosto, pese a esto, mediante auto URF2-1203 del 10 de octubre del 2023 la Contralora Intersectorial No. 8 de la Unidad de Responsabilidad Fiscal resuelve en el recurso de apelación conceder la ampliación de versión libre y la práctica de unas pruebas.

El 27 de octubre del 2023, mediante auto 591 rechaza de plano pruebas.

Auto No. 138⁷² del 14 de abril de 2020, mediante el cual se decreta medida cautelar en el proceso ordinario PRF 2019-00858 en bienes de propiedad del señor JORGE CLODOMIRO PALECHOR, notificada por estado No. 019 del 11 de febrero de 2021.

Mediante auto No. 102⁷³ del 26 de febrero de 2021, resuelve recurso de reposición y ordena remitir el expediente al superior en recursos de apelación.

Por auto No. URF2- 329 del 5 de abril de 2021, el superior confirma en todas sus partes el Auto No. 138 del 14 de abril de 2020, que decreta unas medidas cautelares, así como el Auto Nro. 102 del 26 de febrero de 2021.

Respecto de la medida cautelar se generaron las siguientes comunicaciones:

- Copia correo electrónico del 12 de enero de 2021, de solicitud a secretaria común Gerencia Cauca, de recepción certificado de inscripción medida cautelar por parte de la Oficina de Instrumentos públicos del Cauca.
- Oficio radicado Sigedoc Nro. 2021ER0003092 del 14 de enero de 2021, de devolución sin registrar de la orden de embargo, adjuntando nota devolutiva en del 24 de agosto de 2020.
- Oficio radicado Sigedoc Nro. 2021EE0003888 del 15 de enero de 2021, de reiteración de solicitud de embargo.

Teniendo en cuenta que el señor JORGE CLODOMIRO PALECHOR se desvinculó del

⁷¹ 20230830 RECURSO AUTO PRUEBAS APODERADO GARCIA FABIAN 2023ER0156584 PRF 858 y RECURSO REPOSICION Y APELACION CONTRALORIA MOVILIDAD

⁷² 20200414 Auto 138 PRF 2019-00858 MCautelar - Movilidad Futura

⁷³ auto 102 prf 2019-00858 resuelve un recurso medida cautelar



proceso, el 30 de septiembre del 2022⁷⁴, se comunica al ente de control el efectivo levantamiento de la medida cautelar.

Posteriormente, con auto 199 del 26 de abril del 2026, se decretan medidas cautelares sobre vehículos de propiedad de los presuntos responsables, respecto de las cuales se surtieron las siguientes comunicaciones y registros:

- SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE POPAYÁN PLACA - EMX550, se solicitó la inscripción el 28 de abril del 2023 mediante radicado 2023EE0065671⁷⁵, se reporta el registro mediante radicado 2023ER0083950 de fecha 15 de mayo del 2023⁷⁶.
- SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE TIMBIO PLACA - GUH387, se solicitó la inscripción el 28 de abril del 2023 mediante radicado 2023EE0065693⁷⁷, se reporta el registro mediante radicado 2023ER0087381 de fecha 19 de mayo del 2023⁷⁸.
- SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE POPAYÁN CAUCA PLACA - MCY213, se solicitó la inscripción el 28 de abril del 2023 mediante radicado 2023EE0065671⁷⁹, se reporta el registro mediante radicado 2023ER0083950 de fecha 15 de mayo del 2023⁸⁰.
- SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD DE BOGOTÁ, PLACA - BCK999, se solicitó la inscripción el 28 de abril del 2023 mediante radicado 2023EE0065776⁸¹, se reporta el registro mediante radicado 2023ER0082017 de fecha 09 de mayo del 2023⁸².
- INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, PLACA - HWT015, se solicitó la

⁷⁴ 20220930 RESPUESTA OFICINA INSTR PUBLICOS LEVANTA MEDIDA PRF 858 y 2022-120-6-14202

⁷⁵ 20230428 Solicitud Registro Embargo TRANSITO POPAYAN PRF 2019-00858 y 2023EE0065671 solicitud registro de embargo Transito Popayan PRF 2019-00858.pdf

⁷⁶ 20230515 respuesta transito popayan PRF 858_ANEXOS y 20230515 respuesta transito popayan 2023ER0083950 PRF 858

⁷⁷ 2023EE0065693 solicitud de embargo Transito Timbio PRF 2019-00858 y 20230428 Solicitud Registro Embargo TRANSITO TIMBIO PRF 2019-00858

⁷⁸ 20230519 CORREO registro transito timbio placa guh 387_ 2023ER0087381 PRF 858

⁷⁹ 20230428 Solicitud Registro Embargo TRANSITO POPAYAN PRF 2019-00858 y 2023EE0065671 solicitud registro de embargo Transito Popayan PRF 2019-00858.pdf

⁸⁰ 20230515 respuesta transito popayan PRF 858_ANEXOS y 20230515 respuesta transito popayan 2023ER0083950 PRF 858

⁸¹ 2023EE0065776 solicitud de embargo Movilidad Bogota PRF 2019-00858 y 20230428 Solicitud Registro Embargo TRANSITO BOGOTA PRF 2019-00858

⁸² 20230509 RTA TRANSITO BTA PLACA BCK 999 RAD 2023ER0082017 PRF 858



inscripción el 28 de abril del 2023 mediante radicado 2023EE0065798⁸³, se reporta el registro mediante radicado 20230530 REGISTRO MOV PEREIRA 2023ER0094755 y 2023ER0094755 de fecha 30 de mayo del 2023⁸⁴.

- SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL DE CALI PLACA: - CLS235 - RCI626 - ZRL27, se solicitó la inscripción el 28 de abril del 2023 mediante radicado 2023EE0065823⁸⁵, se reporta el registro mediante los siguientes radicados de fecha 25 de mayo del 2023:

CLS235: radicado 2023ER0096645⁸⁶

RCI626: radicado 2023ER0096646⁸⁷

ZRL27: radicado 2023ER0096648⁸⁸

- SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL DE CALI PLACA - MC036697, se solicitó la inscripción el 28 de abril del 2023 mediante radicado 2023EE0065874⁸⁹, se reporta el registro mediante radicado 2023ER0085064 de fecha 16 de mayo del 2023⁹⁰.
- SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL DE GUACARI PLACA - SPK589, se solicitó la inscripción el 28 de abril del 2023 mediante radicado 2023EE0065949⁹¹, se reporta el registro mediante radicado 2023ER0078076 de fecha 08 de mayo del 2023⁹².

El 07 de junio del 2023, se notifica el auto 199 de medidas cautelares, mediante estado 081 y el 15 de junio del 2023 el apoderado del señor Víctor Rosero interpone recurso de

⁸³ 2023EE0065798 solicitud de embargo Movilidad Pereira PRF 2019-00858 y 20230428 Solicitud Registro Embargo TRANSITO PEREIRA PRF 2019-00858

⁸⁴ 20230530 REGISTRO MOV PEREIRA 2023ER0094755 PLACA HWT015 PRF 00858, 20230530 REGISTRO transito pereiraplaca HWT015_ 2023ER0094755 prf 858

⁸⁵ 2023EE0065823 solicitud embargo Transito Cali PRF 2019-00858 y 20230428 Solicitud Registro Embargo TRANSITO CALI PRF 2019-00858

⁸⁶ CLS235 y 20230525 RTA TRANSITO CALI PLACA CLS235 2023ER0096645 PRF 2019-00858

⁸⁷ RCI626 y 20230525 RTA TRANSITO CALI PLACA RCI626 2023ER0096646 PRF 2019-00858

⁸⁸ ZRL27 y 20230525 RTA TRANSITO DE CALI PLACA ZRL27 2023ER0096648 PRF 2019-00858

⁸⁹ 20230428 Solicitud Registro Embargo TRANSITO CALI PRF 2019-00858_2 y 2023EE0065874 solicitud embargo Transito Cali PRF 2019-00858

⁹⁰ 20230516 REGISTRO MEDIDA TRANSITO CALI PLAZA MC036697_ 2023ER0085064 PRF 858

⁹¹ 2023EE0065949 solicitud embargo Transito Guacari PRF 2019-00858 y 20230428 Solicitud Registro Embargo TRANSITO GUACARI PRF 2019-00858

⁹² SPK589 y 20230508 ANOTACION EMBARGO TRANSITO GUACARI 2023ER0078076 PRF 858



reposición y apelación⁹³, la cual se resuelve en reposición el 30 de junio del 2023 con auto 352 confirmando en primera instancia la medida cautelar y mediante auto URF2 - 900 del 02 de agosto 202308 mediante el cual el superior confirma en apelación, las medidas cautelares.

Mediante Resoluciones REG – EJE – 00 – 2019 – 063 del 16 de marzo; REG – EJE – 0064 – 2020 del 30 de marzo y REG-EJE-0070-2020 del 01 de julio del 2020, se ordenó por parte del señor Contralor General de la República, la suspensión de términos procesales en todos los procesos de responsabilidad fiscal adelantados en este máximo Órgano de Control Fiscal entre el 16 de marzo y el 15 de julio de la presente anualidad por la emergencia sanitaria generada por el Covid -19 y con ocasión de dicha enfermedad se restringieron las actividades presenciales en la entidad⁹⁴.

1.8. Material Probatorio recaudado

- Oficio SIGEDOC 201.7ER0047540 del 12 de mayo de 2017 por el cual la jefe de la oficina de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva de la Contraloría Municipal de Popayán traslada a esta gerencia el expediente completo (1 cuaderno principal con 196 folios y un cuaderno de medidas cautelares con 110 folios) del proceso de responsabilidad fiscal RF002-2016: Este expediente contiene el formato de Hallazgo Fiscal #26 de la Contraloría Municipal de Popayán, producto de la auditoria gubernamental con enfoque integral realizada en el año 2016 a Movilidad Futura S.A.S. con el que se entregan las siguientes pruebas:
 - CD 1/ CARPETA DIGITAUMANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS: Manual de funciones y competencias de Movilidad Futura S.A.S; Resolución 119 de 2014, acta 20 comité final, estatutos de Movilidad Futura SAS, informe final AR., Manual de contratación e interventoría, oficio remisión HF, oficio remisión Informe definitivo. Pólizas.
 - CD 2/ CARPETA DIGITAU444645-CONSORCIO VIAS POPAYAN.
 - CD 3/ CARPETA DIGITAU21-MANUAL DE PROCESOS 2016/01 ESTRATEGICOS/01 ALTA GERENCIA/1 PROCESOS.
 - Estatutos de la sociedad Movilidad Futura S.A.S.
 - Manual de contratación e interventoría de Movilidad Futura.
 - Copia del expediente del contrato de obra 1, 01 de 2012, con sus otros si y suspensiones, con sus soportes de cada una de las etapas, precontractual, contractual y post contractual. Pólizas que amparan este contrato; actas de iniciación, suspensión, liquidación; balances de obra; informes de interventoría

⁹³ 20230615 recurso apoderado victor contra auto 199 med cautelares 2023ER0106792 prf 828

⁹⁴ REG-EJE-0063-20200316 RES 063 SUSPEN TERMINOS PRF, 20200330 RES 064 SUSPENSION TERMINOS PRF y REG-EJE-0070-2020



sobre la ejecución del contrato.

- Audios PRF RF-02-2016, adelantado por la Contraloría Municipal de Popayán.

- Oficio de Movilidad Futura S.A.S, con radicado 20161100067841, dirigido al coordinador de auditorías de la Contraloría Municipal, con el cual le entrega y tiene como anexos copia del contrato de obra pública N°01 de 2012 y otro si N°1 de 2012, balance financiero firmado por las partes contractuales el 10 de diciembre de 2014, órdenes de pago, acta de liquidación del contrato de obra pública N° 1 de 2012, conciliación extrajudicial 444645-18122014.
- Copia del expediente del contrato de interventoría # 01 de 2013, con sus otros si y suspensiones, con sus soportes de cada una de las etapas, precontractual, contractual y post contractual. Pólizas que amparan este contrato; actas de iniciación, suspensión, liquidación; informes de ejecución del contrato.
- Oficio de la Contraloría Municipal de Popayán con radicado 00000666 del 12 de octubre de 2016, con el cual se remiten los siguientes documentos: Resolución N° 78 del 7 de octubre de 2013, por el cual se decide la imposición de multa contractual; comunicación oficial radicado SG-00001136, de fecha 12 de octubre de 2016, dirigida a la Procuradora N°.73 judicial 1 para asuntos administrativos; Comunicación oficial, radicado N°. SG-00001137, de fecha 12 de octubre de 2016, dirigida al Dr. Jhon Felipe Ramírez, gerente de Movilidad Futura S.A.S.
- Copia del documento de conformación del Consorcio Vías Popayán.
- Auto N°.31 de apertura e imputación de responsabilidad fiscal RF 02-2016, proferido por la Contraloría Municipal de Popayán.
- Oficio de Movilidad Futura S.A.S., con radicado 20171500094991 del 4 de abril de 2017, dirigido a la secretaría general de la Contraloría Municipal de Popayán, por el cual da respuesta, pone en conocimiento y apoya la investigación entregando relación de costos del material entregado por el Consorcio Vías Popayán.
- Oficio de Movilidad Futura S.A.S., de fecha 9 de enero de 2017, con radicado 012 del 10 de enero de 2018 en la Contraloría Municipal de Popayán y por el cual remiten informe de seguimiento de interventoría-Consorcio Vías Popayán-Movilidad Futura S.A.S. -Acta de entrega de cargo Control interno-Movilidad futura SAS.
- Oficio 20171500094991 proferido por Movilidad Futura y dirigido a la Contraloría municipal de Popayán, por el cual da una respuesta sobre la relación de costos de material entregado al consorcio vías Popayán, con los siguientes anexos:
 - Copia contrato de obra pública N°. 01 de 2012.
 - Copia RUT consorcio Vías Popayán.



- Copia documentos de identidad de los señores Fabián García y Eduardo Gironza.
 - Copia certificación de existencia y representación de García Ríos Constructores S.A.
 - Copia RUT García Constructores S.A.
 - Copia Acta de audiencia 074 de marzo 5 de 2015. Procuraduría 73 judicial I para asuntos Administrativos.
 - Copia Acta de audiencia 089 de marzo 13 de 2015. Procuraduría 73 judicial 1 para asuntos Administrativos. Con sus soportes.
 - Copia Acta de audiencia 342 de noviembre 5 de 2015. Procuraduría 73 judicial 1 para asuntos Administrativos.
 - Copia Auto 128 de marzo 8 de 2016 proferido por el Tribunal contencioso Administrativo del Cauca.
 - Copia acta de liquidación del contrato de obra N° 01 de 2012.
 - Copia Auto 31 de noviembre 4 de 2016 por el cual se apertura proceso de responsabilidad fiscal RF-02-2016.
 - Copia memorando radicado 20172300007103, para jefe de control interno Movilidad Futura S.A.S, de Luz Emilse Muñoz, Contratista de apoyo.
 - Copia memorando radicado *20172300007183, para jefe de control interno Movilidad Futura S.A.S, de Luz Emilse Muñoz, Contratista de apoyo.
 - Oficio del 9 de enero de 2017 por el cual la jefe de control interno de Movilidad Futura S.A.S, remite informe de seguimientos a inventarios —Consortio Vías Popayán- Movilidad Futura S.A.S. —Acta de entrega de cargo de control interno- Movilidad Futura.
- Oficio SIGEDOC 2017ER0089339 de septiembre 12 de 2017 por el cual la Dra. Claudia Patricia Tejada Ruiz, Procuradora 39 judicial II en asuntos Administrativos pone en conocimiento las presuntas irregularidades al momento de la conciliación celebrada con ocasión del contrato de obra # 001 de 2012 celebrada entre Consortio Vías Popayán y Movilidad Futura con este documento se aportaron las siguientes pruebas:
- Acta N°. 02 de Comité de conciliación Movilidad Futura S.A.S., del 1 I de marzo de 2015.
 - Relación de costos materiales entregado por el Consortio Vías de Popayán, elaborado por el ingeniero Oscar Caicedo Fernández.
 - Presupuesto actualizado de materiales de obra del 14 de junio de 2017.
 - Copia del contrato de obra pública 01 de 2012.
 - Copia del acta N°074 del 5 de marzo de 2015 de la Procuraduría 73 judicial I para asuntos administrativos, dentro del radicado 444645 del 18 de diciembre de 2014.
 - Copia del, acta N°089 del 13 de marzo de 2015 de la Procuraduría 73 judicial 1 para asuntos administrativos, dentro del radicado 444645 del 18 de diciembre de 2014.
 - Constancia de multa y de ejecutoria del acto de imposición, Resolución #78.
 - Copia del auto interlocutorio 128 del 8 de marzo de 2016 del Tribunal



Contencioso.

Administrativo del Cauca.

- Copia de la designación de Agente Especial del Ministerio Público. Agencia Especial N°0355 del 14 de agosto de 2017, por el cual el Procurador Delegado para la conciliación Administrativa, designa a la Dra. Claudia Patricia Tejada Ruiz, Procuradora 39 judicial II en Asuntos Administrativos.

- Oficio 2018IE0012936 del 16 de febrero del 2018, de asignación de antecedente.
- Oficio 2018ER0011170 del 06 de febrero del 2018, por el cual la Contraloría municipal remite información relacionada con el proceso trasladado.
- Oficio 2019ER0023548 del 12 de marzo del 2019, por el cual movilidad futura allega información relacionada con el contrato:
 - Certificación del origen de los recursos que financiaron el contrato de obra 01 de 2012.
 - En CD remite el expediente contractual del contrato de interventoría 01 de 2013 celebrado entre Movilidad Futura S.A.S. y el Consorcio Metro Malla Vial.
 - Certificación laboral del señor VICTOR ALFONSO ROSERO BUSTAMANTE, con funciones, fechas de ingreso y egreso Acta de posesión, manual de funciones, declaración de bienes y Vetas y hoja de vida de la función pública.
 - Certificación de que se encuentra en trámite proceso ejecutivo con radicado 19001333300420170016800, interpuesto Por Movilidad Futura S.A.S, Para recuperar lo pactado en la conciliación prejudicial celebrada con el Consorcio Vías Popayán.
- Oficio 2019ER0091061 del 27 de agosto del 2019, por el cual movilidad futura allega información relacionada con el contrato:
 - Certificaciones laborales de las personas que se desempeñaron como gerentes, de Movilidad Futura S.A.S, desde el 14 de abril de 2015 hasta la fecha. Indicando funciones, fechas de ingreso y egreso; se hizo entrega también de actas de posesión, manual de funciones, declaración de bienes y rentas y hoja de vida de la función pública.
 - Copia de las pólizas que ampararon las actuaciones de los gerentes de Movilidad Futura desde el 2012 hasta la fecha.
- Informe de visita técnica 2019IE0062169 del 18 de julio del 2019, rendido por el Ingeniero Diego Fernando Páez Cancelado, Profesional 01 del Grupo: de Vigilancia Fiscal de la CGR.



- Declaración de testigo del 03 de enero del 2021⁹⁵.
- Oficio 20211500167561 del 31 de mayo del 2021, radicado 2021EE0063380 por el cual Movilidad Futura allega copia de las actas 03 y 04 del 2015 de conciliación y 35 del 2015 de la Junta Directiva (20210602 2021er0069919 respuesta de movilidad futura of 2021ee0063380 230421 rads7561 rta).
- Correo electrónico del 27 de octubre del 2021, por el cual el H. Consejo de estado da respuesta (20211027 respuestaconsejodeestado).
- Correo electrónico del 21 de octubre del 2021, mediante el cual el la Procuraduría 73 remite información (20211021 respuesta Procuraduría 73 proceso prf2019-00858).
- Correo electrónico del 22 de octubre del 2021, por el cual el Juzgado 04 Administrativo allega información (20211022 respuesta juzgado 04 administrativo prf 858 anexos).
- Correo electrónico del 28 de octubre del 2021, por el cual Allianz da respuesta al proceso (20211028 respuesta allianz prf 858 y respuesta solicitud proceso prf2019-00858).
- Correo electrónico del 28 de octubre del 2021, por el cual el Consejo de Estado da respuesta al proceso (20211028 respuesta consejo de estado prf 858, 058contraloriia general, actos administrativos, 20211026 respuesta consejo de estado 2021er0153888 prf 858, 058contraloriageneraldoc058contraloriageneral, camscanner102720211019actosadministrativos).
- Correo electrónico del 13 de diciembre del 2021, mediante el cual la Procuraduría da respuesta (20211213 respuesta procuraduría 2021er0180591 prf 858, Andrea María Orozco Caicedo, respuesta_hr_1507, 20211215 respuesta procuraduría prf 858).
- Correo electrónico del 13 de diciembre del 2021, mediante el cual Movilidad Futura da respuesta (20220127 respuesta movilidad futura prf 858, 01_respuesta contraloria, 220_respuesta solicitud de informacion proceso prf 2019-00858).
- Correos electrónicos de cotizaciones (20230328 Respuesta a Cotización CONCRETARTE_2023ER0050341_PRF 2019-00858, 20230317 Cotización PREFABRICADOS_2023ER0043186 prf 858, 20230317 Cotización PREFABRICADOS_2023ER0043402_PRF 2019-00858, 20230324 RESPUESTA MOVILIDAD FUTURA_2023ER0046979 PRF 858, 20230328 RESPUESTA PREFABRICADOS Y CONSTRUCCIONES PREFACON_ANEXOS PRF 858).

⁹⁵ 79_2021 01 03 diligencia virtual 19112020 10 am declaracion testimonial prf 2019 00858



- Las allegadas por los vinculados en los escritos de versiones libres y a los descargos frente a la imputación.
- Declaración de Alberto García López de fechas 28 de junio del 2023 y del 26 de octubre del 2023.

2. FUNDAMENTOS DE DERECHO

2.1. Normas aplicables a la decisión

De conformidad con el numeral 5° del artículo 268 de la Constitución Política de Colombia, el Contralor General de la República tiene la atribución de establecer la responsabilidad que se derive de la gestión fiscal.

En desarrollo de este precepto constitucional, la Ley 610 de 2000 regula el proceso de responsabilidad fiscal, el cual es definido en su artículo 1° como:

“...el conjunto de actuaciones administrativas adelantadas por las contralorías, con el fin de determinar y establecer la responsabilidad de los servidores públicos y los particulares, cuando en el ejercicio de la gestión fiscal o con ocasión de ésta, causen por acción u omisión, y en forma dolosa o culposa, un daño al patrimonio del Estado”.

Que además de lo anterior, la Ley 610 de 2000 en su artículo 5 dispone que los elementos de la responsabilidad son:

“Artículo 5°. Elementos de la responsabilidad fiscal. La responsabilidad fiscal estará integrada por los siguientes elementos: -Una conducta dolosa o gravemente culposa atribuible a una persona que realiza gestión fiscal o de quien participe, concurra, incida o contribuya directa o indirectamente en la producción del daño patrimonial al Estado. -Un daño patrimonial al Estado. -Un nexo causal entre los dos elementos anteriores.”

Por su parte, el artículo 53 de la Ley 610 de 2000, prescribe que se podrá proferir fallo con responsabilidad fiscal cuando exista prueba que conduzca a la certeza del daño y su cuantificación, de la gestión fiscal y la individualización de los presuntos responsables y el nexo de causalidad entre esta y aquel.

El debido proceso contenido en el artículo 29° de nuestra Constitución Política, como institución y piedra angular de la democracia, ha sido atendido fielmente por este despacho, pues se le ha dado el carácter de premisa fundamental aplicable a todas las actuaciones sustanciales en el presente proceso de responsabilidad fiscal.

Y para efectos de determinar esta responsabilidad a aquellos sujetos que presuntamente desatendieron los preceptos que rigen el ejercicio de la gestión fiscal, es menester para



este despacho la aplicabilidad de unos principios tendientes a proteger los derechos de los sujetos procesales y el interés general, como son los de legalidad, eficacia, imparcialidad, contradicción, celeridad y demás principios constitucionales y legales y dados por nuestro ordenamiento jurídico inmersos en el derecho fundamental del debido proceso y el derecho de defensa, los cuales se hicieron efectivos en el momento en que se otorgó la oportunidad a los presuntos responsables cuando se los citó y notificó del auto de apertura y auto de Imputación y haciéndolos conocedores de sus derechos se les dio la oportunidad de presentar descargos y de ser escuchados en versión libre, todo con el objeto de permitirles hacer valer sus argumentos de defensa, de presentar y solicitar la práctica de pruebas.

Teniendo en cuenta que las pruebas que obran en el expediente se allegaron en debida forma y atendiendo a la competencia que ostenta este despacho para conocer de la investigación, se puede concluir a todas luces que se han respetado los citados lineamientos del debido proceso.

2.2. Competencia

La competencia de este ente de control se encuentra establecida en el artículo 268 de la Constitución Política de 1991, la Ley 610 de 2000, la ley 1474 de 2011, la Resolución 6541 de 18 de abril de 2012 y Resolución 748 del 2020 de la Contraloría General de la República.

Que la entidad afectada en el presente caso es el SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICOS DE PASAJEROS DE POPAYAN “MOVILIDAD FUTURA”, ente descentralizado del municipio de Popayán - Empresas Industrial y Comercial del Estado – Sociedad Anónima Simplificada.

Que mediante certificación expedida por el gerente de la entidad afectada, podemos asegurar que los recursos objeto de investigación, provienen de la nación⁹⁶:

El contrato de obra No. 01 de 2012 cuyo Objeto es: “REHABILITACIÓN VIAL Y CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO PARA EL SETP DEL TRAMO 1: CARRERA 6 (CALLE 21N Y CALLE 25N); CARRERA 6A (CALLE 2N - CALLE 8N) Y CALLE 7N (CARRERA 6 - CARRERA 6A); CALLE 1N (CARRERA 3 Y CARRERA 4) Y CARRERA 3 (CALLE 1 Y CALLE 1N) Y TRAMO 2: CALLE 5 (CARRERA 19 Y CARRERA 22A); CALLE 5 (CARRERA 27A Y CARRERA 28)” fue financiado con recursos provenientes de la Nación a través de la fuente denominada Nación Otras Fuentes.

El artículo 24 de la Resolución 6541 de 18 de abril de 2012 establece la competencia de las Gerencias Departamentales Colegiadas para conocer de los procesos de responsabilidad fiscal respecto de los recursos del orden nacional que se hayan

⁹⁶ Ver página 2 del PDF: “201903_RTAMOVILIDADFUTIRA_00504”



ejecutado o debieron ejecutarse en el territorio del respectivo Departamento por el nivel desconcentrado de las entidades del orden nacional y respecto de los recursos del orden nacional que se hayan ejecutado o debieron ejecutarse por parte de las entidades del orden territorial; razón por la cual y teniendo en cuenta el factor de territorio, es esta gerencia departamental competente para desatar el presente proceso.

2.3. Caducidad

Que el artículo 9 de la Ley 610 de 2000, dispone:

"La acción fiscal caducará si transcurridos cinco (5) años desde la ocurrencia del hecho generador del daño al patrimonio Público, no se ha proferido auto de apertura del proceso de responsabilidad fiscal. Este término empezará a contarse para los hechos o actos instantáneos desde el día de su realización, y para los complejos, de tracto sucesivo, de carácter permanente o continuado desde la del último hecho o acto".

Que respecto de la liquidación de convenio cuestionado, se suscribió ante la Procuraduría por las partes y con ocasión de la liquidación errada presentada por la entidad afectada, el 22 de diciembre del 2015, al haberse iniciado el presente proceso el 6 de septiembre de 2019, es evidente que no operó el fenómeno de la caducidad, pues se hizo dentro de los cinco años prescritos por la norma, vigente para ese momento.

2.4. Instancia Procesal

El presente proceso se está tramitará bajo el procedimiento del proceso ordinario reglado en la Ley 610 de 2000 y a la luz de lo dispuesto en el artículo 110 de la Ley 1474 de 2011, se tiene como de doble instancia con ocasión de la cuantía.

3. CONSIDERACIONES

3.1. CONCEPTO DE DETRIMENTO PATRIMONIAL

El daño es uno de los conceptos más elaborados y trabajados de la doctrina perteneciente a la responsabilidad contractual y extracontractual, motivo por el cual, son múltiples los autores que lo han querido abordar, con el objeto de determinar su límite y extensión.

Así tenemos como el doctor Tamayo lo define como:

"...el menoscabo a las facultades jurídicas que tiene una persona para disfrutar un bien patrimonial o extramatrimonial. Ese daño es indemnizable cuando en forma ilícita es



*causado por alguien diferente de la víctima*⁹⁷

Mientras que el profesor De Cupis señala que el daño no es más que un:

*“...perjuicio, es decir, aminoración o alteración de una situación favorable”*⁹⁸.

Por su parte, el doctor Henao lo identifica como:

*“...la aminoración patrimonial de la víctima”*⁹⁹

Y el tratadista Escobar Gil, lo determina como:

*“...todo detrimento, menoscabo o perjuicio que a consecuencia de un acontecimiento determinado experimenta una persona en sus bienes espirituales, corporales o patrimoniales, sin importar que la causa sea un hecho humano, inferido por la propia víctima o por un tercero, o que la causa sea un hecho de la naturaleza”*¹⁰⁰.

De esta forma tenemos que, a pesar de la pluralidad de definiciones, todas ellas conservan unos elementos comunes los cuales se refieren al detrimento sufrido por el patrimonio de la víctima, como consecuencia de una acción u omisión ilícita generada por un tercero independiente a la víctima. Así pues, podemos señalar que el daño es el menoscabo o detrimento producido al patrimonio de la persona natural o jurídica o, a la persona en su ser mismo ya sea patrimonial o físico o, moral o extrapatrimonial, por parte de un tercero, producto de una conducta ilícita.

Si bien existe una homogeneidad respecto al concepto del daño, no cabe duda que éste en materia fiscal contempla unos elementos especiales que lo diferencian del daño en materia penal o civil.

Así, se requiere de un sujeto cualificado para su producción, ya que debe ser causado por un gestor fiscal (o un agente que “contribuya” “con ocasión” de la gestión fiscal al detrimento del erario de acuerdo a su “conexidad próxima y necesaria”). Así mismo, la acción dañosa, debe recaer única y exclusivamente sobre los bienes del Estado, escapando a su examen el menoscabo que sufran otros recursos que no sean los públicos.

De lo anterior, se sigue que el sujeto pasivo del daño sea el Estado, concebido este como

⁹⁷ TAMAYO JARAMILLO, Javier. *Tratado de responsabilidad civil*. Vol. II. Bogotá: Legis, 2013, p. 326.

⁹⁸ DE CUPIS, A. El daño. *Teoría general de la responsabilidad civil*, cit., p. 81.

⁹⁹ HENAO PÉREZ, Juan Carlos. *El daño*, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2010, p. 84.

¹⁰⁰ ESCOBAR GIL, Rodrigo. *Responsabilidad contractual de la administración pública*, Bogotá, Ed. Temis, 1989, p. 165.

persona jurídica en cuanto sujeto de derechos y obligaciones, respecto del cual y por esa condición, sólo es posible indemnizar el daño patrimonial o físico, y no el extrapatrimonial o moral¹⁰¹.

En suma, podemos decir que el daño en los PRF, está referido al menoscabo, detrimento o perjuicio que sufre el patrimonio del Estado por causa de la acción u omisión de un gestor fiscal, o de la persona que determine dicho detrimento.

El daño tiene como características, la de ser cierto, esto es, que sea objetivamente verificable¹⁰², en relación inversamente proporcional con el denominado daño eventual, el cual no es indemnizable¹⁰³; que sea especial, en relación con su origen; anormal, al no tomar en cuenta el desgaste natural de las cosas producto del paso del tiempo, y cuantificable por valorar económicamente el costo del perjuicio.

De la misma forma, la Doctrina ha reiterado, que el daño es el primer elemento de la responsabilidad fiscal. Sólo después de estructurado y probado el daño se puede establecer los demás elementos, empezando por la conducta.

Al respecto, la Oficina Jurídica de la Contraloría General de la República en concepto 0070A del 15 de enero de 2001, señaló sobre el daño:

“De los tres elementos anteriores, el daño es el elemento más importante. A partir de éste se inicia la responsabilidad fiscal. Si no hay daño no puede existir responsabilidad. Con esta lógica, el artículo 40 de la ley 610 dispone que el proceso de responsabilidad fiscal se apertura cuando se encuentra establecida la existencia del

¹⁰¹ Sobre este asunto la jurisprudencia ha precisado que: “...en lo que atañe al reconocimiento de perjuicios morales subjetivados cuya condena impuso el a quo, considera la Sala que la misma resulta improcedente, pues si se tiene en cuenta que este tipo de daño es aquél que “...incide en el ámbito particular de la personalidad humana en cuanto toca sentimientos íntimos tales como la pesadumbre, la aflicción, la soledad, la sensación de abandono o de impotencia que el evento dañoso le hubiese ocasionado a quien lo padece...” vivencias que “...varían de la misma forma como cambia la individualidad espiritual del hombre...” (12), es fácil concluir que esta clase de perjuicios no puede predicarse de una persona jurídica, invulnerable a estos sentimientos, que son los que en últimas abren paso al reconocimiento de esta clase de perjuicios” (Sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá-Sala Civil, calendada el 13 de septiembre de 2010, M. P. Dr.: Manuel Alfonso Zamudio Mora, Proceso No. 110013103040200300577 01).

¹⁰² En profesor Tamayo señala que existe certeza del daño “...cuando a los ojos del juez aparece con evidencia que la acción lesiva del agente ha producido o producirá una disminución patrimonial o moral en el demandante” (TAMAYO JARAMILLO, Javier. Tratado de responsabilidad civil. Vol. II. Bogotá: Legis, 2013, p. 339).

¹⁰³ Sobre el llamado daño eventual el profesor Henao ha señalado que ocurre cuando existe “certeza de que el daño no se produjo ni se producirá, razón por la cual se califica de eventual, porque no se puede asegurar que hay aminoración patrimonial (...) Se puede entonces afirmar que el perjuicio es cierto cuando la situación sobre la cual el juez va a pronunciarse le permite inferir que se extenderá hacia el futuro, y que es eventual cuando la situación que refleja “el perjuicio” no existe ni se presentará luego” (HENAÓ PÉREZ, Juan Carlos. El daño, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2010, p. 139).



daño, es decir, se requiere que exista certeza sobre la existencia de éste para poder iniciar el proceso de responsabilidad fiscal... (Subrayado fuera de texto).

En concepto EE 9273 del 14 de febrero de 2006 la Oficina Jurídica de la Contraloría sostuvo respecto al daño al patrimonio del Estado:

“Así mismo vemos que, la existencia del daño es condición de apertura del proceso de responsabilidad fiscal, tal como consta en los artículos 40 y 41 de la Ley 610 de 2000 transcritos, de lo contrario, procederá el adelantamiento de una indagación preliminar por el término de seis (6) meses”.

Allí mismo se afirma:

*“Con base en la normatividad antes descrita la Oficina Jurídica realizó un estudio sobre el daño patrimonial al Estado, proferido mediante el oficio 0070A de 15 de enero de 2001, en el cual citaremos algunos aspectos relativos al objeto de su consulta, a saber: “IV. EL DAÑO PATRIMONIAL AL ESTADO. (...) **2. Certeza del daño. Desde los principios generales de responsabilidad es necesario destacar que el daño debe ser cierto. Se entiende que «el daño es cierto cuando a los ojos del juez aparece con evidencia que la acción lesiva del agente ha producido o producirá una disminución patrimonial o moral en el demandante».** (Subrayado fuera de texto)*

Siendo también importante mencionar del concepto al que hacemos referencia que:

*“De otra parte, vale la pena citar la Sentencia SU-620, 13 de noviembre de 1996, Expediente T-84714, Magistrado Ponente Antonio Barrera Carbonel, en la cual la Honorable Corte Constitucional, precisó: “Para la estimación del daño debe acudir a las reglas generales aplicables en materia de responsabilidad; por lo tanto, entre otros factores que han de valorarse, **debe considerarse que aquél ha de ser cierto, especial, anormal y cuantificable con arreglo a su real magnitud.** En el proceso de determinación del monto del daño, por consiguiente, ha de establecerse no sólo la dimensión de éste, sino que debe examinarse también si eventualmente, a pesar de la gestión fiscal irregular, la administración obtuvo o no algún beneficio”. (Subrayado fuera de texto)*

En el mismo concepto se manifestó:

*“En este orden jurídico, el daño siempre estará representado en el menoscabo del patrimonio público cualquiera que fuere su connotación y para efectos de la imputación de la responsabilidad fiscal, el mismo debe darse en ejercicio de la gestión fiscal o con ocasión de ésta. **Para la estimación del daño debemos acudir a los principios generales de la responsabilidad, por tanto, para valorarlo debe tenerse en cuenta que el mismo ha de ser cierto, especial, anormal, cuantificable y con arreglo a su real magnitud. Se entiende que el daño es cierto cuando aparece evidencia que la actuación u omisión del servidor público o particular ha generado una afectación al patrimonio público. Dicho en otras palabras, existe certeza del daño, cuando obra prueba que permita establecer que existe un menoscabo de los dineros o bienes***



públicos, por tanto, es viable cuantificar esa disminución patrimonial y endilgárselo a quien con su conducta activa u omisiva lo causó” (subrayado y negrilla fuera de texto).

Así las cosas, puede señalarse que, aunque el daño en material fiscal sigue en principio los lineamientos jurisprudenciales y doctrinales establecidos para el daño en general, tiene unos elementos exclusivos que lo separan de éste y lo diferencia de otras clases de daño. Es además la nota primaria y fundamental para establecer la existencia o inexistencia de la Responsabilidad Fiscal, ya que, sin la producción del mismo, no tiene razón de ser la acción fiscal, en tanto que esta es resarcitoria al perseguir la compensación del daño causado al Estado por parte del gestor fiscal.

Conforme lo contenido en el Artículo 6 de la Ley 610 de 2000, El **Daño Patrimonial al Estado**, se entiende como:

“La lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, uso indebido, o deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, inequitativa e inoportuna, que en términos generales, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo funcional y organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de las contralorías. Dicho daño podrá ocasionarse por acción u omisión de los servidores públicos o por la persona natural o jurídica de derecho privado, que en forma dolosa o culposa produzcan directamente o contribuyan al detrimento al patrimonio público.” (Apartes subrayados fueron declarados inexecutable por la Honorable Corte Constitucional mediante Sentencia C-340 de 2007. Magistrado Ponente Rodrigo Escobar Gil).

El concepto expuesto advierte que el daño ocasionado con la gestión fiscal, debe recaer sobre el “patrimonio público”, es decir, en los “bienes o recursos públicos” o en los “intereses patrimoniales del Estado.” Al respecto de este elemento, la Corte Constitucional en Sentencia C-840 de 2001, M.P. Dr. Jaime Araujo Rentería, señaló:

“Para la estimación del daño debe acudir a las reglas generales aplicables en materia de responsabilidad, por lo tanto, entre otros factores, que han de valorarse, debe considerarse que aquél debe ser cierto, especial, anormal y cuantificable con arreglo a su real magnitud. En el proceso de determinación del monto del daño, por consiguiente, ha de establecerse no sólo la dimensión de éste, sino que debe examinarse también si eventualmente, a pesar de la gestión fiscal irregular, la administración obtuvo o no algún beneficio.”

Definido en abstracto el daño, debe pasar esta instancia a establecer si el mismo se encuentra o no estructurado en el presente asunto.



3.1.1. DETRIMENTO PATRIMONIAL EN EL CASO CONCRETO

Se encuentra probado en el proceso que se suscribió el Contrato 001-2012 el 27-12-2012 entre Movilidad Futura y Consorcio Vías Popayán, en los siguientes términos¹⁰⁴:

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 01 DE 2012

- **CONTRATANTE:** SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS DE POPAYAN "MOVILIDAD FUTURA S.A.S" - NIT 900323358-2
- **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAS POPAYÁN - NIT 900580034-2
- **CONSORCIADOS:** Garcia Rios Constructores S.A. (50%); Fablán Garcia Rios (25%); Eduardo Gironza Lozano (25%).
- **OBJETO:** REHABILITACIÓN VIAL Y CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO PARA EL SETP DEL TRAMO 1: CARRERA 6 (CALLE 21N Y CALLE 25N); CARRERA 6A (CALLE 2N - CALLE 8N) Y CALLE 7N (CARRERA 6 - CARRERA 6A); CALLE 1N (CARRERA 3 Y CARRERA 4) Y CARRERA 3 (CALLE 1 Y CALLE 1N) Y TRAMO 2: CALLE 5 (CARRERA 19 Y CARRERA 22A); CALLE 5 (CARRERA 27A Y CARRERA 28).
- **VALOR:** OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS UN PESOS (\$8.340.874.401,00) incluido IVA y todos los costos directos e indirectos que se causen con ocasión del mismo.
- **PLAZO:** Once (11) meses contados desde la suscripción del Acta de Inicio.
- **DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:** 84 del 08 de Noviembre de 2012
- **MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:** Licitación Pública (MF-001-2012)

Se suscribe un otrosí el 10-01-2014 prorrogando el contrato por 34 días, es decir, hasta el 15-02-2015 y se adiciona en valor de \$42.493.410¹⁰⁵; el 17 de marzo del 2014 se suscribe acta de suspensión del contrato por el término de 20 días, lo cual se hizo con fundamento en la solicitud de la aseguradora¹⁰⁶, así mismo, se tiene que las suspensiones, adiciones y prórrogas del contrato se surtieron de la siguiente manera:

Fecha de suscripción de Contrato	04 DE FEBRERO DE 2013
Fecha de Inicio del Contrato	11 DE FEBRERO DE 2013
Plazo inicial	11 MESES
Fecha inicial de Terminación del Contrato	11 DE ENERO DE 2014
Plazo actualizado	11 MESES
Fecha actualizada de Terminación del Contrato	11 DE ENERO DE 2014
Plazo adicional – Prorroga No.01	34 DÍAS
Fecha actualizada de Terminación del Contrato	14 DE FEBRERO DE 2014
Plazo adicional – Prorroga No.01	34 DÍAS
Fecha actualizada de Terminación del Contrato	14 DE FEBRERO DE 2014
Plazo adicional – Prorroga No.02	30 DÍAS
Fecha actualizada de Terminación del Contrato	15 DE MARZO DE 2014
Plazo adicional – Prorroga No.03	7 DÍAS

¹⁰⁴ Página 209 PDF: "97_CARPETA 10 CONTRATO 01-2012"

¹⁰⁵ Página 442 PDF: "112_CONTRATO MAYA VIAL"

¹⁰⁶ Página 177 PDF: "111_CARPETA 20 CONTRATO MALLA VIAL"

**FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL PRF 2019-00858**

Fecha actualizada de Terminación del Contrato	22 DE MARZO DE 2014
Plazo adicional – Prorroga No.04	25 DÍAS
Fecha actualizada de Terminación del Contrato	16 DE ABRIL DE 2014
Plazo adicional – Prorroga No.05	18 DÍAS
Fecha actualizada de Terminación del Contrato	04 DE MAYO DE 2014
Valor inicial del Contrato en pesos	\$ 835.353.700 ^o
Adicional No. 01	\$ 42.493.410 ^o
Adicional No. 02	\$ 48.264.700 ^o
Adicional No. 03	\$ 10.606.431 ^o
Adicional No. 04	\$ 24.324.736 ^o
Adicional No. 05	\$ 17.548.770 ^o
Valor vigente del Contrato en pesos	\$ 978.591.747 ^o

El 05-05-2014 vence el plazo del contrato¹⁰⁷, en consideración a ello, Movilidad Futura inicial el proceso de liquidación, cuyo proyecto de acta es remitido al consorcio contratista el 05-06-2014¹⁰⁸ y el 25 de junio del 2015, en una segunda ocasión¹⁰⁹. En el proceso de liquidación del contrato se presentaron las siguientes situaciones¹¹⁰:

1. Por medio del oficio 0406 del 7 de mayo de 2014, se comunicó al Contratista que MOVILIDAD FUTURA S.A.S. y el CONSORCIO VIAS POPAYAN, deberán proceder a la liquidación final del contrato de obra pública 01 de 2012, conforme lo establece el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.
2. Mediante oficio 0477 del 29 de Mayo de 2014, se remitieron al Contratista los siguientes documentos: acta de recibo final, acta de obra 05 y final, acta der modificación 04 y final y cuentas por pagar del Consorcio Vías Popayán.
3. En el mismo oficio se citó al Contratista para la firma de los mencionados documentos, necesarios para el cierre técnico y financiero del contrato, el miércoles 04 de junio de 2014, a las 10:00 a.m. sin que el Contratista se hiciera presente.
4. Con oficio 521 del 5 de junio de 2014, se remitió al CONSORCIO VIAS POPAYAN el proyecto de acta de liquidación final del contrato, trámite que es indispensable para dar cumplimiento a la ritualidad del artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, que ordena agotar la instancia de la liquidación por mutuo acuerdo para proceder, en su debida oportunidad, a la liquidación unilateral por medio de acto administrativo motivado contra el cual solo procede el recurso de reposición.
5. Una vez resuelto el recurso de reposición y en firme la providencia que decreta la liquidación unilateral, será posible iniciar el proceso licitatorio encaminado a contratar las obras que no fueron ejecutadas por el CONSORCIO VIAS POPAYAN.

¹⁰⁷ Página 727 PDF: "112_CONTRATO MAYA VIAL"

¹⁰⁸ Página 746 PDF: "112_CONTRATO MAYA VIAL"

¹⁰⁹ Página 996 PDF: "112_CONTRATO MAYA VIAL"

¹¹⁰ Página 942 PDF: "112_CONTRATO MAYA VIAL"



Ante el incumplimiento y con ocasión del inicio de un proceso sancionatorio en contra del contratista, Movilidad Futura el 10 de diciembre de 2014, por medio del ingeniero OSCAR ALBERTO CAICEDO FERNÁNDEZ¹¹¹, hace una relación de costos de material entregado por el CONSORCIO VÍAS DE POPAYÁN – CVP en virtud del contrato mencionado, para efectos de efectuar el balance financiero del mismo, el cual fue remitido con otros documentos al ingeniero VÍCTOR ROSERO en calidad de representante legal de Movilidad Futura, para efectos de que en representación de la entidad procediera a verificarlos y a realizar las acciones pertinentes y conducentes frente al contrato incumplido.

El documento suscrito por el citado ingeniero Oscar Alberto Caicedo Fernández, el 10-12-02014 se denominó el “BALANCE FINANCIERO CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 01-012”, en especial contienen una RELACION DE COSTOS DEL MATERIAL ENTREGADO POR EL CVP documento en el que se certifica que el valor de los insumos por espacio público entregados por el contratista en diciembre del 2014 ascendía a \$618.743.536, documento que se tiene como sustento de la liquidación del contrato y de los acuerdos que culminaron con el proceso, respecto de los que más adelante se entrará en detalle¹¹²:

RELACION DE COSTOS DEL MATERIAL ENTREGADO POR EL CVP

Item	nombre	unidad	Cantidad	costo unitario	costo total
1	Loseta Tactil	und	904	44,240	39,992,960.00
2	Loseta gris 40x40x20	und	316	38,143	12,053,188.00
3	Tableta de 40x20x6	und	3804	41,649	158,432,796.00
4	Adoquin A-25	und	10608	37,476	397,545,408.00
5	Rampa de acceso vehicular	und	29	54,600	1,583,400.00
6	Bordillo A-10	und	98	40,508	3,969,784.00
7	Bordillo de 80x35x20	und	20	31,500	630,000.00
8	Separador A-170	und	36	126,000	4,536,000.00

COSTO TOTAL MATERIAL DE OBRA ENTREGADO**\$ 618,743,536.00**

Ese mismo 10 de diciembre del 2014, se reunieron las partes del contrato de obra pública N°.01 de 2012, por Movilidad Futura S.A.S., su gerente en ese entonces, señor Víctor Rosero Bustamante y por el Consorcio Vías Popayán, su representante legal al señor

¹¹¹ Página 62 del PDF: “20170915_solicitud procuraduria_ANT 054-2017” y página 120 PDF: “444645 - CONSORCIO VIAS POPAYAN VS. MOVILIDAD FUTURA”

¹¹² Página 62 del PDF: “20170915_solicitud procuraduria_ANT 054-2017” y página 120 PDF: “444645 - CONSORCIO VIAS POPAYAN VS. MOVILIDAD FUTURA”

Fabian García Ríos, con el fin de aclarar el balance financiero del contrato, dado que existía en curso un proceso sancionatorio contractual por posible incumplimiento del contrato en mención, actuación que el contratista solicitó suspender para adelantar una conciliación administrativa tendiente a reparar los posibles perjuicios debatidos en el proceso sancionatorio; en este documento se plasma el siguiente balance financiero¹¹³:

“VALOR TOTAL DEL CONTRATO CON AIU: \$8.340'874.401=

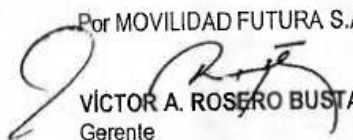
VALOR TOTAL EJECUTADO INCLUIDA ACTA 5: \$2.073'054.602=

SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO: \$6.267.819.799=

Se deja constancia que el valor del acta 5 por \$514754.085, se amortizó al anticipo, quedando un saldo por amortizar del anticipo de \$163'503.303=.


Insumos de espacio público entregados por el Contratista en el mes de Diciembre de 2014: \$618'743.536=.

Dado que existe en curso un proceso sancionatorio contractual por posible incumplimiento de este contrato, actuación que el Contratista solicita suspender para adelantar una conciliación administrativa tendiente a reparar los posibles perjuicios debatidos en el proceso sancionatorio contractual, pero con el fin de propender por la no paralización ni demora en la ejecución de las obras de infraestructura necesarias para el proyecto SETP-POPAYÁN, las partes dejan claro que no existe reclamación del contratista relacionada con cantidades de obra ni valores adicionales por la ejecución del contrato, se define como valor total ejecutado del contrato la suma de \$2.073'054.602 y MOVILIDAD FUTURA S.A.S. queda libre para sacar a licitación las obras no ejecutadas en este contrato por \$6.267.819.799= autorizando el Contratista la liberación del respectivo registro presupuestal, quedando pendiente la liquidación del contrato una vez se defina lo relacionado con el proceso por posible incumplimiento o se logre la conciliación.

Por MOVILIDAD FUTURA S.A.S.:

VÍCTOR A. ROSERO BUSTAMANTE
Gerente

Proyectó: Álvaro Casas Trujillo
Revisó: WIALS-SG

Por el CONSORCIO VÍAS POPAYÁN


FABIAN GARCÍA RÍOS
Representante Legal

” (Destacado fuera de texto)

Posteriormente el 16 de enero de 2015, mediante radicado 20151400012191 suscrito por los ingenieros LUIS ALBERTO GARCÍA LÓPEZ y PEDRO FELIPE POTES GONZÁLEZ y dirigido al abogado WILLIAM ALFREDO LOMBANA SOLARTE, como secretario general de Movilidad Futura, se allega la valoración y justificación de los perjuicios causados por el presunto incumplimiento del consorcio Vías Popayán, en el que se hicieron algunos ajustes, pero se mantiene el valor de los insumos recibidos por el contratista en cuantía superior a seiscientos millones de pesos.

¹¹³ Ver página 11 del PDF: “7_12 A 209 ANT-054-2017”



No obstante, debe destacarse que en este documento no se incluye de manera pormenorizada la valoración de los materiales, que con el presente se investiga, solo se menciona el valor final.

Siguiendo con la trazabilidad de los hechos, el 20 de enero del 2015 el ingeniero Felipe Potes en calidad de Coordinador del Área de Infraestructura y el ingeniero Oscar Caicedo en calidad de apoyo de supervisión, designados para cuantificar los perjuicios económicos causados por el Consorcio Vías Popayán en virtud del Contrato No. 001-2014, informan sobre el asunto objeto de investigación, lo siguiente, en el que se incluye nuevamente la valoración de los insumos recibidos del contratista, cuantificados en más de seiscientos millones de pesos¹¹⁴:

“NOTA: Dado que, en la primera semana de diciembre de 2014, el Consorcio Vías Popayán, entregó insumos requeridos para las obras de espacio público por la suma de \$618.743.536 ...”

Es importante advertir, que antes de que desarrollara la actividad descrita en Movilidad Futura, el 18-12-2014 el CONSORCIO VIAS POPAYAN contratista por medio de apoderado, solicita conciliación extrajudicial y es importante lo anterior, porque todas las acciones antes mencionadas tienen como sustento precisamente esta solicitud de audiencia de conciliación que le corresponde por reparto a la Procuraduría 73 Judicial I para Asuntos Administrativos, la cual es admitida mediante auto No. 013 del 03-02-2015¹¹⁵. En este proceso se celebra audiencia los días 05, 13, 26 de marzo, 17 de junio, 16, 31 de julio, 15 de septiembre, 16, 29 de octubre y 05 de noviembre del 2015¹¹⁶, fecha esta última, en la que culmina el proceso.

Se destaca que, tanto en el trámite de conciliación extrajudicial ante la Procuraduría como en el asunto valorado por el Comité de Conciliación de Movilidad Futura, los valores entregados por los citados ingenieros de esta entidad, se mantienen incólumes y son finalmente aprobados, como se pasará a analizar.

Retomando entonces la audiencia celebrada ante la citada entidad, se evidencia que se hace alusión al acuerdo aprobado por el Comité de Conciliación de Movilidad Futura, respecto del cual se destacan las siguientes actas que se adjuntan al proceso de conciliación:

- Acta de Comité de Conciliación de Movilidad Futura No. 1 del 20-02-2015¹¹⁷, se plantea en el orden del día, el análisis de la solicitud de conciliación del Consorcio Vías Popayán presentada por el Consorcio Vías Popayán en virtud del contrato de

¹¹⁴ Ver documento página 59 del PDF: “3_20170915_solicitud procuraduria_ANT 054-2017”

¹¹⁵ Página 60 del PDF: “24_444645 - CONSORCIO VIAS POPAYAN VS. MOVILIDAD FUTURA”

¹¹⁶ Ver documentos del PDF: “24_444645 - CONSORCIO VIAS POPAYAN VS. MOVILIDAD FUTURA”

¹¹⁷ Ver página 166 del PDF: “24_444645 - CONSORCIO VIAS POPAYAN VS. MOVILIDAD FUTURA”



obra pública N°. 01 de 2012, con radicado 444645.18122014 de la Procuraduría 73 Judicial I, en donde se indica que el valor reclamado en favor del Consorcio es el siguiente:

“C. A FAVOR DEL CONSORCIO VIAS POPAYÁN:

Insumos de espacio público entregados por el Contratista en la primera semana de 2014: \$618'743.536=

Devolución de elementos PIPMA: \$23'724.571 =

Lo anterior suma: \$642'468.107=” (Destacado fuera de texto)

En esta instancia, se aplaza la aprobación de este asunto y finalmente se decide en la siguiente sesión.

- Acta No. 2 del del 11-03-2015, documento en el que a su vez, se plasmó la siguiente decisión¹¹⁸:

“11 ANÁLISIS DE LA SOLICITUD DE CONCILIACIÓN DEL CONSORCIO VIAS POPAYÁN EXPRESADA EN LA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN DEL DIA 5 DE MARZO DE 2015.

*El Secretario General, presenta el caso informando a los asistentes de la propuesta **expresada por el Convocante mediante email del 4 de Marzo de 2015**, la cual se remitió previamente a los asistentes y que es la misma expresada en la audiencia de conciliación del 5 de Marzo de 2015 (radicado 444645.18122014 de la Procuraduría 73 Judicial I Administrativa), cuya copia se acompaña al acta y que se resume así: Valor de los perjuicios \$1.117'418.050= menos \$681 '624.845= a favor del Consorcio Vías Popayán y como saldo a favor de MOVILIDAD FUTURA SAS. reconoce la suma de \$335'793.205= que propone pagar en tres cuotas mensuales de \$100 millones de pesos...*

...

2) CONCEPTO DEL COMITÉ DE CONCILIACIÓN:

El Comité de Conciliación por unanimidad y previo debate, recomienda:

...

B) Siempre que el Consorcio Vías Popayán, sus integrantes y la Aseguradora renuncien a toda reclamación, indemnización, acción administrativa y judicial, etc., relacionados con el contrato de obra pública N°01 de 2012, objeto de conciliación, conciliar a favor de MOVILIDAD FUTURA SAS., por el valor de la totalidad de los perjuicios enunciados en el comité, así:

ESTIMACIÓN DEL VALOR DE LOS PERJUICIOS A LA FECHA:

- Sobrecostos por obra no ejecutada: \$244'858.752= (incluye PIPMA, social y ambiental)
- Valor de los adicionales de Interventoría imputables al CVP: \$83'195,867=
- Valor de la Interventoría de las Obras que no se ejecutaron: \$637'399,700=
- Anticipo sin amortizar: \$163'503,303=
- Multa en firme por incumplimiento: \$52'898.548=

¹¹⁸ Páginas 62 y 117 PDF: “3_20170915_solicitud procuraduria_ANT 054-2017” y página 170 del PDF: “24_444645 - CONSORCIO VIAS POPAYAN VS. MOVILIDAD FUTURA”



Lo anterior suma: \$1.181'856.170=

OTROS CONCEPTOS, ÁREA FINANCIERA:

- Contribución de seguridad contratos de obra pública (5%): \$77'915.025=
- Estampilla Pro Cultura Municipio de Popayán (0,5%): \$7'791.503=
- Lo anterior suma: \$85'706.528=

A FAVOR DEL CONSORCIO VIAS POPAYÁN:

- **Insumos de espacio público entregados por el Contratista en la primera semana de 2014: \$618'743.536=**
- Devolución de elementos PIPMA: \$23'724.571 =
- Retención de Garantía: \$39'156.737,87=

Lo anterior suma: \$681 '624.844, 87=

C) SALDO A FAVOR DE MOVILIDAD FUTURA S.A.S.: \$585'937.853,13= (quinientos ochenta y cinco millones novecientos treinta y siete mil ochocientos cincuenta y tres pesos con trece centavos)” (Destacado fuera de texto)

- Posteriormente, el Comité de Conciliación de Movilidad Futura mediante acta No. 4 del 14-09-2015¹¹⁹, sobre este asunto tramitado ante la Procuraduría, resuelve lo siguiente respecto de las garantías que debía prestar el consorcio:

“Acceder a la solicitud de la Procuradora 73 Judicial 1; en consecuencia, se reconsidera la decisión respecto de la garantía inicialmente exigida y se acepta la garantía hipotecaria para afianzar el compromiso de pago de las sumas a favor de MOVILIDAD FUTURA SAS” señaladas en el acta 02 de fecha 11 de Marzo de 2015 de éste Comité de Conciliación, Si el plazo para el pago supera los tres (3) meses, se deben pactar intereses de plazo al bancario corriente y de mora al máximo legal. También cláusula aceleratoria por incumplimiento de una sola de las cuotas y solidaridad entre los consorciados,”

El trámite de conciliación extrajudicial adelantado ante la Dra. Andrea María Orozco Caicedo en calidad de Procuradora Judicial 73 Judicial 1 para asuntos administrativos, culmina el 05 de noviembre del 2015, con acta 342, en la cual se concluye lo siguiente:

“CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PUBLICO: La Procuradora Judicial considera que el anterior acuerdo contiene obligaciones claras, expresas y exigibles, en cuanto al tiempo, modo y lugar de su cumplimiento siendo claro en relación con el concepto conciliado, cuantía y fecha para el pago y reúne los siguientes requisitos: (i) el eventual medio de control que se ha podido llegar a presentar no ha caducado (art. 61, Ley 23 de 1991, modificado por el art. 81, Ley 446 de 1998); (ii) el acuerdo conciliatorio versa sobre conflictos de carácter particular y contenido patrimonial disponibles por las partes (art. 59, Ley 23 de 1991, Y 70, Ley 446 de 1998); (iii) las partes se encuentran debidamente

¹¹⁹ Página 212 del PDF: “24_444645 - CONSORCIO VIAS POPAYAN VS. MOVILIDAD FUTURA”



representadas y sus representantes tienen capacidad para conciliar; (iv) obran en el expediente las pruebas necesarias que justifican el acuerdo; y (v) en criterio de esta agencia del Ministerio Público, el acuerdo contenido en el acta no es violatorio de la Ley y no resulta lesivo para el patrimonio público. (art. 65 A, Ley 23 de 1.991 y art. 73, Ley 446 de 1998). En consecuencia, se dispondrá el envío de la presente acta, junto con los documentos pertinentes, al Tribunal Contencioso Administrativo del Cauca, para efectos de control de legalidad, advirtiéndolo a los comparecientes que el Auto aprobatorio junto con la presente acta del acuerdo, prestarán mérito ejecutivo, y tendrán efecto de cosa juzgada razón por la cual no son procedentes nuevas peticiones conciliatorias por los mismos hechos ni demandas ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo por las mismas causas (art. 73 Ley 446 de 1998 y 24 Ley 640 de 2001) .. Se da por concluida la diligencia y en constancia se firma el acta por quienes en ella intervinieron, una vez leída y aprobada siendo las 12.m. Las partes quedan notificadas en estrados. Copia de la misma se entregará a los comparecientes.”

En este acuerdo, se indica que el consorcio deberá pagar a Movilidad Futura la suma de QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CIENCIENTA y CUATRO PESOS M/CTE (\$585.937.854.00), el cual corresponde al valor aprobado por el Comité de Conciliación de Movilidad Futura mediante Acta No. 2 del del 11-03-2015 y que a su vez es el contenido en el informe presentado por el Ingeniero de Movilidad Futura designado para el efecto, arriba transcrito; en este orden de ideas, con este acuerdo ante la Procuraduría se acogió el error que hoy se tiene como presunto detrimento patrimonial y que más adelante se explicará a detalle.

El citado acuerdo conciliatorio, es remitido al juez administrativo, conforme a lo ordenado mediante decreto 1716 del 14 de mayo del 2009, el cual es resuelto por el H. Tribunal Administrativo con ponencia del magistrado David Fernando Ramírez Fajardo, correspondiéndole el radicado al expediente No.19001-23-33-004-2015-00566-00, siendo decidido mediante el Auto No. 128 del 08 de marzo del 2016, en el que se deja constancia de lo siguiente¹²⁰:

“En el presente asunto se aportó copia de las actas Nos. 01, 02 y 04 de 2015, Suscritas por los miembros del Comité de Conciliación de MOVILIDAD FUTURA SAS.

En el ACTA Cero dos del 11 de marzo del 2015, se autorizó considerar por la suma de \$ 585. 937. 853, 13, Pagaderos en un plazo no superior a tres (3) meses –fl. 147 a 149.

Igualmente. Pobre certificación expedida por el Secretario General de Movilidad futura SAS., En la que manifiesta que la Junta Directiva atendiendo la cuantía del acto Autorizó al Gerente de la sociedad para conciliar con el CONSORCIO VÍAS POPAYÁN - fl. 150-.”

En esa providencia, cuando se hace alusión al arreglo conciliatorio, se indica que los valores a conciliar en favor del contratista, son, entre otros, los \$618.743.536, correspondientes a insumos entregados por el contratista en la primera semana de la

¹²⁰ Página 70 del PDF: “3_20170915_solicitud procuraduria_ANT 054-2017”



ejecución contractual, de donde se desprende el presunto detrimento patrimonial:

“Insumos de espacio público entregados por el contratista en la primera semana del 2014: \$ 168. 743. 536.

Devolución de elementos PIPMA: \$ 23. 724. 571.

Retención de garantía: \$ 39. 156. 737. 187.”

Adicional a lo anterior, el H. Tribunal luego de transcribir apartes de la jurisprudencia aplicable, manifiesta:

“En esta línea jurídica el acuerdo conciliatorio estará ajustado a la legalidad en la medida de que no sea lesivo a los intereses patrimoniales del Estado ni al interés del particular, es decir, que suponga necesariamente que en todos los aspectos aquel esté conforme a la norma positiva, sin que se configure un enriquecimiento sin causa que vaya en detrimento del patrimonio de alguna de las partes.

Igualmente deben concurrir los elementos probatorios que le permitan al juez verificar la existencia de la obligación que se concilia.”

En el punto 2.5.2. de la verificación de los presupuestos jurídicos, subpunto d), el tribunal analizó la figura del incumplimiento contractual, multa, cláusula penal y “algunas” estipulaciones pactadas por las partes, se concluye lo siguiente, de manera general:

“Ahora bien, Realizada la liquidación de perjuicios que aparece, apoyo 82 reverso del expediente, Se observa que estos se tasaron en la suma de \$ 1. 181. 856. 170, es decir, En un valor superior a la estimación anticipada que había en estipulado las partes (\$ 834. 087. 440 ver cláusulas segunda y décimo cuarta), Aun venciendo el valor de la multa. Porque esto tiene un origen diferente, como vimos en la jurisprudencia ut supra, Filo, accidente a la devolución del anticipo sin amortizar que tampoco corresponde al rubro de perjuicios.

Las partes sustenten el monto conciliado Con los documentos soportados relacionados en el acápite de pruebas, dónde se desagregan los valores por cada concepto.

A folios 94 y 96, obra justificación del cálculo del presupuesto, Que arroja por concepto de sobrecostos, por obra no ejecutada, La suma de \$ 244. 858. 752.”

Finalmente, y tal como quedó el acuerdo en la Procuraduría y en el Comité de Conciliación de Movilidad Futura, se concluye lo siguiente:

“Partiendo del valor de los perjuicios, \$ 1. 181. 856. 170, Y luego del cruce de cuentas entre las partes, el valor Conciliado es de \$ 585.937.854.

El acuerdo así celebrado no es lesivo a los Intereses del Estado, ni de los particulares involucrados. Todos los conceptos desagregados ut supra fueron tomados en un ciento por ciento (100%).



EN VIRTUD DE LO EXPUESTO, SE DISPONE:

PRIMERO: APROBAR la conciliación judicial definida por por las partes dentro del radicado No. 444645 Del 1, 8 de diciembre de 2014 Adelantado ante la señora Procuradora No. 73. Judicial I Para Asuntos Administrativos, Por lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.”

Quiere decir lo anterior, que en esta instancia, nuevamente se aprueba el reconocimiento de recursos en favor del contratista, que no corresponden a la realidad, como se pasa a demostrar:

Dentro de las gestiones adelantadas por el ente de control, se rindió informe técnico por un funcionario de la Contraloría General de la República con radicado 20191E0062169¹²¹ del 18 de julio del 2019, en el que se indica lo siguiente, respecto de los insumos de espacio público entregados por el contratista en la primera semana de 2014, que fueron tasados y aprobados por la entidad afectada, por la Procuraduría y por el Tribunal, en cuantía de \$618'743.536:

“Una vez se surte el proceso, Movilidad Futura hace un nuevo inventario, contratando un perito evaluador, el cual determina, por medio de un conteo de materiales el siguiente valor:

item	nombre	unidad	cantidad	costo unitario	costo total
1	loseta Tactil	und	904	7.727	6.985.208
2	loseta gris de 40x40x20	und	318	6.308	1.993.328
3	tabletra de 40x20x6	und	3804	3.274	12.454.295
4	adoquin a25	unid	10508	686	7.277.068
5	Rampa de acceso vehivcular	und	29	51.000	1.479.000
6	Bordillo A-10	und	98	36.000	3.528.000
7	Bordillo de 80x35x20	und	20	27.000	540.000
8	Separador A 170	und	36	131.000	4.716.000
COSTO MATERIAL ENTREGADO					\$38.972.920

Se evidencia una diferencia de \$579.770.616 entre los dos valores, aumentando el valor de los costos por entrega de los ítems.”

En el citado documento, se concluyó:

“Una vez terminado el análisis, se determina que en efecto si existe una diferencia cuantitativa en el valor entregado por parte del Consorcio Vías Popayán en el proceso de

¹²¹ 59_20190730_ENTREGAINFORMETECNICOPAEZ_00504



conciliación, toda vez que en el informe se tomaron valores de costo por metro cuadrado y se aplicaron a unidades de material, aumentando el costo del valor entregado por Consorcio vías Popayán, como pago en el proceso sancionatorio.”

Adjunto al acta de visita, se hace entrega del informe presentado por el perito evaluador, en el que se detalla que:

“VALORACIÓN LOSETAS RELACIONADAS EN LA EJECUCION CONTRATO EXPLANACION Y ADECUACION TERRENO, TRASLADO, ACOMODO, CONTEO Y PROTECCION MATERIALES PARA ESPACIO PÚBLICO

Según consulta hecha por medio de correo Electrónico con la firma PRECONCAR, se determinan los precios unitarios para las losetas de la siguiente manera valorándolas como si fueran nuevas, pero se encuentran en regular estado debido a que han estado durante largo tiempo a la intemperie.

DETALLE	CANTIDAD	V/UNITARIO	TOTAL
Loseta Guía	918	5,600	5,140,800
Loseta 40*40	290	5,600	1,624,000
Sardinel A170	10	16,000	160,000
Tapa	3	5,600	16,800
Sardinel Rampa	1	15,800	15,800
Rampa A110	25	20,500	512,500
Sardinel A10	104	16,000	1,664,000
Sardinel A80	16	16,000	256,000
Adoquín A25	8946	1,000	8,946,000
Loseta 20*40	3649	5,000	18,245,000
VALOR TOTAL			36,580,900

Pese a la claridad de lo anterior y a que el error en la cuantificación de los materiales es reconocido por los presuntos responsables, como se analizará en el ítem de la gestión fiscal de esta providencias, se tiene que el elemento daño y su cuantificación, en el presente proceso se encuentran sustentados mayoritariamente, en el ya citado informe técnico rendido por un funcionario de la Contraloría General de la República con radicado 20191E0062169¹²² del 18 de julio del 2019, del cual se dio traslado a todos los presuntos responsables, como se detalló en el ítem Actuaciones Procesales de esta providencia.

En este documento, se indica que se efectuó la valoración real de los insumos de espacio público entregados por el contratista, de la siguiente manera:

“En la entrega realizada por el contratista CONSORCIO VIAS POPAYAN, a MOVILIDAD FUTURA se consideraron costos de metros cuadrados y se multiplicaron por el número de unidades encontradas y almacenadas, este error da como resultado la diferencia notoria en los costos.

¹²² 59_20190730_ENTREGAINFORMETECNICOPAEZ_00504



Para hallar esta diferencia se solicitó a la empresa Movilidad Futura los Análisis de Precios Unitarios empelados para la época de los hechos, en ellos se evidencian valores por unidad y precio unitario diferentes a los estipulados en el acta de entrega por parte del contratista.

...

Una vez se surte el proceso, Movilidad Futura hace un nuevo inventario, contratando un perito avaluador, el cual determina, por medio de un conteo de materiales el siguiente valor:...

...

Conclusiones:

Una vez terminado el análisis, se determina que en efecto si existe una diferencia cuantitativa en el valor entregado por parte del Consorcio Vías Popayán en el proceso de conciliación, toda vez que en el informe se tomaron valores de costo por metro cuadrado y se aplicaron a unidades de material, aumentando el costo del valor entregado por Consorcio vías Popayán, como pago en el proceso sancionatorio."

Ahora bien, se anexan como soportes, los siguientes documentos, entre otros:

1. Acta de reunión suscrita por el Ing. Diego Fernando Páez de la Contraloría General de la República, Francia Helena Bedoya en calidad de Jefe de Control interno; Julián Alberto Rojas Abogado contratista de Procesos de gestión Jurídica y Luis Alberto García en calidad de profesional de apoyo en procesos de infraestructura, los tres últimos de Movilidad Futura SAS; en donde se deja constancia que se entregan, entre otros, los siguientes documentos:
 - Precios de materiales de obra en el año en que fue entregado los insumos que dieron origen a la actuación fiscal.
 - Precios De obra actuales de los insumos, con análisis de precios unitarios de los ítems entregados.
2. Documento denominado: "INFORME DE EJECUCION CONTRATO DE OBRA No. 000234 DE 2017" de diciembre del 2017.
3. Documento denominado: "VALORACIÓN LOSETAS RELACIONADAS EN LA EJECUCION CONTRATO EXPLANACION Y ADECUACION TERRENO, TRASLADO, ACOMODO, CONTEO Y PROTECCION MATERIALES PARA ESPACIO PÚBLICO." Sin fecha.
4. Documento denominado: "CATALOGO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS" de la empresa PRECONCAR, sin fecha.
5. Documento denominado: "CONVENIO INTERADMINISTRATIVO UNIVERSIDAD DEL CAUCA Y MOVILIDAD FUTURA SAS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS" encabezado con una anotación a mano alzada en la que se indica que ha sido tomado del SECOP, con una fecha de referencia que data del 08 de noviembre de 2012.



6. Documento con título ilegible, en el que se detalla a mano alzada, precios del 2019.
7. Documento denominado: “ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONTRATISTA: JUAN CARLOS RICO INFANTE SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS DE POPAYÁN "MOVIUDAD FUTURA S.A.S", sin fecha.

De lo anterior se colige que, para la liquidación de los materiales, se tomaron como referencia precios de los años 2012, 2017 y 2019, no obstante, se hizo necesario advertir que el ingeniero Oscar Alberto Caicedo Fernández, suscribió el “BALANCE FINANCIERO CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N°. 01-012”, en especial la RELACION DE COSTOS DEL MATERIAL ENTREGADO POR EL CVP documento en el que se certifica que el valor de los insumos por espacio público entregados por el contratista el 10 de diciembre del 2014.

A la luz de lo anterior, se hizo necesario conocer los precios de los insumos al momento en que fueron entregados por el contratista, esto es, en el año 2014, para así contar con precios de referencia que coincidan con los que tenían los materiales al momento en que fueron efectivamente entregados a la entidad, por ello se ordenó oficiar a las siguientes entidades públicas y privadas para el efecto, pero no dieron respuesta; pese a ello, la entidad afectada, esto es MOVILIDAD FUTURA, la cual también fue requerida a los correos de contacto: gerencia@movilidadfutura.gov.co y infraestructura@movilidadfutura.gov.co, mediante radicado 2023IE0039291 del 16 de marzo del 2023¹²³; dio respuesta el 24 de marzo del 2023 mediante radicado 2023ER0046979¹²⁴, al que adjunta la cotización del año 2014 de la empresa PREMODELADOS y complementa la respuesta con dos APU's aprobados en el mismo año; así mismo, aclara que remite la valoración de los materiales efectuada dentro del contrato que se investiga, en la que se evidencia el error que en este proceso se investiga.

Es de advertir, que los datos arrojados con estas pruebas, ratifican el hecho generador de daño y la cuantificación del mismo, así:

	DETALLE	CANTI- DAD	VR. UNIDAD	TOTAL
1	LOSETA TACTIL-LOSETA GUIA	904	\$6.825	\$ 6.169.800
2	LOSETA GRIS 40x40x20	318	\$7.147	\$ 2.272.746
3	TABLETA 40x20x6	3804	\$3.332	\$ 12.674.928
4	ADOQUIN A25	10508	\$577	\$ 6.063.116
5	RAMPA DE ACESO VEHICULAR RAMPA A110	29	\$54.599	\$ 1.583.371
6	SARDINEL A10 o BORDILLO A10	98	\$50.635	\$ 4.962.230
7	BORDILLO DE 80x35x20	20	\$31.499	\$ 629.980

¹²³ 20230316 Solicitud Cotización MOVILIDAD FUTURA PRF 2019-00858

¹²⁴ 20230324 RESPUESTA MOVILIDAD FUTURA_2023ER0046979 PRF 858



	DETALLE	CANTI- DAD	VR. UNIDAD	TOTAL
9	SEPARADOR A170	36	\$125.998	\$ 4.535.928
VALOR DE LOS MATERIALES EN EL AÑO 2014				\$ 38.892.099

Vemos como esta nueva valoración ratifica la efectuada por Movilidad Futura y por el ingeniero designado como apoyo técnico quedando en evidencia que se reconoció en favor del contratista por estos ítems, la cuantía que en el presente proceso se tiene como el presunto daño generado al patrimonio público.

Esta situación afectó el patrimonio del Estado, por cuanto la falla en la liquidación que hoy sirve como título ejecutivo por el cual Movilidad Futura busca el resarcimiento de los recursos públicos de cara al contrato incumplido, excluyó injustificadamente y por negligencia de los funcionarios responsables del proceso post contractual de Movilidad Futura, el valor de QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS DIEZ Y SEIS PESOS MCTE (\$579.770.716), los cuales ya no podrán ser cobrados por la entidad afectada de ninguna manera al contratista, debido a que la vía judicial ya se agotó, por cuanto el acta de liquidación que se está haciendo efectiva es un documento que goza de vida jurídica, pese al error que contiene.

Administrativamente tampoco se puede hacer nada, pues el contrato incumplido está terminado y no existe acción de ninguna otra índole a la que pueda acudir la entidad afectada, pues conforme a lo analizado, todas las instancias se encuentran agotadas, siendo este ente de control fiscal el único medio por el cual se puede resarcir el detrimento ocasionado por el error en la liquidación, que le reconoció un mayor valor al contratista por los materiales devueltos, cuantificándolos de manera errada y en perjuicio de los recursos del Estado, hecho que se encuadra perfectamente en la descripción de daño que se hizo al inicio de la parte considerativa de esta providencia.

Que este hecho irregular se constituye de manera irrefutable en un detrimento al patrimonio público, pues se le reconoció a un tercero, esto es, CONSORCIO VIAS POPAYAN el valor de unos materiales sobrevalorados en un TRES MIL PORCIENTO (3000%), lo cual no se compadece con los principios de economía, transparencia y moralidad.

Por lo anotado, esta lesión del patrimonio público, representada en la disminución de recursos públicos del convenio y de MOVILIDAD FUTURA, y por ende el menoscabo a los intereses patrimoniales del Estado, fue producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente e inoportuna, que en términos generales, hizo nugatorio los cometidos de los fines esenciales del Estado, lo cual permite ajustar el hecho irregular a los postulados del artículo 6 de la Ley 610 de 2000.



3.1.2. INDEXACIÓN DEL DETRIMENTO PATRIMONIAL

Establecido el daño patrimonial al Estado, procede el Despacho a dar cumplimiento al artículo 53 de la Ley 610 de 2000, que a la letra señala:

“Los fallos con responsabilidad deberán determinar en forma precisa la cuantía del daño causado, actualizándolo a valor presente al momento de la decisión, según los índices de precios al consumidor certificados por el DANE para los periodos correspondientes”:

Debe tenerse en cuenta que la indemnización ha de ser íntegra, o lo que es lo mismo, el daño debe repararse plenamente, con el objeto de tratar de recomponer los recursos fiscales que han sido sustancia del detrimento, lo cual supone que los dineros que deban ser repuestos al erario deban ser indexados con el fin de que el resarcimiento sea integral.

Esto ya que al Estado no se le puede imponer como castigo la pérdida del valor constante del dinero por el paso del tiempo, siendo éste la víctima del daño causado a sus recursos, ni tampoco puede enriquecerse sin justa causa persiguiendo réditos distintos a los sufridos por el daño que se le ha producido, más si se tiene en cuenta que la naturaleza del proceso fiscal es resarcitoria y no sancionatoria¹²⁵, por lo cual, no se puede buscar por medio del proceso fiscal el cobro de sanciones como pretexto para la indemnización de los perjuicios causados. Debe entonces resarcirse dicho perjuicio con el valor del capital afectado más la indexación del mismo, con el fin de que pueda determinarse una reparación integral del daño a los recursos públicos.

Sobre el tema de la indemnización plena la doctrina ha señalado que:

“La enunciación de la presente regla es simple: la reparación del daño debe dejar indemne a la persona, esto es, como si el daño no hubiere ocurrido, o, al menos, en la situación más próxima a la que existía antes de su suceso. Dicho de otra manera, se puede afirmar que “se debe indemnizar el daño, sólo el daño y nada más que el daño”, o, en palabras de la Corte constitucional colombiana, que “el resarcimiento del perjuicio, debe guardar correspondencia directa con la magnitud del daño causado, mas no puede superar ese límite”. La explicación que se da a esta regla se apoya en un principio general del derecho: si el daño se indemniza por encima del realmente causado, se produce un enriquecimiento sin justa causa a favor de la “víctima”; si el daño se indemniza por debajo del realmente causado, se genera un empobrecimiento sin justa causa para la víctima. Es así el daño la medida del resarcimiento”¹²⁶

Así las cosas, es claro para este Despacho que las sumas para que se tengan como total e íntegramente restituidas deben contener la indexación de las mismas, que para el caso en concreto debe ser contabilizados desde la liquidación errada de convenio cuestionado,

¹²⁵ Sobre la naturaleza resarcitoria del proceso fiscal puede verse, entre otras, las sentencias de la Corte Constitucional SU-620 de 1996 y C-512 de 2013.

¹²⁶ HENAO, Juan Carlos. *el daño*. Bogotá: Universidad externado de Colombia, 2010, p. 45.



se suscribió ante la Procuraduría acta del 22 de diciembre del 2015, para lo cual se tomará la siguiente fórmula:

$$VP = VH \times \frac{IPCF}{IPCI}$$

En donde:

VP = Valor por actualizar, VH = Valor Histórico, IPCF= Índice de precios al consumidor cuantificado por el DANE al momento de proferir el fallo. IPCI= Índice de precios al consumidor cuantificado por el DANE al momento de ocurrencia de los hechos.

Teniendo en cuenta que los hechos irregulares se circunscriben al 22 de diciembre del 2015, que en la época de los hechos el IPC fue 88,05; que el IPCF a la fecha del presente fallo es 136,11¹²⁷ y que el detrimento patrimonial asciende a la suma de QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS DIEZ Y SEIS PESOS MCTE (\$579.770.716), la liquidación debe ser la siguiente:

$$\$579.770.716 \times 136,11 / 88,05 = \$896.224.783$$

Total, Índice de Precios al Consumidor (IPC)										
Índices - Serie de empalme - 2003 - 2023										
Base Diciembre de 2018 = 100,00										
Mes	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Enero	83,00	89,19	94,07	97,53	100,60	104,24	105,91	113,26	128,27	
Febrero	83,96	90,33	95,01	98,22	101,18	104,94	106,58	115,11	130,40	
Marzo	84,45	91,18	95,46	98,45	101,62	105,53	107,12	116,26	131,77	
Abril	84,90	91,63	95,91	98,91	102,12	105,70	107,76	117,71	132,80	
Mayo	85,12	92,10	96,12	99,16	102,44	105,36	108,84	118,70	133,38	
Junio	85,21	92,54	96,23	99,31	102,71	104,97	108,78	119,31	133,78	
Julio	85,37	93,02	96,18	99,18	102,94	104,97	109,14	120,27	134,45	
Agosto	85,78	92,73	96,32	99,30	103,03	104,96	109,62	121,50	135,39	
Septiembre	86,39	92,68	96,36	99,47	103,26	105,29	110,04	122,63	136,11	
Octubre	86,98	92,62	96,37	99,59	103,43	105,23	110,06	123,51		
Noviembre	87,51	92,73	96,55	99,70	103,54	105,08	110,60	124,46		
Diciembre	88,05	93,11	96,92	100,00	103,80	105,48	111,41	126,03		

El valor del detrimento patrimonial indexado para el PRF es de **OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS (\$896.224.783)**

¹²⁷ Ver el link "Índices - series de empalme - 2022" en:

<https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-al-consumidor-ipc>

Teniendo en cuenta que el daño como elemento primordial de la responsabilidad fiscal se encuentra debidamente probado, el despacho continuará con la valoración de la gestión fiscal que lo ocasionó y la valoración de la conducta de los presuntos responsables:

3.2. CONCEPTO DE GESTIÓN FISCAL

Para entrar a delimitar las responsabilidades de las personas que han sido vinculadas en calidad de presuntos responsables fiscales, es necesario iniciar el análisis de la materia desde nuestra Carta Política, en la que se establece en el artículo 6° de la Constitución Nacional lo siguiente:

“Los particulares solo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por las mismas causas y por omisión extralimitación en el ejercicio de sus funciones”.

En relación con las responsabilidades derivadas de la gestión fiscal, dispone el artículo 3° de la Ley 610 de 2000 que:

“...se entiende por gestión fiscal el conjunto de actividades económicas, jurídicas y tecnológicas, que realizan los servidores públicos y las personas de derecho privado que manejen o administren recursos o fondos públicos, tendientes a la adecuada y correcta adquisición, planeación, conservación, administración, custodia, explotación, enajenación, consumo, adjudicación, gasto, inversión y disposición de los bienes públicos, así como a la recaudación, manejo e inversión de sus rentas en orden a cumplir los fines esenciales del Estado, con sujeción a los principios de legalidad, eficiencia, economía, eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia, publicidad y valoración de los costos ambientales”.

En ese orden de ideas tenemos que el daño debe ser producido por una gestión fiscal *antieconómica, ineficiente e inoportuna*, es decir, para que haya gestión fiscal irregular debe haber una inadecuada distribución o uso de recursos públicos.

Lo anterior indica que la Gestión Fiscal, conforme a la transcripción hecha, determina quienes deben ser llamados a responder por el daño ocasionado al patrimonio del Estado; es menester destacar para estos efectos, que aquellos (servidores públicos y/o particulares que administran recursos públicos) con la capacidad jurídica y las facultades de desarrollar actividades tendientes a definir la suerte de los recursos y bienes del Estado (manejo, recaudo, inversión, administración, uso o disposición del patrimonio público) deben ser tenidos como presuntos responsables en un proceso de responsabilidad fiscal.

Siguiendo con el análisis de los elementos de la responsabilidad fiscal, debemos traer en este momento el artículo 48 de la ley 610 de 2000, el cual exige que el auto de imputación contenga *“... la acreditación de los elementos constitutivos de la responsabilidad fiscal...”*, y por



su parte, el artículo 5 ídem, dispone que los elementos de la responsabilidad son:

“Artículo 5°. Elementos de la responsabilidad fiscal. La responsabilidad fiscal estará integrada por los siguientes elementos: -Una conducta dolosa o gravemente culposa atribuible a una persona que realiza gestión fiscal. -Un daño patrimonial al Estado. -Un nexo causal entre los dos elementos anteriores.”

A esto hay que agregar que en la sentencia C-619 de 2002, la Corte Constitucional ordenó que para imputar responsabilidad fiscal había que encontrar culpa grave en los implicados.

Antes de continuar con el estudio de la culpa, es menester tener claro el concepto de la culpabilidad, pues es un elemento a través del cual se busca establecer hasta qué punto se le puede atribuir a un presunto responsable la responsabilidad respecto de la conducta reprochable fiscalmente, situación que depende de cada caso concreto, ya que la voluntad del ser humano, por diversos factores endógenos y exógenos puede verse condicionada, creando situaciones importantes que afectan la voluntad, según el contexto que lo rodea.

Esta culpabilidad puede ser encuadrada o calificada dependiendo de los elementos que la acompañan y solo en materia civil se hace una graduación de la culpa, así pues, para efectos de encasillar en debida forma estas conductas se torna imprescindible para la hermenéutica a desarrollar, traer las disposiciones que ofrece el Código Civil sobre la materia en el artículo 63, que señala:

“ARTICULO 63. <CULPA Y DOLO>. La ley distingue tres especies de culpa o descuido. Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa en materias civiles equivale al dolo.

Culpa leve, descuido leve, descuido ligero, es la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios. Culpa o descuido, sin otra calificación, significa culpa o descuido leve. Esta especie de culpa se opone a la diligencia o cuidado ordinario o mediano. El que debe administrar un negocio como un buen padre de familia es responsable de esta clase de culpa.

Culpa o descuido levísimo es la falta de aquella esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes. Esta especie de culpa se opone a la suma diligencia o cuidado.

El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro.”

En concordancia, el artículo 5° de la Ley 678 de 2001 define que la conducta es dolosa cuando el agente del Estado quiere la realización de un hecho ajeno a las finalidades del servicio del Estado; enseguida, el artículo 6° menciona que la conducta es gravemente culposa cuando el daño es consecuencia de una infracción directa a la Constitución o a



la ley o de una inexcusable omisión o extralimitación en el ejercicio de las funciones.

Por su parte, para la Corte Suprema de Justicia, las tres clases de culpa (en que puede incurrirse bien por acción o por omisión), hacen referencia al tipo de conducta de tres clases abstractas de personas:

“Las negligentes o de poca prudencia; el cuidado y diligencia de los hombres ordinarios; y, por último, la esmerada diligencia de un hombre juicioso. Los que en la vida ordinaria no ajustan sus actos ni aun al tipo de conducta de la primera categoría de personas, cometen culpa grave; los que no los ejercen con el cuidado y diligencia de los hombres ordinarios, incurrir en culpa leve; y, por último, los que no los llevan a cabo con la esmerada diligencia de un hombre juicioso, cometen culpa levísima. Para definir si una persona determinada ha incurrido en culpa grave, leve o levísima, es necesario comparar su conducta con la de las tres categorías abstractas de personas. ...” (C. S. J., sentencia del 28 de marzo de 1957).

Ese modelo de persona negligente, en nuestro caso, no es una persona común y corriente en el tráfico ordinario de los negocios propios del derecho privado, sino que es aquel que ha desplegado gestión fiscal (facultad de disponibilidad jurídica y material de los bienes y recursos del Estado), que tiene bajo su responsabilidad la administración y manejo de bienes públicos, vale decir, nuestro modelo abstracto será el de unos funcionarios y unos contratistas con la facultad de disponer de los bienes del Estado, a quienes tal calidad los hacen parte del sistema la que a su vez pertenece el régimen que los cobija.

Lo anterior nos permite recurrir a la premisa consistente en que los servidores públicos y los particulares que administran recursos del Estado, no sólo son responsables por infringir la constitución y las leyes, como cualquier ciudadano, sino que lo son también por la omisión o extralimitación de sus funciones (art. 6 C. P.), precepto aplicable a personas naturales vinculadas como presuntos responsables ya descritas.

La omisión del deber que con el presente se les endilga al presunto responsable se encuentra revestido de elementos subjetivos que deben ser tenidos como elementos intrínsecos de la omisión, situación necesaria para determinar el tipo de culpabilidad, ya que se debe atender a la propia filosofía de la falta, pues ella la determina por llevar inmersas tales propiedades, así lo ha presentado la H. Corte Constitucional:

“En otros términos, el dolo o la culpa son elementos constitutivos de la acción, son sus elementos subjetivos estructurales. De allí que sea la propia ontología de la falta la que determina si la acción puede ser cometida a título de dolo o de culpa o, lo que es lo mismo, que la estructura de la conducta sancionada defina las modalidades de la acción que son admisibles”

Prescindir de la moral propia de los encartados, se hace inviable en la calificación que debe hacer este despacho, pues la retribución ético-individual construida con base en la posibilidad de haber actuado conforme a la Ley y no de cualquier forma, desvanece la orientación de la responsabilidad objetiva hacia la responsabilidad personal del presunto



responsable por sus acciones u omisiones.

Así entonces, contrario a la búsqueda de los fines del Estado por el cual se concibieron los recursos y bienes objeto de investigación, el hecho generador de daño que con el presente se investiga, impidió en cierto modo, que no se alcanzara a plenitud su cumplimiento, pues se perdieron unos recursos públicos sin que mediara justificación alguna y afectando los fines estatales y una comunidad específica.

Si bien existe una situación clara que generó un daño al patrimonio del Estado, es también cierto que la misma se encuentra rodeada de situaciones subjetivas derivadas de la naturaleza jurídica de los cargos que ostentaban los presuntos responsables, cuyas calidades serán ampliamente analizadas a continuación.

3.2.1. GESTION FISCAL EN EL CASO CONCRETO

Se vincularon al presente proceso las siguientes personas, respecto de quienes se procederá a analizar la gestión fiscal o las acciones que con ocasión de esta permitieron, facilitaron y/o coadyuvaban con la causación del daño, así mismo, se procederá a analizar el nexo causal entre la gestión que se determine como reprochable y daño que se busca resarcir; por último, para cada caso concreto se analizará el grado de culpabilidad de la gestión fiscal:

- OSCAR ALBERTO CAICEDO FERNÁNDEZ c.c. 76.322.044

Se tiene que el ingeniero Oscar Alberto Caicedo Fernández, estuvo vinculado a Movilidad Futura mediante contrato de prestación de servicios No. 09 del 2014, con funciones, entre otras de emitir conceptos en su calidad de ingeniero civil¹²⁸:

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 09 DE 2014

CONTRATANTE: SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS DE POPAYÁN "MOVILIDAD FUTURA S.A.S" - NIT 900323358-2
CONTRATISTA : OSCAR ALBERTO CAICEDO FERNÁNDEZ
CEDULA Y/O NIT : 76.322.044 - 2
OBJETO : Prestación de Servicios Profesionales de Ingeniero Civil para apoyo a MOVILIDAD FUTURA S.A.S. en calidad de Ente Gestor del Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasajeros de Popayán, en el componente de Gestión Técnica de Infraestructura del Proyecto y en especial en lo relacionado con ...
CUANTÍA: CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS (\$49'929.600,00).m/cte.
PLAZO: Desde la suscripción del acta de inicio, previa legalización del contrato, hasta el 31 de diciembre de 2014.
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: N° 17 de 2 de enero de 2014
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: Directa (prestación de servicios profesionales)

Con base en lo analizado en el ítem destinado al daño, el ingeniero Oscar Alberto Caicedo

¹²⁸ 92_2021 01 19 contrato de prestacion de servicios de 2014 movilidad futura sas aporta tener como prueba ampliacion version libre prf 2019 00858.



Fernández, en tal calidad suscribió el 10-12-02014 el “BALANCE FINANCIERO CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 01-012”, documento en el que se certifica que el valor de los insumos por espacio público entregados por el contratista en diciembre del 2014 ascendía a \$618.743.536, documento que se tiene como sustento de la liquidación del contrato y de los acuerdos que culminaron con el proceso conciliatorio¹²⁹.

Que esta información fue vertida en todos y cada uno de los documentos en los que se consignó la situación del contrato y fue este saldo a favor del Consorcio, el que se aprobó en el acta de comité de conciliación de Movilidad Futura, en el proceso de conciliación extrajudicial adelantado ante la Procuraduría, acuerdo que finalmente fue avalado por el Tribunal Contencioso Administrativo del Cauca, motivo por el cual se lo vinculó al proceso y se le imputó responsabilidad fiscal.

Una vez notificado del auto de apertura y de su vinculación, rindió versión libre el 02 de febrero del 2022¹³⁰ en donde hace alusión a los pormenores del contrato cuya liquidación se cuestiona, al arreglo conciliatorio que se suscribió respecto de la misma y su aprobación por la autoridad judicial.

Agrega que en la época del contrato fue contratista de Movilidad Futura, con funciones de apoyo en la elaboración de presupuestos para licitaciones de interventoría de las obras asignadas y puntualiza que no tuvo relación directa con el contrato que se cuestiona.

Pese a lo dicho y con ocasión del incumplimiento del contratista, fue asignado por el Gerente para realizar el conteo de los materiales susceptibles de ser recibidos por el contratante, en desarrollo de lo cual presentó el informe, no obstante aclara que esto, no estaba dentro de sus funciones, documento que fue revisado por el ingeniero Felipe Potes en calidad de coordinador del área de infraestructura de MOVILIDAD FUTURA SAS y remitido al Ing. VICTOR ROSERO BUSTAMANTE, quien ostentaba el cargo de Gerente de dicha entidad.

Añade que años después se percató del error, en audiencia que se llevó a cabo en la Fiscalía, pues calculó como unidades debiendo usar como medida metros cuadrados o metros lineales en algunos casos, error humano en el que incurrió motivado por el afán de entregar el documento, que destaca, estaba por fuera de sus obligaciones.

Indica que el consorcio demandado no ha cumplido con la obligación de pagar, por lo que considera, no existe detrimento patrimonial.

Esboza que, si bien cometió un error, el mismo se generó por la ligereza con las que abordó el asunto por los directamente encargados, pues el asunto debió ser objeto de revisión por parte de la interventoría.

¹²⁹ Página 62 del PDF: “3_20170915_solicitud procuraduria_ANT 054-2017”

¹³⁰ 20220202 ACLARACIONINFORMEVICTORROSERO 00858.



Una vez notificado del auto de imputación y por medio de apoderado de confianza, no allega descargos, pese a ello y a fin de ser garantista se retomarán los argumentos vertidos en el libelo de descargos presentados frente a la primera imputación anulada por el superior¹³¹, en dicho documento se hace alusión al error aritmético evidenciado desde el momento de la indagación preliminar, el que a su vez es reconocido por los vinculados y aceptado por el apoderado del presunto responsable.

Indica la defensa, que no es entendible que en una entidad cuya función es la construcción y contratación de obras civiles, haya pasado desapercibido el citado error y agrega que el mismo obedeció a una conducta que solo puede ser sancionada con culpa leve, más aún, cuando el trabajo del presunto responsable, estaba sujeto a supervisión de profesionales de rango muy superior, quienes en criterio de la defensa, son los directamente responsables de esta actuación, como bien lo determinan sus funciones y compromisos contractuales.

Enfatiza el apoderado que el incumplimiento del contratista no debe ser desatendido por parte del representante legal de la contratante, quien tiene el deber de supervisar todos y cada uno de los actos de sus subalternos, en consideración a esto, esboza que no puede desconocerse la responsabilidad directa que tiene el representante legal sobre el Contrato juzgado al igual que el líder del área de infraestructura.

Sobre lo anteriormente presentado, comparte el despacho parcialmente la posición de la defensa del investigado, pues dentro del presente proceso se ha sido enfático en los cuestionamientos a las omisiones en las que incurrió la cabeza visible de Movilidad Futura y con ocasión de ello ha mantenido la vinculación hasta el momento del representante legal de la entidad afectada para la época de los hechos, no obstante, como se motivó en el auto de imputación y como se abordará en esta decisión de fondo, cada presunto responsable en la medida de sus funciones, deberes y obligaciones relacionadas, conexas o afines al contrato investigado, permitió, facilitó o coadyuvó a la consumación del daño y fueron precisamente esos aportes en la cadena de fallas, que en conjunto constituyen el hecho generador de daño, por ello, los errores de unos no tienen la capacidad jurídica de justificar los de otros, tal como se analizará para cada presunto responsable.

Retomando el libelo de descargos, asegura el mandatario del ingeniero, que no puede endilgársele una responsabilidad exclusiva a su representado en calidad de contratista, quien ostentaba un bajo rango en la entidad y quien prestaba apoyo al líder de infraestructura, hecho que le permite indicar que a su conducta solo le puede ser atribuible una culpa leve, pues en su criterio:

“...es evidente que su cumplimiento a un mandato superior y a la prontitud y ligereza con

¹³¹ 20220823 DESCARGOS FRENTE A LA IMPUTACION CAICEDO PRF 858 y OSCAR ALBERTO CAICEDO PRONUNCIAMIENTOS A CONTRALORIA RESPONSABILIDAD FISCAL



la que se desarrolló este insólito suceso de incumplimiento del contratista de obra, sin el lleno de los protocolos y actos de tipo administrativos necesarios para un hecho de semejante naturaleza, pudieron ocurrir múltiples factores que debieron ser previsivos por el personal directivo de la entidad afectada, en especial por el LIDER del área de infraestructura y por supuesto del representante legal que a la postre ostenta suficiente experiencia e idoneidad en el tema.

Por lo anterior, no se entiende las razones por las cuales se ausenta de responsabilidad a quienes realmente suscriben obligaciones contractuales de cuidado, supervisión y liderazgo, si tales responsabilidades y actos le son imputados a quienes son ajenos y desconocen a fondo el desarrollo de los procesos contractuales y su cumplimiento, como sucede con el Ing Caicedo.”

A renglón seguido, menciona el apoderado que se desarrollaron reuniones del comité conciliador de la entidad afectada, en donde no participó el Ing OSCAR CAICEDO, por tanto, las decisiones tomadas en la entidad eran de resorte exclusivo de los directivos y no de su representado y en el párrafo subsiguiente insiste en que, en las decisiones finales no hubo intervención del presunto responsable.

Insiste que el documento suscrito por su mandante no es el hecho generador de la omisión por parte de la entidad afectada, pues estaba sujeto a múltiples revisiones y aprobaciones por parte del personal directivo de la entidad afectada, destacando que eran estos últimos, quienes tenían la idoneidad y la obligación legal de revisarlo y declarar la veracidad de su contenido.

Adiciona el apoderado que, de cara a la omisión de supervisión e indiferencia respecto a las responsabilidades propias de los superiores, no se puede calificar como gravemente culposa la conducta de su representado, más aún si solo pretendió cumplir una labor para satisfacer un mandato, sin conocer a fondo la magnitud de los hechos que estaban sucediendo.

Considera que la gerencia de la entidad, no prestó una debida atención a los actos que involucraron el contrato, por ello, no se puede culpar a los subalternos de medidas preventivas y correctivas que los directivos y líderes, debían asumir.

Posteriormente, el abogado hace alusión al artículo 53 de la Ley 610 de 2000 y a la Sentencia C- 619 de 2002, los cuales transcribe, para luego asegurar que es arbitrario pretender endilgar una conducta grave a un subalterno que cumple un mandato expresado con ligereza, de manera verbal e informalmente, cuando la verdadera falta está en la omisión del deber por parte de sus superiores.

Hace alusión el apoderado al impacto del objeto contractual y de la obra, el cual insiste, fue asumido con indiferencia por parte de los directivos de la entidad afectada y enfatiza en que, si a su representado le es reprochada alguna conducta, la misma solo puede ser calificada con culpa leve.



Le llama la atención a la defensa, que un subalterno como el caso de su defendido el ing Oscar Caicedo sea llamado dentro de un proceso de responsabilidad, pues no tenía la jerarquía necesaria para incidir en un proceso de caducidad por incumplimiento del contrato de obra y que además no participó en la toma de decisiones de la entidad afectada, concluyendo su exposición, en los siguientes términos:

“Así las cosas, entendiéndose que la responsabilidad fiscal que hoy nos convoca, se produce por el daño al patrimonio público que evidentemente fue ocasionado por el incumplimiento del objeto contractual por parte del Contratista de obra, y por su puesto la misma Ley 610 de 2005 en su Art 53 refiere a la relación de causalidad entre el comportamiento del agente y el daño ocasionado al erario y si hacemos un análisis o juicio de valores, no sería justo equiparar la conducta del Ingeniero Caicedo en igualdad de proporciones que el daño causado. Y es así como se fortalece nuestra postura de valorar su conducta como culpa leve. Por lo anteriormente expuesto, de manera respetuosa solicito se falle con un sensible análisis de valores y se determine que la conducta de mi defendido no es más que una culpa leve, lo que por su puesto le permitirá estar ausente de responsabilidad fiscal en el proceso en cuestión”

Ante la defensa que hace de sus propios intereses el presunto y que coincide con la presentada en los descargos por su apoderado, este ente de control debe destacar, que no comparte la posición consistente en asegurar que el ingeniero era ajeno al proceso de contratación cuya liquidación se cuestiona, como prueba de ello, se tienen los oficios que el representante legal elevó al contratista durante el proceso de ejecución, en los que se reporta este ingeniero como apoyo a la supervisión, documentos que son suscritos con copia al citado ingeniero, entre otros.

El despacho quiere como primera medida destacar, que no le asiste la razón al investigado cuando asegura que era ajeno al proceso de contratación cuya liquidación se cuestiona, pues se tienen los siguientes oficios que el representante legal efectuó a contratista durante el proceso de ejecución, en los que se reporta este ingeniero como apoyo a la supervisión, documentos que son suscritos con copia al citado ingeniero, entre otros:

- Oficio 2014-0102 del 06 de enero del 2014¹³², en el que el Gerente de la entidad convoca a la aseguradora para tomar decisiones relacionadas con el contrato.
- Oficio 2014-0143 del 07 de febrero del 2014¹³³, en el que el Gerente de Movilidad Futura, le solicita al Contratista la falta de personal en el área social del consorcio, lo que impide terminar el cierre de actas.
- Oficio 2014-0143 del 20 de febrero del 2014¹³⁴, en el que el Gerente de Movilidad Futura, le solicita al Contratista situaciones relacionadas con la solicitud de cesión del contrato.

¹³² Página 32 del PDF; 107_CARPETA 22 CONTRATO MALLA VIAL

¹³³ Página 34 del PDF; 107_CARPETA 22 CONTRATO MALLA VIAL

¹³⁴ Página 93 del PDF; 107_CARPETA 22 CONTRATO MALLA VIAL



- Oficio 2014-0148 del 21 de febrero del 2014¹³⁵ en el que el Gerente de Movilidad Futura, efectúa una comunicación a una veeduría, respecto del contrato que se investiga.
- Oficio 2014-0344 del 11 de abril del 2014¹³⁶ en el que el Gerente de Movilidad Futura, le recuerda al Contratista que 15 de abril vence la suspensión del contrato.
- Oficio 2014-0356 del 21 de abril del 2014¹³⁷, en el que el Gerente de Movilidad Futura, solicita concepto al consorcio Metro Malla Vial Popayán, concepto sobre la cesión del contrato.
- Oficio 2014-0358 del 22 de abril del 2014¹³⁸ en el que el Gerente de Movilidad Futura, le comunica al Contratista los resultados del reconocimiento de unos valores.

En este mismo sentido encontramos los siguientes oficios y comunicaciones surtidas en el devenir de la ejecución del contrato, todos, dirigidos con copia a este presunto responsable¹³⁹:

- Oficio 2014-0406 del 07 de mayo del 2014.
- Oficio 2014-0419 del 09 de mayo del 2014.
- Oficio 2014-0413 del 09 de mayo del 2014.
- Oficio 2014-0422 del 13 de mayo del 2014.
- Oficio 2014-0424 del 13 de mayo del 2014.
- Oficio 2014-0425 del 13 de mayo del 2014.
- Oficio 2014-0438 del 19 de mayo del 2014.
- Oficio 2014-0457 del 22 de mayo del 2014.
- Oficio 2014-0521 del 05 de junio del 2014.
- Oficio 2014-0582 del 12 de junio del 2014¹⁴⁰.
- Oficio 2014-0571 del 27 de junio del 2014.

Adicional a lo anterior, este presunto responsable, elaboró el Informe de pasivos laborales y pago de proveedores adeudados por el Consorcio Vías Popayán¹⁴¹, en calidad de apoyo a la supervisión de este contrato.

De otro lado, la interventoría en su último informe presentado en el mes de mayo del 2014, manifiesta lo siguiente¹⁴²:

¹³⁵ Página 94 del PDF; 107_CARPETA 22 CONTRATO MALLA VIAL

¹³⁶ Página 638 del PDF: 112_CONTRATO MAYA VIAL

¹³⁷ Página 662 del PDF: 112_CONTRATO MAYA VIAL

¹³⁸ Página 664 del PDF: 112_CONTRATO MAYA VIAL

¹³⁹ Oficios del PDF: 44_carpeta movilidad folios 201-250

¹⁴⁰ Página 942 del PDF: 112_CONTRATO MAYA VIAL

¹⁴¹ Ver página 37 del PDF: 44_carpeta movilidad folios 201-250

¹⁴² Ver página 766 del PDF: "CONTRATO MAYA VIAL."



*“Este documento contenía diferencias sustanciales comparadas con el elaborado por la Interventoría en el mes de marzo a solicitud de Movilidad Futura, se citó a una reunión conciliatoria de cantidades entre el Ente Gestor, la interventoría y los representantes del Contratista. Esta reunión se llevó a cabo el día 11 de abril con la asistencia de las siguientes personas: **Inq. Oscar Caicedo F. Asesor de la Supervisión de Movilidad Futura** ...”* (Destacado fura de texto)

Posteriormente se indica lo siguiente:

*“Los anteriores fueron **aprobados por el Asesor: Inq. Caicedo**, por el mismo medio y radicado CR-13-0568 pues se encuentra en el rango promedio del mercado. ...”* (Destacado fura de texto)

De lo anterior se colige que este presunto responsable en calidad de ingeniero, pese a que era contratista, sí estaba involucrado en el proceso contractual, por ello no es cierto que hubiese sido ajeno al negocio jurídico que se investiga, si a lo anterior sumamos que fue contratado por Movilidad Futura con ocasión de su perfil profesional y para desarrollar funciones propias de su gremio, es evidente que estaba en plena capacidad de dilucidar la importancia de lo que estaba valorando, máxime si tenía acceso a los informes de interventoría, pero más aún si la poca cantidad de materiales a valorar no hacía dispendioso el trabajo.

Ahora bien, reconoce el despacho tal como lo presente su apoderado, que un error puede cometerlo cualquiera y que en el caso de las entidad públicas existen filtros, supervisiones, escalas jerárquicas y obligaciones de mandos superiores que deben ejercer la vigilancia y control de sus delegatarios, pero para este caso, debe destacarse que no estamos al frente de una actividad irrelevante, pues como el mismo apoderado lo esboza en la defensa, el contrato en cuestión no solo era de gran impacto en la ciudad por el objeto pactado, sino que la cuantía de recursos públicos invertidos, hacía que el mismo tuviera especial consideración y por ello le era demandable a todos los actores que estaban relacionados con él, una mayor meticulosidad.

De otro lado, no se comparte en lo absoluto la posición del apoderado consistente en afirmar que no existe una relación de causalidad entre el comportamiento de su representado, frente al daño ocasionado al erario, pues el error, incidente o ligereza del ingeniero Oscar Caicedo afectó de forma directa los recursos públicos y si bien sus obligaciones no eran equiparables la conducta del representante legal de la entidad, su gestión errónea incidió de manera directa y radical en el hecho que ocasionó el daño que debe ser resarcido.

En otras palabras, no puede desconocerse desde ningún punto de vista, que el error en que incurrió el investigado al generar el informe mal tasado de los materiales entregados por el contratista, fue vital para la consumación del daño; por lo anterior, el que el ingeniero Oscar Alberto Caicedo Fernández, en calidad de contratista y al suscribir el 10-12-2014 el “BALANCE FINANCIERO CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 01-012”,



hubiese certificado que el valor de los insumos por espacio público que no superaban el valor de \$30.000.000, se hayan estimado en \$618.743.536, conllevó a que se sustentara la liquidación del contrato y con ello, los acuerdos que culminaron con el proceso conciliatorio¹⁴³.

Conforme a las pruebas que reposan en el expediente, se tiene que con las omisiones del representante legal de la entidad y el silencio cómplice del contratista, el error del presunto responsable fue avalado en todos y cada uno de los documentos en los que se consignó la situación del contrato y fue este saldo injustificado a favor del Consorcio, el que se aprobó en el acta de comité de conciliación de Movilidad Futura, en el proceso de conciliación extrajudicial adelantado ante la Procuraduría, acuerdo que finalmente fue avalado por el Tribunal Contencioso Administrativo del Cauca.

De esta manera, la vinculación e imputación que se ha hecho por estos hechos al ingeniero Oscar Caicedo, tuvo su sustento en la Ley 610 de 2000, vigente para el año 2014-2015, momentos en los que se aprobó este proceso conciliatorio del contrato 001-2012, prescribía en su artículo 1:

“...el conjunto de actuaciones administrativas adelantadas por las contralorías, con el fin de determinar y establecer la responsabilidad de los servidores públicos y los particulares, cuando en el ejercicio de la gestión fiscal o con ocasión de ésta, causen por acción u omisión, y en forma dolosa o culposa, un daño al patrimonio del Estado” (Subrayas fuera de texto)

Conforme a lo anterior y contrario a lo que esboza el apoderado, considera esta gerencia colegiada que sí estamos al frene de un sujeto cualificado, pues el señor Oscar Alberto Caicedo Fernández tenía perfil ingeniero civil y estuvo vinculado al contrato, por tanto estaba en plena capacidad de discernir y comprender con absoluta claridad y experticia la forma en que debía generar el “BALANCE FINANCIERO CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 01-012” y si bien no fue gestor fiscal directo de los recursos públicos, con lo expuesto, tenía la plena capacidad de contribuir con la generación del presunto detrimento, como efectivamente ocurrió, pues de cara a los conocimientos propios de su profesión, el despacho no halla justificación del error contenido en el balance financiero del contrato y que dio origen a una serie de situaciones irregulares que terminaron en la generación del hecho que se predica como irregular, cual fue haberse reconocido al contratista la suma de \$618'743.536 por insumos de espacio público entregados por el Consorcio, en la primera semana de 2014 y en virtud de las obligaciones contractuales, pese a que las mismas tenían un valor muchísimo menor.

Así las cosas, tal como se presentó en el auto de imputación, la gestión que demanda la Ley 610 de 2000, para determinar la responsabilidad de un servidor público o de un particular, de cara a los recursos públicos, no solo se circunscribe a la administración, manejo, custodia y demás acciones de que trata el artículo 3, pues con ocasión de la

¹⁴³ Página 62 del PDF: “3_20170915_solicitud procuraduria_ANT 054-2017.”



gestión fiscal, pueden darse las circunstancias necesarias para generar un año al erario, así lo ha indicado la H. Corte Constitucional en Sentencia C-840 del 2001:

“El sentido unitario de la expresión o con ocasión de ésta sólo se justifica en la medida en que los actos que la materialicen comporten una relación de conexidad próxima y necesaria para con el desarrollo de la gestión fiscal. Por lo tanto, en cada caso se impone examinar si la respectiva conducta guarda alguna relación para con la noción específica de gestión fiscal, bajo la comprensión de que ésta tiene una entidad material y jurídica propia que se desenvuelve mediante planes de acción, programas, actos de recaudo, administración, inversión, disposición y gasto, entre otros, con miras a cumplir las funciones constitucionales y legales que en sus respectivos ámbitos convocan la atención de los servidores públicos y los particulares responsables del manejo de fondos o bienes del Estado. La locución demandada ostenta un rango derivado y dependiente respecto de la gestión fiscal propiamente dicha, siendo a la vez manifiesto su carácter restringido en tanto se trata de un elemento adscrito dentro del marco de la tipicidad administrativa.”

Ahora bien, de cara a la calificación de la conducta abordada por el apoderado del presunto responsable, el Código Civil colombiano enunciado al inicio del ítem sobre la gestión fiscal de esta providencia, consagra expresamente el estándar del *“buen padre de familia”* en su artículo 63 como derrotero para valorar la culpa leve, así mismo, la norma es clara cuando indica:

“La culpa leve en la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios. Esta especie de culpa se opone a la diligencia o cuidado ordinario o mediano”

Conforme a las normas que gobiernan la materia, es relevante conocer estos referentes y punto de partida, por cuanto son los que emplea el legislador y los que retoman las altas Cortes al momento de construir el arquetipo de sujeto diligente.

Por la subjetividad de la valoración que debe realizarse de la culpabilidad como componente de una conducta, es posible encontrar muchas sentencias que pese a su antigüedad siguen siendo referente a la fecha¹⁴⁴, pues la Corte Suprema de Justicia ha dejado poca valoración explícita de los elementos que la componen y de los criterios necesarios para valorarla.

Estos criterios valorativos pueden encontrarse en sentencia del 5 de agosto de 1937, con M.P. Juan Francisco Mujica, en donde la mencionada Corporación la valoración de la conducta, señala los criterios de los que puede valerse el juez para calificarla como culposa. Al respecto señala:

¹⁴⁴ Ver: Sentencia del 5 de agosto de 1937, M.P. Juan Francisco Mujica ; Sentencia del 20 de febrero de 1948, M.P. Pedro Castillo Pineda; Sentencia del 30 de julio de 1953, M.P. Pablo Emilio Manotas; Sentencia del dos de junio de 1958, M.P. Arturo Valencia Zea; Sentencia del 29 de abril de 1987, M.P. Alejandro Bonivento Fernández



*“De acuerdo con la naturaleza del abuso cometido en el ejercicio del derecho, la culpa puede ser examinada a la luz de los criterios intencional, **técnico**, económico o social”* (Destacado fuera de texto)

Posteriormente sentencia del 30 de septiembre de 2016¹⁴⁵, la Corte señaló:

“Si el actor previó o no que su conducta podía derivar en un evento dañoso es irrelevante para efectos de alcanzar el nivel de culpa sin representación. Lo importante es que haya actuado (o dejado de actuar) por fuera del rango de sus posibilidades de acción respecto de lo que está jurídicamente permitido” Sólo así se logra entender el factor de reproche subjetivo de la responsabilidad civil como una postura del entendimiento y no como voluntariedad de la conducta moral.

La culpa civil sólo logra configurarse cuando se verifican las posibilidades reales que el agente tuvo al ejecutar su conducta. Luego, no hay culpa extracontractual cuando el daño ha acontecido en circunstancias tales que el agente no tuvo la oportunidad de prever (se reitera que no interesa si en efecto las previó o no), es decir cuando no tuvo la opción de evitar el daño.

*«La **previsibilidad** no hace referencia a un fenómeno psicológico, sino a aquello que debió ser previsto, atendidas las circunstancias. (...) No hay culpa cuando el hecho no pudo razonablemente ser previsto. (...) El deber concreto de cuidado sólo puede ser determinado sobre la base del contexto de la conducta (lugar, medios, riesgos, costos, naturaleza de la actividad emprendida, derechos e intereses en juego)». (BARROS BOURIE, Tratado de responsabilidad extracontractual. pp. 86, 90)*

***El agente es destinatario de un reproche de culpabilidad en cuanto tiene la aptitud de actuar mediante pautas de acción, es decir de modo racional.** La racionalidad de su conducta se determina en la distinción de las reglas que establecen el estándar de imputación jurídica (que describen el patrón de hombre razonable o prudente), por un lado, y la propia conducta del agente, por otro.”*

De lo anterior se colige que se actúa de manera culposa si era previsible que la conducta causaría un daño y no se prevé, o habiéndolo previsto, se no desarrolla la diligencia exigible para evitarlo; descendiendo al caso concreto y atendiendo a la especialidad del asunto que se está valorando, recordemos que el sujeto activo de la conducta, el señor Oscar Alberto Fernández ostentaba la calidad de ingeniero y en virtud de tal calidad se le encomendó la valoración y cuantificación de los materiales.

Dicha confianza depositada por la entidad en el presunto responsable, obligaba al profesional a atender el mandato, bajo los preceptos de la “*lex artis*” de su profesión, entendida en términos generales como el “*Conjunto de reglas técnicas a que ha de*

¹⁴⁵ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - SALA DE CASACIÓN CIVIL – M.P. ARIEL SALAZAR RAMÍREZ SC13925-2016 - Radicación nº 05001-31-03-003-2005-00174-01.



*ajustarse la actuación de un profesional en ejercicio de su arte u oficio*¹⁴⁶; por tanto el modelo de diligencia demandable al presunto responsable estaba construido por la reglamentación, parámetros y experticia, que como ingeniero le eran exigibles para realizar un informe que solo una persona con ese perfil podía ejecutar satisfactoriamente y en ese contexto, es perfectamente claro que debía más que nadie, saber si los materiales que iba a valorar, debían cuantificarse en metros cúbicos o lineales, pues esa era una actividad propia y común en el quehacer de los ingenieros.

Así entonces, a este ente de control como operador jurídico fiscal además de analizar de manera genérica la conducta de un presunto responsable, le asiste el deber de acudir en la misma medida a los deberes implícitos de las conductas especializadas en las que ejecutan sus actos reprochables, a fin de lograr establecer si su gestión fiscal o las acciones u omisiones, con ocasión de esta, resultan prudentes o razonables.

En este punto y para el caso concreto de la gestión de un profesional con perfil de ingeniero, es muy conveniente e ilustrativo, traer la siguiente definición que presenta la doctrina, pues representa de manera muy clara lo que el despacho pretende describir:

*“...se debe comparar la conducta del agente con la que habría observado un hombre prudente, **de idéntica profesión u oficio**, colocado en el mismo lugar, tiempo y demás circunstancias externas de aquel...”*¹⁴⁷ (Destacado del despacho)

Volviendo al caso concreto, es evidente que el informe rendido erróneamente por el ingeniero OSCAR ALBERTO CAICEDO FERNÁNDEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 76.322.044, se concreta en una actividad que guarda una relación necesaria, directa y estrecha con la decisión de Movilidad Futura como entidad afectada, de la Procuraduría y del Tribunal Administrativo, de reconocer al contratista unos recursos sin justificación, como se indicó en el auto de imputación y se corrobora en esta decisión de fondo.

Pero además de lo analizado, a la luz de lo analizado, el error contenido en el citado documento, como génesis de la cadena de errores que causaron el presunto detrimento patrimonial; fue cometido por la negligencia, falta de cuidado y desidia del investigado, ya que contaba con el perfil profesional idóneo y la aptitud para desarrollar el informe conforme a las pautas de acción y racionalidad propias de su ramo (*lex artis*), es decir, su profesión le permitía tener la capacidad de prever las consecuencias de un error, como el que cometió; todo lo anterior, hace que la conducta del ingeniero de cara a ese error solo pueda ser calificada como GRAVEMENTE CULPOSA.

Se puede concluir entonces que, en la administración, inversión y gasto de los recursos públicos del contrato, se generó un detrimento al erario, por el error del presunto

¹⁴⁶ Definición tomada de: <https://dpej.rae.es/lema/lex-artis>

¹⁴⁷ Larroucau Torres, Jorge Andrés (2007). Culpa y Dolo en la Responsabilidad Extracontractual. Santiago: Lexis Nexis. Página 118



responsable, quedando así en evidencia el nexo causal en su gestión irregular y el daño que se busca resarcir bajo esta cuerda procesal.

Conforme a lo anterior, al ingeniero OSCAR ALBERTO CAICEDO FERNÁNDEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 76.322.044 se le fallará con responsabilidad fiscal en los términos del artículo 53 de la Ley 610 de 2000.

- VÍCTOR ALFONSO ROSERO BUSTAMANTE c.c. No. 10.525.694

Víctor Alfonso Rosero¹⁴⁸ identificado con C.C. No. 10.525.694, estuvo vinculado a MOVILIDA FUTURA, ostentado en cargo que se pasa a detallar, en las épocas que se describen por la entidad:

Que revisada la historia laboral del servidor público **VÍCTOR ALFONSO ROSERO BUSTAMANTE**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 10.525.694, se encontró que prestó sus servicios en La Sociedad Movilidad Futura S.A.S, por un periodo de 4 años y dos meses, desde el primero (01) de febrero de 2011 hasta el trece (13) de abril de 2015, desempeñando el cargo de Gerente, con una asignación básica mensual de seis millones ciento cincuenta mil pesos (\$6.150.000.00), moneda corriente.

El Servidor público realiza las funciones de acuerdo al Manual de funciones que adopto la entidad mediante resolución No 119 de 2014.

La presente se expide en (ciudad), a los ocho (08) días del mes de marzo del dos mil diecinueve (2019), a solicitud del interesado.

Que en calidad de Gerente de Movilidad Futura según los estatutos adoptados mediante Res. 03 del 01-07-2011, esta persona ostentó las siguientes funciones¹⁴⁹, entre otras:

CLÁUSULA 23°.- FUNCIONES DEL GERENTE: Serán funciones específicas del cargo, las siguientes:

2. Cuidar de la recaudación e inversión de los fondos sociales.

3. Organizar adecuadamente los sistemas requeridos para la contabilización, pagos y demás operaciones de la sociedad.

Conforme a lo analizado inicialmente, el despacho no encuentra reparo alguno en la gestión inicial de este funcionario, de cara al contrato, pues estuvo presto a requerir al contratista las veces que fue necesario, de conformidad con reportes vertidos en los informes de interventoría.

También resulta evidente que no fue ajeno al incumplimiento del consorcio, pues el 07 de octubre del 2013, mediante Resolución No. 78¹⁵⁰, en calidad de Gerente de Movilidad

¹⁴⁸ Página 3 PDF: "113_201903_RTAMOVILIDADFUTIRA_00504"

¹⁴⁹ Página 8 del PDF: "17_ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD RES 03"

¹⁵⁰ Página 77 del PDF: "7_12 A 209 ANT-054-2017"



futura impone sanción al contratista por incumplimiento de sus obligaciones, a la luz de lo plasmado en los informes de interventoría y como consecuencia se impone una multa.

Como ya se analizó, este servidor público adelantó gestiones tendientes a la liquidación del contrato y representó a la entidad a los inicios del proceso de conciliación prejudicial incoado por el Consorcio el 18 de diciembre de 2014, que entre las pretensiones se encuentra la de dar por terminado el proceso sancionatorio y la liquidación bilateral del mismo.

Se dejó descrito que en este trámite de la conciliación interna se surtieron dos actas en las que se analizó y aprobó todo lo relacionado con la terminación del contrato, incluido el asunto que se investiga bajo esta cuerda procesal; de igual forma, es claro que las decisiones que se surtieron en ese trámite interno como en el adelantado ante la Procuraduría, se tiene como sustento la aprobación de la liquidación efectuada por el ingeniero por él designado para el efecto, la cual fue acogida en el acta 02 del Comité de Conciliación de Movilidad Futura, la cual estuvo conformada, entre otros, por este presunto responsable.

Quiere decir, que el señor Víctor Alfonso Rosero Bustamante, en calidad de representante legal de la entidad y como miembro del Comité de Conciliación aprobó el acuerdo de pago, en el que se incluyeron los recursos de los que hoy se predica pérdida, pro esto se lo vinculó al proceso y se le imputó responsabilidad fiscal.

Una vez notificado del auto de apertura y de su vinculación, rindió versión libre el 16 de marzo del 2022¹⁵¹ y al no haber logrado desvirtuar las motivaciones que justificaron su vinculación, se le imputó responsabilidad fiscal, respecto de la cual presenta descargos el 20 de julio de 2023, con recibido No. 2023ER0133122¹⁵² por medio de su apoderado en el que deja sentada la oportunidad de los mismos.

Teniendo en cuenta que la defensa vertida en la versión libre y en los argumentos de defensa del presunto responsable, giran en torno a los mismos puntos, se presentaran simultáneamente los argumentos vertidos en la versión libre y en los argumentos de defensa a fin de evitar repeticiones tediosas.

En la versión libre, el presunto responsable luego de hacer una narración sobre su situación personal, deja sentada la fecha de su posesión y situaciones generales del inicio de Movilidad Futura y la gestión general de la entidad para ese entonces y hasta cuando hizo dejación del cargo.

¹⁵¹ SUSTENTACION VERSION LIBRE Y ESPONTANEA VICTOR ALFONSO ROSERO BUSTAMANTE PRF-2019-00858 MOVILIDAD FUTURA-080322.docx, 20220316 VERSION LIBRE ROSERO 2022ER0039456 PRF 858 y 20220316 VERSION LIBRE ROSERO 2022ER0039456 PRF 858

¹⁵² 20230728 descargos apoderado victor 2023ER0135343_ 2023ER0133122 PRF 858 y DESCARGOS CONTRA AUTO IMPUTACION RESPONSABILIDAD FISCAL VICTOR ALFONSO ROSERO BUSTAMANTE PRF-2019-00858 MOVILIDAD FUTURA - 270723 -



Descendiendo al caso concreto, manifiesta que no incurrió, en lo absoluto, en el reproche fiscal que se le atribuye y pasa a hacer alusión a la información general del contrato desde la licitación pública, detallando fechas, plazos, obligaciones de las partes; puntualizando que la supervisión fue designada en el ingeniero Oscar Caicedo Fernández al igual que en Pedro Felipe Potes González, encargado del Apoyo a la Gestión de Infraestructura; asegura, que ellos eran responsables de preparar los informes respectivos sobre las obras y contratos que cursaban.

A su vez, en los descargos frente a la imputación el apoderado del investigado, en un segundo punto esboza brevemente la queja que sirve de fundamento a la imputación de responsabilidad fiscal y pasa luego a la réplica al cargo de imputación formulado, en el que ofrece un resumen de lo dispuesto en el auto de imputación en contra de su defendido, para acotar que la conducta del ingeniero VÍCTOR ALFONSO ROSERO BUSTAMANTE, en su condición de Gerente de Movilidad Futura S. A. S., para la época de los hechos materia de investigación, estuvo revestida de legalidad, por tanto, considera que no hubo voluntad dolosa o gravemente culposa de su parte en la cuantificación de los materiales requeridos para las obras de espacio público que generaron el presunto detrimento patrimonial, pues insiste que no participó en la proyección ni elaboración del Informe Financiero del Contrato de Obra Pública, el cual indica, fue labor del Ingeniero Oscar Caicedo, quien lo elaboró en virtud de su relación contractual con la entidad.

Volviendo a la versión libre, exterioriza que el 01 de diciembre del 2013 el porcentaje de ejecución del contrato ascendía al 23.35%, debiendo estar al 100%, incumplimiento que fue informado por la interventoría, quien a su vez efectuó requerimientos en repetidas ocasiones al contratista, para que se adoptaran planes de contingencia que permitieran ajustarse a los rendimientos, pese a ello se persiste en el incumplimiento por lo que la interventoría sugiere declarar la caducidad del contrato, descontando el hecho que se impuso la correspondiente multa mediante proceso sancionatorio.

Hace alusión al proceso que se siguió en la entidad, previo el trámite ante la Procuraduría para el cual se ejecutaron los lineamientos de Ley, como era convocar al Comité Técnico de Conciliación; esboza que los ingenieros de la entidad, fueron los responsables en virtud de su vínculo contractual, de determinar con claridad el nivel de ejecución de la obra, las inversiones hechas por el contratista, los recursos entregados por Movilidad Futura, la valoración de los perjuicios causados, el monto de las posibles indemnizaciones a que era acreedora Movilidad Futura y eran quienes debían analizar y fijar con claridad, los montos reales de las ofertas hechas por el consorcio, en desarrollo de la etapa de conciliación prejudicial, dado que no se podía asistir a una audiencia ante la Procuraduría, sin tener pleno conocimiento y estudio de las propuestas conciliatorias de los convocantes y el alcance de estas frente a los intereses de Movilidad Futura y la defensa de los dineros públicos involucrados.



Sobre este asunto, en los descargos, insiste que el presunto responsable no intervino, de ningún modo, en la Etapa de Conciliación Extrajudicial, por cuanto su retiro de la Gerencia de la Sociedad Movilidad Futura S. A. S. se produjo el 14 de abril de 2015.

Considera el apoderado del presunto responsable, que no existe prueba legalmente producida en grado de certeza, elementos materiales probatorios o evidencias físicas que permitan determinar una conducta dolosa o gravemente culposa en cabeza de su prohijado, pues insiste en que el Balance Financiero en cuanto a la cuantificación de los materiales para espacio público de la malla vial de Popayán fue realizada por el ingeniero Oscar Alberto Caicedo, quien no tenía subordinación o dependencia por cuanto estaba vinculado por contrato de prestación de servicios, de otro lado, alega que no hubo acto de delegación, agregando a esto que aquel tenía como supervisor al ingeniero Pedro Felipe Potes González, en quienes descansaba la responsabilidad de medición de material y de la cuantificación de perjuicios causados por el Consorcio Vías Popayán.

En el escrito de descargos, el apoderado es enfático en asegurar que, si bien es cierto el ingeniero Víctor Alfonso Rosero Bustamante suscribió con el Consorcio Vías Popayán, la aclaración del balance financiero que cuantificó los materiales entregados y la asistencia a los Comités de Conciliación de la Sociedad Movilidad Futura S. A. S., también lo es que dicha cuantificación sólo era competencia del área técnica.

Es importante destacar en este punto, que el 20 de enero de 2015, se informa al presunto responsable la cuantificación final de los perjuicios económicos causados por el Consorcio Vías Popayán en virtud del Contrato No. 001- 2014; pero no se incluye en este documento una valoración detallada de los materiales, que con el presente se investiga, solo se hace alusión a la cuantía, por tanto el error cometido por el Ingeniero Oscar Caicedo, fue conocido por el señor VICTOR ROSERO, a quien aquel le entregó formalmente la liquidación detallando uno a uno los materiales que había entregado el contratista y la cuantificación que se le asignó a los mismos, que fue la que causó el daño a resarcir.

Por tanto, no comparte el despacho la conclusión a la que llega el apoderado, consistente en que el actuar del ingeniero VÍCTOR ALFONSO ROSERO BUSTAMANTE, en su condición de Gerente de Movilidad Futura S. A. S., para la época de los hechos materia de investigación, estuvo ajustada a derecho, pues no es del todo cierto que para la Supervisión del Contrato de Obra Pública se convino exclusivamente con el ingeniero OSCAR ALBERTO CAICEDO FERNÁNDEZ, ya que en el contrato de Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión Técnica de Infraestructura de Movilidad Futura, se consagraron obligaciones generales; pero además, porque el contrato de obra tenía una interventoría que fue excluida de este procedimiento de cuantificación, omisión que solo puede ser atribuible al representante legal de la entidad, esto es, el Ingeniero Víctor Bustamante.



Adicional a lo antes expuesto, el error en la valoración en que incurrió el citado ingeniero Oscar Caicedo no podía ser ajena al presunto responsable como cabeza de Movilidad Futura; por tanto, si bien en la trazabilidad de las acciones hubo intervenciones de otras dependencias, debe destacarse que, el informe inicial de valoración errada de los materiales ítem a ítem, se quedó tal y como fue elaborado en el primer documento suscrito por el mencionado ingeniero Oscar, pues en los documentos posteriores no se reevalúa, analiza, aborda o replantea la minucia de la situación, solo se retoma el valor ya calculado con sus yerros.

Es por lo anterior, que las acciones que menciona la defensa, de cara a la aprobación de la liquidación en instancias administrativas y judiciales, arrastraron el error que hoy se tiene como detrimento patrimonial y no comparte el despacho, la justificación presentada por el apoderado, consistente en que el ingeniero VÍCTOR ALFONSO ROSERO BUSTAMANTE, obró con la plena convicción de que los datos consignados en dicho balance y en los documentos aportados con los cálculos, valores y especificaciones técnicas por los ingenieros, eran veraces y no había asomo de duda alguna sobre ellos, en principio porque el informe de los materiales que contienen la génesis del hecho generador, solo se le entregó a él, pues como ya se anotó, en los demás documentos suministrados por los ingenieros de la entidad, no se abordó el tema de manera específica.

De esta manera, al señor VICTOR ROSERO como responsable directo de la entidad y por ende de la contratación, le asistía el deber constitucional, legal y reglamentario de ser en extremo acucioso, por la elevada cuantía de recursos públicos invertidos en el proceso, porque estaba de por medio la consecución de unos fines estatales, porque prevalecía el interés general, pues toda la ciudadanía de Popayán se vería beneficiada con las obras o en su defecto perjudica con el incumplimiento, pero además porque METRO MALLA VIAL POPAYAN - contratista interventor, informó oportuna y reiteradamente a Movilidad Futura, no solo la evolución de las obras, las irregularidades encontradas, las situaciones que debían ser corregidas, sino que dejó sentado continuamente el constante incumplimiento del contratista.

Así las cosas, el investigado no puede escudarse en la negligencia, omisión o yerros de sus subalternos, pues él además de ser el primer responsable de los resultados de la contratación y de la ejecución de las obras, asumió el cargo con todas las responsabilidades que llevaban inmersas la misión y visión de la entidad, que no eran otras diferentes a lograr el mejoramiento de las vías de la ciudad, tal y como se contrató con el consocio Vías Popayán, es decir, este contrato no era una actividad accesoria a sus funciones y mucho menos, era una gestión secundaria, sino que era el centro y norte mismo de su encargo y del negocio misional que movía la entidad que representaba.

Prosiguiendo con los descargos, indica el apoderado que el ingeniero Caicedo en su versión libre aseguró que el ingeniero Víctor le solicitó informalmente que realizara el conteo de los materiales entregados por el contratista y virtud de ello presentó el informe



que contiene el error, el cual fue revisado por el Ing. Potes y aprobado por él como representante de la entidad, adicionalmente acota que el ingeniero que cometió el error se dio cuenta del mismo posteriormente y en una investigación adelantada en la Fiscalía; lo anterior, para insistir que no existe prueba de la delegación de Víctor Rosero para que Oscar Caicedo efectuara la valoración de los materiales y que el ingeniero Potes debía revisar lo que hacía el ing. Caicedo.

Más adelante, trae a colación la versión libre de EDUARDO GIRONZA LOZANO, para insistir reiteradamente que el ingeniero Oscar Alberto Caicedo Fernández, recibió los materiales por parte del Contratista para la cuantificación de los mismos, por lo que en su criterio, no es cierto, entonces, que el ingeniero Víctor Alfonso Rosero Bustamante le hubiera solicitado desplazarse al lugar en el que estaban ya que el conteo físico debió hacerlo el almacén de la entidad y luego de hacer una descripción de los materiales, acota que no hay que ser un experto en las áreas de las ingenierías o carrera afines, para hacer una simple valoración de materiales, máxime cuando los entregados por el Consorcio Vías Popayán eran muy pocos, sólo siete (7) ítem.

De entrada el despacho no puede tener estos argumentos como justificantes de las omisiones del representante legal de Movilidad Futura, pues no tiene presentación que haya avalado y/o aceptado un documento suscrito por uno de sus contratistas, que asegura no haber delegado para ejecutar la función de estimar el valor de los materiales, y peor aún, no tiene ninguna lógica que este documento elaborado por un contratista que asegura no delegó para el efecto, haya sido tomado a la ligera por él ingeniero Víctor para incluirlo en una conciliación ante la Procuraduría.

En tal sentido, el ingeniero Víctor en calidad de Gerente de Movilidad Futura fue negligente al no haber delegado en debida forma en el ingeniero Oscar para que en calidad de contratista del área técnica involucrado en la supervisión del contrato incumplido valorara los materiales entregados por el Consorcio, para ser incluidos en el proceso de la liquidación adelantado ante la Procuraduría; pero fue también negligente, si es cierto que no delegó formalmente en el Ingeniero Oscar la valoración de los materiales y más aún, fue mayormente negligente si pese a esto último, tomó tal información salida de todo conducto regular y de la gestión que él como cabeza visible de la entidad debió asumir; es evidente que en los dos escenarios se presenta negligencia, ausencia de una adecuada dirección del proceso y absoluta desidia al respecto, más si tenemos en cuenta que no fue capaz de verificar la información que tenía en sus manos, como mínimamente debió hacerlo en calidad de ingeniero.

Así entonces, lejos de justificar el apoderado a su representado, ofrece al despacho argumentos para dejar en evidencia las fallas injustificables en la que incurrió este presunto responsable.

Siguiendo con la defensa del presunto responsable, en la versión libre manifestó que Movilidad Futura nunca entregó material para la ejecución de las obras contratadas, sino



que el suministro de estos, correspondía al Consorcio Contratista, lo cual es cierto, al igual que el ingeniero Oscar Caicedo Fernández era el apoyo Técnico de este contrato y fue este ingeniero, entre otros, quienes mediante oficio señalan las cifras correspondientes a los valores de los insumos que entregó el Consorcio Vías Popayán, por valor de \$618.743.536, valoración que sirvió para la elaboración del balance financiero del Contrato de Obra Pública 01 de 2012; falla que efectivamente es en torno a la que gira la investigación y que como se ha ido esbozando, no era ajena al investigado.

Agrega que suscribió la conciliación confiado y amparado por el principio de la Buena Fe, de la Confianza Legítima y de Seguridad Jurídica de que estos datos consignados en el balance y en los documentos aportados con los cálculos, valores y especificaciones por los ingenieros, eran veraces y no había duda alguna sobre ellos.

Añade el vinculado, que el principio de buena fe y de confianza legítima debe ser aplicado a los funcionarios públicos, para este caso, en la gestión contractual; manifiesta que en este tipo de proceso intervienen dependencias y personas las cuales tienen su rol determinado en el marco de la distribución del trabajo tendiente a lograr los objetivos, lo que en su criterio debe ser analizado por el operador jurídico, pues no toda la cadena contractual estaba bajo su responsabilidad, sino que otras personas y dependencias intervinieron; por tanto, concluye que las funciones en cabeza suya en el particular se cumplieron a cabalidad y se ajustaron a la ley.

En los argumentos a la imputación, acota el apoderado que en atención a los principios de Legalidad, de Presunción de Inocencia, de in dubio pro reo, de celeridad, de función de la sanción fiscal, de economía, y eficacia de la actuación fiscal previstos en la Ley 610 del 2000, y dado que no se ha logrado establecer si realmente esta situación de presuntas irregularidades que causaron un presunto detrimento patrimonial, considera que se debe acudir al principio de favorabilidad, que significa que toda duda razonable se resolverá a favor del investigado.

Sobre estos tópicos, este ente de control, acorde a lo esbozado hasta el momento, no puede considerar como causal de justificación el principio de la Buena Fe, de la Confianza Legítima y de Seguridad Jurídica, pues el investigado conforme a sus funciones y la investidura que ostentaba era el primer llamado a verificar los datos consignados en el balance y en los documentos aportados con los cálculos, valores y especificaciones por los ingenieros; era él como cabeza visible de la entidad y quien asumió la responsabilidad de dirigirla, quien debía velar por que los datos fueran veraces y ejecutar todas las acciones propias de su cargo tendientes a la revisión, verificación y filtro para que los documentos e información llevadas a las instancias administrativas y judiciales estuvieran incólumes, pues era el patrimonio público el que estaba en juego.

Así las cosas, los multicitados principios de buena fe y de confianza legítima, que efectivamente deben ser aplicado a los funcionarios públicos y que el presunto responsable reclama en la gestión de sus subalternos, hoy le son reclamados a él por



este ente de control, de cara a su gestión frente a los recursos públicos; por ello, independiente de que en este tipo de proceso intervengan dependencias y personas las cuales tienen su rol determinado en el marco de la distribución del trabajo tendiente a lograr los objetivos, como lo manifiesta el vinculado, deja en claro que no todos los pormenores de la cadena contractual estaban bajo su responsabilidad, pero si la representación de la entidad, pero sobre todo el deber de ejecutar acciones tendientes a la protección del patrimonio público.

Volviendo a la versión libre, se esgrime que la ligereza de los ingenieros en la valoración de los costos lo hicieron cometer un error invencible, no solo a él, sino a los gerentes que lo sucedieron y al comité técnico de conciliación, a la junta directiva, a la Procuraduría y a la Rama Judicial, lo cual está lejos de ser un justificante, pues el Ingeniero Víctor no era cualquier persona del corriente a quien se hubiese podido engañar o confundir con números y mediciones, él era un profesional con capacidad de dirigir una entidad, con el perfil apropiado para evidenciar el error y con el rol institucional dispuesto para evitarlo o conjurarlo; así entonces, no podemos decir que por más que hubiera sido cuidadoso no habría podido preverlo.

En este orden de ideas, tal argumento relacionado con el error invencible, considera la Gerencia Colegiada, que solo es de recibo respecto de un particular cualquiera menos de él como representante legal de Movilidad Futura, pues él como primera autoridad y cabeza visible debió ejecutar el deber propio de verificar que todo estuviera en orden, máxime si como en el caso concreto, además del informe presentado por el ingeniero, tenía el último informe de interventoría como fuente comparación y constatación de la información, la cual no era mucha, pues el error se generó en solo 8 ítems por verificar, pero que si resulta relevante con ocasión de la cuantía que estaba en juego; por tanto, no se comparte la conclusión a la que arriba, consistente en que las funciones en cabeza suya en el particular se cumplieron a cabalidad y se ajustaron a la ley.

A su vez, en los descargos frente a la imputación, el apoderado no se explica que la cuantificación de los materiales haya pasado por tantos filtros sin que se percataran del error y anota lo siguiente:

“anotar, que si en todas las Conciliaciones Extrajudiciales que adelanta la Procuraduría en Asuntos Administrativos cuando una de las partes convoca a una Entidad Pública del Orden Nacional o Territorial, se cita a la Contraloría General de la Nación para que actúe en defensa del interés público, máxime para el caso sub lite dada la envergadura de los recursos que estaban en juego, no obstante, en la gran mayoría de los casos no comparecen, como me imagino sucedió en este asunto; pero además, fuera de que las Contralorías están legitimadas en la causa para adelantar los procesos de responsabilidad fiscal o sancionatorios, ¿dónde queda el control y vigilancia que deberían haber ejercido sobre la gestión contractual de la Sociedad Movilidad Futura S. A. S.?, como en el asunto sometido a su consideración, donde simplemente se actuó cuando se pusieron en su conocimiento presuntas irregularidades al momento de la conciliación celebrada con ocasión del Contrato de Obra”



Y este despacho tampoco se lo explica, pues en el marco de la gestión pública administrativa, no tiene justificación la forma como se le pasó el error, siendo el presunto responsable el mayor filtro de Movilidad Futura, pues un representante legal de una entidad no puede ser un convidado de piedra cuando de recursos públicos se trata.

Ahora bien, es cierto la Contraloría General de la República, puede intervenir en las audiencias de conciliación ante la Procuraduría, no obstante debe ser convocada para el efecto, pese a ello y como consta en el expediente de conciliación la entidad pública afectada debe solicitar tal llamamiento, en este caso, el inicio del proceso de Conciliación se gestó en la administración del señor Víctor Rosero, quien omitió que se hiciera la citación que el apoderado hoy erradamente le reprocha al ente de control, que solo se enteró de esta situación irregular, cuando se dio traslado del hallazgo, siendo imposible haber actuado antes precisamente por la omisión de su prohijado de acudir a todos los medios posibles para salvaguardar los recursos públicos.

Retornando a la versión libre, destaca que con ocasión de su retiro de la entidad, no participó en el proceso adelantado ante la Procuraduría, ante el Tribunal y no suscribió el acta de liquidación y a renglón seguido procede a transcribir las funciones de su cargo y las del Secretario General, para asegurar de nuevo que cumplió con todas las funciones asignadas como fue adelantar el proceso contractual con las formalidades de ley, contrato interventoría para el contrato 001 del 2012; destaca que fue diligente, acucioso y responsable y que una vez la interventoría reportó el incumplimiento en los cronogramas de ejecución del contrato, se estudió la posibilidad de declarar la caducidad del negocio jurídico o la declaratoria del incumplimiento, es así como se adelantó el proceso sancionatorio respectivo, lo cual no se reprocha en esta cuerda procesal, por cuanto no se está analizando o investigando el incumplimiento del contrato como tal.

Pese a lo anterior y siguiendo con el hilo de las funciones de este presunto responsable, es importante destacar que también es claro que, como primera autoridad de la entidad, tenía a su disposición un equipo de trabajo, entre ellos, los ingenieros Oscar Caicedo y Pedro Potes, pese a todo lo anterior, es importante destacar que el presunto responsable, conforme a las funciones que ostentó y que él mismo detalla en su escrito de versión libre, contenidas en la Resolución No.03 del 01-07-2011¹⁵³, debía, entre otras cosas:

“CLAUSULA 23º.- FUNCIONES DEL GERENTE: *Serán funciones específicas del cargo, las siguientes:*

...

2.- *Cuidar de la recaudación e inversión de los fondos sociales.*

3.- *Organizar adecuadamente los sistemas requeridos para la contabilización, pagos y demás operaciones de la sociedad”.*

¹⁵³ Página 8 del PDF: “17_ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD RES O3”

Así entonces, en ese proceso de cuidar los recursos de la entidad y de organizar los pagos y operaciones de la sociedad, no es justificable que teniendo el contrato una interventoría, haya delegado en uno de sus subalternos la verificación de situaciones propias de la vigilancia del contrato dado a aquella, pues recordemos que en las funciones de la interventoría plasmada en el Manual de Contratación e Interventoría¹⁵⁴ de la entidad, se dispuso que:

“Artículo 37. EJECUCION Y RECIBO A SATISFACCION DE LOS BIENES O SERVICIOS CONTRATADOS: El interventor deberá realizar el seguimiento técnico, administrativo, financiero al contrato y la verificación del pago de los aportes en seguridad social y aportes parafiscales para el respectivo pago”.

Pero en especial y aplicable al caso concreto, se tiene la siguiente:

“Artículo 42. FUNCIONES DE ORDEN TECNICO. Son funciones de orden técnico:

5.- Coordinar el reintegro de la sociedad MOVILIDAD FUTURA S.A.S de los equipos y elementos suministrados o comprados con cargo al contrato, y verificar su estado y cantidad”.

De esta manera, para el caso del contrato 001-2012 se suscribió el contrato de interventoría externa integral¹⁵⁵ con el CONSORCIO METRO MALLA VIAL POPAYAN, la cual incluía los aspectos técnicos, administrativos, financieros, contables, jurídicos y ambientales, advirtiéndose que esta interventoría el 26 de marzo del 2014 mediante escrito dirigido a este presunto responsable acepta la prórroga del contrato con el siguiente objeto concreto¹⁵⁶:

“De acuerdo con la solicitud realizada por Movilidad Futura S.A.S, vía telefónica, hechos decidido aceptar la prórroga al contrato de interventoría señalado en la referencia, con el fin de poder mantener la continuidad del contrato, de acuerdo con lo establecido en el artículo 85 de la Ley 1474 del 2011, cuyo objeto radica en realizar las actividades tendientes a la liquidación del contrato de obra y de interventoría, con el mínimo personal que se requiera para ello.” (Subrayas fuera de texto)

Por ello, no ha resultado entendible el por qué el ingeniero Oscar Alberto Caicedo Fernández fue designado por el presunto responsable para verificar los materiales entregados por el contratista y más aún, no hay explicación del por qué se le delegó informalmente, como él mismo lo reconoce, la responsabilidad de realizar la relación de costos del material entregado por el consocio contratista¹⁵⁷, si el interventor en su informe final los relacionó y valoró en la tabla No. 18 denominada “Cantidades Totales ejecutadas

¹⁵⁴ Manual de contratación e interventoria (1)

¹⁵⁵ Ver PDF y Anexos: “201903_RTAMOVILIDADFUTIRA_00504”

¹⁵⁶ Ver página 469 del PDF: “CONTRATO MAYA VIAL”

¹⁵⁷ Página 62 del PDF: “3_20170915_solicitud procuraduria_ANT 054-2017”



– Tramo 1.1¹⁵⁸; así entonces, si en este informe de interventoría se relacionaron los elementos, no tiene justificación que finalmente se incluyeran en la liquidación definitiva información diferente, máxime si al citado interventor, conforme al oficio arriba transcrito, se le prorrogó el plazo del contrato con la exclusiva justificación de realizar las gestiones tendientes a la liquidación de contrato, por tanto, no existe justificación alguna en cabeza de la gerencia que dirigía este presunto responsable, en aceptar el informe errado.

Siguiendo con la versión libre, deja sentado que para la época de los hechos materia de investigación no se encontraba desempeñando las funciones como Gerente de la Sociedad Movilidad Futura S. A. S., es decir, cuando se autorizó por la Junta Directiva y por el Comité Técnico de Conciliación la propuesta de conciliación y ésta fue llevada ante la Procuraduría, motivo por el cual, solicita sea desvinculado de este Proceso de Responsabilidad Fiscal.

De cara a la defensa del investigado, el despacho ha considerado que le asiste la razón en algunos de los argumentos expuestos, que han sido debidamente reconocido por los presuntos responsables, además de probado y soportado con pruebas debidamente allegadas al expediente, como son, los motivos que llevaron a que la Sociedad Movilidad Futura a declarar el incumplimiento del Contrato de Obra Pública No. 01 de 2012; así mismo, con los múltiples informes de interventoría y técnicos, elaborados por la entidad afectada y por este ente de control, se puede asegurar que se encuentra claramente establecido el nivel de ejecución de la obra, las inversiones hechas por el contratista, los recursos entregados por Movilidad Futura, la valoración de los perjuicios causados, el monto de las posibles indemnizaciones a que era acreedora Movilidad Futura como producto de la solicitud de conciliación que formuló la firma contratista; pero además también está demostrado todo lo relacionado con el trámite de la Conciliación Extrajudicial convocada por la firma contratista, Consorcio Vías Popayán y dentro de ello su actuación en los Comités de Conciliación de la Sociedad Movilidad Futura S.A.S.

En los descargos, suma a la defensa que el único beneficiario del error fue el Consorcio Vías Popayán, quienes aprovecharon el error para lucrarse económicamente en desmedro de la Sociedad Movilidad Futura.

Insiste en que el Consorcio Vías Popayán se aprovechó del error, pues ellos, antes que nadie, eran los que sabían el costo de los materiales, prueba de ello es que el 18 de diciembre de 2014, el CONSORCIO VIAS POPAYAN, por intermedio de apoderado judicial, doctor, GERMÁN ANDRÉS RODRÍGUEZ ORTIZ, solicita conciliación extrajudicial y en el punto sétimo del libelo petitorio presentaron la cuantificación errada de los materiales.

Lo anterior es cierto en el sentido que el despacho reconoce la responsabilidad del consorcio contratista, tanto que le derivará responsabilidad fiscal, como más adelante se

¹⁵⁸ Ver página 778 del PDF: "CONTRATO MAYA VIAL"



detallará.

Tanto en la versión libre como en los argumentos de defensa, cuestiona que Movilidad Futura no haya denunciado penalmente el hecho y describe el ilícito que su parecer, revistió el actuar del consorcio contratista, lo cual apoya en sentencia de la Corte Suprema de Justicia que pasa a explicar detalladamente, descendiendo los ingredientes del tipo al presunto punible del caso concreto.

Considera el abogado que este ente de control fiscal ha sido permisivo, silente y contemplativo con el Consorcio Vías Popayán, cuando éstos fueron los únicos responsables del daño al erario, máxime cuanto el actuar de los Representantes del Consorcio mencionado se constituyen, al parecer, en conductas punibles, verbi gratia, Estafa Agravada en Concurso Homogéneo y Heterogéneo con Abuso.

Contiene el apoderado, con que no se haya conminado a la entidad afectada, para que adelantara proceso penal por el presunto delito de Estafa Agravada en concurso homogéneo y heterogéneo de Abuso de Confianza calificado; sobre este punto, la segunda instancia en auto URF-1270¹⁵⁹ del 07 de octubre del 2022, proferido dentro de este proceso, consideró:

“Al respecto debe precisar este despacho, que lo relacionado con los hechos punibles que pudieren haberse presentado y a quién correspondía poner en conocimiento de la autoridad competente, no es objeto de debate probatorio, razón por la cual esta delegada intersectorial no se pronunciará; y deberá ser la gerencia colegiada, quien si lo considera realicé la valoración respectiva y decida sobre la compulsa o no a quien corresponda.”

Conforme a esto y a la luz de todo el análisis presentado por el apoderado, tal como se dejó planteado en el auto de imputación, se ordenará poner en conocimiento la situación ante la Fiscalía.

En otro tópico abordado por la defensa, específicamente de cara a la culpa *in eligendo* e *in vigilando* en la que se sustentó el auto de imputación, manifiesta en los descargos que no la comparte porque en su criterio no había sujeción o dependencia en la relación contractual con los ingenieros de la entidad vinculados por prestación de servicios, en donde no mediaron roles de dirección, vigilancia, subordinación o dependencia y riñe la defensa, con el hecho de que se haya sustentado el despacho en las citadas culpas que en su criterio, no es aplicable a estos procesos cuando se trata de funciones administrativas o contractuales, sino cuando está de por medio la tipificación de un delito en contra de la administración pública.

Sobre este tópico, vuelve párrafos más adelante, indicando que el contratista ingeniero OSCAR ALBERTO CAICEDO FERNÁNDEZ no era subalterno del ingeniero VÍCTOR

¹⁵⁹ 20221007 AUTO URF2-1270 RESULEVE APELACION PRF 858



ALFONSO ROSERO BUSTAMANTE y para que opere la citada culpa, debían mediar los roles de dirección, vigilancia, subordinación o dependencia, precisando lo siguiente:

“Así las cosas, el ingeniero tenía que cumplir con unas obligaciones que estaban consagradas en el contrato que suscribió con movilidad futura y que se relacionan directamente con el apoyo a la gestión técnica de infraestructura de la Sociedad Movilidad Futura S. A. S. y entre ellas estaba todo lo relacionado con el Contrato de Obra Pública No. 01 de 2012 suscrito con el Consorcio Vías Popayán, por ejemplo, lo relativo a realizar la cuantificación de los insumos requeridos para las obras de espacios, esta es una función connatural a él, no requería de designación o delegación alguna para efectuarla, simplemente era el cumplimiento a cabalidad y strictu sensu de su objeto contractual.”

Como primera medida, es menester recordar que toda gestión de una entidad pública como MOVILIDAD FUTURA, debe sustentarse en el apoyo y funciones desempeñadas por los servidores públicos y contratistas subalternos, no obstante y lo relevante para este asunto, es que en el caso concreto no se evidencia una acción clara y concreta por parte de VÍCTOR ALFONSO ROSERO BUSTAMANTE de delegar formalmente la supervisión que del convenio debía hacer la entidad y tampoco hizo lo propio cuando lo designó informalmente para cuantificar los materiales, errores que lejos de justificarlo lo condenan, pues deja en evidencia la negligencia de su gestión en esos aspectos.

En tal orden de ideas y como se ha anotado, el presunto responsable contrató de manera directa una interventoría para el contrato de obra, pese a esto y a haberse dado informalmente la delegación en la valoración de los materiales sobredimensionados, no debe perderse de vista que en últimas, el ingeniero Víctor era quien dirigía las riendas de la entidad, hecho que lo hace responsable de lo que en ella se generara, así como la evidente improvisación en la manera en que manejó la situación.

Ahora bien, no tiene presentación que el gerente de una entidad como Movilidad Futura, pretenda asegurar que los contratistas que se él vinculó a la institución que dirigía, no se debían sujetar a los lineamientos y directrices de la alta dirección, pues no tiene ningún sentido en el ámbito administrativo, contratar a personas para que ejecuten acciones como ruedas sueltas y a su propio criterio y discreción, máxime en estos casos, en donde los mismos contratos de prestación de servicios delimitaron las obligaciones y las circunscribieron a unas dependencias específicas, como se analiza en esta providencia en los ítems destinados a los presuntos responsables Oscar Caicedo y Pedro Felipe Potes.

Volviendo a la culpa *in eligendo* e *in vigilando*, en el contexto que se viene planteando se debe recordar que el ingeniero Oscar Alberto Caicedo Fernández, estuvo vinculado a Movilidad Futura mediante contrato de prestación de servicios No. 09 del 2014 por decisión de este presunto responsable; en otras palabras, el señor Víctor Rosero le asignó funciones mediante ese negocio jurídico, como la de emitir conceptos en su



calidad de ingeniero civil¹⁶⁰:

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 09 DE 2014

CONTRATANTE: SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS DE POPAYÁN "MOVILIDAD FUTURA S.A.S" - NIT 900323358-2

CONTRATISTA : OSCAR ALBERTO CAICEDO FERNÁNDEZ

CEDULA Y/O NIT : 76.322.044 - 2

OBJETO : Prestación de Servicios Profesionales de Ingeniero Civil para apoyo a MOVILIDAD FUTURA S.A.S. en calidad de Ente Gestor del Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasajeros de Popayán, en el componente de Gestión Técnica de Infraestructura del Proyecto y en especial en lo relacionado con ...

CUANTÍA: CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS (\$49'929.600,00).m/cte.

PLAZO: Desde la suscripción del acta de inicio, previa legalización del contrato, hasta el 31 de diciembre de 2014.

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: N° 17 de 2 de enero de 2014

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: Directa (prestación de servicios profesionales)

De esta manera, el Ing, Oscar Caicedo en calidad de contratista de Movilidad Futura, tuvo funciones de apoyo en la elaboración de presupuestos para licitaciones de interventoría de las obras asignadas, tal como el mismo contratista lo asegura, quien además estuvo relación directa con el contrato que se cuestiona, tal como se consignó en el último informe de interventoría presentado en el mes de mayo del 2014¹⁶¹:

*"Este documento contenía diferencias sustanciales comparadas con el elaborado por la Interventoría en el mes de marzo a solicitud de Movilidad Futura, se citó a una reunión conciliatoria de cantidades entre el Ente Gestor, la interventoría y los representantes del Contratista. Esta reunión se llevó a cabo el día 11 de abril con la asistencia de las siguientes personas: **Ing. Oscar Caicedo F. Asesor de la Supervisión de Movilidad Futura** ..." (Destacado fura de texto)*

Posteriormente se indica lo siguiente:

*"Los anteriores fueron **aprobados por el Asesor: Ing. Caicedo**, por el mismo medio y radicado CR-13-0568 pues se encuentra en el rango promedio del mercado. ..." (Destacado fura de texto)*

De lo anterior se colige que pese al tipo de vinculación del Ing. OSCAR, sí estaba involucrado en el proceso contractual por expresa designación del señor VICTOR ROSERO, contrario a lo que asegurara el apoderado; ahora bien, el Ingeniero OSCAR tenía dentro de sus funciones apoyar a la entidad que lideraba el Ing ROSERO, por ello, es completamente descabellado insinuar que la ejecución de sus funciones no dependía de las designaciones que efectuara este último.

¹⁶⁰ 92_2021 01 19 contrato de prestacion de servicios de 2014 movilidad futura sas aporta tener como prueba ampliacion version libre prf 2019 00858.

¹⁶¹ Ver página 766 del PDF: "CONTRATO MAYA VIAL."

Ahora bien, como se anotó en el auto de imputación la culpa *in vigilando*, se endilga por falta de control de la persona cuya custodia tiene encomendada el responsable, en donde tal responsabilidad se circunscribe al poder de dirección y de control de una autoridad, respecto de la subordinación de sus empleados, pero también de la dependencia de los contratistas; conforme a lo dicho, la responsabilidad bien puede provenir tanto de la culpa cometida al vigilar al subordinado, dependiente o contratista o de la culpa en que se incurra por razón del poder de dirección, control, autoridad, etc., sobre aquellos que tienen funciones y designaciones contractuales de cara al cumplimiento de los objetivos misionales de la entidad y que van en que una persona está respecto de otra bien por jerarquía institucional o contractual, por tal razón, no comparte el despacho la posición del apoderado, consistente en que por ser los Ingenieros Caicedo y Potes Contratistas, no aplica este tipo de culpa.

No sobra entonces, recordar que la justificación de sustentar, en parte, la responsabilidad en este tipo de culpa, ha sido abonada por este ente control en abundante jurisprudencia y doctrina, por tanto no atiende al capricho o necesidad infundada:

“La culpa in vigilando es la falta de control de la persona cuya custodia tiene encomendada el responsable¹⁶². Por su parte, la doctrina moderna da otro fundamento¹⁶³ a dicha responsabilidad, consistente en el poder de dirección, de control, de autoridad, la subordinación o la dependencia¹⁶⁴ en que una persona puede hallarse respecto a otra. Sin embargo, existe la tendencia según la cual no hay impedimento alguno para que puedan combinarse los dos criterios, pues la responsabilidad puede provenir tanto de la culpa cometida al vigilar al subordinado o de la culpa en que se incurra por razón del poder de dirección, control, autoridad, etc., en que una persona está respecto de otra.^{165”}

¹⁶² Roca, E., Derecho de daños, Tirant lo Blanch, Valencia, 2000, p. 93; Santos, J. La responsabilidad civil. Temas actuales, Montecorvo, Madrid, 2001, p. 270. En similar sentido, Concepción, J., Derecho de daños, Bosch, Barcelona, 1999, p. 114.

¹⁶³ Cuéllar op. cit., p. 68. Sobre este particular Pérez op. cit., p. 142, señala que para Josserand el fundamento de esta responsabilidad está en el poder de dirección, de control, de dominio existentes en la autoridad y subordinación que rigen las relaciones entre el civilmente responsable y la persona por quien éste responde.

¹⁶⁴ En derecho español se establece que la responsabilidad por el hecho ajeno trata de una serie de personas que guardan una especial relación de dependencia con el autor material del daño. Dependencia familiar, laboral, educativa, etc. tan especial que presume la culpa en la vigilancia y educación de los hijos menores, en la elección del empleado, etc. Son casos de responsabilidad subjetiva o por culpa, una culpa in vigilando, in eligendo o in educando que se presume. En este sentido, Yzquierdo, M., Sistema de responsabilidad civil contractual y extracontractual, Dykinson, Madrid, 2001, p. 254. En similar sentido, Roca op. cit., p. 94; Preciado Agudelo, D., Indemnización de perjuicios, responsabilidad civil contractual, extracontractual y delictual, Librería del Profesional, Bogotá, 1997, p. 360. En similar sentido, Pérez op. cit., p. 122. Para quien el verdadero fundamento de la responsabilidad por el hecho ajeno está en el poder de control, dirección, autoridad y subordinación.

¹⁶⁵ La Corte Suprema de Justicia, en Sentencia del 23 de junio de 1949.



A su vez La Corte Suprema de Justicia, en Sentencia del 23 de junio de 1949, señala:

"Para que haya lugar a esta responsabilidad por el hecho ajeno es necesario que se demuestren [...] una culpa que cause el daño, y además, la existencia de un vínculo de subordinación o dependencia entre una persona y la autora del daño. La culpa de la persona subordinada o dependiente es la fuente de la obligación indemnizatoria".

Previamente dicha Corporación en Sentencia del 7 de diciembre de 1942, estableció que:

"...el espíritu y tenor literal de las disposiciones, que en nuestra legislación establecen la responsabilidad por el hecho de otro, llegan a ésta en función de un vínculo de causalidad entre el autor y el responsable indirectos, vínculo nacido de la dependencia, de la autoridad, de la vigilancia, del cuidado a que están obligados o de que se hallan investidos los que por esto responden del daño sin ser personalmente los autores de la acción u omisión que lo ha causado..."

El Consejo de Estado ha Desarrollado también este asunto, así:

*"Claro que repugna hablar de culpa "in vigilando" o "in eligendo" propia de la responsabilidad indirecta del Estado, abandonada por la doctrina y la jurisprudencia hace varias décadas, pero como menciona, posiblemente sin pensar en su importancia, la "evidente falla en la prestación del servicio", se tendrá por bien formulada, en atención que en estos casos, la cita de las normas jurídicas no es esencial, "jura novit curia"."*¹⁶⁶

Una más:

*"Se ocupa Entrena Cuesta de distinguir entre la inactividad material y la inactividad formal de la administración, explicando que la primera alude a un no hacer de ésta, en el marco de sus competencias ordinarias, mientras que la segunda se refiere a la pasividad de la administración, dentro de un procedimiento, a la no contestación de una petición a los particulares. Aplicando principios propios de la doctrina penal, que considera útiles, expresa que, como ocurre con los tipos de omisión pura, en los eventos de inactividad formal basta con el incumplimiento de la obligación de dictar una resolución dentro de los plazos previstos, para que exista responsabilidad, y cuando se trata de inactividad material, como sucede con los tipos de comisión por omisión, se requiere además la no evitación de un resultado. En este último caso se exige, entonces, que la administración se encuentre en posición de garante, que se haya producido un resultado lesivo y que existiera la posibilidad de evitarlo, mediante la conducta omitida, lo que supone una concepción diferente de la relación de causalidad."*¹⁶⁷ (Subrayas del despacho)

Como si fuera poco la anterior, la doctrina también se ha ocupado de la culpa in vigilando en el derecho administrativo, para el presente caso traeremos a los profesores españoles

¹⁶⁶ Consejo de Estado. - Sala de lo Contencioso Administrativo. - Sección Tercera. - Bogotá, D. E., 25 de noviembre de 1987. C.p: Doctor Carlos Betancur Jaramillo. Referencia: Expediente número 5004. Salvamento de Voto.

¹⁶⁷ CONSEJO DE ESTADO – Sentencia del 29 de enero de 2004, Radicación No. 18.273

Rafael Entrena Cuesta y Mariano Magide Herrero, quienes han formulado las siguientes observaciones sobre el particular:

“Como en el caso de la comisión por omisión, lo decisivo en la responsabilidad por inactividad material no es la existencia efectiva de una relación causal entre la omisión y el resultado, sino sólo la virtualidad causal de la acción, que hubiera debido realizarse para evitar los perjuicios. Por lo que para que exista la obligación de indemnizar no se requiere una verdadera relación de causalidad naturalística entre la omisión y el daño, sino que basta que la Administración hubiera podido evitarlo cuando se hallaba en posición de garante... puede afirmarse que cuando se considera responsable a la Administración por no haber impedido la realización de un evento dañoso, se está haciendo responsable a la Administración por una omisión: la de aquella conducta que habría interrumpido el proceso causal impidiendo la producción de la lesión... Si lo normal es que la causalidad preceda a la imputación, los penalistas reconocen la posibilidad de una imputación sin causalidad en el supuesto de los delitos de comisión por omisión (delitos impropios de omisión), que presentan un interesante paralelismo con los casos de culpa in vigilando, pues son precisamente aquellos que se cometen mediante la omisión de una conducta debida. Los penalistas no consideran que una omisión pueda ser causa eficiente de un hecho, ex nihilo nihil fit, de modo que en el caso de los delitos de comisión por omisión ésta no es en puridad la causa material del daño, aunque quepa imputárselo objetivamente de acuerdo con criterios normativos.

(...)

*...la verdad es que la confianza generada por los controles administrativos es una buena razón para la imputación de responsabilidad in vigilando a la Administración, y si en aquel caso el Supremo estimó que el sometimiento a autorización de la publicidad no era suficiente para crear una confianza en la solvencia de las empresas, que podría estar en la base de una ulterior imputación de responsabilidad, sería totalmente injustificado que mantuviese el mismo criterio en relación con la abundante regulación que establece las condiciones mínimas de solvencia, y las numerosas potestades administrativas destinadas*¹⁶⁸ (Subrayas del despacho)

El principio al que acude en esta instancia el despacho, ha sido extendido vía jurisprudencial a la responsabilidad fiscal, dejando de ser un criterio exclusivo de la responsabilidad civil extracontractual, de ello da cuenta la sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 16 de noviembre de 2001, Exp. 6587 M.P. Manuel S. Urdaneta A.; Corporación que manifestó que había responsabilidad solidaria en los fallos de responsabilidad fiscal con fundamento en este tipo de culpa establecida en el artículo 63 del Código Civil:

¹⁶⁸ Ver ensayos titulados *Responsabilidad e inactividad de la administración* y *El criterio de imputación de la responsabilidad in vigilando a la administración*; especial referencia a la *responsabilidad de la administración en su actividad de supervisión de sectores económicos*, respectivamente, publicados en *La responsabilidad patrimonial de los poderes públicos. III Coloquio Hispano-Luso de Derecho Administrativo*. Valladolid, 16 a 18 de octubre de 1997. Marcial Pons editores, bajo la coordinación de J. Luis Martínez López-Muñiz y Antonio Lalonge Velásquez, 1999, p. 357 a 397.



“...ahora bien, en lo que hace la sana crítica elevada por el demandante respecto de la responsabilidad fiscal que en forma solidaria les fue atribuida a los dos investigados, debe tenerse en cuenta que ella descansa de un lado, sobre el ejercicio de labores que la misma constitución Política le impone a los alcaldes municipales, dentro de los cuales se encuentra la dirección de la actividad administrativa del municipio y frente a la llamada culpa in vigilando que consagra el artículo 63 del Código Civil ... “ y de otro en cuanto a la responsabilidad atribuida al superior, esta no exonera a quienes desempeñan las labores bajo la dirección y mando de aquel...”

Esta posición ha sido reiterada por dicha corporación, en lo que tiene que ver con la responsabilidad fiscal¹⁶⁹, así:

“Si la responsabilidad fiscal de los servidores públicos se deduce por culpa leve, la imputación hecha por la Contraloría General de la República a los actores halla respaldo, pues se demostró plenamente que el señor Peña Cárdenas “...actuó con culpa y negligencia al incumplir sus deberes como Gerente del Fondo Ganadero del Caquetá, contemporizando con la situación de saqueo total de los recursos del Fondo y facilitando a quienes dejaba cheques firmados en blanco, que hicieran sus fechorías....”, hecho que no puede justificarse en la posible culpa de subalternos pues la culpa de ellos es culpa del jefe por no vigilar y controlar el trabajo y los deberes de sus colaboradores.

Un servidor público es responsable por los hechos de sus dependientes, a partir de la culpa in eligendo o in vigilando. Para el caso, se predica la culpa in vigilando por cuanto aunque directamente no se le puede endilgar al señor Rodolfo Peña Cárdenas la comisión personal de los hechos típicos, si resulta indirectamente responsable de la conducta de los agentes sobre los que tenía el poder de orientación, control y vigilancia, como se predica respecto de las dependencias encargadas de la contabilidad de la entidad y afines.” (Subrayas fuera de texto)

Así las cosas y contrario a lo que esboza el apoderado del presunto responsable en los descargos frente a la imputación, este tipo de culpa es perfectamente aplicable al señor VICTOR ROSERO, por cuanto él delegó informalmente en un dependiente contratista la función de vigilar el contrato, pero en especial de realizar una valoración de los viene dejados por el contratistas; en virtud de la culpa *in vigilando* aplicable a la responsabilidad fiscal, podemos afirmar que al margen de tal delegación, indirectamente el representante legal de la entidad está llamado a responder por los hechos que se investigan, máxime si fue quien firmó el negocio jurídico incumplido y porque era responsable de que la gestión se llevara a feliz término.

De igual manera, todas y cada una de las actas de suspensión y reanudación del mismo fueron por él conocidas, lo que indica que su intervención en tales acciones, le generaban

¹⁶⁹ CONSEJO DE ESTADO - SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION PRIMERA
Consejero ponente: MARCO ANTONIO VELILLA MORENO Bogotá, D.C., seis (6) de junio de dos mil trece (2013) - Radicación número: 18001-23-31-000-2002-00374-01 Actor: RODOLFO PEÑA CARDENAS Y OTRO - Demandado: CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA



el deber de conocer y estar al tanto del estado del proceso, de las obras en ejecución y de los pormenores que se daban en giro de la liquidación, con la que se causó el detrimento patrimonial.

Con lo anterior, no se pretende exigir el deber al investigado de mantener su actividad en la minucia de todos los contratos suscritos en donde se haya designado como interventor o supervisor a un funcionario de su despacho, por ser una labor imposible; no obstante, la responsabilidad que se le endilga tiene su sustento en que tanto el delegante, como el delegatario formalmente designado, están llamados a responder por las omisiones cometidas por este último, pues al primero le asistía el deber de ejercer vigilancia y control respecto de las funciones delegadas por ser su jefe inmediato; además de lo anterior y no menos importante es que la responsabilidad inicial que se analiza, es exclusiva del investigado, por ser el responsable de la entidad.

Por tanto, el hecho de que haya delegado la función de supervisión del contrato cuestionado, pero sobre todo, la ejecución de una valoración de materiales, no es razón suficiente para exonerarlo de responsabilidad.

Retomando entonces la trazabilidad del proceso contractual, este presunto responsable en calidad de Gerente de Movilidad Futura y según informe de interventoría, participó en el inicio del contrato, en los siguientes términos¹⁷⁰:

“El acta de inicio del contratista fue suscrita entre VÍCTOR ALFONSO ROSERO BUSTAMENTE, GERENTE del SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS DE POPAYÁN “MOVILIDAD FUTURA S.A.S”, Entidad CONTRATANTE, ELSA CAMPO LOPEZ, Con poder del REPRESENTANTE LEGAL – HERNANDO VÁSQUEZ SEPÚLVEDA del CONSORCIO METRO MALLA VIAL POPAYÁN, y DANIEL FRANCISCO ACEVEDO CALLE, Con poder del representante legal del CONSORCIO VIAS POPAYÁN. Como CONTRATISTA, el doce (12) de febrero de dos mil trece (2013)”

A la luz a lo desarrollado inicialmente, el despacho no encuentra reparo alguno en la gestión inicial de este funcionario de cara al contrato, pues estuvo presto a requerir al contratista las veces que fue necesario, de conformidad con reportes vertidos en los informes de interventoría. También resulta evidente que no fue ajeno al incumplimiento del consorcio, pues el 07 de octubre del 2013, mediante Resolución No. 78¹⁷¹, en calidad de Gerente de Movilidad futura impone sanción al contratista por incumplimiento de sus obligaciones, a la luz de lo plasmado en los informes de interventoría y como consecuencia se impone una multa.

Como ya se analizó, este servidor público adelantó gestiones tendientes a la liquidación del contrato y representó a la entidad a los inicios del proceso de conciliación prejudicial incoado por el Consorcio el 18 de diciembre de 2014, que entre las pretensiones se

¹⁷⁰ Página 19 del PDF: “109_CARPETA 17 CONTRATO MALLA VIAL”

¹⁷¹ Página 77 del PDF: “7_12 A 209 ANT-054-2017”

encuentra la de dar por terminado el proceso sancionatorio y la liquidación bilateral del mismo.

Se dejó descrito que en este trámite de la conciliación interna se surtieron dos actas en las que se analizó y aprobó todo lo relacionado con la terminación del contrato, incluido el asunto que se investiga bajo esta cuerda procesal; de igual forma, es claro que las decisiones que se surtieron en ese trámite interno como en el adelantado ante la Procuraduría, se tiene como sustento la aprobación de la liquidación efectuada por el ingeniero por él designado para el efecto, la cual fue acogida en el acta 02 del Comité de Conciliación de Movilidad Futura, la cual estuvo conformada, entre otros, por las siguientes personas:

Fecha: 11 de Marzo de 2015		Hora de inicio: 2:30 P. M.	
Lugar: Sede de la Entidad			
Reunión: COMITÉ DE CONCILIACIÓN DE MOVILIDAD FUTURA S.A.S. – SETP POPAYÁN			
ASISTENTES			
VÍCTOR A. ROSERO BUSTAMANTE		Gerente	
WILLAN A. LOMBANA SOLARTE		Secretario General	
INVITADOS			
PEDRO FELIPE POTES GONZÁLEZ		Apoyo a la Gestión Técnica de Infraestructura	
ALVARO CASAS TRUJILLO		Apoyo a la Gestión Jurídica	
GIOVANNY ZÚNIGA PIAMBA		Apoyo a la Gestión Financiera	
OSCAR CAICEDO FERNÁNDEZ		Apoyo a la Gestión Técnica de Infraestructura	
LUIS ALBERTO GARCÍA LÓPEZ		Apoyo a la Gestión Técnica de Infraestructura	

Quiere decir, que el señor Víctor Alfonso Rosero Bustamante, en calidad de miembro del Comité de Conciliación aprobó el acuerdo de pago, en el que se incluyeron los recursos de los que hoy se predica pérdida.

Que de conformidad con el artículo 16 de decreto 1716 del 14 de mayo del 2009, el Comité de conciliación se define como:

“Artículo 16. Comité de Conciliación. El Comité de Conciliación es una instancia administrativa que actúa como sede de estudio, análisis y formulación de políticas sobre prevención del daño antijurídico y defensa de los intereses de la entidad.”

Igualmente decidirá, en cada caso específico, sobre la procedencia de la conciliación o cualquier otro medio alternativo de solución de conflictos, con sujeción estricta a las normas jurídicas sustantivas, procedimentales y de control vigentes, evitando lesionar el patrimonio público. La decisión de conciliar tomada en los términos anteriores, por sí sola, no dará lugar a investigaciones disciplinarias, ni fiscales, ni al ejercicio de acciones de repetición contra los miembros del Comité.

Parágrafo único. La decisión del Comité de Conciliación acerca de la viabilidad de conciliar no constituye ordenación de gasto.”

Por su parte, la Presidencia de la República, mediante directiva presidencial 05 de mayo 22 de 2009, impartió instrucciones para el adecuado ejercicio de la conciliación



extrajudicial como requisito de procedibilidad en materia de lo contencioso administrativo¹⁷², indicando que los miembros de los Comités de Conciliación deben tener en cuenta que, de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo del artículo 16 del Decreto No. 1716 de 2009, las decisiones acerca de la viabilidad de conciliar no constituyen ordenación del gasto; de lo anterior se desprende que la decisión de conciliar compone la primera etapa de la consolidación jurídica del acuerdo, en la medida en que este sólo hace tránsito a cosa juzgada una vez se lleve a cabo la revisión de legalidad por parte de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

Volviendo al caso concreto, es evidente que en la trazabilidad de las situaciones irregulares que configuraron el presunto detrimento patrimonial, se generaron una cadena de errores que terminaron en el reconocimiento de una suma de dinero en virtud de un documento en el que se consignó una obligación clara expresa y exigible, como lo es el acta de conciliación avalada por el Juez Administrativo.

Dichos errores y fallos tuvieron su génesis en una liquidación efectuada por un contratista de la entidad, la cual se presentó conforme a la designación hecha para el efecto por el señor Víctor Alfonso Rosero Bustamante, además la misma liquidación fue aprobada institucionalmente por el Comité de Conciliación liderado por el citado Gerente de Movilidad Futura de ese entonces, quien a su vez, no solo suscribió el contrato, sino que estuvo al frente del proceso contractual y por ende era quien tenía pleno conocimiento de las situaciones que se presentaron a lo largo del proceso.

En este orden de ideas, si bien como se anotó, el comité de conciliación no es ordenador del gasto respecto de las decisiones que en él se tomen, el hecho de que este servidor público aprobara en dicho comité el asunto, resulta cuestionable pues era el primer conocedor de toda la situación dada con el consorcio en la ejecución del contrato.

Ahora bien, con la aprobación de la liquidación por parte del comité liderado por el señor ROSERO BUSTAMANTE, *per se*, no perfeccionó el presunto detrimento patrimonial, toda vez que el trámite de la conciliación en materia administrativa culmina con la aprobación del juez administrativo; sin embargo, debemos recordar que el hecho objeto de investigación no se circunscribe a un simple error aritmético o a una escueta omisión en la apreciación de los ítems sobre los que se autoriza conciliar, pues estamos al frente de una sobrevaloración de materiales en casi un 2.000% (DOS MIL SOBRE CIEN), lo cual se sale de cualquier tipo de lógica, máxime para un profesional y representante legal de una entidad pública, que a su vez tuvo una participación activa en el proceso contractual.

Resulta entonces cuestionable, que el señor Víctor Alfonso Rosero Bustamante en calidad de Gerente de Movilidad Futura y líder del Comité de Conciliación, no haya puesto todos sus esfuerzos para verificar la información vertida en el documento que se aprobó a sabiendas que en los informes de interventoría se plasmaron continuamente los

¹⁷² <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=36300>



pormenores de la ejecución del negocio jurídico; es evidente que este funcionario tenía perfectamente claro cuáles eran los intereses en juego y se puede asegurar sin temor a equívocos que tenía pleno conocimiento de los hechos, ítems y actividades que debían ser valoradas; es decir, contaba con todos los elementos de juicio para cumplir con la obligación de cuidar el erario, por tanto, debía ser supremamente cuidadoso al momento de decidir si conciliaba o no en este caso concreto y al parecer no lo hizo.

Así entonces, al señor Víctor Alfonso Rosero Bustamante identificado con C.C. No. 10.525.694, se le debe fallar con responsabilidad fiscal en los términos del artículo 53 de la Ley 610 de 2000, pues ejecutó acciones jurídicas y financieras de cara al hecho que se investiga, en su calidad de representante legal de la entidad, por haber sido la cabeza visible del extremo contractual afectado en sus recursos y porque como líder del Comité de Conciliación de Movilidad Futura, permitió, facilitó y coadyuvó en el proceso de aprobación de una liquidación que reconoció de manera injustificada el reconocimiento de unos mayores valores en favor del contratista, gestiones irregulares que deben ser calificadas como GRAVEMENTE CULPOSAS pues no estamos al frente de cualquier descuido, sino en una grave irregularidad con la que se causó el presunto detrimento patrimonial que se investiga, es decir, si en mínima diligencia el investigado hubiese ejecutado la verificación y contrastación del valor de los materiales con el último informe de interventoría, si como ingeniero se hubiese tomado el trabajo de al menos leer la valoración de estos costos, en virtud de su perfil, estaba en la plena capacidad y facultad de detectar el craso error cometido o en defecto de todo esto, hubiese impartido la orden a sus subalternos de que se constataran los datos que se iban a someter a consideración de una autoridad externa, se habría podido fácilmente conjurar y evitar el daño, pero injustificadamente no lo hizo, por ello se procederá en su contra, en los términos de la norma mencionado.

- PEDRO FELIPE POTES

Que el señor PEDRO FELIPEPOTES, estuvo vinculado a Movilidad Futura, según información reportada en la hoja de vida cargada en la página web de la función pública¹⁷³ entre el 26 de agosto del 2011 y el 30 de septiembre del 2016, lo que a su vez es ratificado por la entidad mediante certificación allegada al expediente el 27 de abril 2023 mediante radicado 2023ER0070904¹⁷⁴:

“Al respecto, se informa que revisaron los archivos de la entidad, se encuentra Que el señor Pedro Felipe Potes González, Identificado con cédula de ciudadanía No. 10. 546. 275 expedida en Popayán - Cauca, Estuvo vinculado al sistema estratégico de transporte público de pasajeros – SETP “Movilidad futura SAS” 7 los contratos de prestación de servicios profesionales indicados en la certificación que se adjunta.”

¹⁷³ <https://www.funcionpublica.gov.co/web/sigep/hdv/-/directorio/S229811-3940-4/view>

¹⁷⁴ 20230427 RESPUESTA MOVILIDAD FUTURA2023ER0070904 PRF 858



Que los documentos que se adjuntan a la certificación, corresponden a los cargados¹⁷⁵ en el SECOP, se encuentran cargados los siguientes contratos de prestación de servicios suscritos entre MOVILIDAD FUTRUA SAS y el ingeniero PEFRO FELIPE POTES identificado con C.C. 10.546.275, que acreditan la calidad en la que intervino en el proceso post contractual, en el que se liquidaron erradamente los materiales entregados por el contratista:

- Contrato de prestación de servicio No.10 del 2011¹⁷⁶, el otrosí que entre otras cosas, amplía el plazo del mismo hasta el 31 de enero del 2012
- Contrato de prestación de servicio No. 002 del 2012¹⁷⁷ con vigencia 07 de febrero y 30 de abril del 2012.
- Contrato de prestación de servicio No. 013 del 2012¹⁷⁸, con vigencia comprendida entre el 02 de mayo y el 31 de diciembre del 2012.
- Contrato de prestación de servicio No. mf-24-2013¹⁷⁹, con vigencia comprendida entre el 01 de febrero y el 31 de marzo del 2013.
- Contrato de prestación de servicio No. mf-45-2013¹⁸⁰, con vigencia comprendida entre el 01 de abril y el 31 de diciembre del 2013.

De esta manera y para la época de los hechos, encontramos los siguientes contratos de prestación de servicios:

1. Contrato de prestación de servicio No. 07-2014¹⁸¹, con vigencia comprendida entre el 03 de enero y el 31 de diciembre del 2014.
2. Contrato de prestación de servicios No.08¹⁸² de 2015, del 02 de enero al 31 de diciembre del 2015.

Como primera medida, el despacho advierte que las calidades de responsable de líder de área técnica de infraestructura en las que el despacho ha descansado la responsabilidad de este presunto responsable, están sustentadas en los documentos que el mismo presunto responsable suscribió, es decir, él mismo en la gestión que asumió respecto del contrato cuya liquidación se cuestiona, se identifica como tal¹⁸³:

¹⁷⁵ Ver PDF: "RESPUESRA CGR.pdf" de la citada respuesta

¹⁷⁶ C_PROCESO_12-12-1112725_219001015_5145017.pdf

¹⁷⁷ C_PROCESO_12-12-1115485_219001015_5155713.pdf , Contrato descargado del SECOP

¹⁷⁸ C_PROCESO_12-12-1120457_219001015_5176397.pdf, contrato descargado del SECOP

¹⁷⁹ Ver en el SECOP proceso con referencia: MF-24-2013, PDF: C_PROCESO_13-12-1608965_219001015_6960886.pdf

¹⁸⁰ Ver en el SECOP proceso con referencia: MF-45-2013, PDF: C_PROCESO_13-12-1612681_219001015_6972695.pdf

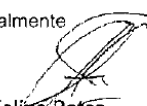
¹⁸¹ Ver en el SECOP proceso con referencia: MF-07-2014, pdf: C_PROCESO_14-12-2321468_219001015_9477093.pdf

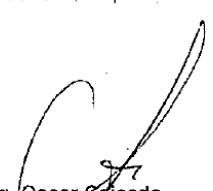
¹⁸² C_PROCESO_15-12-3355528_219001015_13265687.pdf

¹⁸³ Página 62 del PDF: "20170915_solicitud procuraduria_ANT 054-2017" y página 120 PDF: "444645 - CONSORICIO VIAS POPAYAN VS. MOVILIDAD FUTURA"

NOTA : Dado que en la primera semana de diciembre de 2014, el Consorcio Vías Popayán, entregó insumos requeridos para las obras de espacio público, por la suma \$618'743.536 y devolución de elementos del PIPMA por valor de \$ 23'724.571 conforme al anexo, se podrán tener como sumas a favor del contratista.

Cordialmente


Ing. Felipe Potes
Coordinador área Infraestructura


Ing. Oscar Caicedo
Apoyo a la supervisión

Ahora bien, si bien es perfectamente claro que el investigado no era servidor público, incluso, se ha reconocido por los intervinientes que todos los colaboradores de la entidad estaban vinculados en calidad contratistas, se puede inferir de manera lógica que eran precisamente los contratistas quienes ejecutaban las funciones que se habían establecido en el marco de la gestión propiamente dicha de Movilidad Futura.

Ahora bien, en los contratos de prestación de servicios se le encomendó de manera directa unas funciones claras y concretas, que para el señor OSCAR CAICEDO¹⁸⁴ eran las de ejercer control, seguimiento y supervisión a la ejecución de las obras y sus interventorías.

En cuanto al señor PEDRO FELIPE POTES, en los contratos de prestación de servicios por él suscritos, claramente se detalla que tenía como funciones en el año 2014, las de COORDINACION DEL PROCESO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA:

1. Contrato de prestación de servicio No. 07-2014¹⁸⁵, con vigencia comprendida entre el 03 de enero y el 31 de diciembre del 2014, con el siguiente objeto general:

“El CONTRATISTA se compromete a prestar sus servicios profesionales de Ingeniero Civil Especializado, para apoyo a MOVILIDAD FUTURA S.A.S. en calidad de Ente Gestor del Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasajeros de Popayán, en su componente de gestión Técnica - Infraestructura y en especial para liderar los procesos de infraestructura, brindando su experiencia en el apoyo a la elaboración de pre pliegos, pliegos, seguimiento a las obras, para el diseño, la construcción y en la interventoría de las mismas, de conformidad con el estudio previo de conveniencia y oportunidad y la propuesta del Contratista, los cuales forman parte integral del contrato, los requerimientos normativos de la legislación Colombiana y los requerimientos de orden legal y técnico del CONTRATANTE”

¹⁸⁴ 92_2021 01 19 contrato de prestacion de servicios de 2014 movilidad futura sas aporta tener como prueba ampliacion version libre prf 2019 00858.

¹⁸⁵ Ver en el SECOP proceso con referencia: MF-07-2014, pdf: C_PROCESO_14-12-2321468_219001015_9477093.pdf



2. Contrato de prestación de servicios No.08¹⁸⁶ de 2015, del 02 de enero al 31 de diciembre del 2015, con el siguiente objeto general de LIDERAR LOS PROCESOS DE INFRAESTRUCTURA::

“El CONTRATISTA se compromete a prestar sus servicios profesionales como ingeniero Civil para apoyar a Movilidad Futura SAS en la coordinación del Proceso de Gestión de Infraestructura, brindando su experiencia en el apoyo a la elaboración de pre pliegos, pliegos, seguimiento a las obras, para el diseño, la construcción y en la interventoría de las mismas, así como la adquisición de los predios requeridos, de conformidad con el estudio previo de conveniencia y oportunidad y la propuesta del Contratista, los cuales forman parte integral del contrato, los requerimientos normativos de la legislación colombiana y los requerimientos de orden legal y técnico del CONTRATANTE.”

Así entonces, la calidad de líder de Infraestructura que el despacho le reconoce a este presunto responsable estaba dada en los contratos de prestación de servicios, ahora bien, teniendo identificada el área y el rol de la entidad en la que desarrollaría sus actividades, no puede negarse bajo ninguna circunstancia que le eran exigibles las funciones propias de los mismos, por ello, si bien era un prestador de servicios, no era ajeno a las funciones propias de la entidad, pues pese a que la naturaleza de los contratos es diferente a la vinculación como servidor públicos propiamente dicha, no es menos cierto que el manual de funciones era el marco en que unos y otros debían ejecutar todas las actividades en el giro ordinario de la misión y visión de la entidad a la que se encontraban vinculados.

Ahora bien, para vincular e imputar a este presunto responsable, el despacho argumentó que era de su resorte, verificar que los documentos que se le entregaban a la gerencia de la entidad estuvieran acordes a la realidad material y contractual, pues el liderar y coordinar el área de infraestructura, era precisamente la calidad que le imponía tal deber.

Se ha tenido entonces, que el señor PEDRO FELIPE POTES, era responsable de Coordinar y liderar el área de Infraestructura para la época en que se efectuó la liquidación de los materiales y se aprobó la misma en el comité de conciliación con los yerros que generaron el detrimento patrimonial que se investiga; pues en virtud de un contrato de prestación de servicios, ostentó la calidad de LIDER DE GESTIÓN y/o COORDINADOR DEL ÁREA TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURA de MOVILIDAD FUTURA, cargo que no desconoció en el documento que suscribió.

Que una vez notificado del auto de apertura y de la vinculación, este presunto responsable allega versión libre¹⁸⁷ en la que manifiesta que siempre estuvo vinculado a

¹⁸⁶ C_PROCESO_15-12-3355528_219001015_13265687.pdf

¹⁸⁷ Ver: "20230609 CORREO VERSION LIBREPEDROPOTES 2023ER0102729 Y 2023ER0103485 PRF 00858" y "20230609 VERSIOBNLIBREPEDROPOTES 2023ER0102729 00858"



MOVILIDAD FUTURA S.A.S mediante contratos de prestación de servicios y por ende, asegura, en ningún momento ostentó la calidad de servidor público, por lo que considera que no se pueden encuadrar sus acciones en los manuales de funciones de la entidad y acota que es un error que se lo tenga como líder de gestión y/o líder de área técnica de infraestructura, para la época de los hechos.

Considera que al no ostentar la calidad de servidor público no estaba llamado a verificar la liquidación de los materiales que efectuó el señor OSCAR CAICEDO, en tanto, agrega que las actividades contratadas no contemplaban verificar, avalar o revisar los informes que rindiesen otros profesionales de la empresa.

Insiste en que para la época de los hechos MOVILIDAD FUTURA no tenía personal de planta, pues la mayoría eran colaboradores contratistas en un mismo plano profesional y pese a que los contratos suscritos en ese entonces se establecía en su objeto el apoyo para liderar los procesos de infraestructura; por lo que esboza que, bajo ningún argumento podría interpretarse que se le hubiese conferido una facultad de responsable, veedor o vigilante del trabajo profesional que realizó el ingeniero OSCAR ALBERTO CAICEDO FERNANDEZ y a renglón seguido enfatiza en este mismo argumento, para luego estacar que no hubo omisión de su parte.

Alude el presunto responsable a la firma de los oficios fechados el 16 y 20 de enero de 2015, para asegurar que ambos los elaboró en el marco de solicitud expresa de la Oficina Jurídica de Movilidad Futura S.A.S, para efectos de que se valoraran y tasaran los PERJUICIOS causados a la empresa por cuenta del repetido incumplimiento del Consorcio VIAS POPAYÁN al Contrato de Obra Pública No. 01 de 2012; pero agrega que nunca se trató de una solicitud para realizar el conteo de los elementos de espacio público entregados por el contratista.

Recalca que en los dos oficios mencionados se hace expresa referencia a que se trata del cálculo de los perjuicios causados por el consorcio, más no de la liquidación final del contrato que en su criterio, es en donde se genera el presunto detrimento patrimonial.

Luego de hacer una explicación a las circunstancias en las que firmó el oficio del 20 de enero de 2015, resalta que el anexo fue firmado por el ingeniero OSCAR CAICEDO, por tanto en el citado oficio se presentaron documentos que cada uno había calculado con total independencia; increpa que las acciones ejecutadas, se hicieron por cuenta y riesgo de cada uno de los profesionales que rindieron la información, en razón a esto, considera que no se le puede reprochar que omitió el deber de revisar la liquidación.

De otra parte, bosqueja que los citados documentos se presentaron después del mes de diciembre de 2014, cuando el gerente de Movilidad Futura había suscrito el BALANCE FINANCIERO con el cual, él mismo avaló el informe entregado por el ingeniero OSCAR ALBERTO CAICEDO FERNANDEZ, lo que en su criterio hace inocua alguna revisión de dicho conteo de su parte en el mes de enero de 2015.



Que el 31 de octubre del 2023 amplía la versión libre mediante radicado 2023ER0205851¹⁸⁸, en donde aclara que estuvo vinculado por contrato de prestación de servicios profesionales, asegura que nunca fue informado, notificado, o algo parecido sobre “Manual de Funciones” de empleo o cargo público que debiera cumplir en su calidad de contratista; menos aún se le socializó el propósito de alguna “dependencia” y que si bien en los contratos se indicó su calidad de “Líder”, se hizo siempre precedida de la palabra “apoyo” y por ende, no puede considerarse un incumplimiento de un manual de funciones, por lo que solicita se lo desvincule del proceso.

Respecto de la asistencia a las sesiones del Comité de Conciliación, considera que ello no compromete su responsabilidad, pues acudió como invitado y no como miembro del mismo, por no ser funcionario de la entidad.

Una vez notificado del auto de imputación rinde los descargos correspondientes mediante radicado 2023ER0132896¹⁸⁹ del 26 de julio del 2023 por medio de su apoderado de confianza, en donde se asegura que se han desconocido los principios que gobiernan la función administrativa y la contratación estatal, al pretender derivar responsabilidad fiscal a un particular que tuvo vinculación contractual de prestación de servicios con una entidad pública, asemejando su calidad, en cuanto a sus deberes, a la de un servidor público.

Puntualiza que el presunto responsable no ejecutó gestión fiscal de la que pueda derivarse un daño y agrega que el señor Potes suscribió únicamente la valoración y justificación de perjuicios, lo cual difiere del BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA, el cual fue suscrito por el Ingeniero Oscar Caicedo y en este último en el que se tasan equivocadamente los valores de los materiales, por tanto, concluye que el señor Potes no generó el detrimento patrimonial.

Insiste en que el presunto responsable tuvo una vinculación con MOVILIDAD FUTURA S.A.S., en virtud de contratos de prestación de servicios y en ningún momento ostentó la calidad de servidor público y las actividades que desarrolló siempre se enmarcaron en tales negocios jurídicos y cita doctrina aplicable al tema.

Acota que la Contraloría General de la República dispone como criterio vinculante para los contratistas, en calidad de particulares, la incidencia directa de SU GESTION FISCAL, es decir, el haber generado o contribuido a causar el daño y al no ser el señor Potes, un servidor público de MOVILIDAD FUTURA S.A.S, considera el apoderado que la única posibilidad que se tiene para vincularlo y de endilgarle responsabilidad fiscal es que de su actuación contractual.

¹⁸⁸ 20231031 Ampliación Versión Libre POTES 2023ER0205851 PRF-2019-00858

¹⁸⁹ 20230726 DESCARGOS POTES 2023ER0132896 PRF 858.msg y DESCARGOS PEDRO FELIPE POTES GONZALEZ.pdf



Retoma el argumento consistente en que la vinculación de su representado no puede equipararse a la de un servidor público, el cual es definido en el artículo 123 de nuestra Constitución Política y para ilustrar la situación transcribe doctrina y normatividad al respecto, para luego concluir que NO ES POSIBLE inferir que se asume un “cargo” por el hecho de suscribir un documento identificándose bajo el rótulo de “coordinador”, como erróneamente interpreta el ente de control.

Pasa luego a pronunciarse nuevamente sobre la naturaleza de los contratos de prestación de servicios, para luego indicar que el despacho se equivoca e incurre en un error en la motivación cuando afirma que las calidades de su prohijado como líder de área técnica de infraestructura en las que se ha descansado la responsabilidad en su contra, están sustentadas en los documentos que el mismo presunto responsable suscribió, es decir, que él mismo, en la gestión que asumió respecto del contrato cuya liquidación se cuestiona, se identificó como tal.

Indica que lo anterior no puede ser aceptado porque la responsabilidad del contratista se deriva del contenido del contrato y en los aportados no se observan esas funciones e insiste que no hay documento expreso que haya asignado al señor PEDRO FELIPE POTES GONZALEZ esa actividad, ni mucho menos la de elaborar el conteo de los elementos, por ello no se puede reclamarle las “funciones del área técnica” o las “funciones del área de infraestructura”, las cuales hacen referencia a un empleo público.

Posteriormente asegura que existe confesión del señor Oscar Caicedo, quien no desconoce el error que cometió, por lo tanto, en criterio del apoderado, no es real la afirmación del confeso CAICEDO FERNANDEZ que fuera PEDRO FELIPE POTES, en una calidad que jamás ostentó quien debiera revisar su informe denominado BALANCE FINANCIERO, insistiendo en que dicho documento no tiene firmas de su representado

De lo anterior se colige que la defensa de este presunto responsable se centra en que su vinculación a la entidad Movilidad Futura se hizo mediante contrato de prestación de servicios, lo cual es cierto, pues las evidencias así lo indican; así mismo, se recalca que esta vinculación es distinta a la de un servidor público, lo cual es cierto y también deja de presente que sus obligaciones contractuales se limitaban a lo vertido en el contrato de prestación de servicios, argumento con el que coincide el despacho.

Ahora bien, partiendo de que las obligaciones contractuales del señor Pedro Felipe se limitaban a lo vertido en el contrato de prestación de servicios, es menester ir a tales negocios jurídicos para poder delimitar el contexto de su vinculación a Movilidad Futura:

Contrato de prestación de servicio No. 07-2014¹⁹⁰, con vigencia comprendida entre el 03 de enero y el 31 de diciembre del 2014, con el siguiente objeto general:

¹⁹⁰ Ver en el SECOP proceso con referencia: MF-07-2014, pdf: C_PROCESO_14-12-2321468_219001015_9477093.pdf



*“El CONTRATISTA se compromete a prestar sus servicios profesionales de Ingeniero Civil Especializado, para apoyo a MOVILIDAD FUTURA S.A.S. en calidad de Ente Gestor del Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasajeros de Popayán, en su componente de gestión Técnica - Infraestructura y en especial para liderar los procesos de infraestructura, brindando su experiencia en el apoyo a la elaboración de pre pliegos, pliegos, seguimiento a las obras, para el diseño, la construcción y en la interventoría de las mismas, de conformidad con el estudio previo de conveniencia y oportunidad y la propuesta del Contratista, los cuales forman parte integral del contrato, los requerimientos normativos de la legislación Colombiana **y los requerimientos de orden legal y técnico del CONTRATANTE**”* (destacado del despacho)

Contrato de prestación de servicios No.08¹⁹¹ de 2015, del 02 de enero al 31 de diciembre del 2015, con el siguiente objeto genera:

*“El CONTRATISTA se compromete a prestar sus servicios profesionales como ingeniero Civil para apoyar a Movilidad Futura SAS en la coordinación del Proceso de Gestión de Infraestructura, brindando su experiencia en el apoyo a la elaboración de pre pliegos, pliegos, seguimiento a las obras, para el diseño, la construcción y en la interventoría de las mismas, así como la adquisición de los predios requeridos, de conformidad con el estudio previo de conveniencia y oportunidad y la propuesta del Contratista, los cuales forman parte integral del contrato, los requerimientos normativos de la legislación colombiana **y los requerimientos de orden legal y técnico del CONTRATANTE**”* (destacado del despacho)

Como se aprecia en el último renglón transcrito de los contratos, se indica claramente que forman parte integral de los mismos, los requerimientos normativos de la legislación colombiana y también los requerimientos de orden legal, pero sobre todo los documentos de orden técnico del CONTRATANTE.

Según el Archivo General de la Nación, los manuales de procedimientos de una entidad, tienen el siguiente objetivo¹⁹²:

“Los Manuales de Procedimientos

*Para evitar la pérdida del Orden Original o para reconstruirlo donde este se ha perdido lo más recomendable es consultar los Manuales de Procedimientos. **Estos son herramientas donde se describe paso a paso la manera correcta de cumplir una tarea o una función. Se denominan Manuales de Procedimientos porque los procesos allí establecidos involucran una serie de actividades y pasos relacionados entre sí, a través de los cuales se transforman unos recursos y se obtiene un***

¹⁹¹ C_PROCESO_15-12-3355528_219001015_13265687.pdf

¹⁹² ORDENACIÓN DOCUMENTAL - DIVISIÓN DE CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN - SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS BOGOTÁ D.C – COLOMBIA 2003:

https://www.archivogeneral.gov.co/caja_de_herramientas/docs/5.%20organizacion/DOCUMENTOS%20TECNICOS/CARTILLA%20DE%20ORDENACION%20DOCUMENTAL.pdf



producto. Los procesos se caracterizan por tener un principio y un fin, es decir, inician con determinada acción y finalizan en otra. Las instituciones para el desarrollo de sus funciones y la planificación del trabajo deben elaborar Manuales de Procedimientos los cuales permiten establecer reglas y mecanismos para normalizar los trámites que garanticen el control de la administración.

En el proceso de ordenación, son precisamente los Manuales de Procedimientos los que guían o restablecen el orden de los documentos, lo cual constituye la reafirmación del Principio de Orden Original. Las series documentales y los expedientes bien ordenados reflejan el cumplimiento de los procesos establecidos en los Manuales de Procedimientos”(Destacado fuera de texto)

Se tiene claro entonces, que el presunto responsable, conforme a los contratos de prestación de servicios que suscribió debía ejecutar sus obligaciones en unas áreas específicas de Movilidad Futura y para el efecto la entidad mediante un manual estableció el paso a paso para cumplir de manera correcta las tareas o funciones de dichas áreas, era entonces tal documento técnico del escenario administrativo de la entidad el que fijaba los derroteros de las actividades y los pasos a través de los cuales se ejecutaban las acciones del contratista.

En tal orden de ideas y contrario a lo esbozado en la versión libre y en los argumentos frente a la imputación, considera este ente de control que de conformidad con los mismos contratos de prestación de servicios, sí le era aplicable el Manual de funciones y procedimientos de Movilidad Futura, a los objetos de los contratos suscritos con el señor Pedro Felipe Potes, como primera medida porque se dejó consignado en el cuerpo de los mismos que debían sujetarse a los requerimientos normativos de la legislación colombiana, pero también a los requerimientos de orden legal y técnico del CONTRATANTE; pero además porque en entidad no habían servidores públicos, solo contratistas, y él en su contrato acordó ostentar tal deber, el cual tenía que enmarcarse en las funciones claras y concretas vertidas en el Manual de funciones de la entidad¹⁹³ para la época de los hechos; por ello, se considera por este ente de control que tenía entre otras, las siguientes, misión y funciones respecto del área Técnica:

“ARTICULO 18. Funciones del Área Técnica:

1. Orientar la revisión de los componentes de infraestructura, diseños, cronogramas, presupuestos...

7. Preparar la información técnica requerida por las distintas áreas de la sociedad, para la atención y resolución de las peticiones y solicitudes formuladas por la ciudadanía en general.

¹⁹³ Ver PDF: “16_RESOLUCION 119 DE 2014, MANUAL DE FUNCIONES” documento contenido en CD 1/ CARPETA DIGITAL MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS



8. Emitir los conceptos escritos que se requieran en los temas relacionados con el área.
9. Hacer parte del Comité Evaluador de los diferentes procesos contractuales que adelante Movilidad Futura S.A.S avalando con su firma y visto bueno los documentos jurídicos generados.”

En cuanto a las funciones del área de Infraestructura, tenemos:

“ARTICULO 19. Misión del Área de Infraestructura: Desarrollar las diferentes actividades encaminadas a la Gestión Técnica liderando los procesos de Infraestructura que se requieren para la implementación del SETP.

ARTÍCULO 20. Funciones del Área de Infraestructura.

7. Ejercer la supervisión de las obras y la interventoría según las condiciones técnicas del contrato.
8. Evaluar y revisar los informes mensuales de los avances de obra y desempeño de la interventoría.”

Como se desprende de la descripción de estas funciones, vemos que no se especifica en el documento que las mismas debe ejecutarse un funcionario público, en ellas claramente se esboza que tales derroteros están trazados para un área de la entidad, es decir, que todo aquel que sea vinculado a la misma, debe necesariamente ajustarse a lo descrito, de lo contrario, no tendría ningún sentido que en los contratos de prestación de servicios se especificara a que área se asigna el contratista.

Y si esto no es suficiente, se tiene que en los mismos contratos de prestación de servicios se estipuló claramente lo siguiente tanto en el Contrato 07 de 2014 como en el Contrato 08 de 2015, específicamente en el párrafo primero de cláusula segunda:

“PARAGRAFO PRIMERO: las obligaciones, actividades y/o productos son enunciativos, pues su concreta realización depende de las necesidades que se vayan presentado en desarrollo del contrato y de las necesidades de la Sociedad...”

Con lo transcrito se corrobora, que independiente de las cláusulas del contrato las acciones a ejecutar en virtud del mismo por parte del señor Pedro Felipe Potes, dependían de las necesidades de la Sociedad y por ende de las dependencias a las que fue asignado en virtud de los mismos, dependencias que a su vez tenían una funciones concretas contenidas en un documento técnico de la sociedad como lo era el manual de funciones y procedimientos, en el que se estableció como marchaban las áreas en las que se iban a desarrollar los objetos de los contratos de prestación de servicios y que según los citados negocios jurídicos, era parte integral de ellos, por así haberse dispuesto expresamente.

De esta manera, se ratifica esta gerencia colegiada en que el señor PEDRO FELIPE POTES identificado con C.C. 10.546.275 en calidad de LIDER DE GESTIÓN y/o

COORDINADOR DEL ÁREA TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURA de MOVILIDAD FUTURA y conforme al manual de funciones antes descrito, estaba llamado a verificar la liquidación que efectuó el señor OSCAR CAICEDO y no lo hizo porque además de haber avalado el error cuando remitió el informe suscrito por el ingeniero OSCAR CAICEDO, omitió verificarlo y conjurar el error los comités de conciliación; irregularidades que con ocasión de la gestión fiscal, permitieron que se consolidara el hecho irregular y con ello, el detrimento patrimonial que se investiga.

Recordemos que en la trazabilidad final de la gestión contractual y a inicios de la precontractual, ante el incumplimiento del contrato objeto de investigación y con ocasión del inicio de un proceso sancionatorio en contra del contratista, Movilidad Futura el 10 de diciembre de 2014, por medio del ingeniero OSCAR ALBERTO CAICEDO FERNÁNDEZ¹⁹⁴, hace una relación de costos de material entregado por el CONSORCIO VÍAS DE POPAYÁN – CVP en virtud del contrato cuestionado, para efectos de efectuar el balance financiero del mismo; en este documento de fecha 10 de diciembre del 2014, titulado “BALANCE FINANCIERO CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 01-012”, se efectúa una RELACION DE COSTOS DEL MATERIAL ENTREGADO POR EL CVP documento en el que se certifica que el valor de los insumos por espacio público entregados por el contratista en diciembre del 2014 ascendía a \$618.743.536, lo cual fue un error, pese a ello, este documento que se tiene como sustento de la liquidación del contrato y de los acuerdos que culminaron con el proceso¹⁹⁵.

Tal como lo asegura este presunto responsable en su versión libre y que se ratifica en los descargos, el 16 de enero de 2015, mediate radicado 20151400012191¹⁹⁶ suscrito por los ingenieros LUIS ALBERTO GARCÍA LÓPEZ y PEDRO FELIPE POTES GONZÁLEZ en calidad de Coordinador de Infraestructura y dirigido al abogado WILLIAM ALFREDO LOMBANA SOLARTE, como secretario general de Movilidad Futura, se allega la valoración y justificación de los perjuicios causados por el presunto incumplimiento del consorcio Vías Popayán, en el que se hicieron algunos ajustes, pero en el que no se incluyó el valor de los materiales recibidos del contratista, únicamente se efectúa la valoración de los pormenores de la ejecución; adicionalmente se indica que se anexa el acta en la que no se incluye la cuantificación de los materiales, cuestionada bajo esta cuerda procesal.

Por lo anterior, no es cierto que hubiese resultado inocua la revisión, pues estos fueron los inicios del procedimiento interno que culminó siendo aprobado en la Procuraduría posteriormente, así entonces, contrario a lo esbozado por el investigado este momento en que él remite a la Gerencia de MOVILIDAD FUTURA la liquidación errada es, junto con la liquidación misma, la génesis del hecho generador de daño.

¹⁹⁴ Página 62 del PDF: “20170915_solicitud procuraduria_ANT 054-2017” y página 120 PDF: “444645 - CONSORCIO VIAS POPAYAN VS. MOVILIDAD FUTURA”

¹⁹⁵ Página 55 del PDF: “20170915_solicitud procuraduria_ANT 054-2017” y página 120 PDF: “444645 - CONSORCIO VIAS POPAYAN VS. MOVILIDAD FUTURA”

¹⁹⁶ Ver documento página 59 del PDF: “3_20170915_solicitud procuraduria_ANT 054-2017”



Ahora bien, recordemos que el 20 de enero del 2015 el ingeniero FELIPE POTES en calidad de Coordinador de Infraestructura y el ingeniero OSCAR CAICEDO en calidad de apoyo de supervisión, designados para cuantificar los perjuicios económicos causados por el Consorcio Vías Popayán en virtud del Contrato No. 001-2014, informan sobre el asunto objeto de investigación, lo siguiente que deja marcado el inicio de la cadena de erres que se cuestionan¹⁹⁷:

“NOTA: Dado que, en la primera semana de diciembre de 2014, el Consorcio Vías Popayán, entregó insumos requeridos para las obras de espacio público por la suma de \$618.743.536 ...”

Volviendo a la versión libre del señor POTES, recordemos que asegura que asistió como invitado, lo cual es cierto, pero ello no le resta importancia a que era el líder y coordinador del área de infraestructura, lo cual es importante, pues recordemos que en el Acta de Comité de Conciliación de Movilidad Futura No. 1 del 20-02-2015¹⁹⁸, se plantea en el orden del día, el análisis de la solicitud de conciliación del Consorcio Vías Popayán presentada por el Consorcio Vías Popayán en virtud del contrato de obra pública N°. 01 de 2012, con radicado 444645.18122014 de la Procuraduría 73 Judicial I, en la que interviene como invitado, entre otros, el señor PEDRO FELIPE POTES como Líder de Gestión Técnica de Infraestructura, no así, el señor OSCAR CAICEDO:

INVITADOS	
PEDRO FELIPE POTES GONZÁLEZ	Apoyo a la Gestión Técnica de Infraestructura
ALVARO CASAS TRUJILLO	Apoyo a la Gestión Jurídica
GIOVANNY ZÚNIGA PIAMBA	Apoyo a la Gestión Financiera
OSCAR CAICEDO FERNÁNDEZ	Apoyo a la Gestión Técnica de Infraestructura
JOSÉ ALBERTO GARCÍA LÓPEZ	Apoyo a la Gestión Técnica de Infraestructura
PRESIDENTE Y SECRETARIO: Ejerce como Presidente del Comité, el Gerente de la Sociedad y como Secretario Técnico el Secretario General. Se deja constancia que no asisten la ingeniera Carolina Castrillón, Líder de Control Interno, miembro del Comité, por encontrarse en licencia por enfermedad y el ingeniero Oscar Caicedo Fernández, Contratista de Apoyo a la Gestión Técnica de Infraestructura, invitado al Comité, por tener que atender compromisos personales adquiridos con anterioridad por fuera de la ciudad.	

En este documento, se indica que el valor reclamado en favor del Consorcio es el siguiente:

“C. A FAVOR DEL CONSORCIO VIAS POPAYÁN:

Insumos de espacio público entregados por el Contratista en la primera semana de 2014: \$618'743.536=

Devolución de elementos PIPMA: \$23'724.571 =

Lo anterior suma: \$642'468.107=” (Destacado fuera de texto)

¹⁹⁷ Ver documento página 59 del PDF: “3_20170915_solicitud procuraduria_ANT 054-2017”

¹⁹⁸ Ver página 166 del PDF: “24_444645 - CONSORCIO VIAS POPAYAN VS. MOVILIDAD FUTURA”



En el acta, se deja la siguiente constancia:

“El Gerente de la Sociedad invita a los asistentes a opinar y debatir el tema Se socializa y analiza lo favorable y desfavorable de conciliar o abstenerse de hacerlo y se emite la recomendación como reza enseguida.”

Vemos como la razón de ser de la invitación, se circunscribía precisamente a este caso concreto, en otras palabras, no se lo citó como convidado de piedra, sino como un actor importante en el asunto sobre el que se estaba sometiendo a consideración, tanto que se le consultó e invitó a opinar y debatir sobre el tema.

Lo mismo ocurrió en siguiente reunión, pues téngase en cuenta que en esta inicial se aplaza la aprobación de este asunto y finalmente se decide en la siguiente sesión contenida en el Acta No. 2 del del 11-03-2015, documento en el que nuevamente participa el señor PEDRO FELIPE POTES Líder de Gestión Técnica de Infraestructura y respecto de la que se ausenta el señor OSCAR CAICEDO:

PEDRO FELIPE POTES GONZÁLEZ	Apoyo a la Gestión Técnica de Infraestructura
ÁLVARO CASAS TRUJILLO	Apoyo a la Gestión Jurídica
GIOVANNY ZÚNIGA PIAMBA	Apoyo a la Gestión Financiera
OSCAR CAICEDO FERNÁNDEZ	Apoyo a la Gestión Técnica de Infraestructura
LUIS ALBERTO GARCÍA LÓPEZ	Apoyo a la Gestión Técnica de Infraestructura
PRESIDENTE Y SECRETARIO: Ejerce como Presidente del Comité, el Gerente de la Sociedad y como Secretario Técnico el Secretario General. Se deja constancia que no asisten la ingeniera Carolina Castrillón, Líder de Control Interno, miembro del Comité, por encontrarse en licencia por enfermedad y el ingeniero Oscar Caicedo Fernández, Contralista de Apoyo a la Gestión Técnica de Infraestructura, invitado al Comité, por tener que atender asuntos institucionales a la misma hora de sesión del comité, adquiridos previamente a la convocatoria.	

En esta reunión, se plasmó la siguiente decisión¹⁹⁹:

“11 ANÁLISIS DE LA SOLICITUD DE CONCILIACIÓN DEL CONSORCIO VIAS POPAYÁN EXPRESADA EN LA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN DEL DÍA 5 DE MARZO DE 2015.

*El Secretario General, presenta el caso informando a los asistentes de la propuesta **expresada por el Convocante mediante email del 4 de Marzo de 2015**, la cual se remitió previamente a los asistentes y que es la misma expresada en la audiencia de conciliación del 5 de Marzo de 2015 (radicado 444645.18122014 de la Procuraduría 73 Judicial I Administrativa), cuya copia se acompaña al acta y que se resume así: Valor de los perjuicios \$1.117'418.050= menos \$681'624.845= a favor del Consorcio Vías Popayán y como saldo a favor de MOVILIDAD FUTURA SAS. reconoce la suma de \$335'793.205= que propone pagar en tres cuotas mensuales de \$100 millones de pesos...*

...

¹⁹⁹ Páginas 62 y 117 PDF: “3_20170915_solicitud procuraduria_ANT 054-2017” y página 170 del PDF: “24_444645 - CONSORCIO VIAS POPAYAN VS. MOVILIDAD FUTURA”



2) CONCEPTO DEL COMITÉ DE CONCILIACIÓN:

...
A FAVOR DEL CONSORCIO VIAS POPAYÁN:

4. **Insumos de espacio público entregados por el Contratista en la primera semana de 2014: \$618'743.536=**

5. Devolución de elementos PIPMA: \$23'724.571 =

6. Retención de Garantía: \$39'156.737,87=

Lo anterior suma: \$681 '624.844, 87=

C) SALDO A FAVOR DE MOVILIDAD FUTURA S.A.S.: \$585'937.853,13= (quinientos ochenta y cinco millones novecientos treinta y siete mil ochocientos cincuenta y tres pesos con trece centavos)" (Destacado fuera de texto)

Nuevamente, en esta diligencia, se invita a lo siguiente:

"El Gerente de la Sociedad invita a los asistentes a opinar y debatir el tema, Se socializa y analiza lo favorable y desfavorable de conciliar o abstenerse de hacerlo y se emite la recomendación como reza enseguida..."

Igual ocurrió en el Comité de Conciliación de Movilidad Futura mediante acta No. 4 del 14-09-2015²⁰⁰, en el que sobre este asunto tramitado ante la Procuraduría, se resuelve lo siguiente respecto de las garantías que debía prestar el consorcio:

"Acceder a la solicitud de la Procuradora 73 Judicial 1; en consecuencia, se reconsidera la decisión respecto de la garantía inicialmente exigida y se acepta la garantía hipotecaria para afianzar el compromiso de pago de las sumas a favor de MOVILIDAD FUTURA SAS" señaladas en el acta 02 de fecha 11 de Marzo de 2015 de éste Comité de Conciliación, Si el plazo para el pago supera los tres (3) meses, se deben pactar intereses de plazo al bancario corriente y de mora al máximo legal. También cláusula aceleratoria por incumplimiento de una sola de las cuotas y solidaridad entre los consorciados,"

Se tiene que, a la citada reunión, asistieron como invitados, entre otros, el señor PEDRO FELIPE POTES:

INVITADOS

PEDRO FELIPE POTES GONZÁLEZ	Lider Gestión Técnica de Infraestructura
ALVARO CASAS TRUJILLO	Apoyo a la Gestión Jurídica
LILIANA RIOMALO RIVERA	Apoyo Gestión Presupuestal
JANETH MONZÓN BRAVO	Lider Gestión Predial y Reasentamientos
MELBA O. CASAS PEÑA	Lider Gestión Financiera

²⁰⁰ Página 212 del PDF: "24_444645 - CONSORCIO VIAS POPAYAN VS. MOVILIDAD FUTURA"



Es evidente entonces, que el señor PEDRO FELIPE POTES no está vinculado al presente proceso como servidor público como erradamente se expresa en los descargos, sino como contratista y tal calidad, por ministerio de la Ley 610 de 2000 puede ser vinculado como presunto responsable, pues su artículo 1 dispone:

*“ARTÍCULO 1o. DEFINICION. El proceso de responsabilidad fiscal es el conjunto de actuaciones administrativas adelantadas por las Contralorías con el fin de determinar y establecer la responsabilidad de los servidores públicos y de los particulares, cuando en el ejercicio de la gestión fiscal **o con ocasión de ésta**, causen por acción u omisión y en forma dolosa o culposa un daño al patrimonio del Estado.”* (destacado fuera de texto)

Así las cosas y como ya se advirtió párrafos atrás en esta providencia, la gestión que demanda la Ley 610 de 2000 para determinar la responsabilidad, en este caso de un particular como el señor POTES en calidad de contratista, de cara a los recursos públicos, no solo se circunscribe a la administración, manejo, custodia y demás acciones de que trata el artículo 3, como lo asegura en su versión libre, pues con ocasión de la gestión fiscal, pueden darse las circunstancias necesarias para generar un año al erario, así lo ha indicado la H. Corte Constitucional en Sentencia C-840 del 2001:

“El sentido unitario de la expresión o con ocasión de ésta sólo se justifica en la medida en que los actos que la materialicen comporten una relación de conexidad próxima y necesaria para con el desarrollo de la gestión fiscal. Por lo tanto, en cada caso se impone examinar si la respectiva conducta guarda alguna relación para con la noción específica de gestión fiscal, bajo la comprensión de que ésta tiene una entidad material y jurídica propia que se desenvuelve mediante planes de acción, programas, actos de recaudo, administración, inversión, disposición y gasto, entre otros, con miras a cumplir las funciones constitucionales y legales que en sus respectivos ámbitos convocan la atención de los servidores públicos y los particulares responsables del manejo de fondos o bienes del Estado. La locución demandada ostenta un rango derivado y dependiente respecto de la gestión fiscal propiamente dicha, siendo a la vez manifiesto su carácter restringido en tanto se trata de un elemento adscrito dentro del marco de la tipicidad administrativa.”

De lo anterior se colige que el presunto responsable por su perfil de ingeniero era un sujeto cualificado para evidenciar el error que se cuestiona en esta cuerda procesal, para ello es necesario que su omisión “contribuya” “con ocasión” de la gestión fiscal al detrimento al erario y en el caso concreto, el no haber evidenciado el craso error estando en el deber de hacerlo, se constituyó en una situación conexa, próxima y necesaria con la generación de daño; quedando evidenciado así el nexo causal que demanda la Ley 610 de 2000 para imputar responsabilidad fiscal.

De esta manera, es evidentemente reprochable que el señor Pedro Felipe Potes en calidad de Líder y Coordinador del área de Infraestructura de Movilidad Futura, no haya verificado la información vertida en el documento que contenía la liquidación errada que remitió a la Gerencia, la cual se aprobó en varias sesiones de Comité de Conciliación a las que asistió en calidad de invitado, pero no cualquiera, sino a uno especializado y



conocedor del proceso; es evidente con lo anterior, que este funcionario tenía perfectamente claro cuáles eran los intereses en juego y por ello tenía pleno conocimiento de los hechos, ítems y actividades que debían ser valoradas; ahora bien., como ingeniero civil tenía el conocimiento y elementos de juicio para evidenciar el error, pero no lo hizo por negligencia, descuidando el erario.

Así entonces, al señor PEDRO FELIPE POTES identificado con C.C. 10.546.275 y en calidad de Coordinador del Área Técnica se Infraestructura de Movilidad Futura, se le debe fallar con responsabilidad fiscal en los términos del artículo 53 de la Ley 610 de 2000, pues no ejecutó las acciones especializadas propias de su profesión de cara al hecho que se investiga y con estas omisiones permitió, facilitó y coadyuvó en el proceso de aprobación de una liquidación que reconoció de manera injustificada el reconocimiento de unos mayores valores en favor del contratista, gestiones irregulares que deben ser calificadas como GRAVEMENTE CULPOSAS, pues no estamos al frente de cualquier descuido, sino en una grave irregularidad con la que se causó el presunto detrimento patrimonial, es decir, si en mínima diligencia el investigado hubiese ejecutado la verificación de una situación que solo los ingenieros estaban en la capacidad de dilucidar, como era el de advertir la forma en que debían ser cuantificados los materiales entregados por el contratista, si como ingeniero se hubiese tomado el trabajo de al menos leer la valoración de estos costos, en virtud de su perfil, estaba en la plena capacidad y facultad de detectar el error cometido a sabiendas que estos se iban a someter a consideración del Comité de Conciliación, se habría podido fácilmente conjurar y evitar el daño, pero injustificadamente no lo hizo, por ello se procederá en su contra, en los términos de la norma mencionado.

- MIEMBROS DEL CONSORCIO VIAS POPAYAN

Que el CONSORCIO VIAS POPAYAN con NIT. 900580034-2, en calidad de contratista está compuesto por:

- GARCIA RIOS CONSTRUCTORES S.A. NIT. 800093266-2 en un 50%.
- FABIAN GARCIA RIOS C.C. 16.694.142²⁰¹ de Cali en un 25%.
- EDUARDO GIRONZA LOZANO C.C. 16.243.259²⁰² de Cali en un 25%, tal como se pactó en el documento consorcial²⁰³.

Antes de entrar a analizar la defensa de los consorciados, debe destacar el despacho

²⁰¹ Página 131 del PDF: "7_12 A 209 ANT-054-2017"

²⁰² Página 132 del PDF: "7_12 A 209 ANT-054-2017"

²⁰³ Ver página 11 del PDF: "87_CARPETA 4 CONTRATO 01-2012" y Página 124 del PDF: "7_12 A 209 ANT-054-2017"



que la razón de ser de su unión de cara al contrato, los integró al sistema y con ello a los fines y propósitos del Estado, esto quiere decir, que tanto las personas naturales, como la jurídica, que lo conforman, estaban en el deber de establecer todos procedimientos tendientes a ejercer las reclamaciones conforme a la realidad contractual y abstenerse de requerir el reconocimiento de derechos inexistentes, como ocurrió en el particular; por tanto, al omitir la lealtad debida y optar por estas acciones reprochables, permitieron que se generara el detrimento patrimonial.

Así entonces, la gestión de los miembros del CONSORCIO VIAS POPAYAN, además de enmarcarse en el contexto de la gestión fiscal con ocasión de esta de que trata el artículo 01 de la Ley 610 de 2000²⁰⁴, deben ser tenidos como presuntos responsables fiscales de manera individual, por las razones atendidas hasta el momento, aclarando lo siguiente:

La calidad del consorcio y sus consorciados de cara a la responsabilidad fiscal, debe ser abordada desde la Ley 80 de 1993, por cuanto en su artículo 7 define el Consorcio así:

"cuando dos o más personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de un contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de la propuesta y del contrato, afectarán a todos los miembros que lo conforman.

...

Parágrafo: Los miembros del consorcio y de la unión temporal deberán designar la persona que, para todos los efectos, representará al consorcio o unión temporal y señalarán las reglas básicas que regulen las relaciones entre ellos y su responsabilidad."

Que el artículo 52 de la Ley en comento, determinó que:

"...Los consorcios y uniones temporales responderán por las acciones y omisiones de sus integrantes, en los términos del artículo 7o de esta ley..."

Es así como el consorcio y la UT actúan por conducto de un representante que atiende a nombre de sus integrantes los requerimientos y trámites exigidos y cuenta con amplias facultades de representación otorgadas por los participantes de estas dos figuras y estos a su vez son responsables de los actos cometidos a través de su representante legal.

²⁰⁴ "ART. 1º—Definición. El proceso de responsabilidad fiscal es el conjunto de actuaciones administrativas adelantadas por las contralorías con el fin de determinar y establecer la responsabilidad de los servidores públicos y de los particulares, cuando en el ejercicio de la gestión fiscal o (con ocasión de ésta)*, causen por acción u omisión y en forma dolosa o culposa un daño al patrimonio del Estado." (Nota: La expresión "con ocasión de ésta", contemplada en el presente artículo, fue declarada exequible condicionalmente por la Corte Constitucional en Sentencia C-840 de 2001, bajo el entendido de que los actos que la materialicen comporten una relación de conexidad próxima y necesaria para con el desarrollo de la gestión fiscal).



La Corte Constitucional ha determinado la naturaleza de esta tipología asociativa y en tal sentido ha señalado que:

"C..) el consorcio es un convenio de asociación, o mejor, un sistema de mediación que permite a sus miembros organizarse mancomunadamente para la celebración y ejecución de un contrato con el Estado, sin que por ello pierdan su individualidad jurídica, pero asumiendo un grado de responsabilidad solidaria en el cumplimiento de las obligaciones contractuales."²⁰⁵

Entrando a la responsabilidad propiamente dicha, el Consejo de Estado, en Sentencia unificadora²⁰⁶ modificó la línea jurisprudencial que se venía siguiendo y consideró que si bien las uniones temporales y los consorcios no constituyen personas jurídicas distintas de quienes integran la respectiva pluralidad de oferentes o de contratistas, lo cierto es que además de contar con la aptitud para ser parte en los procesos judiciales de origen contractual –comoquiera que por ley cuentan con capacidad suficiente para ser titulares de los derechos y obligaciones derivadas tanto de los procedimientos de selección como de los propios contratos estatales-, también se encuentran facultados para concurrir a los procesos judiciales de esa misma índole –legitimatio ad processum–, por intermedio de su representante, exponiendo:

"(...) el hecho de que los consorcios y las uniones temporales carezcan de personalidad jurídica independiente, no constituye fundamento suficiente para concluir que carecen de capacidad para ser sujetos, activos o pasivos, en un proceso judicial.

La jurisprudencia reiterada de la Corte Suprema de Justicia puso de presente, desde hace varios lustros, que la capacidad para comparecer en juicio no se encuentra, en modo alguno, supeditada al requisito de la personalidad jurídica, tal como lo evidencian los pronunciamientos consignados en el fallo emitido por su Sala Plena, en agosto 23 de 1984, oportunidad en el cual sostuvo:

"2°). - Que las funciones de ejecución administrativa y de representación en juicio no están supeditadas a la circunstancia de que los entes respectivos sean personas jurídicas. (Se deja resaltado).

"3°). - Que la personalidad jurídica, así como la personería jurídica o de representación y para comparecer en juicio, son de mera estirpe legal pero no de rango constitucional y pueden por tanto ser modificadas por ley sin violar la constitución.

(...)

"4. - Y siendo la ley y no de Constitución la determinación de la personalidad jurídica, así como de ley es la facultad de modificar la ley y lo que por ésta se puede hacer, según lo previsto en el artículo 76-1 de la Carta, en la resulta se tiene que la mera circunstancia de que por norma con fuerza legal se inviste a la Procuraduría de capacidad o aptitud para

²⁰⁵ Sentencia C-414/1994. M.P. Antonio Barrera Carbonell.

²⁰⁶ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sala Plena, Sentencia de 25 de septiembre de 2013, exp. 19933, actor: Consorcio Glonmarex. Consejero Ponente Mauricio Fajardo Gómez



disponer del Presupuesto Nacional asignado al Ministerio Público, sin ser aquella persona jurídica, no depende sino del legislador; nadie se lo prohíbe, ni siquiera la Constitución ...

“Ante lo cual, atendidas las amplias facultades otorgadas al legislador extraordinario, según lo examinado atrás, era de su resorte, al reorganizar la Procuraduría, otorgar las funciones señaladas de ordenación del gasto, de contratación y de colaboración en la tarea de ejecución presupuestal, de que tratan los tres preceptos demandados, sin parar mientes en que la Procuraduría o el Ministerio Público sean o no personas jurídicas de derecho público, cosa que sólo atañe a la ley, acaso también a la técnica y a la estética, pero que no interfiere con la Constitución”²⁰⁷

(...) En este orden de ideas se modifica la tesis que hasta ahora ha sostenido la Sala, con el propósito de que se reafirme que, si bien los consorcios y las uniones temporales no constituyen personas jurídicas independientes, sí cuentan con capacidad, como sujetos de derechos y obligaciones (artículos 44 del C. de P.C. y 87 C.C.A.208), para actuar en los procesos judiciales, por conducto de su representante, sin perjuicio, claro está, de observar el respectivo jus postulandi (...)

La Oficina Jurídica de la Contraloría General de la República, se le solicitó conceptuar sobre este tema, en los siguientes términos:

“...[e]s posible dentro de un proceso de responsabilidad fiscal o una indagación preliminar de competencia de las Contralorías, vincular como presunto responsable directamente al Consorcio o la Unión Temporal contratista a través de su representante?...”, al igual que requiere se le informe sobre la “...posición de la Oficina Jurídica de la Contraloría General de la República con respecto a este tema y al cambio de posición jurisprudencia’, en cuanto a la aplicación en los procesos de responsabilidad fiscal en indagaciones, especialmente teniendo en cuenta la norma sobre responsabilidad contractual tanto de los consorcios como de las uniones temporales...”

La respuesta fue dada por concepto 2014EE0195713 del 11 de diciembre del 2014 se apoya en la sentencia transcrita y concluye lo siguiente:

“Por consiguiente y corolario de lo normativa y jurisprudencialmente decantado, arriba referenciado y transcrito, se puede concluir, que frente al proceso de responsabilidad fiscal que ocupa la órbita de competencia funcional de las contralorías, en el evento de que el proceso a adelantarse comporte la ejecución de un contrato estatal suscrito con un consorcio o una unión temporal, a través del cual exista la posible causación de un daño al patrimonio público, se deben vincular como presuntos responsables al consorcio o a la unión temporal a través de su representante legal así como a los miembros que los integren, para que comparezcan al proceso y en ese orden ejerzan el derecho de defensa que les asiste, pues resulta diáfano, que tanto los unos como los otros, por virtud de la ley,

²⁰⁷ Corte Suprema de Justicia. Sala Plena. Sentencia de agosto 23 de 1984. Expediente 1157. M. P. Dr. Manuel Gaona Cruz.

²⁰⁸ Como de igual modo, según se ha indicado ya dentro de este pronunciamiento, lo establecen los artículos 141 de la Ley 1437 de 2011 y 53 y 54 de la Ley 1564 de 2012.



son contratistas, y por ende se convierten en colaboradores del Estado, y así deberán entrar a resarcir el daño que le ocasionen como consecuencia de la defectuosa o nula ejecución del contrato estatal celebrado, si, del proceso mismo, ello se concluye.”

En este punto conviene analizar si un contratista como el consorcio vinculado al presente proceso, puede ser tenido como presunto responsable, hecho que la oficina Jurídica de la Contraloría General de la República ha abordado²⁰⁹, en especial en el Concepto Jurídico No. OJ.EE 54418-06, según el cual resulta viable aceptar que si pueden ejercer gestión fiscal y pueden con sus actuaciones u omisiones incurrir en responsabilidad fiscal:

“Cumplimiento de fines estatales, prestación de servicios públicos, satisfacción de derechos e intereses de los administrados: esta es la teleología de los contratos estatales. Del régimen de los particulares se predica que prestan una función social, respetando sus utilidades, colaborando en el cumplimiento de los fines de la contratación estatal y ello conlleva obligaciones correlativas con la labor que desarrollan.

Persiguiendo la finalidad señalada y habiendo en la contratación estatal erogación de recursos públicos o destinación de fondos, estamos ante la existencia de gestión fiscal siempre que el contratista tenga facultades de manejo o administración del erario. Lo anterior, desde luego no sugiere, que el contrato celebrado por la administración con el respectivo particular tenga como objeto el manejo o administración de los recursos o fondos públicos, sino que, en el transcurso de un objeto contractual el particular tenga la posibilidad, tanto física como material, de desarrollar alguna de las conductas descritas en el artículo 3° de la Ley 610 de 2000...

(...)

Así las cosas, junto a la promulgación de actos administrativos y el desarrollo de actuaciones de la misma naturaleza, los contratos estatales son los elementos más importantes con que cuenta el Estado para desarrollar la gestión fiscal. “El contrato es el instrumento jurídico para la ejecución de la planificación y del presupuesto y para asegurar (sic) el cumplimiento de los fines del Estado”.²¹⁰ Desechar la vigilancia y control sobre los mismos por parte de las Contralorías, conlleva prescindir del control fiscal con las implicaciones de lo mismo en los regímenes constitucionales contemporáneos.

Velar por el adecuado uso y manejo de los recursos públicos a través de los contratos estatales es labor de los organismos de control fiscal, hace parte del control fiscal.”

Ahora bien, es claro que el contrato 001-2012 suscrito entre este consorcio y Movilidad Futura, tuvo como objeto dar cumplimiento a unos fines estatales y la realización de unos bienes jurídicos como son la movilidad en el municipio de Popayán, en cabeza de todos los ciudadanos de dicha municipalidad y atendiendo a que el negocio jurídico se financió con recursos públicos, necesariamente debemos recurrir a la Ley 80, norma que en su artículo 5°, enfatiza estos deberes y derechos de los contratistas, entre ellos tenemos:

209 Véase también el concepto 80112 – EE69878 de Noviembre 25 de 2008

210 ESCOBAR GIL Rodrigo. Teoría General de los Contratos de la Administración Pública. Editorial LEGIS. Primera Edición. 1999. Pág. 64



“ARTÍCULO 5o. DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS CONTRATISTAS. Para la realización de los fines de que trata el artículo 3 de esta ley, los contratistas:

(...)

2o. Colaborarán con las entidades contratantes en lo que sea necesario para que el objeto contratado se cumpla y que éste sea de la mejor calidad; acatarán las órdenes que durante el desarrollo del contrato ellas les impartan y, de manera general, obrarán con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando las dilaciones y entramientos que pudieran presentarse.

(...)

4o. Garantizarán la calidad de los bienes y servicios contratados y responderán por ello.”

La H. Corte Constitucional en Sentencia C-449 de 1992, con la ponencia del magistrado Alejandro Martínez Caballero manifestó lo siguiente sobre la contratación:

“...la actividad contractual en el Estado social de derecho es una modalidad de gestión pública, regida por los principios de igualdad, moralidad, eficacia, celeridad, economía, imparcialidad y publicidad previstos en los artículos 209 y 123 de la Constitución Política como parámetros específicos del cumplimiento de la función administrativa y que “en general, constituyen núcleo axiológico inherente a la filosofía del Estado social de Derecho.”

De igual modo, esta honorable corporación en sentencia C-088 del 2 febrero de 2000 manifiesta:

“...la prevalencia del interés general; la proclamación de un orden justo y la vigencia de los principios axiológicos que en el Estado Social de Derecho guían la contratación pública, como modalidad de gestión que compromete el patrimonio y los recursos públicos, cuya intangibilidad las autoridades están obligadas a preservar (artículos. 209) hacen, a todas luces, necesario que el legislador adopte mecanismos idóneos para hacer efectiva la responsabilidad patrimonial de los responsables de la contratación estatal, con miras a la recuperación de la totalidad de las sumas que se desvían del patrimonio público, a causa de la corrupción administrativa, en materia de contratación pública.”

El Estado, para este caso Movilidad Futura, en cumplimiento de sus deberes, de sus fines esenciales y en ejercicio de sus funciones públicas, se ve en la necesidad de firmar contratos como el 001-2012 suscrito con el Consorcio Vías Popayán, contratista que a su vez y por su voluntad asumió el hacer efectivo unos fines públicos a financiarse con recursos del Estado, los cuales además de que no se alcanzaron conforme a las obligaciones contractuales, fueron defraudados en el sentido de que el contratista reclamó valores que no se ajustaron a la realidad contractual, facilitando, coadyuvando y permitiendo la generación del presunto detrimento patrimonial que se investiga; motivo por el cual se han vinculados los consorciados al presente proceso.

Descendiendo al caso concreto, el documento consorcial por el que se vincularon los tres



presuntos responsables, se lee de la siguiente manera²¹¹:

Los suscritos, **FABIAN GARCIA RIOS y FABIAN GARCIA RIOS y EDUARDO GIRONZA LOZANO**, debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de **GARCIA RIOS CONSTRUCTORES S.A. y SI MISMO y SI MISMO**, respectivamente, manifestamos por este documento, que hemos convenido asociarnos en **CONSORCIO**, para participar en la contratación de la referencia cuyo objeto es **REHABILITACIÓN VIAL Y CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO PARA EL SETP DEL TRAMO 1: CARRERA 6 (CALLE 21N Y CALLE 25N); CARRERA 6A (CALLE 2N - CALLE 8N) Y CALLE 7N (CARRERA 6 - CARRERA 6A); CALLE 1N (CARRERA 3 Y CARRERA 4) Y CARRERA 3 (CALLE 1 Y CALLE 1N) Y TRAMO 2: CALLE 5 (CARRERA 19 Y CARRERA 22A); CALLE 5 (CARRERA 27A Y CARRERA 28)**, y por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. La duración de este Consorcio será igual al término de la ejecución y liquidación del contrato.
2. El Consorcio está integrado por:

Que estos consorciados, en calidad de contratistas, fueron vinculados al proceso e imputados, por cuanto fueron quienes impulsaron la acción de liquidación extrajudicial y calidad de convocantes ante la Procuraduría General de la Nación, argumentan en el hecho 7 de su demanda, entre otras cosas, lo siguiente²¹²:

“2.- Que como parte del contrato se entregaron a la entidad que aquí se convoca materiales de construcción y elementos de construcción y señalización (Pipman) los cuales están a buen recaudo de la entidad llamada a conciliar por valor de \$ 618.743.536.”

Que en las diligencias adelantadas ante la Procuraduría, coadyuvaron con la generación del presunto detrimento patrimonial que se investiga, pues tomaron como propio en su reclamación, el error que Movilidad Futura había presentado por medio de su contratista y en el comité de conciliación del mes de marzo del 2015, siendo ellos, los primeros conocedores del valor real y cantidades de los materiales que entregaron a la entidad en virtud del contrato.

• **CONSORCIADO CONTRATISTA EDUARDO GIRONZA LOZANO**

Una vez surtida la notificación del auto de apertura, el señor **EDUARDO GIRONZA LOZANO** rindió versión libre el 03 de febrero del 2022²¹³, en donde manifiesta los hechos que dieron lugar a la apertura de la presente actuación se tipifican como cosa juzgada

²¹¹ Ver página 11 del PDF: “87_CARPETA 4 CONTRATO 01-2012” y Página 124 del PDF: “7_12 A 209 ANT-054-2017”

²¹² Página 3 del PDF: “24_444645 - CONSORCIO VIAS POPAYAN VS. MOVILIDAD FUTURA”

²¹³ VERSION LIBRE PROCESO MOVILIDAD FUTURA y 20220203 VERSION LIBRE EDUARDO PRF 858



toda vez que como es de conocimiento de este despacho en la actualidad cursa en el Juzgado 04 Administrativo de Popayán expediente 2017-0168 proceso ejecutivo en el que se libró mandamiento de pago, el cual transcribe; adicional a ello, manifiesta que hay una medida cautelar, producto de la cual se han hecho tres depósitos judiciales y que actualmente se está desatando un recurso tendiente a que se entreguen estos dineros a la entidad.

Destaca que siempre ha buscado alternativas conciliatorias ante Movilidad Futura, entidad que ha guardado silencio demostrando con ello un interés de lucrarse injustificadamente, incrementando la obligación inicial exorbitantemente.

Posteriormente, se tiene que este presunto responsable, en escrito de del 28 de noviembre del 2022²¹⁴, indica que MOVILIDAD FUTURA fue la encargada de todo el proceso de evaluación, control, liquidación y cuantificación de los valores correspondientes para cada ítem de los materiales; puntualiza que con posterioridad a la cuantificación de los materiales, se llevaron a cabo y se cumplieron los presupuestos legales ante las entidades encargadas de vigilar y validar que estos valores dados por la empresa mencionada, se encontraban en debida forma, cumpliendo con los parámetros legales para ser consignados en las actas y acuerdos dados entre las partes intervinientes en el contrato de obra, quedando plasmadas en el acta 342 del 05 de noviembre de 2015 ante la Procuraduría 73 judicial I y demás instancias.

Destaca que siempre ha buscado alternativas conciliatorias ante Movilidad Futura, entidad que ha guardado silencio demostrando con ello un interés de lucrarse injustificadamente, incrementando la obligación inicial exorbitantemente.

Finalmente solicita lo siguiente:

“Por lo anterior, y para concluir con respecto a los hechos que aquí se citan claramente se puede establecer que los mismos ya se resolvieron por el Juzgado Cuarto Administrativo de Popayán, por lo tanto, es necesario que esta contraloría archive el proceso radicado bajo partida 2019-00858.”

Como primera medida debe advertir este despacho, que no comparte la posición del investigado, relacionada con la figura de la cosa juzgada, toda vez que en el proceso ejecutivo que se adelanta por Movilidad Futura en su contra, no se podrán recuperar los recursos públicos que con el presente se investigan, pues como en su momento se advirtió, el hecho generador de daño se circunscribe al reconocimiento de un mayor valor en materiales que fueron recibidos del contratista, por tanto, en la liquidación del contrato se otorgó un derecho patrimonial inexistente a un tercero en perjuicio de los recursos públicos y que no podrá ser resarcido en el proceso judicial, precisamente porque en el documento que contiene la obligación clara, expresa y exigible se sobredimensionó el

²¹⁴ 20221128 RECURSO EDUCARDO GIRONZA PRF 858 y RECURSO DE REPOSICIÓN-APELACIÓN EGL



valor de los materiales, reconociéndoles un derecho inexistente; así las cosas, no es posible bajo ninguna circunstancia tener como resarcido el patrimonio público por el hecho del embargo en el proceso ejecutivo, pues allá se está resarciendo el patrimonio público de cara al incumplimiento del contrato, pero en este proceso de responsabilidad fiscal, se busca el resarcimiento por el reconocimiento de unos dineros a los que no se tenía derecho alguno.

En este orden de ideas, debemos recalcar que el presunto responsable al igual que los demás consorciados, en calidad de contratistas, fueron quienes impulsaron la acción de liquidación extrajudicial y calidad de convocantes ante la Procuraduría General de la Nación, argumentan en el hecho 7 de su demanda, entre otras cosas, lo siguiente²¹⁵:

“SEPTIMO: Que al momento de tasar los perjuicios la entidad que por este medio se cita no tuvo en cuenta que existen unos elementos financieros a nuestro favor y que son reconocidos 'por la entidad y por la interventoría los cuales debieron tenerse en cuenta a la hora de establecer un posible perjuicio los cuales a groso modo enumero a continuación:

2.- Que como parte del contrato se entregaron a la entidad que aquí se convoca materiales de construcción y elementos de construcción y señalización (Pipman) los cuales están a buen recaudo de la entidad llamada a conciliar por valor de \$ 618.743.536.”

Quiere decir lo anterior, que en las diligencias adelantadas ante la Procuraduría, coadyuvaron con la generación del presunto detrimento patrimonial que se investiga, pues tomaron como propia en su reclamación, el error que Movilidad Futura había presentado con base una liquidación interna errada, aprobada en el comité de conciliación del mes de marzo del 2015, siendo ellos, los primeros conocedores del valor real y cantidades de los materiales que entregaron a la entidad en virtud del contrato, por ello, no se comparte la posición esbozada por el señor EDUARDO GIRONZA LOZANO en su defensa, pues si bien el proceso de evaluación, control y cálculo de los citados materiales se hizo por parte de la entidad afectada, en donde se validaron los valores, no es posible concluir a partir de la misma buena fe que invoca en su favor, que la contratista no tenía manera de evidenciar el craso error, por tanto al guardar silencio respecto de la liquidación errada, se hicieron responsables de su contenido y le es atribuible todo el reproche al consorcio, pues la contratista más que ningún otro, era la plena conocedora del valor de los materiales, por la simple razón que ella los adquirió.

Posteriormente, se tiene que este presunto responsable, en escrito de del 28 de noviembre del 2022²¹⁶, indica que MOVILIDAD FUTURA fue la encargada de todo el proceso de evaluación, control, liquidación y cuantificación de los valores correspondientes para cada ítem de los materiales; puntualiza que con posterioridad a la cuantificación de los mismos, se llevaron a cabo y se cumplieron los presupuestos legales

²¹⁵ Página 3 del PDF: “24_444645 - CONSORICIO VIAS POPAYAN VS. MOVILIDAD FUTURA”

²¹⁶ 20221128 RECURSO EDUCARDO GIRONZA PRF 858 y RECURSO DE REPOSICIÓN-APELACIÓN EGL



ante las entidades encargadas de vigilar y validar que estos valores dados por la empresa MOVILIDA FUTURA, se encontraban en debida forma, cumpliendo con los parámetros legales para ser consignados en las actas y acuerdos dados entre las partes intervinientes en el contrato de obra, quedando plasmadas en el acta 342 del 05 de noviembre de 2015 ante la Procuraduría 73 judicial I y demás instancias.

Conforme a lo anterior, esboza el investigado que obraron de buena fe, pues confiaron en la gestión de la entidad y por tanto, en su criterio, el error al momento de liquidar o calcular no puede atribuirse al consorcio, pues manifiesta, que en ese momento, la prioridad era culminar todos los procesos referente a este contrato con la entidad y por ello se aceptaron todas las condiciones dadas por parte de Movilidad Futura.

Con lo anterior, justifica su defensa en una ausencia de nexo causal, pues la acción u omisión no fue consiente, por cuanto los valores fueron plasmados por un tercero y los materiales entregados se encontraban en perfectas condiciones para ser valorados.

Retomando la defensa, el presunto responsable insiste que para poder calificar una conducta como dolosa, debe concurrir el elemento cognoscitivo y volitivo, es decir, actuar con el fin unívoco de causar ese resultado y para el caso concreto, considera que no se puede aplicar ya que si se mira la realidad jurídica, se procedió de buena fe al entregar los materiales en condiciones óptimas para ser valorados por la entidad contratante y fue esta la que discrimino el valor de cada uno de ellos para efectuar la liquidación.

Tal como lo afirma el investigado, en términos generales el dolo es la voluntad deliberada de cometer un acto, a sabiendas que se va a producir un resultado dañoso sobre un tercero, lo que es más conocido en el argot jurídico como dolo directo o de primer grado; no obstante, descuida que de igual forma, se actúa con dolo cuando se opta por omitir una acción de forma consciente, sabiendo que al no realizarla se cometerá un perjuicio, en otras palabras, el autor puede no querer el resultado dañino, argumento sobre el que más adelante volveremos.

Al no prosperar los argumentos de defensa, se profiere imputación de responsabilidad fiscal respecto de la que presentó descargos el 18 de julio de 2023, con recibido No. 2023ER0127036²¹⁷ en el que afirma que los materiales objeto de investigación, se entregaron por parte del contratista en el año 2014 y fueron recibidos por el Ing. Oscar Caicedo, los cual es parcialmente cierto, pues independiente de quien los recibió, lo que resulta relevante es que fueron entregados a Movilidad Futura.

Indica que la citada entidad cuantificó el valor de los materiales, hecho en su criterio le permite afirmar que Consorcio no manipuló la cifras, lo cual es cierto, no obstante, lo reprochado al contratista es que se haya usufructuado de ese error, pues como ya se

²¹⁷ 20230718 DESCARGOS GIRONZA 2023ER0127036 PRF 858 y ARGUMENTOS DEFENSA AUTO 035-14-07-2023



indicó, era el primer llamado a evidenciarlo ya que fue quien los adquirió para la ejecución del contrato.

Seguidamente indica que se cumplieron con todos los presupuestos legales ante todas las entidades encargadas de vigilar y validar que estos valores dados por la empresa MOVILIDA FUTURA, se encontraban en debida forma, lo cual es cierto, como también lo es que el yerro tuvo su génesis en dicha entidad; en este orden de ideas y pese a que se adelantó en la contratante el procedimiento interno adecuado para llevar el asunto a las instancias judiciales, no quiere ello decir que la liquidación errada haya cumplido con los parámetros técnicos aplicables a la valoración de los materiales y mucho menos, es de recibo, que el desmedró a los recursos públicos causado goce de legalidad, pese a que fue consignado en las actas y acuerdos dados entre las partes intervinientes en el proceso de liquidación; pues como se indicó en el ítem destinado al daño, la situación irregular se enmarca en el concepto de detrimento patrimonial que describe la Ley 610 2000.

Volviendo a los descargos, no es de recibo el que la actuación del consorcio se pueda encuadrar en el criterio de buena fe, pues como se anotó párrafos atrás, la contratista tenía todos los medios para evidenciar, pero sobre todo para evitar el error, en este sentido, el silencio respecto de la liquidación errada se constituye en un acto malintencionado, pues asumieron e hicieron propio el contenido de la liquidación, insistiéndose que la contratista más que ningún otro, era la plena conocedora del valor de los materiales, por la simple razón que ella los adquirió.

En el quinto punto, esboza que el otro consorciado era el que lideraba el proceso de la ejecución y arguye que es prueba de ello, que ninguna de las comunicaciones se dirigía a él, quien solo tenía un 25% de participación; para desatar este argumento se debe recurrir al numeral 7 del artículo 7 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 3 de la Ley 2160 de 2021, según el cual este tipo de porcentajes debe ser tenido en cuenta para solo para efectos de la imposición de sanciones, destacándose que con el proceso de responsabilidad fiscal no se imponen sanciones, pues es eminentemente resarcitorio.

Al respecto el Consejo de Estado - Sala de lo contencioso administrativo - Sección cuarta, indicó lo siguiente al respecto²¹⁸:

“No obstante, en la unión temporal, las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones en mención deben imponerse según el grado de participación de cada miembro en la ejecución de estas, mientras que los integrantes de los consorcios responden solidariamente frente a las sanciones.

Además, el consorcio y la unión temporal no son personas jurídicas sino la unión de personas para presentar una propuesta y celebrar y ejecutar un contrato con una entidad

²¹⁸ Fallo del 29 de abril de 2010 - Radicación número: 25000-23-27-000-2003-02200 01(16883) - Consejero ponente (E): MARTHA TERESA BRICEÑO DE VALENCIA



pública. Por ello, los acuerdos consorcial y de unión temporal han sido denominados contratos de colaboración o de agrupación²¹⁹. Y, tienen una duración limitada en el tiempo, pues, se repite, se crean solo para la presentación de una propuesta y, si resultan favorecidos, para la adjudicación, celebración y ejecución del contrato correspondiente.”

Así entonces, en el contexto de la defensa del presunto responsable, es evidente que están dados todos los elementos que exige la Ley 610 de 2000, entre ellos, el nexo causal entre el daño y los actos reprochables del contratista, ejecutados con ocasión de la gestión fiscal, pero más aún con la calificación de la conducta de estos presuntos responsables, efectuada en el auto de imputación, pues el DOLO que les ha sido atribuido y que más adelante se desarrollará a profundidad, está debidamente sustentado.

- **CONSORCIADOS CONTRATISTAS GARCIA RIOS CONSTRUCTORES S.A. y FABIAN GARCIA RIOS**

GARCIA RIOS CONSTRUCTORES S.A. NIT. 800093266-2 y FABIAN GARCIA RIOS inicialmente no comparecieron y en consideración a ello se les designó apoderado de oficio; posteriormente rindieron versión libre el 27 de febrero del 2023²²⁰; de igual forma, se les dio traslado por cinco días del informe técnico a estos presuntos responsables, contados entre los días 11 y 17 de febrero de 2023²²¹ mediante radicados 20230018306²²² y 2023EE0018313²²³ del 10 de febrero del 2023, dirigidos a ellos y a su apoderado, sin que hubiese manifestación expresa dentro del término dado, advirtiendo que en la versión libre plasmaron sus inconformidades respecto de la prueba, haciendo efectivo el derecho de contradicción, pese a ello no solicitaron aclaración y/o complementación.

De otro lado, es conveniente advertir que en documento allegado el 29 de noviembre del 2022 como recurso al fallo anulado²²⁴ por el superior, presentan argumentos que también serán decantados en esta providencia, pues contienen la primera intervención efectuada dentro de la investigación y abordan situaciones propias de los elementos de la responsabilidad fiscal, en especial sobre la vinculación del consorcio y consorciados, que conviene tener claras desde esta instancia, por ello, se retomarán para que ejerzan la contradicción que consideren pertinente.

Aseguran en la versión libre en el citado documento del 29 de noviembre del 2022 que existen inconsistencias de carácter procesal que desarrollan en varios títulos, el primero

²¹⁹ Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto 1513 de 9 de octubre de 2003 C. P. Gustavo Aponte Santos

²²⁰ 20230227 VERSION LIBRE FABIA Y GARCIA RIOS 2023ER0030221 PRF 858 y VERSION LIBRE CONTRALORIOA POPAYAN FABIAN GARCIA RIOS

²²¹ 20230217 TRASLADO 007 FABIAN GARCIA Y GARCIA RIOS PRF 00858

²²² 20230210 CERTIFICADO472 COMUNCA TRASLADO INF APODERADO FABIAN GARO 00858

²²³ 20230210 CERTIFICADO472 COMUNCA TRASLADO INF FABIAN GARO 00858

²²⁴ 20221129 PODER RECURSOS Y NULIDAD CONSORCIO VIAS POP PRF 858

denominado: “3.1.- INDEBIDA CONFORMACION DE CONTRADICTORIO POR PASIVA.”, se indica que no se vinculó al CONSORCIO VIAS POPAYAN como tal, con quien se suscribió el contrato que se cuestiona y justifica su posición en sentencias de las altas cortes que transcribe *in extensu*, para finalmente culminar su intervención al respecto, en los siguientes términos:

*“De la clara jurisprudencia traída a la colación, es evidente sin lugar a dudas, que en el proceso de responsabilidad fiscal objeto de este trámite, no se conformó en debida forma el contradictorio por **EXISTIR UN LITIS CONSORCIO PASIVO NECESARIO**, toda vez que, el **CONSORCIO VIAS POPAYAN**, Representado Legalmente por el señor Ingeniero **FABIAN GARCIA RIOS**, debió ser llamada al proceso o citado como parte pasiva del proceso de responsabilidad fiscal que aquí nos congrega, independientemente de haberse vinculado a los integrantes del mismo, por tener el **CONSORCIO VIAS POPAYAN**, capacidad sustantiva y adjetiva de comparecer a través de su representante como parte procesal y en este caso como extremo pasivo del proceso antes mencionado, y por la obvia razón de haber suscrito directamente el contrato de obra pública sometido a este control.*

*Ahora bien, el hecho de no haber convocado al **CONSORCIO VIAS POPAYAN**, Representado Legalmente por el señor Ingeniero **FABIAN GARCIA RIOS**, al presente proceso de responsabilidad fiscal como parte pasiva procesal, genera la realidad de que se tramitó todo el presente asunto fiscal, configurando la nulidad denominada “**indebida conformación del contradictorio**”, lo cual como indique en precedencia, viola el debido proceso y el derecho de contradicción y de paso conculca el derecho fundamental que arroja el artículo 29 de nuestra carta magna.” (Destacado propio de texto)*

Recordemos que la esencia de todo contrato está descrita en nuestro Código Civil de la siguiente manera:

“ARTÍCULO 1495. Contrato o convención es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser de una o de muchas personas.”

Este criterio general aplicable a los contratos suscritos por las entidades del estado, debe ser entendido para el caso concreto en el que está involucrado un consorcio, de manera sistemática con su definición legal respecto de la contratación estatal contenida en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993, lo cual no es otra cosa que la presentación conjunta de una misma propuesta por dos o más personas para la adjudicación, celebración y ejecución de un contrato, conforme a la capacidad que les fue revestida en el artículo 6 de la mencionada Ley.

Y deviene en importante lo anterior, por cuanto el consorcio y los consorciados pese a que son personas distintas, resultan siendo las mismas de cara a las obligaciones generadas al negocio jurídico, pues se asocian para desarrollar una determinada actividad de forma conjunta y así poder compartir tanto las obligaciones, como los riesgos inherentes al contrato.



En concepto Sala de Consulta C.E. 1513 de 2003, el Consejo de Estado citó la exposición de motivos de la ley 80, en donde el legislador justificó la existencia de los consorcios en los siguientes términos:

*“Ahora bien, el proyecto mantiene como núcleo jurídico fundamental del consorcio la **responsabilidad solidaria de quienes lo integran**, pero trae una modificación sustancial consistente en reconocerle personalidad jurídica para los solos efectos relacionados con el contrato (arts. 6° y 7°). Se considera que esta solución resulta ser la más conveniente en la medida en que, dejando atrás todas las discusiones en torno a su naturaleza, el hecho de reconocerle personalidad jurídica impone la necesidad de que los consorciados definan unos estatutos básicos que regulen sus propias relaciones y, principalmente, las que surgen con la entidad estatal para todos los efectos, imponiendo así claridad y precisión en el desarrollo de las mismas y del propio contrato.*

*Como se anotó, en lo relativo a la responsabilidad del consorcio, se mantiene el criterio según el cual **las personas que lo integran responden solidariamente** de las obligaciones surgidas con ocasión de la propuesta y de la celebración y ejecución del contrato. **En concordancia con lo anterior, se prevé expresamente que las actuaciones, hechos u omisiones que tengan lugar en desarrollo de la propuesta y del contrato, se imputarán a cada uno de sus miembros.**” (destacado fuera de texto)*

Descendiendo al caso concreto, tenemos que el proceso de responsabilidad fiscal es de carácter eminentemente RESARCITORIO si a ello sumamos que el espíritu de la norma que crea los CONSORCIOS determina que la finalidad de esta figura es establecer una responsabilidad solidaria de quienes lo integran, es evidente que vincular a un proceso de responsabilidad fiscal al consorcio, estando vinculados los consorciados deviene en irrelevante, pues son estos los que en últimas terminarán resarciendo el patrimonio público, con su propio peculio.

De otro lado, de llegar a vincular al consorcio al presente proceso, este comparecería por medio de su representante legal, es decir uno de los consorciados, que a su vez ya está vinculado al proceso; así entonces, el señor Fabian García Ríos consorciado vinculado al proceso, será la misma persona por medio de quien se pronunciará él como persona natural y como representante legal del consorcio, la misma persona será notificada, escuchada en versión, presentará descargos, recursos, pedirá pruebas; es decir, en la misma persona se conjugará la actividad procesal; no obstante y para efectos de cumplir los fines del estado dados al ente de control, en lo atinente al resarcimiento del patrimonio público, no tiene ningún objeto vincular al consorcio, pues en últimas los llamados a responder patrimonialmente, serán los consorciados, pues como lo determinó el legislador, la finalidad del consorcio es que “...**las actuaciones, hechos u omisiones que tengan lugar en desarrollo de la propuesta y del contrato, se imputarán a cada uno de sus miembros**”. (destacado fuera de texto)

Así mismo, el citado concepto del Consejo de Estado, indicó:



“No hay propiamente aportes de dinero, trabajo o bienes con la finalidad de constituir un capital común que sirva para desarrollar una actividad, por medio de un nuevo ente jurídico distinto de ellos, como sucede en la constitución de una sociedad, sino que cada uno conserva su individualidad jurídica y colabora con su infraestructura o parte de ella: personal, estudios, planos, diseños, sistemas, instalaciones, oficinas, tecnología, know how, maquinaria, equipos, dinero, etc. según las reglas internas del acuerdo, para elaborar la propuesta y si se les adjudica el contrato, para ejecutarlo.

El consorcio o la unión temporal no es una persona jurídica sino un número plural de contratistas que se integran para presentar una propuesta y celebrar un contrato con una entidad.” (destacado fuera de texto)

Ahora bien, el apoderado cita sentencias de la H. Corte Constitucional y del H. Consejo de Estado, en donde se hace alusión a la capacidad de los consorcios de adquirir obligaciones contractuales, lo cual es perfectamente claro para el ente de control, al igual que la titularidad de derechos y obligaciones que tienen, derivados de los contratos que suscriben, como por ejemplo, el comparecer a un proceso judicial, en torno de lo que hace girar el argumento de defensa, esto es: comparecer a un proceso judicial.

Así entonces, sobre la capacidad de comparecer en cualquier tipo de acción judicial impetrada ante al juez natural del contrato, es mucha la jurisprudencia que ha decantado la situación, destacándose Sentencia de Unificación de jurisprudencia del 25 de septiembre de 2013, expediente No. 19933, M.P. Mauricio Fajardo Gómez, en la que el Consejo acogió los criterios vertidos en las Sentencias 30250 del 29 de enero de 2014, ponente Mauricio Fajardo Gómez, y 32427 del 9 de abril de 2015, ponente Olga Mélida Valle de hoy La Hoz; en las que se enfatiza lo relacionado con las notificaciones y la capacidad para comparecer en juicio, entre otras; no obstante, debe tenerse en cuenta que en el presente proceso de responsabilidad fiscal se investiga un hecho generador de daño de cara al contrato, más no se está investigando el incumplimiento del contrato como tal y mucho menos se busca derivar responsabilidad en torno al negocio jurídico, es decir, no decide sobre las controversias que surjan con ocasión de este, pues de hacerlo se estarían usurpando las funciones y competencias del juez natural.

De esta forma, en el proceso de responsabilidad fiscal como el presente, se investiga un hecho generador de daño en el contexto de la terminación y liquidación del contrato estatal, no el incumplimiento o inejecución del negocio jurídico suscrito por el consorcio, así entonces, no se cuenta con los mismos presupuestos dados por la jurisprudencia para la vinculación del consorcio en el presente caso; ahora bien, para este asunto concreto, el plazo de ejecución del contrato en torno del cual se generó el hecho generador de daño, expiró por cuanto el citado consorcio tenía una duración en el tiempo específica, tal como se estipuló en el acuerdo consorcial, el cual comprendía desde la ejecución del contrato y hasta su liquidación²²⁵.

²²⁵ Página 124 del PDF; “444645 - CONSORICIO VIAS POPAYAN VS. MOVILIDAD FUTURA”



Adicionalmente, respecto de este negocio jurídico se efectuó un acuerdo conciliatorio confirmado por el H. Tribunal Administrativo con ponencia del magistrado David Fernando Ramírez Fajardo, correspondiéndole el radicado al expediente No.19001-23-33-004-2015-00566-00, siendo decidido mediante el Auto No. 128 del 08 de marzo del 2016²²⁶; es decir que la vida jurídica del contrato terminó y con ello, la existencia del consorcio, pues siendo este accesorio a aquel, necesariamente corrió la misma suerte, pues no tiene sentido que se mantenga viva una persona de manera indefinida en el tiempo, cuando se terminó la relación contractual que justificaba su existencia y con ello todas las instancias en las que podía ser parte, pues como ya se indicó, se suscribió un acta de conciliación ratificada en sede judicial.

Así entonces, al estar liquidado y terminado el contrato por el que se dio vida al consorcio, pero además de ello, al estar agotadas la vías judiciales ante el juez natural del contrato, es lógico que el consorcio contratista corra la misma suerte de cara al control fiscal y a la derivación de responsabilidad resarcitoria, pues se extinguió la razón por la cual nació a la vida jurídica, toda vez que la capacidad de ejercicio o capacidad legal o capacidad comercial estaba supeditada y sujeta a la existencia del contrato, situación que es relevante para efectos de buscar el desagravio al patrimonio público, ya que la personería que tuvo el consorcio Vías Popayán estaba sometida al contrato y legalmente no le era extensible a la posibilidad de adquirir bienes o de tener un patrimonio propio y autónomo, que pueda ser perseguido para el resarcimiento, por el simple hecho de que el legislador determinó que su creación tenía como único norte generar responsabilidad solidaria de quienes lo integran para efectos de poder imputar y responsabilizar a cada uno de sus miembros por las actuaciones, hechos u omisiones que tuvieran lugar en desarrollo de la propuesta y del contrato.

Así lo conceptuó el Consejo de Estado²²⁷:

“Precisamente sobre este punto, la Corte Constitucional en la sentencia C-414 del 22 de septiembre de 1994, señaló lo siguiente:

"El consorcio es una figura propia del derecho privado, utilizado ordinariamente como un instrumento de cooperación entre empresas, cuando requieren asumir una tarea económica particularmente importante, que les permita distribuirse de algún modo los riesgos que pueda implicar la actividad que se acomete, aunar recursos financieros y tecnológicos, y mejorar la disponibilidad de equipos, según el caso, pero conservando los consorciados su independencia jurídica".

Se trata aquí de aunar voluntades y esfuerzos para alcanzar un fin económico, pero no de crear un ente nuevo..."

Por lo anterior, no es procedente la vinculación del consorcio, pues se insiste que la litis que mueve el presente proceso de responsabilidad no gira en torno al contrato como tal,

²²⁶ Página 70 del PDF: "3_20170915_solicitud procuraduria_ANT 054-2017"

²²⁷ Concepto Consejo de Estado Sala de Consulta C.E. 1513 de 2003



sino a un hecho generador de daño que si bien está relacionado con este, no pretende cuestionar el cumplimiento o incumplimiento del mismo, sino las acciones y omisiones de quienes con su gestión fiscal o con ocasión de ella, permitieron, facilitaron y/o coadyuvaron en la generación del daño al patrimonio del estado y la participación de los consorciados en el hecho irregular, pues recordemos que sus miembros, por medio de su apoderado al momento de elevar la petición de conciliación ante la Procuraduría, claramente hicieron propio el error en la liquidación que solo los beneficiaba a ellos, cerrando con ello el ciclo en el que se hubiese podido conjurar el error²²⁸.

Conforme a lo esbozado, se consideró completamente inviable, innecesario e inútil, vincular al consorcio, como lo solicitó el apoderado de estos presuntos responsables.

Desvirtuados los argumentos esbozados en escrito del 29 de noviembre del 2022, por el apoderado de los contratistas consorciados, se procede a analizar los argumentos contenidos en la versión libre²²⁹.

Indican en la versión libre el representante legal y consorciado que no entiende el porqué de su vinculación, no obstante a lo largo de esta providencia y de este ítem específico se irán desarrollando los presupuestos jurídicos, probatorios y fácticos en los que se sustenta la decisión de mantener las vinculaciones; posteriormente, asegura que en el particular se le han vulnerado sus derechos, pese a ello, al momento de proferirse esta providencia se les ha enterado de la vinculación, han rendido versión libre, la han ampliado y se les ha dado la oportunidad de controvertir las pruebas en las que descansan las motivaciones sobre los elementos de la responsabilidad fiscal.

Al igual que en el escrito del 29 de noviembre del 2022, se esgrimen que el contrato suscrito por el consorcio está liquidado vía conciliación prejudicial y esta “liquidación contractual” surtida en forma bilateral ante la procuraduría surtió efectos jurídicos al ser validada por el Tribunal Contencioso administrativo del Cauca.

En la versión libre arguyen que existe “TRANSITO A COSA JUZGADA”, por cuanto en la liquidación se delimitaron las obligaciones del contrato a cargo de las partes, hecho que en su criterio inhabilitan a esta Contraloría a iniciar acciones fiscales en contra de ellos, respecto de un asunto liquidado por vía de conciliación prejudicial.

Aseguran que la conciliación en comento fue un proceso que tomó varios días hasta poder llegar a un precio justo de liquidación para las partes, en el que la entidad tenía sus propias pretensiones, al igual que el contratista; no desconoce que el contrato se ejecutó parcialmente, pero infortunadamente no pudieron finalizarlo por cuanto, asegura, se los quería someter a una serie de injusticias y abusos, no quedando otro camino que el de liquidación, por lo que acudieron a la vía prejudicial, pues no existían garantías en la

²²⁸ Página 4 del PDF: “444645 - CONSORCIO VIAS POPAYAN VS. MOVILIDAD FUTURA.pdf”

²²⁹ Ver PDF: “VERSION LIBRE CONTRALORIA POPAYAN FABIAN GARCIA RIOS”



entidad contratante, prefiriendo que la justicia impartiera su visto bueno a la liquidación.

Recuerdan que acudieron al camino legal para buscar la liquidación del contrato, el mismo por el que se los investiga fiscalmente en esta oportunidad; insiste en que la Contraloría no puede desconocer que la liquidación ha hecho tránsito de cosa juzgada, pues lo contrario quebrantaría el principio de legalidad, el debido proceso y nuestro régimen legal y constitucional que avala el procedimiento conciliatorio que dio lugar al finiquito del contrato 01 de 2012.

Afirman que en el informe técnico afloran una serie de interpretaciones equivocadas y objetivas de los hechos, recordando que toda responsabilidad objetiva esta proscrita en Colombia, tema sobre el que más adelante vuelve pero respecto de lo que conviene aclarar al versionista, que el informe técnico es una prueba y quien la rinde no está en la capacidad de analizar la gestión fiscal y mucho menos calificar la conducta, tales acciones son propias de cuerpo colegiado y el escenario dado para el efecto son, entre otras, esta providencia en la que se abordarán todos los elementos de la responsabilidad fiscal, tal como se ha hecho para cada presunto responsable y si en esta instancia se llegaren a omitir tales acciones, si sería posible alegar una responsabilidad objetiva, no de una prueba, como erradamente se presenta.

Siguiendo con la defensa, cuestionan el que este despacho señale que ellos hicieron una valoración equivocada de los insumos recibidos y aceptados en la conciliación, lo cual, en su criterio, deja entrever un acto de mala fe desplegado de parte del contratista, que lesionó los intereses de Movilidad Futura; tesis que asegura, es “*una gran mentira*” que no concuerda con la realidad, pues de ser cierto esto, la Procuraduría encargada de tramitar la Conciliación Prejudicial no habría aprobado la misma y mucho menos lo habría hecho el Tribunal Contencioso Administrativo.

De otro lado, discuten el hecho consistente en que Movilidad Futura, no busco la anulación del acuerdo conciliatorio censurado por esta entidad y tampoco adelanto una acción de lesividad, respondiendo que la citada entidad sabía lo que hacía, porque fue la que valoro los insumos y no el consorcio a su cargo.

Recalcan que inicialmente la entidad no quería recibir los materiales, hecho que fue superado en la conciliación, al haber demostrado que los mismos eran propiedad del contrato pues se compraron con estos recursos; adicionalmente, reitera que la entidad recibió los materiales y al momento de llevárselos, solicitó que no hiciera presencia ningún integrante del Consorcio Vías Popayán fin de evitar presiones o cuestionamientos, petición a la que accedieron; todo lo anterior, para insistir que la valoración del precio de los insumos objeto de reproche la hizo la contratante, hecho que se presenta insistentemente en los párrafos posteriores, haciendo hincapié en los pormenores del citado proceso de conciliación, respecto del que transcribe apartes del auto número I-128 de fecha 8 de marzo de 2016 del Tribunal que aprobó la conciliación.



Debate el versionista, el hecho de que Movilidad Futura, durante 10 meses y 17 días que duro el debate conciliatorio y luego de ser autorizados por un comité de conciliación, por los miembros de una junta directiva y luego de los análisis técnicos, jurídicos y financieros realizados por los profesionales de dicha entidad; venga a decir hoy que se cometió un presunto error de valoración de materiales y considerar con ello, que por tal hecho no se los puede responsabilizar, pues la entidad pudo no haber conciliado o en su defecto, echar atrás la conciliación.

En tal orden de ideas considera el consorcio contratista, que en este caso, el error de valoración debe ser imputable a quien lo ocasiono, es decir, Movilidad Futura la que debe ser llamada a responder, de igual manera, califica de absurdo pensar que existe responsabilidad de parte de ellos.

En consideración a esto, pasa nuevamente a transcribir la providencia I-128 de fecha 8 de marzo de 2016 del Tribunal Contencioso Administrativo de Popayán.

Teniendo en cuenta que la defensa se centra en un mismo eje, esto es, que la responsabilidad es de Movilidad Futura, se abordará el tema más adelante, por cuanto en la ampliación de la versión libre y en los descargos se retoman los mismos argumentos, al igual que la cosa juzgada de cara al acto de conciliación, como se pasa a detallar.

Por orden del superior vertida en auto URF2-1203 del 10 de octubre del 2023 la Contralora Intersectorial No. 8 de la Unidad de Responsabilidad Fiscal, se les recepcionó ampliación de la versión libre allegada mediante correo electrónico del 27 del mismo mes y año²³⁰.

No entiende el presunto responsable el por qué se los involucra al proceso, si en su criterio, no tuvieron nada que ver con el daño patrimonial, el cual asegura, fue causado por los funcionarios de Movilidad Futura.

Indica que el contrato de obra objeto de censura de su parte fue objeto de liquidación bilateral y además de conciliación prejudicial adelantada y aprobada por la PROCURADURÍA, en donde llegaron a la liquidación de común acuerdo y en donde reinó el respeto y la consideración de las normas y procedimientos, decisión a la que se llegó bajo ningún estigma de presión o presencia de nulidades al punto de que se adelantaron 10 sesiones o audiencias a fin de llegar al acuerdo conciliatorio, hecho en el parecer del investigado este despacho pretende desconocer extralimitando sus funciones y en claras vías de hecho; sobre este tema presenta doctrina y evoca jurisprudencia, que determina que la liquidación hace tránsito a cosa juzgada.

Posteriormente califica como falso el argumentado de esta Contraloría, referente a su

²³⁰ Ver PDF: "VERSION LIBRE MOVILIDAD - f"



responsabilidad en la valoración de los materiales ya que la misma no la hicieron ellos, lo que en su criterio significa que el documento de valoración o cuantificación de dichos insumos, ni fue propuesto de su parte, ni fue elaborado por ellos, tanto así que no existe elemento material probatorio en este cuestionamiento fiscal, que pruebe que eso ocurrió así; considera como grave el que existen pruebas claras e indiscutibles que demuestran que fueron los funcionarios de MOVILIDAD FUTURA SAS, los que realizaron dicha cuantificación y la impusieron.

Asegura que el valor final al que se llegó para dar por conciliada la liquidación bilateral del contrato 01 de 2012, se dio luego de que MOVILIDAD FUTURA SAS, realizara todas las consultas y averiguaciones que consideró poder conciliar, para lo cual y según consta en este proceso, se reunieron la junta directiva de esta sociedad y el comité de conciliación, calificando como un absurdo procesal el vincularlos a este trámite, pues asegura que se pretende endilgarles responsabilidades fiscales respecto de las equivocaciones cometidas por los funcionarios de MOVILIDAD FUTURA SAS, a la hora de cuantificar y establecer e imponer el valor por el cual decidían conciliar recordando adicionalmente que ese acuerdo dio tránsito a cosa juzgada, para luego transcribir apartes de las actas de conciliación.

Posteriormente describe los acuerdos a los que finalmente se llegó, para insistir en que MOVILIDAD FUTURA SAS fue la que estableció en todo momento los valores por los cuales quería conciliar y luego de todos los ejercicios propositivos, fue la que aceptó el valor de \$585.937.854 como suma a reconocer de su parte.

Posteriormente y una vez imputada responsabilidad fiscal, presentaron argumentos de defensa frente a la imputación el 18 de julio del 203 con recibido No. 2023ER0127073²³¹, documento en el que se asegura que se ha violado el debido proceso de sus prohijados en los siguientes términos:

“Con base a lo anterior, esta entidad fiscalizadora en el auto que aquí nos congrega, demuestra que mis patrocinados participaron de la etapa de investigación fiscal que dio lugar al trámite formal de este asunto mediante auto No. 451 del 6 de septiembre de 2019 y en virtud de ello y en garantía del derecho a la contradicción de mis patrocinados, estos el día 27 de febrero de 2023 rindieron versión libre y lo anterior porque se enteraron de esta situación por casualidad, tal y como de nuestra parte indicamos en un incidente de nulidad que no se encuentra resuelto en este trámite y que fue tramitado de mi parte por indebida notificación a quienes apodero en este negocio, lo cual ya genera una nueva nulidad en este asunto por cuanto la nulidad planteada de mi parte a la fecha tiene notificado el auto por medio del cual se resuelve tal incidente y sin que haya existido notificación de resolución del asunto para haber posibilitado una segunda instancia.”

²³¹ 20230718 DECARGOS FABIAN GARCIA Y GARICA RIOS 2023ER0127073 PRF 858, RESPUESTA AUTO DE IMPUTACION y 20230718 comunicacion a fabian garcia y garcia rios PRF 348



De lo descrito, se tiene que el apoderado presenta en los descargos las siguientes situaciones que fueron resueltas mediante auto 417 del 26 de agosto del 2023, que se traerá a la presente decisión de fondo por ser de gran relevancia como se puede apreciar y que cuya negativa fue confirmada en esta instancia mediante auto 461 del 06 de septiembre y en apelación resuelta por el superior con auto URF2-01203 del 10 de octubre, ambos del 2023; esto para dejar en evidencia la inexistencia de las nulidades invocadas y así tener claro que el escenario procesal se ha saneado, a fin de poder entrar a desatar los aspectos sustanciales presentados en defensa de los intereses de los presuntos responsables.

1. Que sus representados rindieron versión libre.

Lo anterior es cierto, no solo porque lo confirma el apoderado, sino porque así consta en el expediente en el que claramente el señor FABIAN GARCIA RIOS, en nombre propio y como representante legal de GARCIA RIOS CONSTRUCTORES, rindió versión libre el 27 de febrero del 2023²³²:

Santiago de Cali D.E., febrero 24 de 2023

SEÑORES
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL CAUCA
POPAYAN- CAUCA

REFERENCIA: PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL
NUMERO 2019-00858

FABIAN GARCIA RIOS, persona mayor de edad, identificado con la Cedula de Ciudadanía No. 16.694.142 de Cali, actuando en nombre propio y en calidad de Representante Legal de la Sociedad **GARCIA RIOS CONSTRUCTORES SAS**, ente de derecho privado identificado con Nit 800.093.266-2, en calidad de investigados dentro del proceso de la referencia, por medio del presente escrito me permito presentar a ustedes versión libre y espontánea, de conformidad a las siguientes consideraciones:

2. Que los presuntos responsables se enteraron de la vinculación por casualidad.

Es improcedente para el despacho que la defensa argumente que los presuntos responsables que representa fueron enterados por casualidad de la vinculación y del proceso, pues recordemos que cuando este despacho los vinculó, procedió a citar a GARCIA RIOS CONSTRUCTORES S.A. NIT. 800093266-2, entidad citada el 19 de octubre del 2021 mediante radicado 2021EE0177563²³³

²³² 20230227 VERSION LIBRE FABIA Y GARCIA RIOS 2023ER0030221 PRF 858 y VERSION LIBRE CONTRALORIOA POPAYAN FABIAN GARCIA RIOS

²³³ 20211019 2021ee0177563 citacionnotificaciongarciaariosconstructores.pdf

FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL PRF 2019-00858

Por su parte, a FABIAN GARCIA RIOS C.C. 16.694.142, citado el 19 de octubre del 2021 con radicado 2021EE0177578²³⁴ y 2021EE0177584²³⁵, a las dos direcciones conocidas:

<div data-bbox="250 457 436 483">  CONTRALORÍA <small>GENERAL DE LA REPÚBLICA</small> </div> <div data-bbox="250 504 311 512"> Popayán, </div> <div data-bbox="461 455 797 504"> <p>Contraloría General de la República :: SGD 19-10-2021 13:41 Al Comstar Cite No.: 2021EE0177578 Fol:1 Anex:0 FA:0 ORIGEN 00193-GRUPO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE CAUCA / ALFREDO ALEGRIA CA DESTINO FABIAN GARCIA RIOS ASUNTO CITACIÓN NOTIFICACIÓN PRF 2019-00853 OBS</p> </div> <div data-bbox="461 529 773 550"> <p>2021EE0177578</p>  </div>	<div data-bbox="847 457 1045 483">  CONTRALORÍA <small>GENERAL DE LA REPÚBLICA</small> </div> <div data-bbox="847 504 909 512"> Popayán, </div> <div data-bbox="1083 455 1443 504"> <p>Contraloría General de la República :: SGD 19-10-2021 13:46 Al Comstar Cite No.: 2021EE0177584 Fol:1 Anex:0 FA:0 ORIGEN 00193-GRUPO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE CAUCA / ALFREDO ALEGRIA CA DESTINO FABIAN GARCIA RIOS ASUNTO CITACIÓN NOTIFICACIÓN PRF 2019-00853 OBS</p> </div> <div data-bbox="1083 529 1419 550"> <p>2021EE0177584</p>  </div>
---	--

<p>472</p> <p>7023 800</p>		<p>FORMULARIO DE CONTROL DE PASAJES AEROS</p> <p>FORMULARIO DE CONTROL DE PASAJES AEROS</p>																			
<p>SERVICIOS PASAJES NACIONALES S.A. 987 086 987 17</p> <p>Medio Convencional de Control</p>		<p>CONTROL CERTIFICADO NACIONAL</p> <p>CONTROL CONVENCIONAL No P.O.PAYAN</p> <p>Origen de servicio: 16704186</p>																			
<p>Nombre/Razas Social: CONTROLADORA GENERAL DE LA REPUBLICA - CONTROLADORA - POYAYAN</p> <p>Referencia: 202 1627177584 Telefono: Código Postal: 19003287</p> <p>Código: POYAYAN-CAUCA Degrado: CAUCA Código Operativa: 7013460</p> <p>Nombre/Razon Social: FABIAN GARCIA RIOS</p> <p>Direccion: CALLE 17 N° 171</p>		<p>Razon Social: CONTROLADORA GENERAL DE LA REPUBLICA - CONTROLADORA - POYAYAN</p> <p>Código Postal: 19003287</p> <p>Degrado: CAUCA Código Operativa: 7013460</p> <p>Nombre/Razon Social: FABIAN GARCIA RIOS</p> <p>Direccion: CALLE 17 N° 171</p>																			
<p>TEL:</p> <p>Código Postal:</p> <p>Degrado: CAUCA Código Operativa: 7013460</p>		<p>Causal Devoluciones:</p> <table border="1"> <tr> <td><input type="checkbox"/> Rehusado</td> <td><input type="checkbox"/> No</td> <td><input type="checkbox"/> Cerrado</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> No existe</td> <td><input type="checkbox"/> No</td> <td><input type="checkbox"/> No controlado</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> No reside</td> <td><input type="checkbox"/> No</td> <td><input type="checkbox"/> Faltosito</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> No recibido</td> <td><input type="checkbox"/> No</td> <td><input type="checkbox"/> Abandonado/ Causado</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> No controlado</td> <td><input type="checkbox"/> No</td> <td><input type="checkbox"/> Faltosito</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Devolución</td> <td><input type="checkbox"/> No</td> <td><input type="checkbox"/> Faltosito</td> </tr> </table>		<input type="checkbox"/> Rehusado	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Cerrado	<input type="checkbox"/> No existe	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> No controlado	<input type="checkbox"/> No reside	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Faltosito	<input type="checkbox"/> No recibido	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Abandonado/ Causado	<input type="checkbox"/> No controlado	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Faltosito	<input type="checkbox"/> Devolución	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Faltosito
<input type="checkbox"/> Rehusado	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Cerrado																			
<input type="checkbox"/> No existe	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> No controlado																			
<input type="checkbox"/> No reside	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Faltosito																			
<input type="checkbox"/> No recibido	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Abandonado/ Causado																			
<input type="checkbox"/> No controlado	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Faltosito																			
<input type="checkbox"/> Devolución	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Faltosito																			
<p>TEL:</p> <p>Código Postal:</p> <p>Degrado: CAUCA Código Operativa: 7013460</p>		<p>Causal Devoluciones:</p> <table border="1"> <tr> <td><input type="checkbox"/> Rehusado</td> <td><input type="checkbox"/> No</td> <td><input type="checkbox"/> Cerrado</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> No existe</td> <td><input type="checkbox"/> No</td> <td><input type="checkbox"/> No controlado</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> No reside</td> <td><input type="checkbox"/> No</td> <td><input type="checkbox"/> Faltosito</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> No recibido</td> <td><input type="checkbox"/> No</td> <td><input type="checkbox"/> Abandonado/ Causado</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> No controlado</td> <td><input type="checkbox"/> No</td> <td><input type="checkbox"/> Faltosito</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Devolución</td> <td><input type="checkbox"/> No</td> <td><input type="checkbox"/> Faltosito</td> </tr> </table>		<input type="checkbox"/> Rehusado	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Cerrado	<input type="checkbox"/> No existe	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> No controlado	<input type="checkbox"/> No reside	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Faltosito	<input type="checkbox"/> No recibido	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Abandonado/ Causado	<input type="checkbox"/> No controlado	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Faltosito	<input type="checkbox"/> Devolución	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Faltosito
<input type="checkbox"/> Rehusado	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Cerrado																			
<input type="checkbox"/> No existe	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> No controlado																			
<input type="checkbox"/> No reside	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Faltosito																			
<input type="checkbox"/> No recibido	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Abandonado/ Causado																			
<input type="checkbox"/> No controlado	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Faltosito																			
<input type="checkbox"/> Devolución	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Faltosito																			
<p>TEL:</p> <p>Código Postal:</p> <p>Degrado: CAUCA Código Operativa: 7013460</p>		<p>Causal Devoluciones:</p> <table border="1"> <tr> <td><input type="checkbox"/> Rehusado</td> <td><input type="checkbox"/> No</td> <td><input type="checkbox"/> Cerrado</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> No existe</td> <td><input type="checkbox"/> No</td> <td><input type="checkbox"/> No controlado</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> No reside</td> <td><input type="checkbox"/> No</td> <td><input type="checkbox"/> Faltosito</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> No recibido</td> <td><input type="checkbox"/> No</td> <td><input type="checkbox"/> Abandonado/ Causado</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> No controlado</td> <td><input type="checkbox"/> No</td> <td><input type="checkbox"/> Faltosito</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Devolución</td> <td><input type="checkbox"/> No</td> <td><input type="checkbox"/> Faltosito</td> </tr> </table>		<input type="checkbox"/> Rehusado	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Cerrado	<input type="checkbox"/> No existe	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> No controlado	<input type="checkbox"/> No reside	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Faltosito	<input type="checkbox"/> No recibido	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Abandonado/ Causado	<input type="checkbox"/> No controlado	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Faltosito	<input type="checkbox"/> Devolución	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Faltosito
<input type="checkbox"/> Rehusado	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Cerrado																			
<input type="checkbox"/> No existe	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> No controlado																			
<input type="checkbox"/> No reside	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Faltosito																			
<input type="checkbox"/> No recibido	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Abandonado/ Causado																			
<input type="checkbox"/> No controlado	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Faltosito																			
<input type="checkbox"/> Devolución	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Faltosito																			
<p>TEL:</p> <p>Código Postal:</p> <p>Degrado: CAUCA Código Operativa: 7013460</p>		<p>Causal Devoluciones:</p> <table border="1"> <tr> <td><input type="checkbox"/> Rehusado</td> <td><input type="checkbox"/> No</td> <td><input type="checkbox"/> Cerrado</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> No existe</td> <td><input type="checkbox"/> No</td> <td><input type="checkbox"/> No controlado</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> No reside</td> <td><input type="checkbox"/> No</td> <td><input type="checkbox"/> Faltosito</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> No recibido</td> <td><input type="checkbox"/> No</td> <td><input type="checkbox"/> Abandonado/ Causado</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> No controlado</td> <td><input type="checkbox"/> No</td> <td><input type="checkbox"/> Faltosito</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Devolución</td> <td><input type="checkbox"/> No</td> <td><input type="checkbox"/> Faltosito</td> </tr> </table>		<input type="checkbox"/> Rehusado	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Cerrado	<input type="checkbox"/> No existe	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> No controlado	<input type="checkbox"/> No reside	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Faltosito	<input type="checkbox"/> No recibido	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Abandonado/ Causado	<input type="checkbox"/> No controlado	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Faltosito	<input type="checkbox"/> Devolución	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Faltosito
<input type="checkbox"/> Rehusado	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Cerrado																			
<input type="checkbox"/> No existe	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> No controlado																			
<input type="checkbox"/> No reside	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Faltosito																			
<input type="checkbox"/> No recibido	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Abandonado/ Causado																			
<input type="checkbox"/> No controlado	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Faltosito																			
<input type="checkbox"/> Devolución	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Faltosito																			
<p>TEL:</p> <p>Código Postal:</p> <p>Degrado: CAUCA Código Operativa: 7013460</p>		<p>Causal Devoluciones:</p> <table border="1"> <tr> <td><input type="checkbox"/> Rehusado</td> <td><input type="checkbox"/> No</td> <td><input type="checkbox"/> Cerrado</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> No existe</td> <td><input type="checkbox"/> No</td> <td><input type="checkbox"/> No controlado</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> No reside</td> <td><input type="checkbox"/> No</td> <td><input type="checkbox"/> Faltosito</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> No recibido</td> <td><input type="checkbox"/> No</td> <td><input type="checkbox"/> Abandonado/ Causado</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> No controlado</td> <td><input type="checkbox"/> No</td> <td><input type="checkbox"/> Faltosito</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Devolución</td> <td><input type="checkbox"/> No</td> <td><input type="checkbox"/> Faltosito</td> </tr> </table>		<input type="checkbox"/> Rehusado	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Cerrado	<input type="checkbox"/> No existe	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> No controlado	<input type="checkbox"/> No reside	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Faltosito	<input type="checkbox"/> No recibido	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Abandonado/ Causado	<input type="checkbox"/> No controlado	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Faltosito	<input type="checkbox"/> Devolución	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Faltosito
<input type="checkbox"/> Rehusado	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Cerrado																			
<input type="checkbox"/> No existe	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> No controlado																			
<input type="checkbox"/> No reside	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Faltosito																			
<input type="checkbox"/> No recibido	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Abandonado/ Causado																			
<input type="checkbox"/> No controlado	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Faltosito																			
<input type="checkbox"/> Devolución	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Faltosito																			
<p>TEL:</p> <p>Código Postal:</p> <p>Degrado: CAUCA Código Operativa: 7013460</p>		<p>Causal Devoluciones:</p> <table border="1"> <tr> <td><input type="checkbox"/> Rehusado</td> <td><input type="checkbox"/> No</td> <td><input type="checkbox"/> Cerrado</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> No existe</td> <td><input type="checkbox"/> No</td> <td><input type="checkbox"/> No controlado</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> No reside</td> <td><input type="checkbox"/> No</td> <td><input type="checkbox"/> Faltosito</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> No recibido</td> <td><input type="checkbox"/> No</td> <td><input type="checkbox"/> Abandonado/ Causado</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> No controlado</td> <td><input type="checkbox"/> No</td> <td><input type="checkbox"/> Faltosito</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Devolución</td> <td><input type="checkbox"/> No</td> <td><input type="checkbox"/> Faltosito</td> </tr> </table>		<input type="checkbox"/> Rehusado	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Cerrado	<input type="checkbox"/> No existe	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> No controlado	<input type="checkbox"/> No reside	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Faltosito	<input type="checkbox"/> No recibido	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Abandonado/ Causado	<input type="checkbox"/> No controlado	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Faltosito	<input type="checkbox"/> Devolución	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Faltosito
<input type="checkbox"/> Rehusado	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Cerrado																			
<input type="checkbox"/> No existe	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> No controlado																			
<input type="checkbox"/> No reside	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Faltosito																			
<input type="checkbox"/> No recibido	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Abandonado/ Causado																			
<input type="checkbox"/> No controlado	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Faltosito																			
<input type="checkbox"/> Devolución	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Faltosito																			
<p>TEL:</p> <p>Código Postal:</p> <p>Degrado: CAUCA Código Operativa: 7013460</p>		<p>Causal Devoluciones:</p> <table border="1"> <tr> <td><input type="checkbox"/> Rehusado</td> <td><input type="checkbox"/> No</td> <td><input type="checkbox"/> Cerrado</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> No existe</td> <td><input type="checkbox"/> No</td> <td><input type="checkbox"/> No controlado</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> No reside</td> <td><input type="checkbox"/> No</td> <td><input type="checkbox"/> Faltosito</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> No recibido</td> <td><input type="checkbox"/> No</td> <td><input type="checkbox"/> Abandonado/ Causado</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> No controlado</td> <td><input type="checkbox"/> No</td> <td><input type="checkbox"/> Faltosito</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Devolución</td> <td><input type="checkbox"/> No</td> <td><input type="checkbox"/> Faltosito</td> </tr> </table>		<input type="checkbox"/> Rehusado	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Cerrado	<input type="checkbox"/> No existe	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> No controlado	<input type="checkbox"/> No reside	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Faltosito	<input type="checkbox"/> No recibido	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Abandonado/ Causado	<input type="checkbox"/> No controlado	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Faltosito	<input type="checkbox"/> Devolución	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Faltosito
<input type="checkbox"/> Rehusado	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Cerrado																			
<input type="checkbox"/> No existe	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> No controlado																			
<input type="checkbox"/> No reside	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Faltosito																			
<input type="checkbox"/> No recibido	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Abandonado/ Causado																			
<input type="checkbox"/> No controlado	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Faltosito																			
<input type="checkbox"/> Devolución	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Faltosito																			
<p>TEL:</p> <p>Código Postal:</p> <p>Degrado: CAUCA Código Operativa: 7013460</p>		<p>Causal Devoluciones:</p> <table border="1"> <tr> <td><input type="checkbox"/> Rehusado</td> <td><input type="checkbox"/> No</td> <td><input type="checkbox"/> Cerrado</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> No existe</td> <td><input type="checkbox"/> No</td> <td><input type="checkbox"/> No controlado</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> No reside</td> <td><input type="checkbox"/> No</td> <td><input type="checkbox"/> Faltosito</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> No recibido</td> <td><input type="checkbox"/> No</td> <td><input type="checkbox"/> Abandonado/ Causado</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> No controlado</td> <td><input type="checkbox"/> No</td> <td><input type="checkbox"/> Faltosito</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Devolución</td> <td><input type="checkbox"/> No</td> <td><input type="checkbox"/> Faltosito</td> </tr> </table>		<input type="checkbox"/> Rehusado	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Cerrado	<input type="checkbox"/> No existe	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> No controlado	<input type="checkbox"/> No reside	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Faltosito	<input type="checkbox"/> No recibido	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Abandonado/ Causado	<input type="checkbox"/> No controlado	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Faltosito	<input type="checkbox"/> Devolución	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Faltosito
<input type="checkbox"/> Rehusado	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Cerrado																			
<input type="checkbox"/> No existe	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> No controlado																			
<input type="checkbox"/> No reside	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Faltosito																			
<input type="checkbox"/> No recibido	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Abandonado/ Causado																			
<input type="checkbox"/> No controlado	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Faltosito																			
<input type="checkbox"/> Devolución	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Faltosito																			
<p>TEL:</p> <p>Código Postal:</p> <p>Degrado: CAUCA Código Operativa: 7013460</p>		<p>Causal Devoluciones:</p> <table border="1"> <tr> <td><input type="checkbox"/> Rehusado</td> <td><input type="checkbox"/> No</td> <td><input type="checkbox"/> Cerrado</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> No existe</td> <td><input type="checkbox"/> No</td> <td><input type="checkbox"/> No controlado</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> No reside</td> <td><input type="checkbox"/> No</td> <td><input type="checkbox"/> Faltosito</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> No recibido</td> <td><input type="checkbox"/> No</td> <td><input type="checkbox"/> Abandonado</td></tr></table>		<input type="checkbox"/> Rehusado	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Cerrado	<input type="checkbox"/> No existe	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> No controlado	<input type="checkbox"/> No reside	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Faltosito	<input type="checkbox"/> No recibido	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Abandonado						
<input type="checkbox"/> Rehusado	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Cerrado																			
<input type="checkbox"/> No existe	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> No controlado																			
<input type="checkbox"/> No reside	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Faltosito																			
<input type="checkbox"/> No recibido	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Abandonado																			

Pero como si no fuera suficiente lo anterior, los oficios anteriormente detallados, también fueron enviados al correo electrónico²³⁶ conocido y reportado en el documento medinante el que se conformó el consorcio presupuesto@garciarios.com, los cuales llegaron a su destino²³⁷

Por su parte a también se envió a las direcciones conocidas la notificación por a aviso con radicaos 2023EE0194908 y 2021EE0194982 del 11 de noviembre del 2021²³⁸:

<div><div>CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA</div></div> <div><p>Contraloría General de la República :: 500 11-11-2021 10:59 Al Contralor Cte Exte No. 2021EE0194908 FeH1 Anexo:2 FA 72 ORIGEN 30110-GRUPPO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE CAUCA / ALFREDO ALEGRIA CAÑAM DESTINO GARCIA RIOS CONSTRUCTORES ASUNTO NOTIFICACION POR AVISO AUTOS 451 Y 750 PRF 2019-00058 OBS</p></div> <div><p>Popayán,</p><p>2021EE0194908</p></div>	<div><div>CONTRALORI GENERAL DE LA REPUBLICA</div></div> <div><p>Contraloría General de la República :: 500 11-11-2021 10:50 Al Contralor Cte Exte No. 2021EE0194908 FeH1 Anexo:2 FA 72 ORIGEN 30110-GRUPPO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE CAUCA / ALFREDO ALEGRIA CAÑAM DESTINO FABIAN GARCIA RIOS ASUNTO NOTIFICACION POR AVISO AUTOS 451 Y 750 PRF 2019-00058 OBS</p></div> <div><p>Popayán,</p><p>2021EE0194982</p></div>
<p>Señores GARCÍA RÍOS CONSTRUCTORES S.A. NIT. 800.093.266-2 Calle 6N # 2N-36, Oficina 516 Tel. 6680042 - 8841347 CALI -VALLE DEL CAUCA</p>	<p>Señor FABIAN GARCÍA RÍOS Calle 11 # 31-170 Tel. 6680042 - 8841347 ARROYONONDO YUMBO- VALLE</p>

- 234 20211019 2021ee0177578 citacionnotificacionfabiangarcia.pdf
235 20211019 2021ee0177584 citacionnotificacionfabiangarcia.pdf
236 20211019 CITACION WEB A NOTIFICACION FABIAN PRF 858.pdf
237 20211019 CITACION WEB A NOTIFICACION FABIAN_2 PRF 858.pdf
238 20211111 notificacionxavisosconstructores 00858.pdf



Es de advertir que estas citaciones y aviso fueron recepcionada en su destino²³⁹, no obstante, se hizo devolución mediante radicado 2021ER0177392 del 10 de diciembre del 2021 recibida en este ente de control dos días después, advirtiéndose por parte la señora CLAUDIA INES PABON MOSQUERA representante legal de la firma Rocales y Concretos²⁴⁰, lo siguiente:

1.- Que desde hace días a nuestras instalaciones ubicadas en la Calle 6N Número 2 N 36, Oficina 516 del Edificio el Campanario de la Ciudad de Cali, nos están llegando documentos dirigidos a la firma **GARCIA RIOS CONSTRUCTORES SAS** y del Señor **FABIAN GARCIA RIOS** y no entendemos el por qué se entregan estos documentos en esta sociedad que como podrán verificar en el certificado de Existencia y Representación Legal que se adjunta, es muy diferente a la empresa a la cual ustedes envían los documentos y paquetes en comento.

2.- Ded igual forma se remite información a la dirección CALLE 11 NUMERO 31-170 ARROYO HONDO YUMBO VALLE, ubicación esta donde en la actualidad operan nuestras plantas de producción de concretos y asfaltos.

Se debe indicar que en algún tiempo en esta dirección opero la firma GARCIA RIOS CONSTRUCTORES, PERO DICHAS INSTALACIONES FUERON ADQUIRIDAS por nuestra firma como también consta en certificado de Existencia y Representación Legal que allegamos con esta misiva.

3.- Finalmente me permito señalar que hacemos devolución de dos paquetes en sobre de manila y dos oficios (2021EE0177578 Y 2021EE0177563)

Ahora bien, es importante lo anterior, por cuanto el escrito de descargos frente a la imputación se encabeza de la siguiente manera:

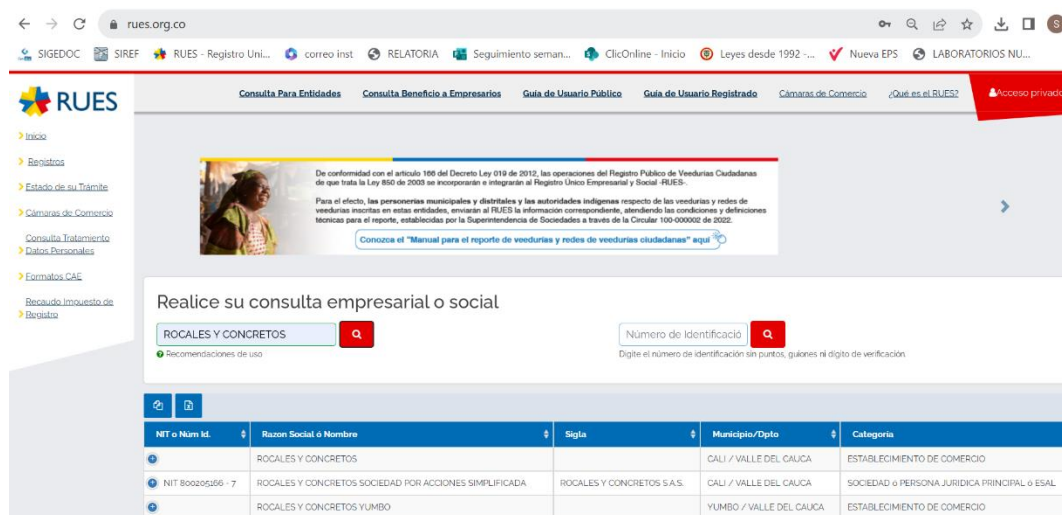
GERMAN ANDRES RODRIGUEZ ORTIZ, persona mayor de edad, identificado con la C.C. No. 79.593.084, en mi calidad de apoderado de la firma **ROCALES Y CONCRETOS SAS**, ente de derecho privado identificado con Nit No. 800.093.266-2, representado legalmente por el señor **FABIAN GARCIA RIOS**, identificado con cedula de ciudadanía número 16.694.142 de Cali, y como abogado del señor **FABIAN GACIA RIOS** persona natural identificado con la C. C. No. 16.694.142 de Cali, partes vinculadas al proceso de responsabilidad fiscal de la referencia, a ustedes con el mayor de los respetos y estando dentro del término y oportunidad respectivos procedo a dar respuesta al auto de imputación fulminado mediante auto 351 del 30 de Junio de la presente calenda, de conformidad a las siguientes consideraciones:

²³⁹ 20211019 CONSTANCIA RECIBIDO CITACION 2021EE0177578 PRF858

²⁴⁰ 20211213 DEVOLUCIÓNDOCUMENTOSMOVILIDADFUTURA 00858

Quiere decir, que tanto los presuntos responsables como el apoderado no son ajenos a ROCALES Y CONCRETOS, misma persona jurídica que devolvió las citaciones y notificaciones, asegurando que eran extraños a GARCIA RIOS CONSTRUCTORES y FABIAN GARCIA RIOS.

Ahora bien, consultado el RUES por la firma ROCALES Y CONCRETOS con NIT 800205166-7, se tiene que arrojar el siguiente resultado:



The screenshot shows the RUES website interface. At the top, there's a navigation bar with links like 'Consulta Para Entidades', 'Consulta Beneficio a Empresarios', etc. Below this, a search bar contains the text 'ROCALES Y CONCRETOS'. To the right of the search bar, there's a field for 'Número de Identificación' with a search icon. Below the search bar, a table displays the search results.

NIT o Num Id.	Razon Social o Nombre	Sigla	Municipio/Dpto	Categoría
	ROCALES Y CONCRETOS		CALI / VALLE DEL CAUCA	ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
NIT 800205166 - 7	ROCALES Y CONCRETOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	ROCALES Y CONCRETOS S.A.S.	CALI / VALLE DEL CAUCA	SOCIEDAD o PERSONA JURIDICA PRINCIPAL o ESAL
	ROCALES Y CONCRETOS YUMBO		YUMBO / VALLE DEL CAUCA	ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO

Entrando en el segundo registro, se evidencia que efectivamente, CLAUDIA INES PABON MOSQUERA quien hizo devolución de los documentos es la representante legal de la firma ROCALES Y CONCRETOS, pero adicionalmente, en el ítem de la representación, legal se describe lo siguiente:

“Corresponde a la Asamblea General de Accionistas, entre otras las siguientes funciones:

17. Autorizar al gerente para que la sociedad pueda constituirse en garante de las obligaciones de las sociedades que sean o lleguen a ser accionistas de la sociedad, con el voto favorable de uno o más accionista que represente al menos el sesenta por ciento (60%) de las acciones suscritas de la compañía, más voto favorable del señor FABIÁN GARCIA RÍOS si fuere socio de la compañía sin importar el número de acciones que sea titular.

GERENTE CLAUDIA INES PABON MOSQUERA C.C.31953797

SUPLENTE ANA MARIA GARCIA PABON C.C.1144053234” (destacado fuera de texto)

Quiere decir lo anterior, que el señor FABIÁN GARCIA RÍOS está directamente relacionado con ROCALES Y CONCRETOS, firma que devolvió las citaciones y la notificación por aviso que se hizo del proceso, advirtiendo en este punto que con los oficios devueltos no allegaron los autos de apertura y de vinculación.



Ahora bien, para que no quede asomo de duda de la mala fe del señor FABIAN GARCIA RIOS y de la firma ROCALES Y CONCRETOS, se tiene que en una búsqueda en Google bajo los parámetros “ROCALES Y CONCRETOS FABIAN GARCIA RIOS”, se encuentra lo siguiente:

En este link, encontramos que FABIAN GARCIA RIOS Y ROCALES Y CONCRETOS, fueron socios en el año 2011 (<https://caliescribe.com/es/nota-empresarial/2011/07/23/1081-fracaso-vivienda-social-cali>):

“...

Talleres del Municipio (Brisas de la Base)

*En un lote de propiedad del Municipio ubicado en la carrera 8ª. con calle 70 denominado Talleres del Municipio de 120 mil M2 se proyectó desde el 2007 la construcción mediante convenio asociativo con **el consorcio Talleres del Municipio (sociedades García Ríos constructores, Rocales y Concretos s.a.)** de un complejo urbanístico de 722 apartamentos y un centro comercial tipo La 14 de Calima. Los alcaldes Apolinar Salcedo, Ramiro Tafur y Jorge Iván Ospina recibieron la solicitud de revocar el negocio del aporte de la tierra por parte del Municipio, pero ninguno hizo caso y las investigaciones se adelantan en la Procuraduría.” (destacado fuera de texto)*

En otra página arrojada por el buscador, se ratifica que ROCALES Y CONCRETOS y FABIAN GARCIA RIOS siguen siendo socios en el año 2013 (<http://alexpinoperiodista.blogspot.com/2013/11/el-rostro-del-consorcio-vias-popayan.html>):

*“Este es parte del prontuario del viejo contratista del Estado en obras civiles desde hace más de una década. “El emporio de García”, que según informes de la prensa caleña, siempre trató de ganarse los contratos en la capital del Valle, **cuando no pudo bajo su propio nombre, lo hizo con dos consorcios fundamentales para él: García Ríos Constructores y Rocales y Concretos SAS.**” (destacado fuera de texto)*

En el año 2014, encontramos conciliación extrajudicial ante la Procuraduría 166 Judicial II para Asuntos Administrativos, en la que comparece el señor FABIAN GARCIA RIOS como representante legal de GARCIA RIOS CONSTRUCTORES, pero también como representante legal de ROCALES Y CONCRETOS (<https://metrocali.gov.co/wp/wp-content/uploads/2019/10/Conciliaciones/20141216073500766.pdf>):

GARCIA RIOS CONSTRUCTORES S.A., de conformidad con poder otorgado por el doctor Fabián García Ríos, en su calidad de Representante Legal de la sociedad GARCIA RIOS CONSTRUCTORES S.A, integrante del Consorcio Patio SUR, también actúa en representación de la sociedad ROCALES Y CONCRETOS S.A.S., de acuerdo a poder otorgado por la doctora Claudia Inés Pabón Mosquera, sociedad cesionaria de los derechos económicos de la sociedad GARCIA RIOS CONSTRUCTORES S.A.

Como si no fuera suficiente lo anterior, en la página 19 del documento que data del año



CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

GERENCIA DEPARTAMENTAL
CAUCA

Fallo: 010

Fecha: 16 DE NOVIEMBRE DE 2023

Página 117 de 149

FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL PRF 2019-00858

2018, con el siguiente encabezado de la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat de Santiago de Cali, el cual se puede consultar en el siguiente link, en el que se lee en la página 19 que en el año 2015 GARCIA RIOS CONSTRUCTORES, FABIAN GARCIA RIOS Y ROCALES Y CONCRETOS conformaron un consorcio

<https://www.concejodecali.gov.co/descargar.php?idFile=17328>:



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE VIVIENDA
SOCIAL Y HABITAT



Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: 201841470100042231

Fecha: 05-07-2018

TRD: 4147.010.10.1.853.004223

Rad. Padre: 201841730100761812

HEBERT LOBATON CURREA
Secretario General
Concejo de Santiago de Cali
Ciudad.

Asunto: Repuesta a proposición N° 074 del 19 de junio de 2018 Concejo Municipal de Santiago de Cali.

Cordial Saludo.

...

Después de suscrito el otro número 6, el Director del Fondo Especial de Vivienda del Municipio de Santiago de Cali, procedió a firmar el documento de **CESION DEL CONVENIO ASOCIATIVO**, el cual se firmó el 19 de octubre de 2015. El Consorcio Talleres del Municipio (CTM) conformado por las empresas García Ríos Constructores SA, Rocaes y Concretos SAS y Fabián García Ríos, a partir de la fecha cede de manera integral y en el estado en que se encuentra hoy en día el Convenio Asociativo suscrito con el Fondo Especial de Vivienda, al CONSORCIO BRISAS DE ORIENTE conformado por las sociedades Construimos Ingeniería Colombia SAS, Integral de Negocios Cali SAS, y Plan total Consultoría y Proyectos Inmobiliarios Ltda.

En este otro link encontramos a GARCIA RIOS CONSTRUCTORES y a ROCALES Y CONCRETOS, como demandados ante la Superintendencia de Industria y Comercio, en una misma causa en el año 2016:

https://www.sic.gov.co/sites/default/files/estados/Estado_244.pdf



DELEGATURA PARA ASUNTOS JURISDICCIONALES

ESTADO No. 244

La publicación de los estados en la página web es un medio de facilitación de consulta que realiza la entidad y no exonera del deber de vigilancia de acuerdo con el Artículo 295 del Código General del Proceso.

Recomendación: Para la visualización de los autos correspondientes recomendamos el uso de Internet Explorer 7 o superior y del complemento llamado Alternatiff, este último puede ser descargado desde el sitio web: alternatiff.com

No.	RADICACIÓN	CLASE DE PROCESO	DEMANDANTE	DEMANDADO	AUTOS	FECHA	VINCULO AL AUTO CORRESPONDIENTE
197	16 - 401282	DEFENSA DEL CONSUMIDOR	VALDES ANAÏONA SOCORRO Y BARRERA TASAMA MIGUEL	GARCIA RIOS CONSTRUCTORES S.A. Y ROCALES Y CONCRETOS S.A.S. Y CONSTRUIMOS INGENIERIA COLOMBIA S.A.S.	120971	29/12/2016	Auto 120971

Se tiene también que, en la Corporación Autónoma Regional del Valle, se tramitó una cesión de licencia ambiental por parte de Fabian García Ríos en favor de Rocaes y Concretos en el mes de noviembre del año 2017



FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL PRF 2019-00858

5. El representante del Consorcio es **FABIAN GARCIA RIOS**, identificado con C. C. No. **16.694.142** de **CALI**, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación, firmar el contrato y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto a la ejecución y liquidación del contrato con amplias y suficientes facultades.

6. La sede del Consorcio es:

Dirección **CALLE 6N No. 2N-36 Oficina 516**
Dirección electrónica **presupuesto@garciarios.com**
Teléfono **6680042**
Telefax **6680042**
Ciudad **Santiago de Cali**

Declaramos bajo la gravedad de juramento que los activos y recursos que conforman el patrimonio del proponente, y de cada uno de sus integrantes, y que empleará para el desarrollo del contrato, provienen de actividades lícitas. *El proponente deberá manifestar expresamente esta circunstancia.*

A su vez, según el certificado de existencia y representación de **ROCALES Y CONCRETOS**, la dirección es la misma:

Dirección del domicilio principal:	CALLE 6N NRO. 2N 36 OF. 516
Municipio:	Cali - Valle
Correo electrónico:	financiera@rocalesyconcretos.com
Teléfono comercial 1:	6680042
Teléfono comercial 2:	3117193354
Teléfono comercial 3:	3117193354
Dirección para notificación judicial:	CL 6 NORTE # 2 - 36 OF 516
Municipio:	Cali - Valle
Correo electrónico de notificación:	financiera@rocalesyconcretos.com
Teléfono para notificación 1:	6680042
Teléfono para notificación 2:	3117193354
Teléfono para notificación 3:	3117193354

Ahora bien, para que no quede asomo de duda sobre la estrecha relación entre **FABIAN GARCIA RIOS** como persona natural y como representante legal de **GARCIA RIOS CONSTRUCTORES** y la señora **CLAUDIA INÉS PABÓN MOSQUERA** como persona natural y como Representante Legal de la sociedad **ROCALES Y CONCRETOS S.A.S.** (que se insiste, devolvió las notificaciones por aviso efectuadas del auto de apertura y de la vinculación a los presuntos responsables), encontramos el siguiente link en donde se indica que las dos personas naturales mencionadas, gerenciaban **ROCALES Y CONCRETOS EN EL AÑO 2015**:

<https://1library.co/article/frente-gesti%C3%B3n-ambiental-impactos-gesti%C3%B3n-ambiental-rocales-concret.zgw0316y>

*“En Colombia, **la empresa Rocales y Concretos SAS** se encuentra en la clase “minería”. El país cuenta con una geología que facilita la producción y el desarrollo de la minería con una variada oferta de productos mineros como son el carbón, el níquel considerados de mayor escala, y los de menor escala como el oro, el platino, las esmeraldas, la sal, la roca fosfórica, las arcillas, las arenas silíceas, el yeso y varios tipos de rocas ornamentales.*

...



Gerencia:

*En el área de gerencia el empresario forma parte de este departamento ,en este caso el **ingeniero civil Fabián García Ríos acompañado de su esposa la Abogada Claudia Inés Pabón Mosquera**, quienes dirigen el proceso económico, coordinan las directrices organizacionales de la empresa, monitorean y toman decisiones de acuerdo a los indicadores de gestión de los procesos de la organización y de los estados financieros presentados por el área financiera, coordinando el presupuesto anual.” (destacado fuera de texto)*

Así entonces, si volvemos al hecho de que en los argumentos de defensa frente a la imputación, el abogado asegura que apodera a ROCALES Y CONCRETOS, entidad representada legalmente por FABIAN GARCIA RIOS, quien a su vez ha comparecido dentro del proceso en nombre propio y como representante legal de GARCIA RIOS CONSTRUCTORES, es evidente la mala fe con la que estos presuntos responsables han obrado dentro de esta investigación, induciendo al error en tal grado que luego de haberse proferido decisión de fondo, el superior declaró la nulidad devolviendo la investigación al estado de apertura a fin de que se enteraran de la misma, pese a que efectivamente recibieron el auto de apertura y la vinculación, pues la esposa del señor FABIAN GARCIA RIOS, es decir, la señora CLAUDIA INES PABON MOSQUERA representante legal de la firma ROCALES Y CONCRETOS, devolvió las citaciones y los avisos, más no las providencias que se adjuntaron a estos últimos en 34 y 38 folios.

Que estas dos personas (FABIAN GARCIA RIOS y CLAUDIA INES PABON MOSQUERA) gerenciaban ROCALES Y CONCRETOS a donde llegaron las citaciones y notificaciones por aviso, por tanto no había ninguna justificación para que efectuaran la devolución de las mismas, acto con el cual dejaron por sentado que las diligencias no se habían surtido pese a que se quedaron con las copias de las providencias, induciendo al engaño al ente de control, más específicamente a la segunda instancia de esta investigación, quien asaltada en su buena fe, justificó la nulidad así²⁴³:

“Y aunque al parecer la citación enviada a la calle 6N N° 2N-36 oficina 516 de Cali fue entregada, como la misma Colegiada reconoció, no llegó al destinatario:

“[...]

Esta citación fue recepcionada en su destino, no obstante, se hizo devolución, advirtiéndose por parte del remitente que actualmente el inmueble fue adquirido por la firma Rocales Concretos que no está relacionada con los investigados, no así de la siguiente citación, la cual, si fue recepcionada en su destino el 22 de octubre del 2021, conforme a lo certificado por la empresa 472”

...

Por tanto, concretada la dirección de GARCÍA RÍOS CONSTRUCTORES S.A.S., es claro para este Despacho que hubo una indebida notificación, máxime que como su apoderado refiere y la Primera Instancia lo reconoció, la dirección física a la que fue citado CALLE 6N # 2 N 36 OFICINA 516, EDIFICIO EL CAMPANARIO, BARRIO CENTENARIO DE CALI, correspondía a la Sociedad ROCALES Y CONCRETOS SOCIEDAD POR

²⁴³ 20230207 AUTO urf2-0177 DECLARA NULIDAD PRF 858



ACCIONES SIMPLIFICADA...

Que según la real academia de la Lengua se entiende por fraude²⁴⁴:

“1. m. Acción contraria a la verdad y a la rectitud, que perjudica a la persona contra quien se comete.

2. m. Acto tendente a eludir una disposición legal en perjuicio del Estado o de terceros.”

Que el hecho de que la firma ROCALES Y CONCRETOS representada por la señora CLAUDIA INES PABON MOSQUERA, haya devuelto los oficios citatorios y las notificaciones por aviso efectuadas a GARCIA RIOS CONSTRUCTORES y a FABIAN GARCIA RIOS esposo de aquella, pero además siendo este último miembro de la persona jurídica inicialmente mencionada, conforme a certificación que puede consultarse en el RUES²⁴⁵, para efectos de burlar el trámite de notificación, se constituye en una acción tendiente a eludir la disposición legal de que trata el artículo 106 de la Ley 1474 del 2011 referente a las notificaciones, en perjuicio de las competencias dadas a este ente de control fiscal, pues la devolución de las diligencias, sin los autos que se debieron recibir, fue un acto que faltó a la verdad y a la rectitud.

Por lo anterior, consideró el despacho que se debía dar traslado a la Fiscalía General de la Nación, de la providencia que abordó el asunto y del oficio radicado 2021ER0177392 del 10 de diciembre del 2021 recibida en este ente de control dos días después, suscrito por la señora CLAUDIA INES PABON MOSQUERA representante legal de la firma Rocales y Concretos²⁴⁶, para que investigaran el presunto delito de Fraude Procesal²⁴⁷, debido a que la maniobra desleal mediante la cual se devolvieron las diligencias de notificación, llevaron a que este ente de control incurriera en error, como primera medida, en el sentido de designar apoderado de oficio y proceder a notificar por página web a los presuntos responsables, pero además, usaron ese error para luego lograr una nulidad, de la que hoy se demuestra no goza de justificación alguna, pues fueron efectivamente notificados de la apertura y la vinculación, todo buscando la dilación procesal.

Esto se hizo efectivo mediante radicado 2023EE0139745 de fecha 22 de agosto del 2023²⁴⁸.

²⁴⁴ <https://dle.rae.es/fraude>

²⁴⁵ RUES ROCALES Y CONCRETOS

²⁴⁶ 20211213 DEVOLUCIÓN DOCUMENTOS MOVILIDAD FUTURA 00858

²⁴⁷ CODIGO PENAL - ARTÍCULO 453. FRAUDE PROCESAL. <Artículo modificado por el artículo 11 de la Ley 890 de 2004. El nuevo texto es el siguiente:> El que por cualquier medio fraudulento induzca en error a un servidor público para obtener sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley, incurrirá en prisión de seis (6) a doce (12) años, multa de doscientos (200) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de cinco (5) a ocho (8) años.

²⁴⁸ 20230822 GUIA472 FISCALIA 2023EE0139745 PRF 00858.PDF



Así entonces, la estrategia de devolver las notificaciones estaba íntimamente ligada con el ámbito probatorio de los actos de notificación, dotando de falsa apariencia y credibilidad el acto mismo, para que pareciera que no se habían ejecutado, para luego ser usados en beneficio de los presuntos responsables.

Con lo anterior, quedó demostrada la mala fe de los presuntos responsables en el proceso de notificación y también y se desvirtuó el hecho de que se enteraron por casualidad de la apertura y de su vinculación.

Conforme a esto se ordenó mediante auto 427 del 16 de agosto del 2023, lo siguiente:

“QUINTO: Por medio de la Secretaría Común de la Gerencia Cauca, DAR TRASLADO a la Fiscalía General de la Nación con correo electrónico jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co, para que investigue el presunto delito de Fraude Procesal cometido dentro del presente proceso de responsabilidad fiscal PRF 2019-00858, para lo cual se deberá hacer entrega de esta providencia, al igual que del oficio radicado 2021ER0177392 del 10 de diciembre del 2021 recibida en este ente de control dos días después, suscrito por la señora CLAUDIA INES PABON MOSQUERA representante legal de la firma Rocales y Concretos (20211213 DEVOLUCIÓNDOCUMENTOSMOVILIDADFUTURA 00858. PDF); de conformidad con las motivaciones de este proveído.”

Que el traslado se hizo a la Fiscalía General de la Nación, mediante radicado 2023EE0139745²⁴⁹ del 22 de agosto del 2023.

3. Nulidad no resuelta

Consideró el apoderado que la nulidad impetrada cuando se profirió el primer fallo dentro del presente proceso no ha sido resuelta, lo cual resulta risible si se tiene en cuenta que (i) la misma se impetró extemporáneamente pues se invocó una vez proferido el fallo, (ii) pese a lo anterior, se desató de manera expresa cada punto esbozado por parte de este despacho, mediante auto 004²⁵⁰ del 12 de enero del 2023, pero más aún (iii) cuando el superior mediante auto urf2-0177²⁵¹ del 07 de febrero del 2023, declaró nulidad del proceso hasta la etapa de apertura, para conceder, precisamente lo que se solicitó, esto es escuchar en versión libre a los presuntos responsables GARCIA RIOS CONSTRUCTORES y FABIAN GARCIA RIOS.

De esta manera, no se entiende por qué el apoderado invoca nueva nulidad, si lo que solicitó finalmente le fue concedido por el superior, es decir, la nulidad incoada está

²⁴⁹ 20230822 guia472 fiscalia 2023ee0139745 prf 00858.pdf

²⁵⁰ 20230112 AUTO 004 REPOSICION FALLO PRF 2019-858

²⁵¹ 20230207 AUTO urf2-0177 DECLARA NULIDAD PRF 858



plenamente resuelta, pues como ya se evidenció en el ítem anterior los citados presuntos si se notificaron y además de ello, se les recepcionó versión libre.

Ahora bien, se destacó al apoderado que en el proceso de responsabilidad fiscal no se ha dispuesto por el legislador la figura del incidente para desatar las nulidades, únicamente se profieren las providencias que las desatan y se notifican por estado, en este orden de ideas, este despacho atendió desfavorablemente la nulidad mediante auto 004 del 12 de enero del 2023 y el superior acogió los argumentos expuestos por el apoderado mediante auto URF2-0177 del 07 de febrero del 2023; en tal sentido, mediante auto 063 del 08 de febrero del 2023 y en obediencia al superior, se ordenó la recepción de versiones y el traslado del informe técnico a los presuntos responsables GARCIA RIOS CONSTRUCTORES y FABIAN GARCIA RIOS, todas estas providencias notificadas por aviso fijado en lugar visible de la Gerencia y en la Página Web institucional, la primera el 13 de enero²⁵², la segunda el 09 de febrero²⁵³ y la tercera el 10 de febrero²⁵⁴ todas, del año 2023.

Al haberse notificado todas las providencias como se prescribe en el artículo 106 de la Ley 1474 del 2000, en concordancia con el artículo 295 del Código General del Proceso, falta a la verdad el apoderado cuando asegura que no ha sido notificado de las decisiones.

Siguiendo con el libelo de descargos, tenemos que posteriormente se invoca la siguiente:

“Ante esta verdad irrefutable, mis apoderados en el momento de rendir su versión libre solicitaron la práctica de pruebas y esta contraloría en una clara violación al debido proceso no atendió su solicitud y no estableció acto administrativo de trámite pronunciándose sobre esa petición a fin de saber la postura de esta contraloría, en el entendido de saber cómo se adelantaría la práctica de las mismas o si negaba dicha solicitud recordando que el auto que niega la práctica de pruebas es susceptible de los medios de alzada.

Las imágenes anteriores vislumbran una solicitud legítima de pruebas que no fueron atendidas y que dan lugar a la violación del debido proceso por vías de hecho que hacía que esta etapa del proceso no podía existir hasta tanto no se le hubiera garantizado la defensa de mis clientes en la etapa de investigación fiscal que dio lugar a esta imputación.

Lo anterior genera una clara nulidad constitucional por vulnerarse el artículo 29 de la constitución nacional que es la garantía al debido proceso y al principio de legalidad.”

Este argumento esbozado por el apoderado, solo deja en evidencia el descuido del proceso y la negligencia con la que ha asumido la defensa de los intereses de los

²⁵² 20230113 ESTADO 006 NOTIFICA AUTO 004 PRF 00858

²⁵³ 20230209 ESTADO 023 NOTIFICA AUTO URF2 177 PRF 00858

²⁵⁴ 20230210 ESTADO 024 NOTIFICA AUTO 063 PRF 00858



investigados, pues mediante auto 106 del 15 de marzo del 2023²⁵⁵, notificado por estado 038 del 16 de ese mismo mes y año²⁵⁶, se abordaron las peticiones en la parte motiva en numeral “**2.1. Respetto de unas pruebas a petición**” que va de la página 3 a la 12 de dicha providencia, dedicadas de manera exclusiva a analizar la oportunidad, conducencia, pertinencia y procedencia de lo solicitado por el apoderado de los investigados, y se resolvió expresamente lo siguiente en la parte resolutive, sin que se hubiese impetrado recurso alguno:

“PRIMERO: DENEGAR la práctica de las pruebas solicitadas en la versión libre rendida por GARCIA RIOS CONSTRUCTORES S.A. NIT. 800093266-2 y FABIAN GARCIA RIOS C.C. 16.694.142, conforme a las motivaciones de esta providencia.

...
*TERCERO: Por medio de la Secretaría Común se deberá notificar la presente providencia por estado a los presuntos responsables vinculados al proceso, conforme a lo previsto en el artículo 106 de la Ley 1474 del 2011, **advirtiendo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley 610 de 2000, contra la misma proceden los recursos de reposición a desatarse por este despacho y el de apelación a ser resuelto por la contraloría delegada intersectorial de la Unidad de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría Delegada de Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva de la CGR, que por reparto corresponda, siempre y cuando se interpongan dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación.***” (subrayados fuera de texto)

De lo anterior se colige, que al existir pronunciamiento expreso sobre la petición de pruebas, sin que se hubiese impugnado la decisión, habiéndose dado la oportunidad para el efecto, la misma quedó en firme, lo que quiere decir que no se generó ninguna irregularidad sustancial que afectara el debido proceso, por parte del este ente de control fiscal.

Finalmente, se invoca nulidad en los siguientes términos:

“2.- En segunda instancia nuevamente se atropella a mis representados en el presente asunto pues si bien es cierto que tanto este servidor como la sociedad Gracia Ríos Constructores SAS, fuimos notificados del proveído objeto de este pronunciamiento, no es menos cierto que la persona Natural FABIAN GARCIA RIOS, que es parte procesal adicional, no se le notifico de esta actuación lo cual vulnera el derecho de contradicción generando una nueva nulidad procesal.”

Que el señor FABIAN GARCIA RIOS, en nombre propio y como representante legal de GARCIA RIOS CONSTRUCTORES, rindió versión libre el 27 de febrero del 2023²⁵⁷; en el que claramente esboza que lo hace en nombre propio en representación de la persona jurídica, pues textualmente lo expresó en el inicio del escrito, tal como se aprecia del

²⁵⁵ 20230315 AUTO 106 DECIDE SOBRE PRUEBAS PRF 858

²⁵⁶ 20230316 estado 038 notifica auto 106 prf 00858.pdf

²⁵⁷ 20230227 VERSION LIBRE FABIA Y GARCIA RIOS 2023ER0030221 PRF 858 y VERSION LIBRE CONTRALORIOA POPAYAN FABIAN GARCIA RIOS



pantallazo que pega del mismo, a fin de que no quede duda de que la versión libre se rindió en debida forma, por parte de los dos presuntos responsables:

Santiago de Cali D.E., febrero 24 de 2023

SEÑORES

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL CAUCA

POPAYAN- CAUCA

**REFERENCIA: PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL
NUMERO 2019-00858**

FABIAN GARCIA RIOS, persona mayor de edad, identificado con la Cedula de Ciudadanía No. 16.694.142 de Cali, actuando en nombre propio y en calidad de Representante Legal de la Sociedad **GARCIA RIOS CONSTRUCTORES SAS**, ente de derecho privado identificado con Nit 800.093.266-2, en calidad de investigados dentro del proceso de la referencia, por medio del presente escrito me permito presentar a ustedes versión libre y espontánea, de conformidad a las siguientes consideraciones:

Vemos nuevamente que el apoderado falta a la verdad y desconoce por completo el verdadero contenido de la investigación, usando las nulidades como maniobras abiertamente desleales, tendientes a dilatar los términos procesales de manera injustificada.

Quedó así en evidencia que el despacho siempre fue garante de los derechos de los presuntos responsables FABIAN GARCIA RIOS y GARCIA RIOS CONSTRUCTORES, pues se han notificado todas las providencias proferidas conforme lo dispuesto en nuestro ordenamiento jurídico, se han atendido los requerimientos probatorios y todas las decisiones se han motivado en debida forma, por ello, no existe justificación para despachar favorablemente las nulidades invocadas.

De cara a la defensa propiamente dicha, en los descargos el apoderado de los presuntos responsables, esboza que no se analizaron los argumentos expuestos por sus representados, en el sentido de que en su parecer, no existe responsabilidad alguna de su parte por cuanto está demostrado que quienes originaron el detrimento objeto de este debate fueron los funcionarios de movilidad, pues fueron ellos quienes dieron valor a las actuaciones que los llevo a conciliar ante la Procuraduría General de la Nación y luego validar esa intención ante el Juez Administrativo conocidos de autos y esto no fue por imposición de sus clientes.



Adicionalmente puntualiza que es grave para el ordenamiento legal vigente, el hecho de que esta entidad desconozca los alcances de cosa juzgada que tiene implícitos el acuerdo avalado por la autoridad competente para validar dicho acuerdo y que versa sobre los hechos expuestos en este asunto.

En este punto conviene destacar que, efectivamente le asiste la razón al apoderado en el sentido de afirmar que la liquidación hace tránsito a cosa juzgada, no obstante descuida que las altas cortes en las jurisprudencias aplicables a este tópico, siempre analizan la situación en el marco del contrato estatal y teniendo como actores a los extremos del mismo, esto es contratista y contratante, quienes son los únicos facultados para interponer las acciones judiciales correspondientes ante el juez natural, para obtener el reconocimiento o pago de obligaciones derivadas de la liquidación, entendida a su vez, como el ajuste o rendición final de cuentas que se produce con el objeto de que las **PARTES CONTRATANTES** establezcan las acreencias pendientes, saldos a favor o en contra de cada uno, se declaren a paz y salvo, todo para extinguir el negocio jurídico celebrado.

Quiere indicar lo anterior, que con la liquidación del contrato se termina la relación entre las partes, pero ello no quiere decir que quede vedado el ejercicio del control fiscal por parte de un tercero autónomo como lo es la Contraloría General de la República, de ser así, sería imposible ejercer tales competencias, máxime si se tiene en cuenta, que para la época del contrato, el control constitucional que se ejercía era posterior y selectivo.

Así entonces, la Contraloría General de la República no fue parte del negocio jurídico, por ello, independiente que la conciliación se haya surtido ante las instancias legales y que la misma se haya convalidado ante un tribunal, este ente de control bajo la autonomía de sus competencias, de cara a la especialidad de la responsabilidad que puede derivar, que a su vez es independiente de cualquier otra responsabilidad, está en el deber de buscar el resarcimiento al patrimonio público por el evidente y aceptado error contenido en la liquidación del contrato, pues esta situación afectó los recursos públicos por la gestión fiscal irregular de algunos presuntos responsables, en participación con la gestión irregular, que con ocasión de aquella, incurrieron los consorciados, entre otros; en este sentido, como tercero ajeno al proceso contractual, pre-contractual, contractual y post-contractual y a la luz de los derroteros constitucionales vertidos en los artículos 267 y 268 de nuestra Carta Superior, al haberse demostrado la existencia de un detrimento patrimonial, la Contraloría General de la República, bajo las reglas trazadas en la Ley 610 de 2000, está en el deber de investigar la gestión irregular y establecer el nexo causal, como se ha hecho en el particular, sin invadir la órbita del Juez Natural.

Así las cosas, no se niega y mucho menos se desconocen los contenidos de las providencias de las altas cortes que abordan el asunto, pero se deja en claro que las mismas han sido proferidas de cara a las partes del contrato, por ello, esos derroteros jurisprudenciales no tienen la capacidad de desdibujar el ejercicio del control fiscal y mucho menos, restar competencia en el presente asunto, en el que se han dejado en



evidencia la existencia palmaria de los elementos de la responsabilidad fiscal.

En cuanto a las acciones que debió o no ejecutar la entidad contratante, efectivamente le asiste la razón al representante legal del consorcio, pues MOVILIDAD FUTURA pudo perfectamente no conciliar, pero desafortunadamente lo hizo y lo hizo sustentada en errores propios de la gestión irregular del representante legal y del supervisor del contrato, omisiones que este despacho no ha descuidado, pues se han vinculado al presente proceso los servidores públicos que los cometieron; ahora bien, fueron los yerros de estas personas con perfiles de ingeniero y con la capacidad, experiencia y experticia para evidenciarlo, las que indujeron en error a la Procuraduría y al Tribunal, negligencias que han obligado al ente de control a mantenerlos vinculados al presente proceso; pese a ello, los errores de estas personas, no tienen la capacidad de desdibujar el hecho irregular que se le atribuye a los consorciados.

En este punto y de cara a la responsabilidad propiamente dicha del consorcio como contratista, debe destacarse que lo reprochado de manera específica al consorcio y a los consorciados, se circunscribe a acciones con connotación distinta a las gestiones administrativas propias de Movilidad Futura, en donde sus servidores públicos y contratistas deben sujetarse a preceptos legales y reglamentarios específicos para intervenir en representación de la entidad en los trámites que debió agotar en la valoración de los materiales, ante su propio comité de conciliación interno, ante la Procuraduría en la conciliación extrajudicial o en la ratificación de la conciliación ante el Tribunal.

Las acciones y omisiones dadas en la gestión interna de la entidad, se encuentran perfectamente delimitadas en el marco de la responsabilidad fiscal que se investiga y de aquellas que con ocasión de esta, permitieron, facilitaron y/o coadyuvaban con la generación de daño, tal como se ha explicado; no obstante, se tiene que el contratista intervino desde su propia perspectiva y como el otro extremo del proceso contractual, conciliatorio y judicial, en los que siempre fue el primer conocedor del valor real y de las cantidades de los materiales que entregaron a la entidad en virtud del negocio jurídico y en este punto, es en el que el despacho no logra entender el por qué normalizó e hizo propio el error de la entidad, pues independiente de que la evaluación, control y cálculo de los citados materiales se hizo por Movilidad Futura como incisivamente lo argumenta en su versión libre, no tiene sentido y mucho menos resulta coherente que haya validado unos valores, que de bulto podían evidenciar como un craso error pues se insiste, fueron ellos los que los adquirieron con recursos del contrato.

Ahora bien, pese a que ya se abordó este asunto en este mismo ítem destinado al contratista; recordemos que el 18 de diciembre de 2014 el CONSORCIO VIAS POPAYAN en calidad de contratista y por medio de apoderado, solicitó conciliación extrajudicial, la cual le corresponde por reparto a la Procuraduría 73 Judicial I para Asuntos Administrativos, la cual es admitida mediante auto No. 013 del 03-02-2015y en escrito



radicado ante ese ente de control disciplinario, claramente asegura lo siguiente²⁵⁸:

“SEPTIMO: Que al momento de tasar los perjuicios la entidad que por este medio se cita no tuvo en cuenta que existen unos elementos financieros a nuestro favor y que son reconocidos 'por la entidad y por la interventoría los cuales debieron tenerse en cuenta a la hora de establecer un posible perjuicio los cuales a groso modo enumero a continuación:

2.- Que como parte del contrato se entregaron a la entidad que aquí se convoca materiales de construcción y elementos de construcción y señalización (Pipman) los cuales están a buen recaudo de la entidad llamada a conciliar por valor de \$ 618.743.536. (Subrayado del despacho).

Así entonces, si guardar silencio respecto de la liquidación errada de los materiales puede tenerse como un acto malintencionado, el tomar ese error, hacerlo propio e incluirlo en el proceso de solicitud de conciliación ante la Procuraduría es la evidencia clara de una mala fe, pues como ya se advirtió, no estaban al frente de una simple equivocación, sino de una sobrevaloración de materiales en cuantía superior a un 2.000%, en donde no resulta medianamente sensato que lo que vale aproximadamente TREINTA Y OCHO MILLONES DE PESOS (\$38.000.000), se cuantifique en más de SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS (\$600.000.000), esta situación se sale de cualquier tipo de lógica, del sentido común y de la mínima cordura y sensatez, máxime si estamos al frente de personas profesionales del ramo de la ingeniería, quienes en el giro de sus acciones profesionales tienen constante interacción con este tipo de insumos propios del quehacer de los contratos como el que se investiga.

Así entonces, los consorciados hicieron propio el error en la liquidación, la cual se hizo de unos materiales que ellos mismos adquirieron, hecho que les daba el dominio de la situación relacionada con los costos de los mismos; en tal sentido, el error del informe no los excluye de responsabilidad y mucho menos los justifica y es aquí en donde se configura el dolo eventual, pues no estamos al frente de terceros ajenos a una situación extraña que les obligaba a confiar a ciegas en la actividad de Movilidad Futura; así entonces, las dudas se acentúan más cuando eran los consorciados los que se iban a ver beneficiados con el error, hecho que deja en evidencia la eficaz voluntad de evitar corregirlo en el proceso liquidatorio el cual tenía como único norte ajustar las cuentas del contrato.

Se pregunta entonces el despacho: ¿si los materiales se hubiesen tasado en un 2000% por debajo del valor real, el contratista lo habría aceptado?; obviamente no, porque era su patrimonio e intereses los que se verían afectados; conforme a este análisis, es evidente que los consorciados contratistas al aceptar sin reservas u oposición el error a sabiendas que su acción u omisión iba a producir un beneficio en sus intereses a costa de los intereses del estado, actuaron como en el argot jurídico propio del derecho penal

²⁵⁸ Página 44 del PDF: “24_444645 - CONSORCIO VIAS POPAYAN VS. MOVILIDAD FUTURA”



se conoce como dolo indirecto o de segundo grado, que en palabras de la H. Corte Suprema de Justicia²⁵⁹, se lee de la siguiente manera:

“Debe recordar la Sala que para la configuración del dolo eventual deben coexistir dos elementos: (i) la previsión de la infracción penal como probable y (ii) la indiferencia respecto de su realización”

Considera el ente de control que está demostrado que para el contratista era perfectamente previsible y evidenciable la infracción a la sana lógica que contenía la errada liquidación de los materiales, pese a ello, más que la indiferencia frente al error, lo tomaron para su propio beneficio al incluirlo en sus peticiones en el trámite elevado ante la Procuraduría en donde finalmente se aceptó el acuerdo conciliatorio; con lo que indefectiblemente contribuyeron de manera directa e irrefutable con la generación del detrimento patrimonial que se investiga, lo cual demuestra el nexo causal entre el daño, pues ellos en calidad de contratistas, más que cualquier otro de los vinculados, eran conscientes y tenían plena certeza que los materiales que les había recibido la entidad estaban sobre valorados al haberlo adquirido; por tanto, queda en evidencia el **DOLO** en el actuar de los consorciados, pues tenían toda la capacidad, pero sobre todo las condiciones para darse cuenta de que ese error los beneficiaría solo a ellos, al reconocerles un derecho que no tenían y pese a ello, guardaron silencio.

En este orden de ideas y dado que los consorcios contratistas y sus consorciados pueden ser llamados a comparecer al proceso de Responsabilidad Fiscal conforme lo determinado por la Oficina Jurídica de la Contraloría General de la República, se fallará con responsabilidad fiscal en contra de los presuntos responsables GARCIA RIOS CONSTRUCTORES S.A. NIT. 800093266-2, FABIAN GARCIA RIOS C.C. 16.694.142 de Cali y EDUARDO GIRONZA LOZANO C.C. 16.243.259 de Cali; por estar dados los requisitos vertidos en el artículo 53 de la Ley 610 de 2000.

6.1. NEXO CAUSAL

Conforme al análisis de los hechos objeto de investigación efectuados hasta el momento, lo cual valga aclarar, se ha hecho al amparo de las disposiciones jurídicas que gobiernan la responsabilidad fiscal y a la luz de las pruebas arrimadas al expediente; se observa sin reparo alguno y como se detalló para cada caso concreto, que todas las acciones y omisiones de los presuntos responsables además de enmarcarse en el contexto de la gestión fiscal o con ocasión de esta, no solo pudieron ser calificadas como gravemente culposa y dolosa para los consorciados de la contratista, sino que para cada caso se logró comprobar que esa gestión fiscal irregular de cada uno de los vinculados determinó y coadyuvo a que se configurara el detrimento patrimonial específico que se busca resarcir, en otras palabras está dado de manera clara e irrefutable el nexo causal entre

²⁵⁹ 9 CSJ SP714-2020, Sala Penal, 4 de marzo de 2020, Rad. No. 49750.



el daño al patrimonio público y las conductas desplegadas por los gestores fiscales y de los particulares con ocasión de la gestión fiscal, como se detalló para cada responsabilizado.

6.2. SOLIDARIDAD

De otra parte, respecto a la **responsabilidad solidaridad** es pertinente realizar las siguientes anotaciones:

Por la naturaleza del bien jurídico tutelado en el proceso de responsabilidad fiscal, el patrimonio público, su interés general y la prevalencia del interés social, cuando concurren varias conductas de agentes en la causación jurídica del daño, provenientes de la misma unidad de fuente, temporal y circunstancial, surge una relación solidaria de reparar lo causado.

Por su parte el artículo 119 del estatuto anticorrupción, Ley 1474 de 2011, prevé la responsabilidad solidaria en los procesos de responsabilidad fiscal con las personas que concurren al hecho hasta la recuperación del detrimento patrimonial.

En Sentencia de abril 11 de 1994, el Consejo de Estado en sección tercera indicó:

“cuando el hecho perjudicial ha sido causado por dos o más personas... No se produce una división de responsabilidad, como si cada una llevara apenas una parte de la culpa, sino que por mandato legal surge una obligación solidaria de responder”.

El Consejo de Estado, en sentencia de 11 de abril de 2002, Sección Tercera - Sala de lo Contencioso Administrativo, expresó:

“Cabe recordar que la doctrina y la jurisprudencia en forma unánime señalan que cuando existe concurso de conductas eficientes en producción del daño, que provengan de personas diferentes de la víctima directa, se configura una obligación solidaria...”.

Finalmente se destaca que el artículo el artículo 119 de la Ley 1474 de 2011 respecto a la responsabilidad solidaria establece lo siguiente:

“En los procesos de responsabilidad fiscal, acciones populares y acciones de repetición en los cuales se demuestre la existencia de daño patrimonial para el Estado proveniente de sobrecostos en la contratación u otros hechos irregulares, responderán solidariamente el ordenador del gasto del respectivo organismo o entidad contratante con el contratista, y con las demás personas que concurren al hecho, hasta la recuperación del detrimento patrimonial”. (Negrilla extra texto).

En estas condiciones, habiéndose producido el daño al patrimonio público por los responsables antes mencionados, sin que se pueda dividir a prorrata el daño producido,



se fallará con responsabilidad fiscal en contra de los presuntos responsables fiscales, de manera solidaria.

6.3. GARANTE

El artículo 44 de la Ley 610 de 2000 en lo relacionado con la vinculación del garante al Proceso de Responsabilidad Fiscal, consagra lo siguiente:

"Cuando el presunto responsable, o el bien o contrato sobre el cual recaiga el objeto del proceso, se encuentren amparados por una póliza, se vinculará al proceso a la compañía de seguros, en calidad de Tercero Civilmente Responsable, en cuya virtud tendrá los mismos derechos y facultades del principal implicado.

La vinculación se surtirá mediante la comunicación del Auto de Apertura del proceso al representante legal o al Apoderado designado por éste, con la indicación del motivo de procedencia de aquella."

De acuerdo a lo establecido en el artículo 120 de la ley 1474 de 2011 las pólizas de seguros por las cuales se vinculó al proceso de responsabilidad fiscal al garante en calidad de tercero civilmente responsable, prescribirán en los plazos previstos en el artículo 9 de la Ley 610 de 2000.

En concordancia con las normas citadas, se trae en referencia algunos apartes de la Sentencia C-648 de 2002, así como a la sentencia C-753 de 2003 de la Honorable Corte Constitucional, así:

"... En estas circunstancias, cuando el legislador dispone que la compañía de seguros sea vinculada en calidad de Tercero Civilmente Responsable en los procesos de responsabilidad fiscal, actúa en cumplimiento de los mandatos de interés general y finalidad social del Estado.

El papel que juega el asegurador es precisamente el de garantizar el pronto y efectivo pago de los perjuicios que se ocasionen al patrimonio público por el servidor público responsable de la gestión fiscal, por el contrato o el bien amparados por una póliza.

Es decir, la vinculación del garante está determinada por el riesgo amparado, en estos casos la afectación del patrimonio público por el incumplimiento de las obligaciones del contrato, la conducta de los servidores públicos y los bienes amparados, pues de lo contrario la norma acusada resultaría desproporcionada si comprendiera el deber para las compañías de seguros de garantizar riesgos no amparados por ellas.

Por consiguiente, la vinculación del asegurador establecida en la norma acusada, además del interés general y de la finalidad social del Estado que representa, constituye una medida razonable, en ejercicio del amplio margen de configuración legislativa garantizado en estas materias por el artículo 150 de la Carta Política. Atiende los principios de economía procesal y de la función administrativa a que aluden los artículos 29 y 209 de la



Constitución.

Además, evita un juicio adicional para hacer efectivo el pago de la indemnización luego de la culminación del proceso de responsabilidad fiscal, con lo cual se logra, en atención de los principios que rigen la función administrativa, el resarcimiento oportuno del daño causado al patrimonio público. Así, desde la perspectiva del reparo de constitucionalidad formulado, no hay vulneración de las normas invocadas por los demandantes...”

En este caso los hechos materia de investigación ocurrieron en el periodo comprendido entre el 5 de noviembre de 2015, fecha en la cual Movilidad Futura S.A.S y el Consorcio Vías Popayán, llegaron a un acuerdo extrajudicial y el 30 de marzo de 2016, fecha en la que firmaron de mutuo acuerdo el acta de liquidación del contrato de obra pública 01 de 2012. Para esta época Movilidad Futura S.A.S; estaba amparada por las siguientes pólizas:

Garante: LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS

NIT: 860.002.400-2

Pólizas: PÓLIZAS DE SEGURO PREVIPYME 1000095 y 100011622

tomador/garantizado, asegurado y beneficiario: MOVILIDAD FUTURA S.A.S. SISTEMA ESTRATEGICO

Objeto de la Póliza: AMPARAR A LA ENTIDAD CONTRA MENOSCABO DE RECURSOS Y BIENES, EL EJERCICIO DE LOS CARGOS ASEGURADOS, COMO DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN O FALLOS CON RESPONSABILIDAD FISCAL.

Seguro manejo global: JUICIOS CON RESPONSABILIDAD FISCAL

Valor asegurado: \$100.000.000,

Deducible: 10% Sobre El Valor De La Perdida Mínimo 2 SMMLV

Vigencia: DESDE 03/ABR/2015 al 10/NOV/16

Estas pólizas amparan parte del daño que corresponde a los insumos requeridos para las obras de espacio, público, que no se recibieron ni cobraron al consorcio Vías Popayán, ni en la conciliación prejudicial ni en la liquidación del contrato de obra 01 de 2012, por parte de Movilidad Futura S.A.S.

Una vez notificada del auto de imputación, presentaron oportunamente descargos el 17 de julio del 2023, con recibido No. 2023ER0126038²⁶⁰ en los que se inicia haciendo mención de los antecedentes del proceso, el objeto de la investigación, para luego presentar los fundamentos fácticos y jurídicos de la defensa de la aseguradora frente al proceso, ítem en el que inicia transcribiendo apartes de la ley 610 de 2000 en donde se regulan los elementos de la responsabilidad fiscal, para luego hacer alusión a la caducidad de la acción fiscal por extralimitación al límite temporal para el ejercicio de la misma, pues en criterio de apoderado la entrega de insumos de espacio público realizada por el contratista a la entidad contratante, se efectuó en la primera semana del año 2014,

²⁶⁰ 20230717 DESCARGOS ASEGURADORA 2023ER0126038 PRF 858 y DESCARGOS FRENTE AL AUTO DE IMPUTACION -



esto es, entre el 01 y el 10 de enero del 2014 y se da inicio al proceso de responsabilidad fiscal PRF 2019 -00858 con auto de apertura No. 451 emitido hasta el 06 de septiembre de 2019.

Justifica su argumento en sentencia C-250 de 2011, el artículo 120 de la Ley 1474 del 2011, para luego anotar que el pago de los insumos se llevó a cabo en el año 2013.

En un segundo ítem vuelve a los mismos argumentos ya esbozados, cuando asegura que estamos al frente de una inexistencia de prueba del hecho generador, por cuanto en la descripción de los hechos se asegura que los materiales fueron entregados en el año 2014 y posteriormente se aduce que el hecho generador de daño se da con la liquidación errada del convenio, dada en diciembre del año 2015.

Debe tener en cuenta el apoderado de la aseguradora, que en el presente caso el hecho generador de daño se concretiza cuando se aprueba finalmente la liquidación del contrato con el error, no cuando se entregaron los materiales y tampoco cuando se cuantificaron erradamente, pues desde que esto ocurrió hasta el último evento mencionado inicialmente se pudo corregir el error por parte de la entidad, especial por el señor VICTOR ROSERO en principio porque era su representante legal, pero además porque era ingeniero civil y en virtud de su perfil profesional contaba con la aptitud suficiente para ello, pero no lo hizo, como se anotó en el análisis de la gestión fiscal destinada para este presunto responsable.

Así entonces, la liquidación final errada presentada por la entidad afectada, data del 22 de diciembre del 2015, al haberse iniciado el presente proceso el 6 de septiembre de 2019, es evidente que no operó el fenómeno de la caducidad

Retomando la defensa del tercero, agrega el apoderado que no obra en el plenario ninguna prueba idónea, útil y conducente, acerca de algún tipo acción u omisión en cabeza del imputado señor Víctor Alfonso Rosero Bustamante que se hubiera producido concomitante o anticipadamente a los hechos que son objeto de debate por los cuales se hubiera producido el daño y luego de presentar jurisprudencia relacionada con los elementos de la responsabilidad fiscal, para luego insistir en que en el año 2014 fueron entregados los materiales por el contratista y el Auto de apertura No. 451, data del 06 de septiembre de 2019; argumento que no es compartido por el despacho, precisamente porque el material probatorio que reposa en el expediente y como se analizó en el ítem destinado al daño de esta providencia, indica que solo a él se le entregó el documento con el error, a nadie más y con base en ese error entregó la información al comité de conciliación, a la Procuraduría y al Juez Administrativo que convalidó el acuerdo.

En un tercer punto, nuevamente expone la necesidad de que se acredite la existencia del daño y cita la sentencia C-340 de 2007 y la providencia del 15 de noviembre de 2007 del Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, para hacer énfasis en que el daño como elemento de la responsabilidad fiscal, debe estar demostrado.



De cara a lo anterior, hace alusión la defensa del tercero a la multa que se impondría al contratista por el incumplimiento, la presentación ante la Procuraduría de la solicitud de conciliación, cuando, en criterio del apoderado, el señor Víctor Alfonso Rosero Bustamante no era Gerente de Movilidad Futura, o cual se sale de la realidad administrativa y del contexto en que se dieron las cosas, pues este presunto responsable, como mucho se ha anotado, fue el que entregó los insumos errados para la liquidación del contrato, sido él el único con la capacidad de haber evitado el detrimento patrimonial, si en mínima diligencia hubiese verificado los valores, pues como ingeniero civil estaba en la plena facultad de dilucidarlo, pero no lo hizo.

Puntualiza que Movilidad Futura S.A.S., en ningún momento entregó material para la ejecución de las obras contratadas, lo cual no es cuestionable ni motivo de ser abordado, pues es bien sabido que los materiales los entregó la contratista, porque este los adquirió con los recursos del convenio.

Luego la defensa del garante, transcribir *in extensu*, la defensa del citado presunto responsable, para pasar a asegurar lo siguiente:

“Por lo anterior, contrario a lo manifestado por el ente fiscal, Movilidad Futura S.A.S., desempeñó todas y cada una de las funciones asignadas, con responsabilidad y decoro. Especialmente en lo relacionado a la función del señor Víctor Alfonso Rosero Bustamante. Así mismo, para las actividades operativas y técnicas, el organigrama de la entidad, establecía un número de personas de apoyo a la gestión, y de igual forma, para las áreas administrativa, financiera y jurídica.

El señor Víctor Alfonso Rosero Bustamante como Gerente de la Sociedad Movilidad Futura S. A. S., adelantó dentro de su órbita y competencia funcional el proceso de gestión contractual con el lleno de los requisitos legales, se suscribieron los contratos necesarios para llevar a feliz término el Sistema Estratégico del Servicio de Transporte Público para la ciudad de Popayán, teniendo en cuenta que para ello, había que hacer vías que mejoraran las existentes. Por ello, se requería la integración de un equipo técnico serio y responsable el cual estaba a cargo del Ingeniero José Luis Garzón, a quién debían reportarle todos los ingenieros del área técnica.

En ejercicio de la Gerencia, el señor Víctor Alfonso Rosero Bustamante contrató la Interventoría con ocasión al Contrato 01 de 2012 y se determinó la supervisión del mismo. Resultado de su labor, que fui diligente, acucioso y responsable y una vez la interventoría reportó el incumplimiento en los cronogramas de ejecución del contrato, se estudió con los doctores William Lombana Solarte y Álvaro Casas Trujillo las posibilidades de una caducidad del contrato o la declaratoria del incumplimiento, es así como se adelantó el proceso respectivo. En el curso de éste, el Consorcio Vías Popayán, formuló ante la Procuraduría la solicitud de Conciliación prejudicial, ante la posibilidad de precaver un litigio, procedimos de manera juiciosa a estudiar las posibilidades de un acuerdo conciliatorio que permitiera continuar con la ejecución del contrato, a través de una sesión, siempre y cuando el Consorcio pagara los perjuicios causados. Si se revisan todas las



actuaciones de Movilidad Futura, se puede establecer, el interés siempre, de favorecer los intereses de la Sociedad Movilidad Futura S. A. S. Desafortunadamente, fuimos asaltados en nuestra buena fe y fuimos inducidos todos, en un error invencible, que afectó la conciliación y el pago posterior de las sumas de dinero adeudadas.”

Conforme a lo analizado para el señor Víctor Alfonso Rosero Bustamante en esta providencia, no comparte esta gerencia la conclusión de la defensa del garante, quien considera que haciendo un análisis pormenorizado y de fondo, al caso sub examine, se logra determinar que la actuación del citado presunto responsable, se ciñó a los postulados de la gestión administrativa, pues como ampliamente se analizó, probó y detalló en esta decisión de fondo, es clara la gestión fiscal irregular en la que incurrió el mencionado vinculado y la incidencia directa de actuar reprochable en la generación del daño, es decir, están dados los tres elementos de la responsabilidad fiscal, motivo por el cual, contrario a lo que asegura el abogado, existe el detrimento patrimonial haciendo improcedente desde cualquier punto de vista, el archivo del proceso, conforme a lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 610 de 2000.

Prosigue el libelo impugnatorio con el siguiente título “EN EL PRESENTE CASO NO SE REÚNEN LOS ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD FISCAL - POR INEXISTENCIA DE CULPA GRAVE Y/O DOLO EN CABEZA DE LA SOCIEDAD MOVILIDAD FUTURA S.A.S.”, en donde luego de describir y presentar los criterios jurisprudenciales y normativos que describen la necesidad de calificar la conducta, concluye que el contratista presuntamente hizo incurrir en un error invencible, al señor Víctor Alfonso Rosero Bustamante como Gerente de Movilidad Futura S.A.S., al Doctor Lombana Solarte y al Ingeniero Jorge Clodomiro Palechor Palechor, a todos los integrantes del Comité Técnico de Conciliación, a los miembros de la Junta Directiva integrada por funcionarios del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Planeación Nacional, el Ministerio de Transporte, el Alcalde de Popayán, a la Procuraduría General de la Nación a través de la Procuraduría 73 en Asuntos Administrativos, y a la Rama Judicial.

A renglón seguido, esboza el apoderado que al analizar las pruebas que obran en el proceso, ninguna permite acreditar una conducta dolosa o gravemente culposa en cabeza del presunto responsable señor Víctor Alfonso Rosero Bustamante en su calidad de Gerente de Movilidad Futura S.A.S.

Pese a lo anterior y a la luz de las motivaciones de esta providencia, está debidamente demostrado que el que hizo incurrir en error a las citadas instancias fue el señor Víctor Alfonso Rosero Bustamante en calidad de representante legal de la entidad afectada, como ingeniero civil y por ser él único que tuvo en sus manos el error que no conjuró en debida forma por negligencia y omisión de las funciones propias del su cargo.

En cuanto la vinculación propiamente dicha del tercero al presente proceso, la defensa asegura que se ha omitido efectuar el estudio de las condiciones particulares y generales de los contratos de seguro, descuidando el despacho, en criterio del apoderado, que no



se tuvo en cuenta que las pólizas incorporadas en el expediente no gozan de ningún tipo de cobertura y luego de citar y transcribir directrices que se han dado en el ente de control fiscal para la vinculación de la aseguradora, concluye que:

“En el caso particular, es evidente que el ente de control no efectuó el análisis y estudio de las condiciones pactadas en las pólizas de seguro No. 1000095 y 1000116 limitándose exclusivamente a enunciar la existencia de las mismas. Es evidente que, de haberse realizado el respectivo examen, definitivamente la conclusión sería que los hechos objeto de la acción fiscal no se encuentran cubiertos bajo los contratos de seguro documentados en las pólizas antes referidas.”

Pese a lo anterior, descuida que desde el auto de vinculación el despacho fue claro en advertir, que la vinculación del tercero se circunscribió a que en el contrato de seguro se pactó como Objeto de la Póliza:

“AMPARAR A LA ENTIDAD CONTRA MENOSCABO DE RECURSOS Y BIENES, EL EJERCICIO DE LOS CARGOS ASEGURADOS, COMO DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN O FALLOS CON RESPONSABILIDAD FISCAL”.
(destacado fuera de texto)

En este orden de ideas, el seguro manejo global por el que se ha vinculado la póliza es JUICIOS CON RESPONSABILIDAD FISCAL con valor asegurado: \$100.000.000.

Pese a la claridad que ha existido siempre sobre la vinculación del garante, este postulado se desarrolla en un subítem que titula “PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DERIVADA DE LOS CONTRATOS DE SEGUROS”, en donde vuelve a manifestar que los hechos se dieron en el año 2014 y el proceso se apertura en el año 2019, lo cual ya está superado en párrafos anteriores.

Pasa luego a transcribir el artículo 1081 del C.deCo., que señala la prescripción de las acciones que se derivan del contrato de seguro, para luego concluir de la siguiente manera:

“Expuesto lo anterior, vale la pena anotar en este sentido que los insumos referidos fueron producto de los pagos efectuados por la entidad contratante en el año 2013, de los cuales efectivamente se pagó el costo del material correspondiente a los insumos de espacio público entregados por el contratista a la entidad contratante, pagos que fueron realizados en las fechas: (i) 12 de marzo de 2013, (ii) 21 de junio de 2013, (iii) 28 de agosto de 2013, (vi) 22 de noviembre de 2013 y (v) 08 de octubre de 2013, correspondiendo a un pago total de \$ 2.392.387.957 durante el año 2013, tal como se logra corroborar a continuación”

Como ya se anotó, es perfectamente claro que los hechos generadores de daño no se dieron con la entrega de materiales, pues estas actividades per se, no son cuestionables.

Ahora bien, sobre la prescripción del contrato de seguros, debe destacarse que esta



figura, conforme a lo reglado en el C.de Co., aplica a la entidad beneficiaria pero no al Órgano de Control, pues esta figura es una institución que castiga la inactividad del acreedor, sin que la Contraloría General de la República pueda tenerse como tal, pues esta Entidad es un tercero calificado que por ministerio de la Constitución y la Ley ha sido autorizado para declarar la responsabilidad fiscal mediante un fallo, el cual se constituye en el siniestro que permite hacer efectivo el contrato de seguro que lo cobija como riesgo.

Por su parte, la aseguradora una vez vinculada al Proceso de Responsabilidad Fiscal en calidad de garante, como parte interesada en el procedimiento debe amoldarse a los plazos pronosticados por la Ley para declarar la responsabilidad fiscal, pues este procedimiento es reglado y está sujeto a que se surtan una serie de actividades que garantizan el debido proceso de todos los intervinientes, procedimiento del que no se puede excluir a los garantes por lo prescrito en el C. de Co., pues prima la ley especial esto es la Ley 610 de 2000 sobre la general consagrada en aquel.

Sobre este argumento de defensa el despacho manifiesta que es cierto que el legislador consideró necesaria la vinculación de las aseguradoras a los procesos de Responsabilidad Fiscal y efectivamente tal situación, no hace que la naturaleza de la responsabilidad derivada del contrato de seguro se desnaturalice, lo que ocurre es que las cláusulas contractuales y las normas del C.de.Co le son aplicables a las partes del negocio jurídico vertido en el contrato de seguro, y la Contraloría no es uno de ellos.

Sería caprichoso negar la existencia de los preceptos contenidos en el C.de Co., respecto de los contratos de seguros y los procedimientos y términos prescritos para hacer efectivas las obligaciones que puedan emanar de ellos, no obstante el precitado estatuto es una norma de carácter general y su existencia y regulación no tiene la capacidad de quitar a la Ley 610 de 2000 el objetivo de lograr el interés público del proceso de responsabilidad fiscal, fin que es exactamente el mismo que motiva la suscripción de pólizas de cumplimiento, es decir, el resarcimiento; pero al no regularse el Proceso de responsabilidad Fiscal en el C. de Co., y al no poderse inferir que en el texto de este último haya una intención de inmiscuirse, interferir, quitar o aporta al régimen legal especial existente para la recuperación de las sumas derivadas de los procesos de responsabilidad fiscal, es evidente que en todo lo que tiene que ver con este asunto, deben aplicarse los preceptos de la mencionada Ley.

Así las cosas y de acuerdo con las reglas de Resolución de antinomias, es dable concluir que la Ley 610 de 2000, como norma especial que regula el procedimiento a surtir en el proceso de responsabilidad fiscal no se encuentra superada, rebasada, ni sujeta a las normas generales contenidas en Código del Comercio, ni siquiera en asuntos tan especiales como los relacionados con los contratos de seguros, pues no existe en la mencionada Ley de la República, vacío alguno que obligue a recurrir a la interpretación o aplicación de otras normas generales.

Considera el despacho que una interpretación que reduzca, sujete o acomode los



preceptos especiales de la Ley 610 de 2000 a unos generales de cualquier otro cuerpo normativo, gozando aquella de claridad, puede considerarse como una actividad contraria a la Constitución, por cuanto la especificidad de la norma viene dada directamente por los artículos 267 y 268 de la Norma Superior; así entonces, si el Constituyente y el legislador encerraron en un marco especial el Proceso de responsabilidad Fiscal y todos los aspectos que de él se derivan, Vo.Gr., vinculación de los terceros civilmente responsables, ciertamente le ha otorgado un tinte distinto del que se pueden llegar a derivar de otras obligaciones consagradas en las normas generales (C. de Co.).

Respecto de las antinomias, son muchos los pronunciamientos jurisprudenciales que existen, según los cuales *“en virtud de la clásica regla hermenéutica, lex specialis derogat generali (...) las normas especiales deben aplicarse de preferencia a las normas generales”*.

Resulta innegable entonces que la Ley 610 de 2000 es efectivamente una Ley especial que dota a nuestro ordenamiento jurídico de una regulación diferente en lo que tiene que ver con los terceros civilmente responsables en el proceso de responsabilidad fiscal, pues denota una concreción o singularización en la regulación de los supuestos jurídicos en cuanto a los tiempos en los que se desenvuelve la acción fiscal respecto de ellos, es decir, existe una norma que representa una excepción con respecto a otras de alcance más general en este tópico, como las contenidas en el C. de Co.; la generalidad de este y la especialidad aquella (610 de 2000) ofrecen rangos o graduaciones diferentes en su ámbito de regulación, prevaleciendo como consecuencia lógica la norma especial.

En consideración de lo expuesto, no es aceptable bajo ningún punto de vista el argumento de la defensa de la aseguradora consistente en reclamar la prescripción del contrato de seguro conforme a las normas del C. de Co., y no bajo el régimen del Proceso de responsabilidad Fiscal prescrito en la Ley 610 de 2000, pues contrario a lo que considera, es precisamente esta Ley la norma que establece la inaplicación del régimen prescrito en el C. de Co., por ser una norma especial; e independiente de los pronunciamientos que se hayan invocado con anterioridad por parte de este despacho, el análisis arriba ofrecido, a la luz de las jurisprudencias invocadas y los principios aplicados son un sustento lógico y coherente para asegurar que la defensa planteada no está llamada prosperar.

Ahora bien, como si fuera poco lo anterior, debe tenerse en cuenta que, respecto de la prescripción de las pólizas, el concepto emitido por la Contraloría delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva de la CGR del 13 de junio de 2002, indica bajo los alcances del artículo 1081 del Código de Comercio, en consonancia con las jurisprudencias mencionadas, lo siguiente:

“...Otra excepción al principio general contenido en el artículo 1081 del Código de Comercio es el régimen de prescripción a que están sometidas las pólizas que expiden las compañías de seguros como garantía de cumplimiento de obligaciones asumidas por



particulares frente a entidades públicas. Es así como el Consejo de Estado ha reiterado que para el ejercicio de la acción ejecutiva no tiene aplicación los términos del citado artículo 1081 sino el término de cinco (5) años fijado en el artículo 66 del Código Contencioso Administrativo que es el lapso para llevar a cabo la ejecución coactiva, por parte de las entidades públicas, con el fin de hacer efectiva las garantías constituidas mediante pólizas de seguros.

Por lo anterior y de acuerdo a la jurisprudencia de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, el mandamiento ejecutivo debe ser notificado al garante, es decir a la aseguradora antes de cinco (5) años desde la ejecutoria del acto administrativo que ordena hacer efectiva la garantía, pues en este término, debe la administración realizar los actos y gestiones para hacer efectivas sus propias decisiones unilaterales.

Según las mencionadas jurisprudencias, el acto administrativo que ordena hacer efectiva la garantía no necesariamente debe expedirse, ni quedar ejecutoriado, dentro de la vigencia de la póliza, pues ha de entenderse que ésta ampara el riesgo, es decir el incumplimiento que ocurra durante su vigencia, esto es hasta el último instante de su plazo, lo cual significa que el reclamo para el pago de la garantía o de la expedición de la Resolución que ordene hacerla efectiva (para el caso de las Contralorías el fallo con responsabilidad fiscal), deban también producirse dentro de este plazo, pues bien pueden tener lugar con posterioridad. Otra interpretación haría nugatorio el derecho a la indemnización a favor de las entidades públicas pues el tiempo que toma la preparación del acto administrativo y la evaluación de los recursos que contra él se interpongan, reducirán sustancialmente el lapso efectivo en que podría operar la garantía.

Por lo tanto el término para la prescripción ordinaria comienza a correr a partir de cuándo el “interesado” (tomador, asegurado o beneficiario y el asegurador) tuvo conocimiento o razonablemente pudo tenerlo del hecho que da base a la acción no le es aplicable a la Contraloría General de la República para poder ejercer sus funciones de control fiscal y determinar y establecer la responsabilidad de los servidores públicos y de los particulares cuando en el ejercicio de la gestión fiscal o con ocasión de ésta causen por acción u omisión y en forma dolosa o gravemente culposa un daño patrimonial al Estado”.

En conclusión, advirtió la delegada:

“...Los términos del artículo 1081 del Código de Comercio no son aplicables a las Contralorías, existe normatividad especial para efectos de caducidad y prescripción para la acción fiscal según lo dispone el artículo 9 de la Ley 610 de 2000...”

De otro lado, se tiene que los motivos de derecho por los cuales se inaplica el artículo 1081 del C. de Co., respecto de la prescripción de las pólizas son las justificaciones ofrecidas por la Corte Constitucional por vía jurisprudencial, en lo pertinente al fundamento y objetivos de la garantía contractual, Sentencia C-648 de 2001, MP. Jaime Córdoba Triviño:

“(...)8. Los actores afirman que el artículo 44 demandado permite a las contralorías



embargar a los garantes por el valor total de las pólizas de cumplimiento, las cuales sólo se prestan para garantizar la responsabilidad contractual, pero no la responsabilidad fiscal. De esta manera, exceden las facultades asignadas en la Constitución Política, en especial las contempladas en los artículos 267 y 268.

Así mismo, según lo expresado por esta Corporación, el desarrollo de la actividad contractual, como instrumento establecido para coadyuvar al logro de los cometidos estatales requiere, dentro de un marco de elemental previsión, la constitución de ciertas garantías que aseguren la cabal ejecución del contrato y, sobre todo, que faciliten, objetiven y viabilicen, mediante la utilización de procedimientos ágiles extrajudiciales, la responsabilidad asumida por el garante que se desenvuelve normalmente en el reconocimiento de los perjuicios que por un eventual incumplimiento del contratista puedan afectar a la entidad estatal. Dentro de esta perspectiva, las normas del estatuto contractual alusivas al régimen de garantías constituyen un medio de protección de los intereses estatales, en cuanto otorgar a las entidades públicas contratantes un instrumento adecuado y efectivo tendiente a asegurar el cumplimiento de las obligaciones asumidas por los contratistas.

En materia contractual existen dos tipos de garantías, según el objeto, la oportunidad y finalidad con las que se constituyen: las garantías precontractuales para garantizar la seriedad de la oferta y las garantías contractuales, para asegurar los riesgos que puedan efectuar el patrimonio público durante la ejecución del contrato estatal. Los riesgos asegurables en la segunda modalidad de garantías son el buen manejo e inversión del anticipo, el cumplimiento de las obligaciones del contrato, las obligaciones laborales de los trabajadores del contratista, el saneamiento por vicios ocultos y la responsabilidad civil. Estas garantías son obligatorias en los contratos estatales, salvo las excepciones que señale la Ley.

9. Otro asunto a tener en cuenta son las características del contrato de seguros, el cual se identifica por ser consensual, bilateral, oneroso, aleatorio, de ejecución sucesiva y de carácter indemnizatorio, en cuanto precisamente, del carácter bilateral y oneroso del contrato de seguros surge la obligación para el asegurador de pagar oportunamente la indemnización cuando a ello haya lugar, pues ella hace parte de los compromisos que la empresa aseguradora adquiere en ejercicio de la Autonomía de la voluntad contractual y de la aceptación de los riesgos que ampara y en desarrollo de un objeto lícito que es propio del giro de sus negocios.

En estas circunstancias cuando el legislador dispone que la compañía de seguros sea vinculada en calidad de tercero civilmente responsable en los procesos de responsabilidad fiscal, actúa en cumplimiento de los mandatos de interés general y de finalidad social del Estado. El papel que juega el asegurador es precisamente el de garantizar el pronto y efectivo pago de los perjuicios que se ocasionen al patrimonio público por el servidor público responsable de la gestión fiscal, por contrato o el bien amparado por una póliza.

El derecho de defensa de la compañía de seguros está garantizado en el proceso de responsabilidad fiscal puesto que dispone de los mismos derechos y facultades que asisten al principal implicado, para oponerse tanto a los argumentos o fundamentos del asegurado como a las decisiones de la Autoridad fiscal.



Por consiguiente, la vinculación del asegurador establecido en la norma acusada, además del interés general y de la finalidad social del Estado que representa, constituye una medida razonable, en ejercicio del amplio margen de configuración legislativa garantizado en estas materias por el artículo 150 de la Carta Política. Atiende los principios de economía procesal y de la función administrativa a que aluden los artículos 29 y 209 de la Constitución. Además, evita un juicio adicional para hacer efectivo el pago de la indemnización luego de la culminación del proceso de responsabilidad fiscal, con lo cual se logra, en atención de los principios que rigen la función administrativa, el resarcimiento oportuno del daño causado al patrimonio público, A sí, desde la perspectiva del reparo de constitucionalidad formulado, no hay vulneración de las normas invocadas por los demandantes.

10. En conclusión, las respuestas a los interrogantes arriba planteados son estos: (...) 3. La vinculación de las compañías de seguros en los procesos de responsabilidad fiscal representa una medida legislativa razonable en aras de la protección del interés general y de los principios de igualdad, moralidad, eficiencia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad de la función pública (...). (Subrayado fuera de texto).

Por lo anterior, la vinculación de las Compañías de Seguros en los procesos de responsabilidad fiscal representa una medida legislativa como lo concluyó la sentencia anterior; lo cual no significa que invada órbitas de competencia de otras Autoridades que tengan a cargo la determinación de otros tipos de responsabilidad de los servidores o de particulares y mucho menos que se salte o desconozca el orden jurídico con las decisiones que se toman en el Proceso de Responsabilidad Fiscal.

Como corolario de lo expuesto, resulta más que evidente que las aseguradoras, bien por lo dispuesto en la Ley 1474 del 2011 o bien por lo reglado en la Ley 610 de 2000, están llamadas a responder, así entonces, independiente de que el legislador haya aclarado el asunto en el estatuto anticorrupción e independiente del criterio de interpretación y aplicación de la Ley en el tiempo, respecto del deber que se pretende imponer a los terceros vinculados al proceso, siempre han estado dados los elementos para llamarlas a responder, por lo que no es posible revocar el fallo impugnado con los argumentos esbozados en los recursos impetrados.

Por último, para que no quede duda que la posición de este despacho se encuentra en el particular a tono con las directrices jurídicas que traza la Oficina Jurídica de este Órgano de Control Fiscal, se procederá a transcribir los apartes más significativos del concepto 80112-EE87065 emitido el 11 noviembre del de 2011, sobre el particular:

“Ahora bien, entendemos que la intención del legislador al expedir el artículo 120 del Estatuto anticorrupción fue zanjar la discusión presentada en torno al término de prescripción de las pólizas de seguros en el proceso de responsabilidad fiscal, luego con la expedición del artículo 120 ya citado, no existe duda sobre el término de prescripción de las pólizas de seguros en el proceso de responsabilidad fiscal, pues se hace una remisión expresa al artículo 9° de la Ley 610 de 2000.

Ha de señalarse que el nombrado artículo 120 de la Ley 1474 no es una norma nueva,



sino una interpretación del artículo 9° de la Ley 610 de 2000, en los términos del artículo 267 de la Constitución política. Lo anterior, habida cuenta que el control fiscal es posterior y selectivo y no podría el Organismo Fiscalizador vincular al proceso de responsabilidad fiscal a la Compañía aseguradora antes de acaecer el daño al patrimonio público.

Al tenor de lo establecido en el artículo 25 del Código Civil, en el caso presente el legislador quiso aclarar que el término de prescripción del contrato de seguros en materia de responsabilidad fiscal es de cinco (5) años, término que es aplicable antes y después de la vigencia del Estatuto Anticorrupción.

Ahora bien, podría pensarse que se presenta aquí un conflicto de Leyes en el tiempo. Al respecto ha enseñado la jurisprudencia que existe un conflicto de Leyes en el tiempo cuando se trata de situaciones jurídicas en curso, que no han generado situaciones consolidadas ni derechos adquiridos en el momento de entrar en vigencia la nueva Ley, ésta entra a regular dicha situación en el estado en que éste, sin perjuicio de que se respete lo ya surtido bajo la Ley antigua. Esto es, cuando se trata de simples expectativas, la nueva Ley es de aplicación inmediata.

En el caso que nos ocupa, vemos que se trata de un tema de prescripción y en ese orden, es procedente analizar el artículo 41 de la Ley 153 de 1887, que señala: “La prescripción iniciada bajo el imperio de una Ley, y que no se hubiere completado aún al tiempo de promulgarse otra que la modifique, podrá ser regida por la primera o la segunda a voluntad del prescribiente. Eligiéndose la última, la prescripción no empezará a contarse sino desde la fecha en que la Ley nueva hubiere empezado a regir.”

La Corte Constitucional ha señalado en sentencia C- 398 de 2006, que:

“2). Cuando se produce el conflicto de Leyes en el tiempo: Cuando un hecho tiene nacimiento bajo la Ley antigua pero sus efectos o consecuencias se producen bajo la nueva, o cuando se realiza un hecho jurídico bajo la Ley antigua, pero la Ley nueva señala nuevas condiciones para el reconocimiento de sus efectos. Cuando se trata de situaciones jurídicas en curso, que no han generado situaciones consolidadas ni derechos adquiridos en el momento de entrar en vigencia la nueva Ley, ésta entra a regular dicha situación en el estado en que éste, sin perjuicio de que se respete lo ya surtido bajo la Ley antigua. Esto es, cuando se trata de simples expectativas, la nueva Ley es de aplicación inmediata.

Indica también la Corporación que para dirimir este conflicto debe acudirse a la Constitución Política, la cual en el artículo 58 establece la irretroactividad de la Ley, pues garantiza los derechos legítimamente adquiridos bajo la Ley anterior, sin perjuicio de que se afecten las meras expectativas de derecho.

Sobre este aspecto, debe señalarse que no hay conflicto de la Ley en el tiempo, pues debe señalarse que la Ley 1474 de 2011 no crea un nuevo término de prescripción de las pólizas de seguros en el trámite del proceso de responsabilidad fiscal, sino que de conformidad con sus facultades realiza una interpretación del artículo 9° de la Ley 610 de 2000 y entra a aclarar que el término de prescripción de las mismas, es el establecido en el mencionado artículo 9° y no como lo señalan las aseguradoras y el Consejo de Estado en las providencias conocidas.



No considera procedente esta Oficina volver aquí a recabar sobre la especialidad de la Ley 610 de 2000, frente al Código de Comercio, ni tampoco sobre la especialidad del control fiscal, su naturaleza, su rango constitucional entre otros temas, pues los mismos ya fueron objeto de estudio no sólo en los diversos conceptos proferidos, sino también en nuestra posición institucional en los Tribunales y el Consejo de Estado.

Así las cosas, vemos que el término de prescripción de las pólizas de seguros en el proceso de responsabilidad fiscal, siempre ha sido de cinco años, término que generó dudas y que ahora ya no se presentan, toda vez, que el legislador las aclaró.”

Así entonces, bajo ninguna circunstancia pueden prosperar los argumentos invocados por la defensa de la aseguradora, en tal sentido.

Esgrime que se pasó por alto la inexistencia de la obligación a cargo de la aseguradora, pero además de ello, expresa que en virtud del artículo 1056 del Código de Comercio, puede asumir a su arbitrio todos o algunos de los riesgos a que están expuestos el interés asegurado, justifica esto en que los amparos están supeditados a una serie de condiciones; en criterio del apoderado de la aseguradora, la entidad que representa tienen la libertad de escoger cuáles son los riesgos que le son transferidos y en este sentido, solo se ven obligadas al pago de la indemnización en el evento que sean estos riesgos los que acontezcan durante el desarrollo de la relación contractual.

En este punto conviene advertir que el llamado hecho a la seguradora corresponde a la póliza tomada por Movilidad Futura en virtud de un convenio, cuyo incumplimiento se demostró bajo esta cuerda procesal y conforme a lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 610 de 2000, en estos eventos las aseguradoras están llamadas a responder pues el contrato de seguro tenía como norte proteger los recursos públicos en juego y una vez demostrado el detrimento patrimonial en tales recursos protegidos por la póliza el garante no puede sustraerse a cumplir la obligación contraída; máxime si como en el particular, se demostró la existencia de todos los elementos de la responsabilidad fiscal; por lo dicho, lo esbozado por la defensa de la aseguradora no está llamado a prosperar.

Posteriormente alega la falta de cobertura temporal de las pólizas No. 1000095 y 1000116, en donde nuevamente insiste en que la entrega de los materiales por parte del contratista se hizo en el año 2014 y luego de transcribir por cuarta vez los mismos partes con los que justifica este argumento, para nuevamente concluir:

“Del examen anterior se corrobora indefectiblemente que el hecho generador del presente proceso de responsabilidad fiscal tuvo lugar a inicios del año 2014, con ocasión a la entrega de insumos hecha por el contratista a la entidad contratante, cuyo valor real no fue el allí relacionado sino uno evidentemente inferior. Situación que es sustentada mediante los Autos No.115, 451 780 y 481, y especialmente mediante el informe técnico rendido por el funcionario de la Contraloría General de la República con radicado 20191E0062169, fundamento con el cual se vincula al proceso de responsabilidad fiscal a mi prolijada”



En este ítem agrega que las coberturas EXTRACONTRACTUAL POR OCURRENCIA contenidas en las pólizas, contienen una modalidad que excluye los hechos en virtud de la vigencia temporal de los contratos de seguros; lo cual no es de recibo, pues el fallo con responsabilidad fiscal que se ampara solo puede ser proferido por estos hechos, por este ente de control fiscal como se está haciendo y dentro de los términos prescritos por la Ley 610 de 2000, por ello, no e entendible el criterio de ocurrencia extracontractual que presenta el apoderado.

A renglón seguido puntualiza el apoderado que el dolo y la culpa grave si riesgos inasegurables; independiente de lo cuestionable del argumento, descuida el apoderado que lo amparado claramente es un detrimento patrimonial que solo puede ser resarcido mediante un fallo con responsabilidad fiscal, el cual, por ministerio de la ley solo puede ser proferido cuando la conducta de los responsables fiscales sea calificada como dolosa o gravemente culposa.

En lo que tiene que ver con la calificación de la conducta, debe recordar el apoderado que el presente proceso de responsabilidad fiscal y en especial el fallo que ampara la póliza, está reglado por la Ley 610 de 2000 y de conformidad con esta norma y a la luz de lo dispuesto por la H. Corte Constitucional en Sentencia C-619 de 2002, que declaró inexecutable el parágrafo segundo del artículo cuarto, solo es posible derivar responsabilidad fiscal a título de dolo o culpa grave, por lo tanto, cualquier clausula o norma que exija lo contrario se puede enmarcar dentro de aquellas catalogadas como abusivas, pues en el contrato de seguro se genera un compromiso, esto es, amparar un fallo con responsabilidad fiscal siempre y cuando no se derive responsabilidad a título de culpa grave o dolo, resulta un sinsentido jurídico, pues nunca entonces la póliza podría hacerse efectiva.

Con los argumentos de exclusión de responsabilidad por la calificación de la conducta que esboza el apoderado, el contrato de seguro que tiene como único norte la protección de los bienes y recursos públicos, se constituiría en un instrumento jurídico con el que jamás se alcanzaría la realización de los intereses de la entidad contratante, amparada, asegurada y beneficiaria, por cuanto tal cláusula rompe el equilibrio contractual, en especial, en una de sus dimensiones: el equilibrio jurídico del contrato de seguro, desprotegiendo con ello los derechos del asegurado.

Al respecto, la Corte Suprema de justicia ha señalado que las cláusulas abusivas son:

“(...) todas aquellas que aún negociadas individualmente, quebrantan la buena fe, probidad, lealtad o corrección y comportan un significativo desequilibrio de las partes, ya jurídico, ora económico, según los derechos y obligaciones contraídos, que la doctrina y el derecho comparado trata bajo diversas locuciones polisémicas, tales las de cláusulas vejatorias, exorbitantes, leoninas, ventajosas, excesivas o abusivas con criterios disímiles para denotar la ostensible, importante, relevante, injustificada o transcendente asimetría entre los derechos y prestaciones, deberes y poderes de los contratantes, la falta de



equivalencia, paridad e igualdad en el contenido del negocio o el desequilibrio "significativo", "importante", "manifiesto", "excesivo" o "exagerado", "sustancial y no justificado" en los derechos, obligaciones y, en menoscabo, detrimento o perjuicio de una parte, o en el reciente estatuto del consumidor, las "que producen un desequilibrio injustificado en perjuicio del consumidor y las que, en las mismas condiciones, afecten el tiempo, modo o lugar en que el consumidor puede ejercer sus derechos", en cuyo caso "[p]ara establecer la naturaleza y magnitud del desequilibrio, serán relevantes todas las condiciones particulares de la transacción particular que se analiza", no podrán incluirse por los productores y proveedores en los contratos celebrados con los consumidores, y "en caso de ser incluidas serán ineficaces de pleno derecho" (artículos 42 y ss), y que igualmente las Leyes 142 de 1994 (artículos 131, 132 y 133) y 1328 de 2009 (D.O. 47.411, julio 15 de 2009, arts. 2o, 7o, 9o, 11 y 12), prohíben estipular"

Estas cláusulas de acuerdo con el artículo 44 de la ley 1480 de 2011, están viciadas de nulidad o ineficacia, sin que ello afecte la totalidad del contrato, en la medida en que este pueda subsistir sin la cláusula nula o ineficaz.

De esta forma, siendo imposible decidir un proceso de responsabilidad a título diferente del de culpa grave o dolo, un contrato de seguro no puede pactar exclusión de su responsabilidad de cubrir el riesgo del fallo con responsabilidad fiscal que se expida a tal título, porque el riesgo asegurado es un imposible jurídicamente hablando, por ello, a la luz del artículo 44 de la Ley 1480 de 2011 tal cláusula, que contiene la condición es ineficaz y se deberá inaplicar.

Finalmente, en el último punto denominado "EN CUALQUIER CASO, DE NINGUNA FORMA SE PODRÁ EXCEDER EL LÍMITE DEL VALOR ASEGURADO.", el apoderado del garante cita y transcribe el artículo 1079 del C.de Co., para indicar que su procurada no estará llamada a pagar cifra que exceda el valor asegurado previamente pactado por las partes; respecto de este punto, el apoderado solicita expresamente:

"Que en el improbable y remoto evento en el que se declare como tercero civilmente responsable a mi representada, pese a que es indiscutible que no existen fundamentos fácticos ni jurídicos para ello, comedidamente solicito que se tenga en cuenta el límite del valor asegurado en cuantía de CIENTO MILONES DE PESOS M/TCE (\$100.000.000)."

En este orden de ideas se tiene que la póliza por la que está vinculada al proceso la aseguradora, contiene el amparo del PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL con Valor asegurado: \$100.000.000 y Deducible: Mínimo 2 SMMLV.

Así entonces, el valor del detrimento patrimonial es de OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS (\$896.224.783), por tanto la liquidación es la siguiente:

Valor asegurado: \$100.000.000

MENOS:

SMMLV año 2015



\$ 644.350 x 2: \$ 1.288.700
Total cubierto \$98.711.300

De esta manera, el valor por el que será llamada a responder la aseguradora es de NOVENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS PESOS (\$98.711.300).

Conforme a lo enunciado, se considera dar aplicación del artículo 44 de la Ley 610 de 2000 y en este sentido derivar responsabilidad en virtud del contrato de seguros en contra de la Previsora S.A. Compañía De Seguros, identificada con el Nit 860.002.400-2, en los términos de la referida norma en virtud de las pólizas descritas anteriormente por no estar llamados a prosperar los argumentos presentados en los descargos frente a la imputación.

En mérito de lo expuesto, la Gerencia Departamental Colegiada de Cauca,

RESUELVE:

PRIMERO: FALLAR CON RESPONSABILIDAD FISCAL en el Proceso de Responsabilidad Fiscal PRF-2019-00858, entidad afectada SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICOS DE PASAJEROS DE POPAYAN, por un valor indexado de OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS MCTE (\$896.224.783), por estar dados los presupuestos del artículo 53 de la Ley 610 de 2000 y a la luz de las motivaciones de esta providencia, de forma solidaria en contra de las siguientes personas:

- VÍCTOR ALFONSO ROSERO BUSTAMANTE identificado con C.C. No. 10.525.694, en calidad de Gerente de Movilidad Futura S.A.S; quien deberá citado únicamente al correo electrónico: roserobustamante@hotmail.com dirección física: Loma Linda Casa 9-22, de la ciudad de Popayán y a su apoderado el FERNANDO PARRA TOBAR; quien deberá citado únicamente al correo electrónico : fernandp23@yahoo.es y dirección física calle 1ª No. 7 – 14, Oficina 211, Edificio El Prado de Popayán.
- OSCAR ALBERTO CAICEDO FERNÁNDEZ identificado con C.C. No. 76.322.044, en calidad de Contratista de Movilidad Futura, correo electrónico al que autoriza notificaciones: oacaicedo@yahoo.com y a su apoderado el abogado Henry Guillermo Vega. Dirección: Carrera 10 A No. 2N 06 del Barrio Modelo de Popayán, E mail para citaciones: grupojuridicovega@gmail.com.
- GARCIA RIOS CONSTRUCTORES S.A., identificado con NIT. 800093266-2, en calidad de Contratista consorciado en un 50%, dirección electrónica:



contabilidad@garciarios.com, quien tiene con apoderado de confianza al abogado German Andrés Rodríguez Ortiz, con correo electrónico al que autoriza notificación garo12356@yahoo.com.

- FABIAN GARCIA RIOS identificado con C.C. No. 16.694.142 de Cali, en calidad de Contratista consorciado en un 25%, dirección electrónica: contabilidad@garciarios.com, quien tiene con apoderado de confianza al abogado German Andrés Rodríguez Ortiz, con correo electrónico al que autoriza notificación garo12356@yahoo.com.
- EDUARDO GIRONZA LOZANO identificado con C.C. 16.243.259 de Cali, en calidad de Contratista consorciado en un 25%, correo electrónico autorizado para notificaciones: eduardo_gironza@hotmail.com.
- PEDRO FELIPE POTES identificado con C.C. 10.546.275, en calidad de Coordinador Del Área Técnica De Infraestructura Mov. Futura, con correo electrónico para citaciones felipepotes.movilidad@gmail.com y fpotes@pdacauca.gov.co y dirección carrera 6C No. 31N-110 B/ Rosales de la Hacienda de Popayán, con apoderada de confianza, la Dra. Yeny Alejandra Campos Bermudez con correo electrónico iusconsultores2023@gmail.com para citaciones y dirección calle 31N #14-01, casa 23 de Popayán.

SEGUNDO: DERIVAR RESPONSABILIDAD en calidad de tercero civilmente responsable de La Previsora S.A. Compañía de Seguros identificada con el Nit 860.002.400-2, por las pólizas 1000095 y 1000116 que expidió afianzando a Movilidad Futura S.A.S, Vigencia: Del 23-04-2015 al 10-11-2016, Riesgos amparados: FALLOS CON RESPONSABILIDAD FISCAL, Valor Asegurado: \$100.000.000, en cuantía de NOVENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS PESOS (\$98.711.300), conforme a las motivaciones de esta providencia y a la luz de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 610 de 2000. Decisión que deberá ser notificada a su apoderado GUSTAVO ALBERTO HERRERA AVILA con dirección electrónica a la que autoriza notificaciones: notificaciones@gha.com.co.

TERCERO: El resarcimiento al patrimonio público ordenado mediante esta providencia, podrá ser consignado dentro de los cinco (5) días siguientes la ejecutoria del fallo o hasta antes del traslado del título ejecutivo a Jurisdicción Coactiva, a la cuenta corriente 110-050-00120-5 del Banco Popular denominada Dirección del Tesoro Nacional Responsabilidad Fiscal y Auditoria – Contraloría General de La República y se deberá allegar con destino al expediente el original de la misma.

CUARTO: Por medio de la Secretaría Común de la Gerencia Departamental Colegiada del Cauca, NOTIFICAR PERSONALMENTE esta decisión a los presuntos responsables y garantes, de conformidad con lo establecido en el artículo 106 de

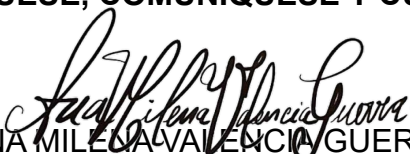


la Ley 1474 de 2011, en concordancia con los artículos 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011 y en caso de no poderse efectuar de manera personal deberá realizarse por aviso en los términos del artículo 69 ibidem; se deberá citar tanto a los presuntos responsables como a sus apoderados a las direcciones detalladas, haciéndoles saber que contra la presente providencia proceden los recursos de Reposición y apelación, los cuales deberán interponerse dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación del mismo y deberán ser resueltos, el primero por este despacho y el segundo por la Contraloría delegada Intersectorial de la Unidad de Responsabilidad Fiscal que por reparto corresponda.

QUINTO: En firme y ejecutoriada la presente providencia prestará mérito ejecutivo, para lo cual la Gerencia Departamental Colegiada del Cauca del Grupo de Responsabilidad Fiscal, deberá efectuar los siguientes **TRASLADOS Y COMUNICACIONES:**

- La sustanciadora remitirá copia auténtica del fallo a Jurisdicción Coactiva, de conformidad con el Art. 58 Ley 610 de 2000, en la comunicación de remisión del título ejecutivo a la Coordinación de Cobro, una vez esté el fallo con responsabilidad fiscal ejecutoriado.
- A través de Coordinación del Grupo de Responsabilidad Fiscal, solicitará a la Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo, incluir en el Boletín de Responsables Fiscales a las personas a quienes se les falló con Responsabilidad Fiscal.
- A través de Coordinación del Grupo de Responsabilidad Fiscal, se solicitará la inclusión de inhabilidades a la Procuraduría General de la Nación, de conformidad con el mandato contenido en el numeral 43 del artículo 37 de la Ley 1952 de 2019, cuando el fallo con responsabilidad fiscal quede ejecutoriado.
- A través de Secretaría Común de la Gerencia Departamental Colegiada del Cauca, remitirá copia íntegra del presente proveído a la Entidad afectada, para que se surtan los registros contables correspondientes.
- A través de Secretaría Común de la Gerencia Departamental Colegiada del Cauca, remitirá copia íntegra del presente proceso a la Fiscalía General de la Nación, para que investigue si el silencio del contratista al aceptar una liquidación errónea en su favor, se constituye en uno o varios delitos.

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE


ANA MILEVA VALENCIA GUERRA
Directivo Colegiado - Ponente



CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

GERENCIA DEPARTAMENTAL
CAUCA

Fallo: 010

Fecha: 16 DE NOVIEMBRE DE 2023

Página 149 de 149

FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL PRF 2019-00858

RICARDO CIFUENTES GUZMAN
Directivo Colegiado - Gerente

GERARDO ALBERTO RAMOS BRAVO
Directivo Colegiado

Proyectó: Sandra Patricia Mellizo Bazante Profesional especializado G.04 (E) 10-11-2023

Revisó: María Fernanda Erazo García- Coordinadora de Gestión G. 02 (E). 10-11-2023

Revisó: Álvaro Emilio Prado Trochez. - Coordinador de Gestión G. 02.

Aprobado en Acta No. 039 del 16 de noviembre de 2023